



# **UNIVERSIDAD DE MURCIA**

**ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO**

**TESIS DOCTORAL**

Severidade Punitiva na Violência de Género: Perspetiva Jurídico-  
Psicológica da Resposta Judicial em Cabo Verde

Severidad Punitiva en la Violencia de Género: Perspectiva Jurídico-  
Psicológica de la Respuesta Judicial en Cabo Verde

**D.<sup>a</sup> Edília Mendes Rodrigues**

**2022**



**UNIVERSIDAD DE MURCIA**  
**ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO**  
**TESIS DOCTORAL**

Severidade Punitiva na Violência de Género: Perspetiva Jurídico-  
Psicológica da Resposta Judicial em Cabo Verde

Severidad Punitiva en la Violencia de Género: Perspectiva Jurídico-  
Psicológica de la Respuesta Judicial en Cabo Verde

Autor: D.<sup>a</sup> Edília Mendes Rodrigues

Director/es: Dr. Carlos Alberto Poiares



**DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD  
DE LA TESIS PRESENTADA PARA OBTENER EL TÍTULO DE DOCTOR**

*Aprobado por la Comisión General de Doctorado el 19-10-2022*

D./Dña. Edília Mendes Rodrigues

doctorando del Programa de Doctorado en

Ciencias Forenses

de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Murcia, como autor/a de la tesis presentada para la obtención del título de Doctor y titulada:

Severidade Punitiva na Violência de Género: Perspetiva Jurídico-Psicológica da Resposta Judicial em Cabo Verde

y dirigida por,

D./Dña. Dr. Carlos Alberto Poiares

D./Dña.

D./Dña.

**DECLARO QUE:**

La tesis es una obra original que no infringe los derechos de propiedad intelectual ni los derechos de propiedad industrial u otros, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, en particular, la Ley de Propiedad Intelectual (R.D. legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, modificado por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia), en particular, las disposiciones referidas al derecho de cita, cuando se han utilizado sus resultados o publicaciones.

*Si la tesis hubiera sido autorizada como tesis por compendio de publicaciones o incluyese 1 o 2 publicaciones (como prevé el artículo 29.8 del reglamento), declarar que cuenta con:*

- La aceptación por escrito de los coautores de las publicaciones de que el doctorando las presente como parte de la tesis.*
- En su caso, la renuncia por escrito de los coautores no doctores de dichos trabajos a presentarlos como parte de otras tesis doctorales en la Universidad de Murcia o en cualquier otra universidad.*

Del mismo modo, asumo ante la Universidad cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la autoría o falta de originalidad del contenido de la tesis presentada, en caso de plagio, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

En Murcia, a 19 de 12 de 2022

Fdo.: Edília Mendes Rodrigues

*Esta DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD debe ser insertada en la primera página de la tesis presentada para la obtención del título de Doctor.*

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados	
Responsable:	Universidad de Murcia. Avenida teniente Flomesta, 5. Edificio de la Convalecencia. 30003; Murcia. Delegado de Protección de Datos: dpd@um.es
Legitimación:	La Universidad de Murcia se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos por ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. art. 6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos
Finalidad:	Gestionar su declaración de autoría y originalidad
Destinatarios:	No se prevén comunicaciones de datos
Derechos:	Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, olvido y portabilidad a través del procedimiento establecido a tal efecto en el Registro Electrónico o mediante la presentación de la correspondiente solicitud en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la Universidad de Murcia

**Dedico...**

A todas as sobreviventes, e as que não tiveram tanta sorte, de se livrar deste crime machista, que insiste em nos discriminar pelo simples facto de nascermos mulheres...

## **Epígrafe**

*We now face the reality of the future that past have chosen for us. We cannot leave a similar legacy for those who will follow us (Cullen et al., 2011) and so, we lift our gaze, not to what stands between us, but what stands before us (Amanda Gorman)*

## **Agradecimentos**

Tendo em conta os objetivos traçados e a especificidade dos meios sobre os quais incide, este estudo não teria sido materializado sem a ajuda de algumas pessoas e instituições as quais passarei a citar: aos juízes dos tribunais de comarca de Tarrafal, Santa Cruz, Santa Catarina, Sal e ao presidente do conselho superior de justiça incansáveis na ajuda da recolha dos processos.

Cabe-me também agradecer: aos técnicos dos tribunais, que possibilitaram a minha estada e fotocópias dos casos, em especial ao tribunal do Tarrafal, Assomada, Santa Cruz, e Sal.

Ao Doutor Patrício, Dr. Vital e Doutora Dionara, pelos contactos que me facilitaram, e as vossas disponibilidades e empenho, fundamentais na elaboração deste trabalho.

Uma obrigada muito especial à Senhora Dona Vicenta e Doutora Graça, pelo material disponibilizado, pelo apoio e inspiração.

Agradeço ao meu orientador, Professor Doutor Carlos Alberto Poiares por ter instigado em mim o gosto pela área de Psicologia Forense, através das suas aulas.

Ao meu tutor Professor Doutor Bartolomé Llor-Esteban, pela sua dedicação e disponibilidade.

Um agradecimento muito especial ao meu antigo professor, Doutor Fernando Branco, pelo apoio que me concedeu, a sua disponibilidade e empenho, fundamentais na elaboração deste trabalho.

Ao meu padrinho e à minha madrinha pela estadia e aconchego na vossa casa aquando da realização dos estudos em Cabo Verde.

Aos amigos, familiares e conhecidos, que me ajudaram na recolha dos questionários e que de forma direta ou indireta contribuíram para a realização deste estudo.

Por último, mas não menos importante, às minhas lindas filhas, Alícia e Gabriella. Vos são a minha razão de viver e lutar para uma sociedade mais igual e mais tolerante, onde pertencemos a todas, independentemente dos atributos biológicos que nos diferenciam

## Resumen

EDÍLIA RODRIGUES: Severidad Punitiva en la Violencia de Género: Perspectiva Jurídico-Psicológica da Respuesta Judicial em Cabo Verde.

(Orientación del Profesor Doctor Carlos Alberto Poiares y la tutela del Profesor Doctor Bartolomé Llor Esteban)

La violencia en relaciones de pareja es la más dominante y endémica expresión de violencia contra la mujer. Las Naciones Unidas (1993) la consideran como cualquier acto violento basado en género, que resulte o tenga probabilidad de resultar, en daño físico, sexual, psicológico o sufrimiento para la mujer, incluyendo la amenaza de practicar esos actos, la coerción o privación arbitraria de la libertad, en ambiente público o privado.

Los primeros movimientos de combate contra la violencia basada en género en Cabo Verde han conducido a la ratificación de recomendaciones jurídicas internacionales, así como a la creación de instrumentos jurídicos adecuados. Se ha operacionalizado uno de los fundamentos estratégicos del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género y del combate contra la violencia basada en género, cuya aplicación, en colaboración estrecha con organizaciones de la sociedad civil, ha culminado en la creación y aprobación de la ley especial contra violencia basada en género (Ley 84/VII/11). Esta ley establece medidas de prevención y represión del crimen de violencia de género por el hecho de ser una violación de derechos humanos y constituir un obstáculo a la consecución de la isonomía de género (PNIEG, 2005-2011).

Sin embargo, la ley contra la violencia basada en género ha sufrido cambios en 2021, que no impactaron la moldura penal del crimen, y la violencia de género sigue siendo un crimen de carácter público. A pesar de presentarse como uno de los crímenes más antiguos de

la historia de la humanidad, sigue siendo uno de los más subrepresentados por el sistema judicial criminal, por todo el mundo (Whitney, 1997; Dobash & Dobash, 1979; Dawson, 2003; Fradella & Fischer, 2010; Kern *et al.*, 2007; Wooldredge & Thistlethwaite, 2004).

Dado que la violencia basada en género se considera un flagelo que requiere respuesta inmediata, el sistema criminal parece como la solución más viable para su eliminación. Sin embargo, los progresos en ese campo han sido lentos, en particular en lo que se refiere a la verdadera responsabilización de los agresores (Budoo-Scholtz & Lubaale, 2021). Al permanecer percibido como un crimen que solo afecta el foro privado, sin víctimas visibles y que no produce cambios en la orden pública, no despertará el interés del sistema de justicia criminal (Cretney & Davis, 1997; Hartman & Belknap, 2003).

No resulta claro si la severidad de las sanciones se refleja en la disminución de conductas abusivas o no. Hay evidencias todavía de que el efecto de las penas sobre las ofensas no es medido y puede estimular una idea de impunidad, permitiendo que ocurran más casos (Cullen *et al.*, 2011; Doob & Webster, 2003; Gibbs, 2018; Kuhn & Da Agra, 2010; Sloan *et al.*, 2013). Sin embargo, Sherman y Berk (1984) han defendido que el hecho de que los agresores estén sujetos a responsabilización social y penas de prisión pueden disuadir nuevos episodios de violencia por miedo de potenciales consecuencias en otras áreas como el empleo. De otro modo, la pena de prisión podría resultar contraproducente.

A pesar de los instrumentos legales que salvaguardan los intereses de las víctimas, por ejemplo, en lo que respecta a la búsqueda de ayuda, la violencia de género sigue formando parte de la vida cotidiana de muchas mujeres en el país. Las estadísticas apuntan a miles de casos en los tribunales. En 2018, el ministerio público registró 9.201 casos de violencia de género. De esas cifras, 4.029 se marcaron como resueltas y 5.172 se transfirieron al año siguiente. Sin embargo, de los 4.029 casos que se dieron como resueltos, más de tres cuartas

partes (3.441), fueron archivados. El resto (5.172 casos) que se trasladaron al año siguiente, sólo 584 (7%) fueron enviados a los tribunales (Ministerio Público, 2018). Además, no se conocen estudios específicamente dedicados al efecto de las medidas penales aplicadas a casos juzgados en el tribunal en Cabo Verde.

Ha sido en este contexto que se han implementado programas de rehabilitación para agresores, con el objetivo de proporcionarles acceso a un grupo terapéutico que les permitiría lograr la asunción de responsabilidad por los eventos, sino también trabajar actitudes y nuevas estrategias interpersonales no violentas. Todavía, el programa no ha resultado eficaz debido al elevado número de desistencias, a la baja remisión por parte del juez, la falta de comunicación interinstitucional y la escasez de profesionales capacitados (Cardoso *et al.*, 2021).

Diversos estudios señalan a que la remisión de agresores por los tribunales a participar en programas contra la violencia de género y de carácter terapéutico con profesionales especializados disminuye la tasa de encarcelamiento y la reincidencia (Rosenbaum *et al.*, 2002; Hasisi *et al.*, 2016; Gannon *et al.*, 2019; Beaudry *et al.*, 2021). De hecho, los resultados de esos estudios sugieren la importancia de terapias basadas en la comunidad e intervenciones que garanticen la continuidad del seguimiento de los individuos. No se conoce en Cabo Verde un programa de intervención con estas características.

No obstante, según los estudios existentes sobre la violencia basada en género y la existencia de respuestas legales disponibles en el sistema de justicia criminal, el fenómeno ha recibido poca o ninguna atención en Cabo Verde. La creación de la Ley especial en 2011, aunque penalice quien practique violencia de género y los casos reportados a las autoridades hayan aumentado, los procesos efectivamente juzgados son reducidos.

Nuestro estudio se propone analizar la severidad punitiva de las decisiones judiciales en crímenes de violencia basada en género contra mujeres, la inclusión o no de profesionales de la psicología como soporte técnico a decisiones judiciales, y, por último, qué factores influyen sobre esas decisiones. Así que se han planteado las siguientes cuestiones de estudio:

- *¿Cuál el nivel de severidad de penas por la práctica del crimen de violencia de género contra mujeres en Cabo Verde?*
- *¿Qué factores influyen sobre la severidad de las medidas aplicadas a agresores condenados por violencia de género contra mujeres en Cabo Verde?*
- *Más allá de las penas efectivas, ¿qué otro tipo de respuestas han sido producidas y aplicadas por el sistema judicial caboverdiano como forma de disuadir el crimen de violencia de género contra mujeres?*

Con el objetivo de contestar a estas cuestiones y alcanzar los objetivos planteados, hemos formulado las siguientes hipótesis:

- *H1: La severidad penal aplicada en el crimen de violencia de género contra mujeres en Cabo Verde son bajas.*
- *H2: La baja escolaridad de los agresores está relacionada con más severidad penal.*
- *H3: Las penas son más severas en casos de agresores con antecedentes criminales.*
- *H4: Las penas son más severas cuando es comprobada la presencia de niños en el momento de la agresión.*

Nuestro estudio se presenta con una metodología cuantitativa, con un diseño de carácter descriptivo y correlacional. Se ha analizado una muestra de 72 procesos judiciales con sentencias definitivas, circunscribiéndose a parejas heterosexuales, con víctimas femeninas y agresores masculinos.

Para evaluar la severidad de las sentencias y, simultáneamente, en qué medida se ha llevado en consideración el saber psicológico para la decisión judicial, se ha utilizado una herramienta creada para medir la criminalización y un componente de salud mental, el Índice de Severidad Penal y Psicologización – (Criminalización Secundaria) – Revisada (ISPP-(CS)-R) (Poiães & Branco, 2021). El ISPP(CS) – R contiene dos subescalas: el ISP – Índice de Severidad Punitiva (ISP) y el Índice de Psicologización (IP). El ISP evalúa la severidad de las penas aplicadas como resultado de combinación de cuatro puntuaciones parciales: Pena de Prisión, Suspensión de Pena de Prisión; Pena sin Reclusión; y Pena Accesorio. La puntuación final del ISP, resultante estas cuatro subescalas, se posiciona en una escala de 0 (de severidad mínima) a 100 (de máxima severidad) (Poiães & Branco, 2021).

Por su lado, el IP evalúa el grado del recurso a la contribución de criterios de salud mental en el proceso criminal y de decisión judicial. El valor numérico del IP corresponde a la suma de puntuaciones obtenidas en los elementos de: evaluación psicológica forense; pericia de personalidad; recurso a información de carácter psicológico (como la emisión de un parecer por un experto); evaluaciones, pericias o otros procedimientos psicológicos que sirvan de base para las decisiones judiciales; evaluaciones, pericias u otros procedimientos psiquiátricos que sirvan de base para las decisiones judiciales; evaluaciones, pericias o otros procedimientos psicológicos y psiquiátricos que tengan determinado un aumento o disminución de la pena aplicada (Poiães & Branco, 2021).

Relativamente a nuestra primera cuestión de investigación, la estadística descriptiva del ISP es indicativa de que la severidad de penas en los procesos estudiados es baja ( $M = 33.9$  en una escala de 0 a 100) y la psicologización es inexistente.

Se destaca que, de la muestra, la suma de condenaciones efectivas y aquellas con suspensión del cumplimiento de la pena (total de 72 procesos), se observa un bajo porcentaje

de condenas con encarcelamiento (29.2%). Por el hecho, la hipótesis H1 puede ser validada. Aunque no se sepa de estudios comparables en territorio cabo-verdiano, incluso con otras tipologías criminales, se puede decir que nuestros resultados corroboran otros de estudios internacionales en este ámbito criminal (Louro, 2017; Domingos, 2018; Sherman, 1992, 2000; Buzawa & Buzawa, 1990; Cretney & Davis, 1997; Cook *et al.*, 2004; Taylor, 2013; Hartman & Belknap, 2003; Stroshine & Robinson, 2003; Hester, 2006; Bond & Jeffries, 2014).

Al nivel de los factores legales y extralegales como influenciadores de las decisiones judiciales, solo se ha observado una influencia significativa de los antecedentes criminales y el nivel de escolaridad, que ha intensificado la severidad punitiva. Otros como la edad, tenencia de armas y hospitalización de la víctima, no se han probado relevantes.

Se ha recurrido a una regresión múltiple para determinar en qué medida estos factores explican la variación del ISP observada. Se observa que (i) cuanto más bajo el nivel de escolaridad del agresor, más severa es la pena aplicada, y (ii) la pena de los agresores con antecedente criminales es más severa que la aplicada a los agresores sin estos antecedentes. El nivel de significancia utilizado, tanto para las correlaciones como la regresión, ha sido de 0.05. Por este motivo, la H2 se verifica con estos datos, coincidiendo con los de otras fuentes de la literatura. Davis *et al.* (2003) y Cunha (2014), por ejemplo, han encontrado evidencias de que en casos de violencia de pareja, existe una relación significativa entre los antecedentes criminales del agresor y la aplicación de penas más duras.

La inconsistencia en la aplicación de penas, o la falta de remisión de agresores para intervenciones especializadas, al primer contacto que tengan con el sistema judicial observada en nuestro estudio parece reflejarse en la conducta criminal futura de los mismos agresores. Se puede teorizar que es debido a que la condenación anterior no ha sido disuasiva.

Eso hace resaltar la necesidad del juzgador mejorar las estrategias preventivas de la reincidencia como una intervención psicológica. Penas más duras para los reincidentes sería lo esperado, todavía, la remisión de agresores condenados para programas de intervención especializada y promotoras del cambio de las conductas, combinada con medidas privativas de libertad o otras, se ha demostrado disuasiva (Gannon *et al.*, 2019; Beaudry *et al.*, 2021; Hasisi *et al.*, 2016).

Respecto a la H3 de que el nivel de escolaridad de los agresores está relacionado con la severidad de penas, nuestros resultados contradicen las conclusiones de otros estudios que indican que, a pesar del impacto de este factor en la decisión judicial, la relación no es significativa (Wooldredge, 2010; Freiburger, 2011; García *et al.*, 2014; Franklin, 2015). Estas diferencias pueden ser debidas a los diferentes contextos culturales y, en el contexto estudiado, es posible decir que la severidad de las penas disminuye cuando el nivel de escolaridad del agresor aumenta.

Sobre el recurso a medidas de resocialización en la actuación jurídica, solo 26% de las decisiones judiciales ha requerido el seguimiento del agresor por la Dirección-General de Reintegración y Servicios Penitenciarios. En 1.1% y 1% de los casos se observa la remisión del agresor para tratamiento de adicciones y participación en acciones de VBG, respectivamente. Estas cifras resultan alarmantes, al insinuar una inversión reducida del sistema de justicia caboverdiano en la resocialización de agresores.

El sistema judicial en Cabo Verde parece en general más orientado para la punición, particularmente de reincidentes y agresores poco escolarizados. Le pena de prisión para agresores, solo por sí, “no ha llevado ni a la disminución de casos de abuso ni a la prevista rehabilitación, mucho menos a su inclusión social. Las cárceles resocializan para la violencia” (Nobre & Barreira, 2008). Se impone la necesidad de proyectos de intervención

psicológica forense, en el contexto de violencia de género, no solo en los tribunales criminales y civiles, como, además, en entidades dedicadas a agresores, víctimas y niños. Se cree también que resultaría benéfico que los jueces acudan a expertos en temáticas conductuales para una mejor comprensión de la complejidad del fenómeno de violencia de género.

Por otro lado, los datos no permiten confirmar la hipótesis H4, que las penas son más severas cuando es comprobada la presencia de niños en el momento de la agresión. Esto, sin embargo, no es soportado por otros estudios (Dinovitzer & Dawson, 2007). Se observa que, para agresiones cometidas delante de niños, la severidad de penas ha sido aún más baja ( $M=32.76$ ), cuando contrastada a las cometidas sin la presencia de niños ( $M=35.41$ ).

### **Estudio adicional**

Delante los resultados del estudio principal, se buscó percibir en qué medida el público en Cabo Verde perciben la violencia de género contra mujeres como un crimen grave, como una práctica frecuente o como algo aceptable y que características sociodemográficas (género, edad y nivel de escolaridad) influyen sobre esa percepción. Con ese objetivo, los datos han sido obtenidos por vía de un cuestionario de autoinforme con 36 elementos. Se ha incluido cuestiones sobre variables sociodemográficas, sobre percepción de gravedad de diferentes tipos de violencia, y sobre la frecuencia y aceptabilidad de la violencia de género contra mujeres en Cabo Verde.

El cuestionario de organiza en tres secciones. La primera se refiere a variables sociodemográficas (género, edad, isla de domicilio, nivel de escolaridad y profesión). En la segunda sección, siguen los indicadores de violencia basada en género contra mujeres, en 30 cuestiones que evalúan cuatro dimensiones de violencia de género: Violencia Física (6 cuestiones), Violencia Psicológica (12 cuestiones), Violencia Sexual (6 cuestiones) y, por fin,

Violencia Económica (6 cuestiones). Las respuestas fueran dadas en una escala de tipo Likert, de 1 a 4, en que “1” significa “nada grave”, y “4” es “muy grave”. Por fin, la última sección del cuestionario se dedica a la frecuencia y aceptabilidad de la violencia de género contra mujeres con tres cuestiones cada una. Se invitó los participantes a clasificar la frecuencia con que creían que ocurre la violencia de género contra mujeres en su país, con opciones de respuesta de “1” (nunca) a “4” (muy frecuente). En relación a la aceptabilidad de la violencia basada en género contra mujeres, se cuestionó sobre si la violencia basada en género contra mujeres es “aceptable en todas las circunstancias”, a “inaceptable, debiendo siempre ser penalizada legalmente”.

Han participado en el estudio, por cuestionario *online*, 256 individuos (46.9% del género masculino y 53.1% del género femenino) con domicilio en diferentes islas de Cabo Verde, y con una media de edad de 27.16 años (DP e= 7.581).

En general, los resultados permitieron confirmar la existencia de diferencias significativas en la percepción de gravedad de los diferentes tipos de violencia – física, psicológica, económica y sexual ( $X^2(3) = 271.955, p < .001$ ). A pesar de la percepción de los cuatro tipos de violencia al posicionar por encima del punto medio de la escala, la mayoría de los participantes asumen la violencia física como la más grave de todas las formas de violencia (M=3.77 e DP=0.302).

Sobre la frecuencia de violencia basada en género, más de la mitad de los participantes opina que este es un crimen frecuente en su país (54.7%). Respecto a su aceptabilidad, un porcentaje elevado (91.4%) de individuos consideran la violencia de género contra la mujer inadmisibles, y que debe ser punida por ley.

Analizando las respuestas según el género, se observan diferencias significativas cuanto a la gravedad, frecuencia y aceptabilidad de la violencia basada en género. Los

participantes del género femenino perciben los diferentes tipos de violencia como más graves, más frecuentes y menos aceptables que los participantes del género masculino.

En cuanto al nivel de escolaridad de los respondientes, únicamente se ha encontrado significancia estadística en la gravedad de la violencia psicológica, en que la escolaridad más elevada está relacionada con una percepción de gravedad superior. No se observan relaciones significativas entre la variable edad y la percepción de gravedad, frecuencia y aceptabilidad de la violencia de género contra la mujer

### **Conclusión general**

De la presente investigación es posible concluir que la violencia basada en género es un problema complejo en todo el mundo y que, en Cabo Verde, solo muy gradualmente se vuelve motivo de inquietud social aunque la ley específica de combate a la violencia basada en género haya sido creada hace más de diez años. Esto sugiere que la retórica no se ha reflejado en la práctica.

Se concluye, desde los datos del estudio principal, que los dispositivos formales de control, en particular el sistema de justicia criminal, sancionan de forma suave el crimen de violencia de género contra la mujer. La mayoría de los casos que llegan a la justicia son cerrados, o cuando juzgados, reciben sentencias poco duras y con suspensión de pena.

Sin embargo, el estudio complementario ha demostrado que los respondientes jóvenes, con escolaridad de nivel secundario o superior, perciben la violencia basada en género como grave, frecuente y como algo que debe ser sancionado. Este hallazgo sugiere una disconformidad entre las penas aplicadas y la percepción de gravedad de la población. En las palabras de Herzog (2006) sería importante que hubiera consenso entre la percepción del público sobre la gravedad de un crimen y la pena aplicada. Esta idea es reforzada por

Robinson (2008) que concluye que la credibilidad del sistema criminal resulta fundamental para un efectivo control de la criminalidad.

La credibilidad y confianza en la justicia solo existirá si la responsabilización y penalización se presentaran en conformidad con la percepción de la comunidad sobre lo que cumple con sus creencias informales de justicia. No obstante, estamos conscientes de que las iniciativas destinadas a combatir y eliminar la violencia basada en género es una tarea difícil y compleja de entender. Desde luego porque implica la reestructuración de mecanismos informales, es decir, otros modos de conceptualizar la familia. Se impone el desmontar conceptos y prácticas conflictivas que subyacen y perpetúan la desigualdad de poder entre personas.

No es suficiente reparar los abusos cometidos en el pasado con aplicación de penas suspensas y el cumplimiento de algunas obligaciones, que según la literatura no resultan eficaces. La eliminación de la violencia basada en género se radica en combatir las asimetrías de poder en contexto familiar y evitar que estas se conviertan en una herramienta de opresión. Por ello es necesario que se vuelva inadmisibles cualquier conducta de subyugación del otro y de opresión de los derechos fundamentales.

Se puede permitir la inferencia de que, si el sistema criminal, al mantenerse ajeno a las dinámicas involucradas en el fenómeno de violencia basada en género y sus consecuencias en los individuos y en la sociedad, y al no demostrarse apto a implementar diferentes medidas que resulten efectivas en el cambio de creencias y actitudes de los agresores y en la protección de la sociedad, resulta incapaz de disuadir la práctica de este crimen y de promover verdaderamente la seguridad de la población.

### **Resume**

EDÍLIA RODRIGUES: Severidade Punitiva na Violência de Género: Perspetiva Jurídico-Psicológica da Resposta Judicial em Cabo Verde

(Sob a orientação do Professor Doutor Carlos Alberto Poiares e tutela do Professor Doutor Bartolomé Llor Esteban)

A violência de género contra a mulher, considerada um dos crimes mais antigos na história da humanidade, continua a ser um dos crimes mais sub-sentenciados pelo sistema de justiça criminal, a nível mundial. Apesar de existirem alguns estudos sobre a violência de género e sobre a resposta da justiça criminal nesta matéria, o fenómeno tem recebido pouca ou nenhuma atenção no contexto africano, particularmente em Cabo Verde. Neste país, apesar da criação da lei especial, em 2011, que penaliza a violência baseada no género (VBG), o aumento de casos reportados às entidades legais, a decalagem entre estes e o número de processos julgados, combinado com escassos estudos nesse campo, justificam a necessidade de uma investigação mais aprofundada do fenómeno em apreço. Neste contexto, o objetivo desta investigação foi analisar a severidade das medidas penais aplicadas a casos em que as vítimas foram mulheres e os agressores homens. Foram analisados 72 processos transitados em julgado em Cabo Verde. Para avaliar a severidade das medidas penais e, simultaneamente, averiguar se se teve em linha de conta o saber psicológico em matéria judicial, foi usado o Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização (Criminalização secundária) – Revista – ISPP-CS-R. Os resultados mostraram que a severidade penalizadora no crime de VBG contra a mulher é baixa e a psicologização nula. Foi analisada a relação entre as variáveis idades, nível de escolaridade, antecedentes criminais, posse de armas, hospitalização da vítima e a

severidade penalizadora. Os resultados mostraram que apenas o nível de escolaridade e os antecedentes criminais se correlacionam com o índice de severidade penalizadora. Para determinar em que medida estes dois fatores explicam a variação neste índice, foi realizada uma análise de regressão múltipla. Os resultados mostram que quanto mais baixo o nível de escolaridade do agressor, maior a severidade penalizadora e evidenciaram que a pena para os agressores com antecedentes criminais foi mais severa do que a aplicada aos agressores sem antecedentes criminais.

Face aos resultados do estudo principal, acima descrito, procuramos avaliar, a partir de um estudo complementar, a percepção social da violência de género contra a mulher, em termos de gravidade, frequência e aceitabilidade, e analisar se o género, a idade e o nível de escolaridade influenciam essa percepção. Participaram 256 residentes em diferentes ilhas de Cabo Verde, que responderam a um inquérito *online* sobre diferentes tipos de violência contra a mulher - física, psicológica, económica e sexual. Os resultados mostraram que os quatro tipos de violência foram percebidos como graves, sendo a violência física considerada como a mais grave. No que se refere à frequência da VBG, a maioria dos inquiridos foi de opinião de que esta é um crime frequente. Quanto à aceitabilidade, a grande maioria dos participantes considerou a VBG como inaceitável e devendo ser punida por lei. Analisando as respostas em função do género, observaram-se diferenças significativas em termos da gravidade, frequência e aceitabilidade, tendo os participantes do género feminino considerado os vários tipos de violência como mais graves, mais frequentes e menos aceitáveis do que os do género masculino. Em função do nível de escolaridade, apenas foi significativa a diferença no que respeita à gravidade da violência psicológica, tendo os inquiridos com maior nível de escolaridade considerado este tipo de violência como mais grave do que os de menor nível de escolaridade. Não se observaram relações significativas entre a idade e a gravidade,

frequência e aceitabilidade de VBG. Diremos, em conclusão, que parece existir uma discrepância entre a forma como o sistema judicial atua relativamente a este crime e a percepção social relativamente à gravidade e aceitabilidade deste tipo de violência.

*Palavras-chave:* Cabo Verde, violência baseada no género, justiça criminal, Psicologia Forense, severidade punitiva, mulheres, percepção pública, gravidade, frequência, aceitabilidade, tipos de violência.

**Abstract**

EDÍLIA RODRIGUES: Punishment Severity of Gender-Based Violence: a juridico-psychological perspective of criminal justice response in Cape Verde

(Supervised by Professor Carlos Alberto Poiares and Professor Bartolomé Llor-Esteban)

Considered to be one of the oldest crimes in human history, gender-based violence against women is still one of the most under-sentenced crimes worldwide. Although there have been some studies on gender-based domestic violence and criminal justice response to it, the issue has received little to no attention in the African context, particularly in Cabo Verde. Despite having created a law in 2011 criminalising gender-based violence, and an increasing number of cases being reported to the Cabo Verde criminal justice system, the number of cases put on trial is still scarce and has received little research attention. The objective of this research was to analyse the severity of punishment applied to cases in which the victims were women, and the perpetrators were men. 72 cases with a final decision were examined, both to assess the severity of punishment and, to ascertain whether psychological/psychiatric knowledge was included in the judicial response, using the Punishment Severity and Psychologization Index (Secondary Criminalization) – Revised. The results showed that the severity of punishment of gender-based violence is low, and psychologization is null. While the relationship between age, level of education, criminal record, possession of weapons, victim hospitalisation and punishment severity were analysed, the results showed that only the level of education and criminal record correlate significantly with the punishment severity index. A multiple regression analysis was carried out to determine to what extent these two factors explain the variation in this index. It was found that the lower the perpetrator's education level, the harsher the punishment severity, and that perpetrators with a criminal record received harsher

punishments than those without a criminal record.

In light of these findings a further study into the social perception of gender-based violence against women, in terms of severity, frequency and acceptability, and to analyse whether gender, age and level of education influence this perception was conducted. In this study, 256 individuals from different Cape-Verdean islands completed an online survey about various types of gender-based violence, including sexual, physical, psychological, and economic violence. The findings demonstrated that all four forms of violence were perceived as serious, with physical violence being the most serious. Most respondents believed gender-based violence to be a frequent crime, which they considered to be unacceptable and should be punished by law. Analysing the answers according to gender, statistically significant differences were found in terms of severity, frequency, and acceptability, with female participants considering the various types of violence as more severe, more frequent and less acceptable than male participants. Level of education was only statistically significant regarding psychological violence - respondents with a higher level of education considered this type of violence to be more serious than those with a lower level of education. No significant relationships were observed between age and the severity, frequency and acceptability of gender-based violence. In conclusion, there seems to be a discrepancy between the way the judicial system in Cape Verde responds to this crime and the social perception regarding the severity and acceptability of this type of violence.

*Keywords:* Cape Verde, gender-based violence, criminal justice, Forensic Psychology, punishment severity, women, public perception, severity, frequency, acceptability, types of violence.

## Índice

Resumen.....	1
Resume.....	12
Abstract.....	15
Abreviaturas.....	20
Introdução .....	23
Parte - I.....	34
Enquadramento teórico-conceitual e legitimação .....	34
Capítulo I: Violência enquanto fenómeno social e a sua perspetiva histórica.....	34
Crime, violência e comportamento agressivo .....	41
Violência de género contra a mulher.....	43
Violência de género, e determinantes culturais: breve abordagem .....	49
Capítulo II – Breve incursão ao processo de criminalização de VBG em Cabo Verde.....	60
VBG: panorama jurídico - constitucional .....	60
Implementação da lei de VBG, uma década depois: ganhos e desafios.....	70
Capítulo III – Legitimação.....	77
Introdução.....	77
Sistema criminal de justiça e violência de doméstica contra a mulher: <i>relação de amor e ódio?</i> .....	82
E a mediação, funciona nos casos de VBG? .....	89

SEVERIDADE PUNITIVA NA VIOLÊNCIA DE GÉNERO EM CABO VERDE  
SEVERIDAD PUNITIVA EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CABO VERDE

18

Severidade punitiva no crime de VBG: o “impacto de intervenção legal como estratégia de prevenção terciária”.....	92
Justiça restaurativa: desafios?.....	108
Psicologia Forense e violência doméstica: a intervenção juspsicológica.....	111
Fatores que influenciam as decisões judiciais .....	115
Parte II.....	125
Método .....	125
Amostra .....	126
Material .....	130
Procedimentos .....	134
Análise dos dados.....	136
Resultados .....	137
Discussão .....	146
Estudo complementar.....	162
Parte III .....	164
Perceção da Gravidade, Frequência e Aceitabilidade de violência baseada no género contra a mulher em Cabo Verde .....	164
Introdução.....	164
Capítulo I: O estado da arte .....	166
Perceção de diferentes tipos de violência de género contra a mulher .....	166

SEVERIDADE PUNITIVA NA VIOLÊNCIA DE GÊNERO EM CABO VERDE  
SEVERIDAD PUNITIVA EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CABO VERDE

19

Perceção da frequência e aceitabilidade de violência de género contra a mulher .....	176
Capítulo II - Método .....	182
Amostra .....	182
Instrumento.....	183
Procedimento.....	185
Análise dos dados.....	186
Resultados .....	187
Discussão .....	198
Considerações finais .....	205
Referências bibliográfica .....	218
Apêndices.....	I
Anexos .....	XXVI

### Abreviaturas

INE	Instituto Nacional de Estatística
IIMS	Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde
ICF	Instituto da Condição Feminina
IIMS	Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde
VBG	Violência Baseada no Género
ICIEG	Instituto Cabo-verdiano de Igualdade e Equidade de Género
ONU	Organização das Nações Unidas
UN	United Nations
WHO	World Health Organizations
ISPP (CS) - R	Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização (Criminalização secundária) Revista
ISP	Índice de Severidade Penalizadora
IP	Índice de Psicologização
PR	Pena Reclusiva
PNR	Pena Não Reclusiva
ICCA	Instituto Cabo-verdiano de Criança e Adolescente
PNVBG	Plano Nacional de Violência Baseada no Género
CEDAW	Convenção para Eliminação de todas as formas de Discriminação Contra as Mulheres
CADHP	Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos
UNICEF	Convenção das nações unidas sobre o direito das crianças

ICF	Instituto da Condição Feminina
IIMS	Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde
PNIG	Plano Nacional de Igualdade de Género

### Índice de Tabelas e Gráfico

<b>Gráfico 1:</b> Índice da Severidade Penalizadora Distribuído em Quatro Classe .....	138
<b>Tabela 1:</b> Índice da Severidade Penalizadora.....	137
<b>Tabela 2:</b> Frequência das Penas Reclusivas (PR) e Penas Não Reclusivas (PNR).....	138
<b>Tabela 3:</b> Correlação entre ISP e outras Variáveis .....	139
<b>Tabela 4:</b> Análise de Regressão Múltipla Predizendo ISP de Anos de Escolaridade e Antecedentes Criminais .....	140
<b>Tabela 5:</b> Penas Reclusivas Aplicadas no Tribunal da 1ª Instância e no Tribunal Superior	141
<b>Tabela 6:</b> Caracterização da Amostra de Acordo com Género e Idade dos Participantes.....	182
<b>Tabela 7:</b> Gravidade dos Comportamentos de VBG Contra a Mulher .....	188
<b>Tabela 8:</b> Gravidade dos Tipos de Violência contra a Mulher em Relação à Idade.....	191
<b>Tabela 9:</b> Perceção da Frequência de Comportamentos de VBG Contra a Mulher .....	192
<b>Tabela 10:</b> Frequência de VBG contra a Mulher por Género.....	193
<b>Tabela 11:</b> Frequência de VBG contra a Mulher por Níveis de Escolaridade.....	194
<b>Tabela 12:</b> Frequência de VBG contra a Mulher em Relação à Idade .....	194
<b>Tabela 13:</b> Aceitabilidade de Comportamentos de VBG Contra a Mulher .....	195
<b>Tabela 14:</b> Aceitabilidade de VBG contra a Mulher por Género .....	196
<b>Tabela 15:</b> Aceitabilidade de VBG contra a Mulher por Níveis de Escolaridade .....	196
<b>Tabela 16:</b> Aceitabilidade de VBG Contra a Mulher Em Relação à Idade .....	197

### **Introdução**

O termo género tem sido usado como arma de apropriação das diferenças entre seres humanos, tanto pela sociedade civil como pelas instituições, o que, de certa forma, não deixa de ter ajudado e contribuído positivamente na criação e implementação de alguns instrumentos jurídicos, objetivando a promoção da equidade e isonomia entre os géneros. Entretanto, a histórica construção social do conceito tem trazido consequências nefastas em termos políticos, culturais, religiosos e sociais, em que a mulher se constitui como objeto principal, suportando o fardo da disparidade de poder em todas as facetas das suas vidas.

Segundo United Nations (1993), a violência contra a mulher consiste em qualquer ato violento baseado no género, que resulte, ou tenha probabilidade de resultar, em dano físico, sexual, psicológico ou sofrimento para a mulher, incluindo a ameaça de praticar tais atos, a coerção ou privação arbitrária da liberdade em ambiente público e, ou privado. Johnson (2008), no seu livro “tipos de violência doméstica”, descreve o “terrorismo íntimo” como um padrão de comportamento, controlo e manipulação altamente traumatizante. Arroga-se que a violência praticada pelo parceiro consiste na forma mais dominante e endémica de violência contra a mulher. O direito do homem de apropriar-se da mesma é, na maioria das vezes, culturalmente enraizado (Heise, 1994; Gontijo *et al.*, 2010; Fontes & McCloskey, 2011).

Por isso, nas últimas décadas têm emergido, em muitos países, instrumentos jurídicos particulares, porquanto houve a necessidade de se ampliar a proteção legal, objetivando a diminuição da delinquência doméstica contra as mulheres. De acordo com a UN *Women* (n.d.), hodiernamente, volta de 125 países usufruem de leis com esse propósito, o que revela

que mais de dois terços dos 186 países assinaram a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW).

Em Cabo Verde, as mobilizações iniciais para combater a violência baseada no género (VBG<sup>1</sup>) levaram o país a ratificar vários instrumentos internacionais. A Lei 84/VII/11, de 10 de janeiro – que estabelece as medidas destinadas a prevenir e reprimir o crime de VBG (Lei VBG) – considera a VBG como uma violação de direitos humanos e um obstáculo para alcançar a isonomia de género. Nesse sentido, o Estado tem a responsabilidade em matéria de prevenção, assistência, proteção e repressão, definindo os direitos das vítimas e as medidas de reabilitação para os autores da violência (PNIEG, 2005-2011).

Convém salientar que a lei VBG sofreu algumas alterações em 2021. O crime de VBG, que fazia parte do artigo 23.º saiu da Lei especial de VBG e passou a dar lugar aos artigos 131.º - C e 131.º - D do Código Penal (Código Penal, 2021). Apesar da mudança, de especial a leis gerais, não houve alterações em termos de moldura penal e a VBG continua a ser um crime de carácter público.

Não obstante os instrumentos jurídicos salvaguardarem os interesses das vítimas, no que toca, por exemplo, à procura de ajuda, a VBG continua a fazer parte do quotidiano de muitas mulheres naquele país. As estatísticas apontam para milhares de processos nos tribunais. Em 2018, o Ministério Público registou 9.201 casos de abuso doméstico. Desses números, 4.029 foram marcados como resolvidos e 5.172 foram transferidos para o ano seguinte. No entanto, dos 4.029 casos que foram dados como resolvidos, mais de três quartos

---

<sup>1</sup> Neste estudo utilizamos o termo violência baseada no género (VBG), pois tendo em conta que o nosso estudo se realizou no contexto cabo-verdiano, o ordenamento jurídico do país utiliza o conceito violência baseada no género, onde também está incluída a violência doméstica. Contudo, por questões meramente cómodas, iremos também utilizar a violência doméstica contra a mulher, e violência de género.

(3.441) foram arquivados. Os restantes (5.172 casos), que foram transferidos para o ano seguinte, apenas 584 foram enviados para o tribunal (Ministério Público, 2018).

A razão por detrás da disparidade entre os casos reportados e os que chegam aos tribunais ainda é desconhecida. Contudo, num país onde a taxa de alfabetizado ronda os 95%, muito, ainda, precisa se fazer, no que toca à promoção da paridade de género, encarada como condição *sine qua non* para a (re)construção de uma sociedade civil igualitária (Ministério de Educação, 2010). Um país onde a “retórica do senso comum e o discurso de chancelaria (Costa, 2011) parecem não estar a fazer frente às convenções assinadas e as leis implementadas, colocando em causa os passos dados, e ainda por dar, no que tange à equidade de género” (Costa, 2011).

A violência de género, contra a mulher, é considerada um dos crimes mais antigos na história humana, porém, continua a ser o crime mais sub-representado pelo sistema de justiça criminal, a nível internacional (Whitney, 1997; Dobash & Dobash, 1979; Dawson, 2003; Fradella & Fischer, 2010; Kern *et al.*, 2007; Wooldredge & Thistlethwaite, 2004).

Por ser considerado um crime de foro privado, onde não “há vítima”, e não apoquentar a ordem pública, a violência contra a mulher não tinha despertado o interesse dos dispositivos informais de controlo, e pouco interesse tinha o sistema de justiça criminal (Cretney & Davis 1997; Hartman & Belknap 2003), em mitigá-lo. De acordo com os estudos de Gomes e colaboradores (2016), em Portugal, por exemplo, há ainda muita desconfiança e preconceitos no funcionamento do sistema judicial e na forma como os juízes e todos os atores judiciais percebem, e interpretam a violência nas relações de intimidade. Um número considerável de estudos (Buzawa & Buzawa, 1990; Hartman & Belknap, 2003; Taylor, 2013), chegaram a conclusão de que as condenações por crimes de violência doméstica, contra a mulher são raros, e que a resposta legal reflete geralmente o mesmo padrão de

indiferença, e inação, onde, ocasionalmente, ocorre negligência da parte policial (Dobash & Dobash, 1979). Whitney (1997) frisou, ainda, que as reações do magistrado aos abusos contra as mulheres têm historicamente deixado as vítimas sem defesa ou proteção adequada.

Fazendo referência a África, a violência contra as mulheres e meninas é um dos problemas mais críticos, dominando as agendas dos debates em todo o continente. E, sendo considerado um flagelo que merece resposta, imediata, o sistema criminal de justiça parece a solução mais viável na erradicação do fenómeno. Contudo, o progresso tem sido lento, e preocupante, no que respeita à responsabilização dos que cometem tais crimes. A maioria dos casos não são relatados, e quando os são, nem sequer chegam aos trâmites da justiça. E quando o chegam, a resposta é inepta. Por esse motivo, o número de casos de violência contra as mulheres, no continente, é alarmante (Budoo-Scholtz & Lubaale, 2021).

Por exemplo, na África do Sul, as vítimas são dissuadidas a procurar ajuda e proteção legal, devido à falta de profissionais e ou à falta de colaboração entre instituições, aliadas ao desconhecimento do processo judicial, custo financeiro, medo, e os atrasos nos processamentos de casos (Ludsin & Vetten, 2005; Parenzee *et al.*, 2001; Vetten, 2005). Por este motivo, muitas vítimas recorrem a mecanismos não legais para procurar ajuda, não só devido às circunstâncias acima citadas, mas também devido ao custo emocional e ao risco de (re) vitimização e (re)traumatização nas mãos de profissionais de justiça (Moult, 2005).

Num outro estudo, levado a cabo por Matadi e Calvino (2022), concluíram que na África do Sul e na República Democrática do Congo, a falta de legislação adequada, e o fracasso do sistema de justiça criminal em proteger as vítimas pode continuar a ter um impacto significativo no elevado número de casos de VBG em ambos os países.

Para Abourabi e Lubaale (2022), a VBG é predominante em Marrocos e no Egipto, nunca tendo sido punida com medidas penais eficazes. Embora ambos os países tenham

alcançado progressos substanciais, em termos de reforma legais, continua a existir uma disparidade na responsabilização criminal por atos de VBG.

Apesar de a maioria dos países africanos terem feito reformas internas, promulgando leis nacionais, e internacionais – através de ratificações de convenções no combate à violência contra a mulher –, a atuação dos dois dispositivos – legais e não-legais – tem deixado muito a desejar, no que concerne o direito das vítimas desse tipo de crime.

Face o exposto, é de referir que VBG é um fenómeno global, que não se restringe à África Ocidental e regiões em vias de desenvolvimento. Contudo, no continente, ao flagelo não tem sido atribuída devida atenção, nacional e/ou internacional, dos investigadores e organizações não-governamentais (ONG), particularmente quando o assunto é a resposta do sistema criminal de justiça.

Cabo Verde ratificou um conjunto de medidas internacionais de direitos das mulheres, como já mencionámos, que não só protegem as mulheres vítimas da violência, como também coloca pressão nas leis internas e jurisprudência sobre a abordagem de VBG. Os Estados têm obrigações claras e específicas, ao abrigo da legislação internacional em matéria de lei, de proteger os que se encontram em situações de vulnerabilidade social, e punir os que colidam com normas vigentes. Contudo, num país como Cabo Verde, a tarefa não se vislumbra fácil. Pois, como todas as sociedades falocêntricas, a transmutação é difícil e lenta, porquanto implica que haja o abandono de tradições profundamente enraizadas. E como diziam os autores, Cretney e Davis (1997), uma forma óbvia de indicar que uma determinada categoria de crime é levada a sério é através das sentenças impostas a esse tipo de crime, e as sentenças impostas no caso de violência doméstica contra as mulheres tendem a ser negligenciadas.

Em Cabo Verde, é certo que as ONGs que têm estado a operar no terreno tiveram, e têm, um papel primordial no processo, que é certamente lento, contudo mudanças visíveis

(criação da lei, alguns programas de intervenção, etc...). No entanto, apesar de haver algumas investigações a nível nacional sobre a VBG (Gomes, 2008; Silva, 2009; Rosabal, 2010; Thomas, 2018; Silva, 2021; Silva, 2022), a resposta da justiça criminal em relação aos resultados das sentenças no crime de VBG, contra a mulher ainda não foi explorada pelos investigadores nacionais. Não é clara a causa de a delinquência doméstica praticamente passa impune aos olhos da lei. Consequentemente, o nosso estudo almeja preencher essa lacuna ao centrar a sua análise na resposta judicial em relação a esse crime, contribuindo, assim, para o avanço do estado da arte, tendo Cabo Verde como pano de fundo.

Neste sentido, o nosso estudo procurou responder às seguintes questões:

- *Qual o grau de severidade punitiva relativamente ao crime de VBG contra a mulher em Cabo Verde?*
- *Que fatores influenciam a severidade das medidas penais no crime de VBG em Cabo Verde?*
- *Para além das penas efetivas, que outro tipo de resposta tem produzido o sistema judicial cabo-verdiano para dissuasão do crime de VBG?*

Face ao supra-exposto, em harmonia com a fundamentação teórica subjacente à problemática, o objetivo fundamental proposto para esta investigação é analisar as decisões judiciais proferidas pelo aplicador, no que se refere ao crime de VBG contra a mulher e a sua severidade punitiva e, ao mesmo tempo, investigar os fatores que influenciadores da severidade das medidas penais.

Assim, na tentativa de responder às questões supra e alcançar os objetivos previstos, criámos, a partir da revisão da literatura, um conjunto de hipóteses:

- *A severidade penalizadora no crime de VBG em Cabo Verde é baixa*

- *O baixo nível de escolaridade dos arguidos encontra-se relacionado com a severidade da pena.*
- *As penas mais severas ocorrem quando o agressor tem antecedentes criminais*
- *A severidade punitiva é mais elevada no caso da presença dos filhos na altura da agressão.*

Com efeito, o estudo apresenta uma metodologia quantitativa, com intuito de responder às questões de investigação, utilizando o desenho descritivo correlacional. Para isso, foram consultados sentenças e acórdãos judiciais, utilizando o instrumento Índice de Severidade Punitiva e Psicologização (Criminalização Secundária) Revista – ISPP(CS)-R – (Poiães & Branco, 2021). O Índice de Severidade Penalizadora (ISP) é um instrumento de medida, e varia entre 0 e 100 pontos. Quanto mais alta a pontuação, mais alta é a severidade da pena, enquanto uma pontuação baixa significa baixa severidade. Foi também utilizado o Índice de Psicologização (IP) Esta escala tem um mínimo possível de 0 pontos e um máximo de 12. Se for 0, a psicologização é nula, enquanto 12 a psicologização é máxima.

Consideramos que o estudo em apreço assume interesse para a definição de políticas públicas pois os resultados do mesmo, poderão facultar informações pertinentes, contribuindo para o melhor conhecimento desse fenómeno em Cabo Verde, nomeadamente no que respeita à resposta dos dispositivos formais. A conjugação dessas informações poderá auxiliar as instituições presentes no país, não só em prol da justiça em favor das vítimas, como também da responsabilização e ressocialização dos agressores, nomeadamente ao nível de criação de programas multimodais de prevenção, pese embora existam alguns projetos nessa vertente. Acreditamos ainda que o nosso estudo vai mais além, pois acrescenta o que já está documentado pelos investigadores internacionais e, adicionalmente, contribui por ser mais um estudo feito fora do contexto europeu e americano

Defendemos a partir dos nossos resultados, a (re)estruturação de renovadas políticas não só nos campos judiciais, como também ressocializadoras e educativas, suscetíveis, a nosso ver, de amenizar situações que possam conduzir os agressores à reincidência, ou seja, priorizar medidas preventivas.

Para a instauração de uma verdadeira mudança de atitudes – (des) romantizar e (des) domesticar – relacionada com o crime em apreço, na sociedade cabo-verdiana, particularmente o sistema judicial, importa com efeito: o reforço do instrumento de intervenção; melhor implementação da lei incluindo medidas carcerárias e ressocializadores; a nível social, urge maior participação cívica, e pressão social no desmantelamento progressivo dos racionais patriarcais misóginos, predominantemente masculino, mas também interiorizadas pelas mulheres, começando na família (primeiro agente de socialização), erradicar o discurso social legitimador e culpabilizante, que condena as mulheres, sujeitas a esse tipo de violência, e as diabolizam. Nessa linha, consideramos que o estudo da severidade penalizadora no crime de VBG, no contexto criminal cabo-verdiano, proporciona informações pertinentes sobre a atuação do sistema criminal, ampliando a compreensão do fenómeno e seu lugar social, na realidade em apreço.

Contudo, a partir dos nossos resultados, foi necessário realizar um sub-estudo, de forma a tentar perceber como é que a sociedade civil perceciona o crime de VBG contra as mulheres, sua frequência e aceitabilidade. Porquanto, acreditamos que a percepção da gravidade do crime pode influenciar os aplicadores da lei na altura da aplicação da pena.

No fundo, o objetivo do estudo adicional é perceber se, de facto, a severidade da pena aplicada no crime de VBG, se alinha com a percepção do público acerca desse crime.

Geralmente, como advertem Carlson e Worden (2001), não há muita resistência por parte do público no que tange a criminalização de muitos comportamentos agressivos e

aparentemente, o público prefere um sistema judicial mais protetivo e intervencionista, ao contrário do que, historicamente, o sistema judicial tem demonstrado. O que sugere que, supostamente, não há necessidade de convencer o público de que a violência doméstica é grave, um problema comum e é ilegal, requerendo intervenção judicial. O resultado do estudo complementar alinha com as considerações dos autores supramencionados.

Do nosso ponto de vista, este estudo é o primeiro passo para um diagnóstico social mais aprofundado, auxiliando a compreensão do problema, até então condenado apenas retoricamente. O resultado pode consequentemente auxiliar, de alguma forma, as instituições, particularmente os legisladores e os aplicadores da lei, a aperceber-se de que uma parte da população (jovens, e maioria com estudos superiores), considera graves os comportamentos que diz respeito ao crime de VBG, contra as mulheres, e se entendem que deveria ser sempre punido pela lei. O que, portanto, parece não estar alinhado com as sanções penais aplicadas pelo sistema penal. Não obstante, acreditamos que a cultura de silêncio à volta de VBG em Cabo Verde, particularmente em casa, não decorre somente da aceitação social, mas também porque há inconsistência e incoerência quanto às medidas postas em práticas.

### **Delineamento dos capítulos e estrutura da investigação**

A tese apresenta-se em três partes (I, II e III)

*Parte I* – enquadramento teórico-conceitual e legitimação – está apresentada em três capítulos, nos quais estabelecemos a base teórica do estudo. O primeiro capítulo incidiu sobre o conceito de violência enquanto fenómeno social, crime, violência e comportamento agressivo e alguns aspetos respeitantes à sua evolução cultural as influências que se lhe perpassam; de seguida, centramo-nos na evolução do conceito de violência doméstica (nomeadamente alguns determinantes que a influenciam, entre os quais a cultura).

O segundo capítulo debruça-se sobre a criminalização de VBG em Cabo Verde, o panorama jurídico-constitucional e, por fim, a reflexão sobre a implementação da lei, depois de uma década.

O terceiro capítulo analisa a problemática do estudo, estando subordinado ao título *Legitimação*, para a qual mobilizamos os alicerces teóricos, visando debruçar-se sobre a importância intrínseca a esta investigação. Ou seja, para além da reflexão sobre algumas pesquisas que foram feitas no que diz respeito ao papel do sistema criminal da justiça no combate ao crime de violência doméstica contra a mulher; abordamos a severidade punitiva e o seu impacto na prevenção do crime; os desafios da justiça restaurativa; a intervenção jurídica psicológica e o papel da Psicologia Forense nos casos de crime de VBG e por fim, debruçamo-nos sobre os fatores influenciadores de decisões judiciais.

*Parte II* – é informada pelo método adotado; a caracterização da amostra; a descrição do instrumento técnico escolhido e descrição do processo de colheita de dados; o tratamento da informação recolhida com base na análise descritiva; estatística correlacional e regressiva; apresentação dos resultados e discussão dos mesmos.

*Parte III* – trata-se do estudo complementar. Este está dividido em dois capítulos. O primeiro retrata o estado de arte, onde se encontra estudo sobre percepção da gravidade e as características de diferentes formas de violência doméstica contra as mulheres; a percepção da frequência com que a violência acontece e a sua aceitabilidade. Depois passamos para o método (capítulo dois) do estudo, seguido de resultados e discussão.

E, por fim, a conclusão geral, onde entra o estudo principal e o complementar; implicações práticas do estudo; sugestões e recomendações futuras e por fim a reflexão. Depois temos as referências bibliográficas. De seguida, temos os apêndices e os anexos, para

os leitores, caso desejem consultar mais detalhes sobre os instrumentos, e não só, utilizados para o efeito deste estudo.

## Parte - I

### Enquadramento teórico-conceitual e legitimação

#### Capítulo I: Violência enquanto fenómeno social e a sua perspetiva histórica

Se por um lado é certo que a violência está no útero das vivências quotidianas e transversal a todas as sociedades e culturas, por outro lado é difícil engendrar um conceito universal da mesma, haja em vista os padrões específicos da vida de cada sociedade. Porquanto a violência tem adotado manifestações diversas no decorrer do tempo, contribuindo, assim, para a criação de diferentes métodos e estratégia para a sua radicação. Ao longo do tempo, esse fenómeno tem estado entre os que mais polémica têm carreado. As diversas posições sociais e políticas fazem referências à ele, existindo quase sempre uma inquietação em tudo o que lhe diz respeito. Para alguns, a violência é intrínseca ao sujeito e é inevitável a cada sociedade (Rodrigues, 2012).

Nas sociedades mais antigas, por exemplo, cabia aos membros da comunidade, juntamente com um conjunto de interdições, sacrifícios e rituais, desempenhar o papel e estabelecer a ordem, com o propósito impedir expressões, consideradas violentas. Ou seja, a criação de um conjunto de meios que estabelecessem as normas e condutas que não deveriam ser violadas, sob a ameaça de serem condenados e sacrificados em praça pública. O ritual do sacrifício, segundo Girard (1990), tinha como propósito fundamental “acalmar o desconforto interno e impedir a reação dos conflitos”, continuamente eliciado pelo sofrimento das vítimas. O objetivo era atenuar os impulsos violentos dos que presenciavam os cenários.

Contudo, os sacrifícios e os rituais nem sempre provocavam o efeito desejado, a longo prazo e com o tempo, a violência voltava a ocupar o seu lugar nas práticas sociais. A contemplação e ou a observação dos castigos, não menos bárbaros, eram vistas com fascínio, e continha metas pedagógicas, pois, hipoteticamente, era esperado que os ânimos dos

telespetadores atentos acalmassem, pelo menos no momento. Ainda, como assevera Foucault (2013), “nas cerimônias de suplício, o personagem principal é o povo”, e a intenção era alicerçar a moral estatal que até então tinha base débil. E esperava-se que desse suplício, saísse dali apaziguamento, ou seja, o povo ao presenciar esses atos horríficos, os seus impulsos acalmavam, como já referimos, e isso os prevenia de cometer algo semelhante ao do suplicado.

Deste modo, o combate à violência que se praticava na época, era reprimida com uma porção ainda maior e espetacular de violência, oferecida à vítima e aos espectadores, através de rituais sacrificiais, concretizando, assim, a metamorfose epifânica de uma sequência solene, onde a transformação era esperada. Rituais esses que continham poderes simbólicos e que ainda hoje predominam na nossa sociedade, a religiosa, por exemplo (Neto, 2018).

Tendo a população europeia, maioritariamente, camponesa nos finais da idade média, de acordo com Elias (2001), mais concretamente na época do feudalismo, a violência era evidente naquela época. Nos caminhos que uniam os feudos, ali, também circulavam os comerciantes. No entanto, estes últimos, não tinham nenhuma proteção e corriam o risco de serem agredidos ou assassinados. A batalha era constante, pois os guerreiros andarilhavam distâncias impedindo guerras com militares pertencentes a outros feudos. Consequentemente, as lutas resultaram no aumento do poder militar, uma posição de supremacia sobre outros guerreiros. Por conseguinte, surgiram as “casas individuais” que foram conseguidas através de inúmeras disputas. Outrossim, ainda segundo o autor, com o enriquecimento das aldeias e encadeamento das casas deram, contudo, a origem às cortes<sup>2</sup>, que paulatinamente, ampliaram

---

<sup>2</sup> A sociedade de corte era uma sociedade europeia absolutista governado pelo poder monárquico, cristão e do barroco. Uma sociedade, considerada do antigo regime e que vinha a cair com a revolução francesa de 1789. Era uma sociedade com uma conceção naturalista da ordem social, onde o absoluto e o todo se sobrepõem às partes e ao individual (Elias, 2001).

os deslocamentos das pessoas que procuravam coisas novas e algumas oportunidades no artesanato, comércio e trocas de mercadorias. Gradativamente, com o aumento das cortes, passou-se a estabelecer uma espécie de mutualidade, *de obediência mútua entre as pessoas, que põe em movimento, por exemplo, processos de feudalização*. Com efeito, o resultado foi uma maior conexão, estabelecendo, por assim dizer, um processo de divisão das funções sociais (Elias, 2001).

As duas grandes revoluções – a industrial<sup>3</sup> e a francesa<sup>4</sup> – auxiliaram nesse processo de alicerçamento, ao reestruturar as práticas, melhorando as técnicas e metodologias de domínio social. No final na idade média, com o revigoramento da sociedade cortês, surgiu na Europa um novo paradigma: a decadência dos feudos; as transições dos guerreiros em cortesãos; e o surgimento dos burgos. A violência e o Estado Absoluto, com o fortalecimento das cortes, paulatinamente começaram a governar e a monitorizar os seus territórios e o Estado absolutista começou a monopolizar e centralizar o direito de punir e condenar. À vista disso, arquitetou novas formas punitivas, que veio dar lugar as já exercidas entre as famílias das vítimas – faziam justiça pelas próprias mãos –. O sistema despótico definia os suplícios e ou os açoites, como sendo a melhor estratégia de castigar e corrigir, expondo os que cometiam erros numa praça pública, num espetáculo sangüinário, onde eram vilipendiados e castigados, servindo de exemplo para os que ali presenciavam, como frisou Foucault (2013) na sua obra “Vigiar e Punir”. Gradativamente, com a solidificação dos Estados nacionais, os suplícios vieram dar lugar aos chamados, hodiernamente, cárceres modernos, onde as

---

<sup>3</sup> A primeira revolução industrial apareceu em Inglaterra na segunda metade do século XVII e foi o período que deu o início ao processo de industrialização. Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/revolucao-industrial-2.htm>. Consultada no dia 10 de agosto de 2019.

<sup>4</sup> A revolução francesa aconteceu em 1789 em França, inspirada nos ideais do iluminismo e motivada pelo descontentamento e a crise que o país vivia nos finais do século xviii. Foi uma época que marcou a queda do regime absolutista na europa ocidental. Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/revolucao-francesa.htm>. Consultada no dia 26 de novembro de 2019.

punições perderam as suas plateias, ou seja, o sistema de punição de outrora – tortura e ou suplício – já não mais interessava ao poder. A partir do momento em que a burguesia toma as rédeas, todas as sociedades tinham de jogar de acordo com suas próprias normas.

Ainda, de acordo com o autor, com o constrangimento social, particularmente com a presença dos intelectuais iluministas, os suplícios aos poucos foram desclassificados, censurando as suas atrocidades. O abuso físico, lentamente mudou de expressão, foi substituído pela violência simbólica e psicológica. Foi a partir de então que surgiu o código penal. Assim como pode ser constatado em termos históricos, na nova “*redação dos códigos penais modernos: Rússia, 1769, Prússia, 1780, Pensilvânia e Toscana, 1786; Áustria, 1788; França, 1791, Ano IV, 1808 e 1810. Para a justiça penal, uma nova era*” (Foucault, 2013). As nações passaram a ter os seus próprios códigos de punição, cuja pena começou a basear-se em critérios como a gravidade dos delitos e o grau de perigosidade do delinquente, a par disso, como frisou Foucault (2013) “não é mais o corpo a ser punido, mas, é a alma”.

Cumprir observar, por fim que, no final do século XVIII, e início do século XIX, foi presenciado o fim de um paradigma. O do suplício e o arranque de outras formas de castigo. A primeira, as ações criminosas, desacatava o poder real; por esse motivo, a imposição de castigar em palcos públicos, eliminando a existência do sujeito que transgrediu. Como foi aludido, no suplício, tinha o corpo físico, a dor e as suas características. De acordo com Muchembled (2012), essas exposições sangrentas repudiavam pelas formas desumanas das punições. Os delinquentes, particularmente os que cometiam crimes de homicídios, infanticídios e parricídios, eram avisados da exposição uns dias antes. Enquanto a segunda – início de outras formas de punição – o delinquente, maleficiava a sociedade, e por isso o crime era julgado por uma equipa – juízes, peritos etc – isto é, objetivava-se punir a moral do mesmo, reconstituindo o erro do sujeito, encarcerá-lo, com o propósito de discorrer sobre os

seus erros. Cumprindo as penas, era esperado que o sujeito se reintegrasse e não voltasse a cometer os tais atos. Ou seja, a punição atua mais na alma, no espaço e o no tempo. Querendo dizer que, quanto maior a punição, maior o controle sobre o lugar e a atividade. A pena se deslocou para outras margens, houve redução de intensidade e mudanças de objetivos – a limitação da liberdade –, em vez de emoções intoleráveis e marcas profundas no corpo, ela, hodiernamente, intervirá na privação de autonomia e direitos.

E para atingir esses objetivos, houve a necessidade de desenvolver ferramentas para tal. Por exemplo, o saber científico – em várias áreas do saber como a Medicina, Filosofia, Psicologia, Direito, História e Sociologia – que repercutiram no controle dos espaços de forma mais objetiva e racionalizada. A par das ciências, deram origem, também, a instituições de controle que dividiram em espaços efetivando ordens sobre os indivíduos. Como dizia, ainda o autor, “o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações [...], e ainda esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos”. Desde o século XIX as instituições sociais, como: “conventos, exércitos, fábricas, escolas, hospitais” (Foucault, 2013), desempenharam muito bem suas funções de controle social, de “a cada instante vigiar o comportamento de cada um, para sancioná-lo”. Ou seja, sob um prisma mais doce e humanista das novas táticas punitivas, oculta-se uma mudança subterrânea, desconhecida. Presenciam-se renovadas metas, novas críticas e, com efeito, novos papéis.

A punição, modernamente como já foi referenciada, tem um olhar e propósito diferentes. Em primeira instância, todo o mecanismo por detrás da punição não tem apenas o papel de reprimir – pois perceberam que essa por si só, não era o suficiente – também, é preciso se formar e produzir algo. Em segundo lugar, perceberam que a punição terá de ser mais de que uma mera consequência de transgressões, ela, também, pertence a uma estratégia

de índole política, um processo pelo qual o controlo se opera. E por último, a punição, deve ser analisada por outras ciências da vida, não apenas no âmbito do direito penal. No discurso de Foucault (2013), o surgimento da “alma” aparece como efeito da penetração do poder nos mais variados campos, conferindo a ele uma aura científica. Em virtude dessas considerações, não podemos cair no incitamento em dizer que o poder já não opera sobre o corpo físico. Ele era e continua a ser uma forma de exercer poder e agir sobre o corpo. Se, presentemente, não há corpos, membros estropiados e ou espetáculos cruentos – embora se presencie, por vezes a brutalidade policial, e o povo a filmar – isso não significa que o poder se tornou mais desvigoroso, pelo contrário, a sua infiltração tornou-se mais invisível.

A violência, associada à noção do poder político, aparece como intrínseca à origem e à natureza de todo o poder. “O Estado, segundo Weber<sup>5</sup>, detém o monopólio da violência legítima. Nessa perspectiva, a força e sua extensão, a guerra, é passível de permanecer sempre no horizonte do poder” (Spector, 1997). Tito Lívio<sup>6</sup> – no seu discurso sobre a primeira década de Tito Lívio –, já dizia que era preciso condenar “não a violência que restaura, mas a violência que ruína.” Em geral, a argumentação em defesa da violência se faz segundo a fórmula: “os fins justificam os meios”. Isso pressupõe a possibilidade de aceitar a violência do Estado que, perdendo seu “caráter passional, imprevisível, desproporcional, transforma-se em racional, previsível e calculado” (Zapata, 2021).

A visão marxista, justificando a violência como motor da história, opõe-se à ótica voluntarista da violência do político. Dentro dessa perspectiva, a violência pode parecer

---

<sup>5</sup> Max Weber foi um intelectual jurista e economista de origem alemã. Considerado um dos fundadores da sociologia. Ele foi conhecido pela sua tese “*Protestant ethic, relating Protestantism to capitalism*” e pelas suas ideias sobre “*bureaucracy*”. Fonte: <https://www.britannica.com/biography/Max-Weber-German-sociologist>. Consultada no dia 19 de maio de 2019.

<sup>6</sup> Historiador romano que nasceu por volta do ano 59 a.C. Viveu na Roma antiga e foi conhecido pela obra principal “*História de Roma*” (Zapata, 2021).

racional, se o seu objetivo consiste em ir além da própria violência, que é a exploração do homem (Spector, 1997). Éric Weil<sup>7</sup>, na sua obra “filosofia política”, afirma: “a violência foi e ainda é a causa motora da história e, no entanto, ela é a consciência política que busca o progresso em vista da eliminação da violência, eliminação que é sua causa final: “o consciente não origina do consciente, mas de seu contrário, e a vontade da paz nasce da guerra e da luta” (Weil, 1956).

O papel da violência na fundação das identidades, principalmente coletivas, não pode ser ignorado e perpassado em vão. Por detrás dos abusos, e da memória, encontra-se, na maioria das vezes, a relação fundamental dessa com a violência. Dificilmente encontramos uma comunidade histórica que não tenha sido originária de uma relação assimilada à guerra. O que se celebra sob a designação de “acontecimentos fundadores<sup>8</sup>” são, na sua essência, atos violentos legitimados, posteriormente, por um Estado de direito precário (Ricoeur, 1996).

Foucault (2013) já tinha alertado da impossibilidade de compreender os exercícios das relações de poder somente pelas instituições jurídicas. O dispositivo jurídico é uma esfera de litígios, na qual a instituição de direitos está em constante mutação. Ele se estabelece institucionalmente baseando em parâmetros que, ao proclamar uma justiça e ou a igualdade para todos, tende a apagar a dinâmica política que o concebe (Debert & Gregori, 2008). Por isso, o domínio jurídico, quer se admita, quer não, é decorrido por influência e interesses, não obstante a quimera da sua neutralidade. Ainda, na perspectiva de Debert e Gregori (2008), a disputa pela difusão do acesso à justiça requer, evidentemente, negociações e ou acordos. E

---

<sup>7</sup> Filósofo francês, de origem judia e alemã, Weil (1904/1977) foi discípulo de Ernst Cassirer. Instalando-se na França, em 1933, ele prossegue sua linha kantiana, trabalhando com a filosofia moral e política. Essa citação de Éric Weil é extraída do texto de Burgio, A. *Du discours à la violence*. In: DISCOURS, *violence et langage, un socratisme d'Éric Weil?* Le Cahier, Collège International de Philosophie, n. 9/10, p. 232-233, 1990.

<sup>8</sup> O relato contribui assim para a mitificação da história coletiva, os relatos fundadores (do mundo, do povo, da cidade, etc.).

negociações entre agentes sociais que não têm o mesmo poder na luta que edita as regras do jurídico, sendo característico do jogo democrático a necessidade imediata de novos atores dedicados na formulação de demandas. Dinâmica essa, que tem de ser considerada de modo cada vez mais – “contexto-sensitivas” – para que o aparelho de direitos possa ser atualizado democraticamente (Habermas, 1994).

### **Crime, violência e comportamento agressivo**

A agressividade humana sempre despertou a curiosidade científica, e muitos estudos foram feitos no sentido de compreendê-la. De acordo com alguns autores, como por exemplo, Ferreira (2006), a agressividade, sendo um fenômeno complexo, não deverá ser indagado num vazio, porquanto diversos fatores contribuem para a sua manifestação.

Observe-se que o termo agressão, muitas das vezes, remete-nos para situações de violência. Esta última deriva do latim *violentia*, significando a disposição de uma pessoa para agir através da força ou forte impulso, empregando a ação violenta, ou mesmo qualquer força contra a vontade, liberdade de uma pessoa ou objeto (Zimerman, 2001). Enquanto, a agressão, que deriva do latim *agressione*, quer dizer ataque à integridade física ou moral de alguém, ou ato de hostilidade e provocação (Ferreira *et al.*, 1999). Para Poiares (2012), a violência é o exercício de poder sobre a outra pessoa, levando-a a realizar atos, ou ocultá-los, contra a sua vontade. A ação pode materializar-se em constrangimento físico ou moral sobre um indivíduo, com objetivo a forçá-lo a sujeitar-se *vis-à-vis* ao outro. Assim, consideramos que a violência é uma agressão, todavia, nem todos os comportamentos agressivos são considerados violentos.

Igualmente, Fischer (1994) revela, ainda, que a violência se pronuncia mediante a agressão e do uso concreto da força. Segundo o autor, a agressão deve ser vista como uma

forma de violência social que tem em conta a importância do contexto social, bem como os valores económicos e culturais que as pessoas detêm. Assim, de acordo com esta perspectiva, a questão da violência está ligada às representações sociais, que a categorizam como positiva ou negativa, dependendo de um conjunto pré-determinado de referências. Se, por um lado, Fischer destaca a utilização material da força nas suas teorias de violência, por outro, Guillothe (1999), enfatiza as características da reação no que se refere ao algo externo, considerando essencial compreender o que pode causar violência e o seu significado. Galego (2004), assim como os autores anteriormente mencionados, acredita que os atos violentos devem ser entendidos na sua relação com outros fenómenos a que estão associados, e que não podem ser separados dos contextos sociais, económicos e culturais em que os indivíduos estão inseridos. Contudo, outros autores, sugerem uma designação que se confere consensual entre os investigadores, pelo menos pela extensão de comportamentos abarcáveis – “uso intencional da força, coação ou intimidação contra terceiro ou de qualquer forma de ação intencional que, de qualquer modo, viole os direitos ou necessidades dessa pessoa” (Oliveira & Manita, 2002). Como refere Poiares (2003), a violência pode ser perspectivada como a forma de levar um sujeito a realizar atos ou a assumir comportamentos que, voluntariamente nunca produziria. Remete-nos, portanto, para o plano de ato forçado e imposto proveniente da força e da coação exercidas por outro sujeito que no caso, dispõe de maior parcela de poder.

Aludimos à teoria positivista por a mesma marcar a verdadeira fundação da Criminologia e da Psicologia Criminal. Muitas têm sido teorias que posteriormente foram desenvolvidas ora incidindo na Biologia, na Psicologia ou na Sociologia. Todavia essas teorias que, a partir da década de 80 do século passado se combinaram no paradigma sistémico correspondendo à evolução natural da ancoragem de observação e análise do comportamento criminal cuja inserção não faria sentido na economia deste texto

O ponto que se segue, pretendemos explorar o conceito de violência baseado no género (VBG) e ou violência doméstica. Longe de arquitetar verdades ou normatividades, o objetivo é refletir sobre as dinâmicas que a compõem. Detalhamos o que a literatura ilustra sobre a prevalência e o impacto de diferentes formas expressiva de violência, contra a mulher, e relacioná-la às questões que já se encontram na agenda da saúde pública a nível internacional.

*We cannot accept that men beat women. That was before, in old days, when women could be treated so. But it is not the right way to treat any person. It is not how women should be treated. Times are changing. Let us also change (IRC, 2012).*

### **Violência de género contra a mulher**

A premissa de que a família funcione como um local de bem-estar e de realização pessoal, hodiernamente levanta, muitos quesitos, pois é sabido que as relações familiares assumem facetas menos benevolentes, desde os tempos mais remotos. Factos que são atualmente mais conhecidos e divulgados, nomeadamente as situações intrafamiliares, como a violência física, psicológica, económica e sexual. No ocidente, há praticamente duas décadas que esse tipo de violência começou a ser denunciado, inicialmente pelos movimentos feministas, que alertaram para o que até então se conhecia, que era violência dos homens em relação às mulheres. Com efeito, esses factos ganham maiores contornos no quadro das relações intrafamiliares, na medida em que hoje regista-se uma redobrada atenção para com os mesmos. (Almeida *et al.*, 1994).

Até agora não há um consenso universal sobre uma definição clara do que é a violência doméstica. Aliás, as suas peculiaridades geram ambiguidades, pois muitos questionam as diferenças do conceito que, a nosso ver, pode delimitar a compreensão desse fenómeno tão vasto. Como por exemplo, violência doméstica, violência com base no género, violência contra a mulher. Contudo, a questão aqui não é a ambiguidade por detrás do conceito em si, mas o que em cada sociedade e o seu ordenamento jurídico, se considera como violência. O Direito cabo-verdiano contempla como definição legal relativamente à violência contra a mulher, a mais conhecida que é aquela que está contida na lei especial<sup>9</sup> – lei VBG –. Esta associa a violência doméstica contra a mulher à VBG. Segundo o ICIEG<sup>10</sup> (2011), a VBG são todas as afirmações de violência física ou psíquica, com as suas expressões não só à integridade física, mas também à liberdade sexual, coação, ameaça, limitação da liberdade ou assédio, com raízes na contrição social de relações de poder desiguais. Este pode ser económico, social, cultural do agressor em relativamente à vítima. Convém salientar que a violência com base no género tem a ver com preceitos e crenças sobre lugares e papéis sociais, socialmente construídos, resultantes de género, conquanto, não restrito às mulheres (Silva, 2022). Ou seja, a VBG tem a sua motivação no não cumprimento de uma determinada expectativa cultural. Ela é sempre validada e fundamentada de acordo com as ideologias em que aquela sociedade está inserida. A curta-metragem de Eleonore Pourriat<sup>11</sup> (*oppressed majority*), ilustra isso. Sobre as mulheres, e não só, existem muitas expectativas socioculturais que são validadas e fundamentadas, que em muitos casos

---

<sup>9</sup> A entrada em vigor do novo Código Penal (CP) em maio de 2021, a lei de VBG sofreu alterações. O crime de VBG que fazia parte do artigo 23.º saiu da Lei VBG e passou a dar lugar ao artigo 131.ºC do CP.

<sup>10</sup> Instituto cabo-verdiano de igualdade e equidade de género.

<sup>11</sup> Atriz francesa, que na sua curta-metragem ilustrou como é que seria, para o homem, viver numa sociedade matriarcal.

“justificam os abusos”. Como por exemplo, “ela não cuida adequadamente de criança” seria um dos motivos que justificasse o uso da força e violência do relacionamento (ICIEG, 2012).

No geral, o direito assegurado às mulheres, quer nacional, quer internacional, muitas das vezes colide da falta de clareza, daquilo que significa dissimetria de gênero e as suas consequências sociais, particularmente, por um número considerável de profissionais – que estão na fronteira do atendimento desses casos – pois com frequência o gênero é entendido como tendo o mesmo significado que sexo. O primeiro, derivou do segundo, e um dos primeiros estudos foi desenvolvido por Ann Oakley, e publicado em 1972, no qual ela definiu o sexo como *a word that refers to the biological differences between male and female: the visible difference in genitalia, the related difference in procreative function*. ‘Gender’ *however is a matter of culture: it refers to the social classification into ‘masculine’ and ‘feminine’*. (Oakley, 1985). Para Eckert (1989), assim como a idade, *sex is a biological category that serves as a fundamental basis for the differentiation of roles, norms, and expectations in all societies. It is these roles, norms, and expectations that constitute gender, the social construction of sex*. Apesar da clara diferença, biológica, entre os dois seres, a perigosidade reside na sua hierarquização e divisão, porquanto a hierarquia, cria diferença e separação, a todos os níveis, e, entre o gênero, não é indiferente (Delphy, 1993).

De acordo com o mencionado, essa falta de clareza pode levar atitudes menos benevolentes, ou seja, pode beneficiar e ou interferir na aplicação aos previstos na lei até então estabelecida – lei da VBG –. E há casos em que a ausência de compreensão transmuta a resistência, e, com efeito, leva à recusa de direitos. Como, por exemplo, quando, se interpreta o gênero feminino, como “economicamente suficiente”, levando a insinuações, e consequentemente, a decisões – como no caso de alguns processos consultados –, nos quais se advogavam não encaixar na lei da VBG, por não se confirmar a superioridade masculina.

Ou seja, ela ganha tal como o marido, daí o abuso, não advém de desequilíbrios de poder, e ou controlo no relacionamento. Também acontece com alguma frequência a crença de que a vítima recorre à lei por ser fisicamente mais fraca e economicamente insustentável – estereótipo. Então vejamos: a vulnerabilidade física e a autossuficiência. Se, por um lado, a mulher for mais robusta, de estatura maior, e, por outro lado, economicamente independente, podem lhe dificultar o acesso à justiça, por essas características serem próprios do género masculino – a expectativa legitimada e aceite coletivamente – (*Ela tem mania de valente, e só porque tem essa barraquinha de cerveja, acha que já pode tudo*. Dizia um agressor, no seu depoimento). Portanto, para Oliveira (2007), para haver acesso à justiça, o estigma imposto à mulher tem de ser visível. Ou seja, os atributos convencionais, impostos socialmente, têm de estar presentes – responsabilidade da casa, suporte da família, mais doce, mais intuitiva, mais fraca, dona de casa – para que ela possa ser considerada vítima, e se o parceiro é violento, é porque não souberam lidar com as situações quotidianas – culpabilização.

De acordo com Heise (1994), na sua forma mais básica, a violência doméstica, inclui qualquer ato de força ou coerção que comprometa gravemente a saúde, a integridade psicológica e ou a liberdade do género a serviço da perpetuação do poder e do controlo. Uma definição mais ampla iria além dos atos individuais de violência, como por exemplo o sexismo institucionalizado, que compromete seriamente a saúde e o bem-estar das mulheres. Por conseguinte, a violência doméstica assume caminhos conturbados, específicos e únicos, pois estamos perante uma franja social suscetível a todos os estereótipos e crenças a ela aliada, perante situações que vão surgindo na esfera privada, que, de uma forma (não) propositada, põem em causa o acesso ao exercício pleno da liberdade individual. É de realçar que, não obstante o direito internacional garantir a liberdade universal à vida privada em família, o abuso dos respetivos membros não inclui (United Nations, 1993).

Walker (1984) refere que a violência doméstica comporta um conjunto de comportamentos que, a longo prazo, se torna cíclico. Dependendo dos modos de vida do casal e ou do relacionamento, o abuso muitas das vezes começa de uma forma camuflada, tornando-se cada vez mais intenso, repetitivo e conseqüentemente mais graves. De acordo com Amaral e colaboradores (2013) a violência contra a mulher comporta em qualquer ato violento, que advenha, ou tenha probabilidade de emergir, em dano físico, moral, sexual, psicológico ou sofrimento na vítima. Incluindo a ameaça de praticar tais atos, a coerção ou privação arbitrária da liberdade em ambiente público ou privado. Igualmente, a violência contra as mulheres pode ser designada violência doméstica ou violência baseada no gênero, como já foi referido, e constitui em um fenômeno com a sua própria complexidade, que afeta mulheres em todas as paragens do mundo e tem suas origens na inter-relação de fatores pessoais, económicos, culturais, políticos e sociais (Amaral *et al.*, 2013). Para Teles e Melo (2002), a violência doméstica é constranger, é tolher a liberdade, é incomodar, é impedir a outra pessoa de manifestar seu desejo e sua vontade, sob pena de experienciar gravemente a ameaça, espancamento e até mesmo a morte. É um meio de coagir, de submeter outrem ao seu domínio, é uma violação de direitos fundamentais humanos.

Outrossim, a violência contra a mulher representa nuances e padrões distintos de violência interpessoal, particularmente no que respeita ao agressor, pois, em maioria são pessoas pertencentes a própria família, sejam maridos, pais, padrastos, tios, primos etc. Daí que, devido a sua peculiaridade, esse tipo de violência é a mais insidiosa e endêmica comparada com outros tipos de violência. O direito do homem de se apropriar da sua companheira é muitas das vezes tolerada culturalmente. Neste panorama, o combate à violência implica a desestruturação das normas sociais e padrões culturais, tanto para homens

como mulheres, pois, a normalização desses comportamentos, exacerba ainda mais a masculinidade e a dominação masculina (Gontijo *et al.*, 2010).

Acresce dizer também que a literatura alude a vários fatores que contribuem e ou que possam estar na origem da violência doméstica, particularmente: o acontecimento familiar, o uso de estupefacientes pelo parceiro, o desemprego, a pobreza, o baixo nível socioeconómico da vítima, o baixo ou a ausência total do suporte social oferecido à mulher e a dependência emocional em relação ao agressor (Porto *et al.*, 2012). Embora sejam fatores associados ao abuso, segundo Bennett e Bland (2008), esses não são determinantes.

A violência contra as mulheres, em Cabo Verde, é um problema não muito recente. Refere-se a uma experiência que alude à própria narrativa do país, e que segue o processo de declaração das mulheres na sociedade, da era colonial à hodiernidade. Pese embora, naquela época, houvesse muito mais discriminação e preconceitos – ou fosse mais visível – em relação às mulheres (facto destacado por Salústio (1999) ao explicar que, no período colonial, a discriminação era mais evidente em relação às mulheres solteiras e às crianças nascidas fora do casamento, o que provocava aumento da violência física, psicológica, social e económica contra a mulher e os filhos), na altura, só 16% da população era oficialmente casada e 80% das crianças nasciam fora do casamento, o que denotava uma sociedade bastante desigual e, por conseguinte, assinalada pela violência (Fernandes & Fonseca, 2012).

Conquanto para Fernandes e Fonseca (2012) a mulher tenha começado a ganhar alguma visibilidade social e reconhecimento legal após a independência do país, que decorreu em 1975, o tópico sobre a violência doméstica como assunto de relevância pública só foi trazido ao coletivo em 1999, com a publicação do estudo “violência contra as mulheres” (Rosabal, 2010), do que na altura se chamava Instituto da Condição Feminina (ICF). A

investigação alarmou no que toca à violência conjugal, bem como para a alheamento das políticas públicas e para a falta de informações sobre fenómeno.

Embora o quadro social e legal se tenha transformado em Cabo Verde, a VBG continua a fazer parte do quotidiano de muitas mulheres, articulando outras vulnerabilidades sociais e económicas e alicerçando-se nas desigualdades das relações de género. São essas que encerram as mulheres numa malha de dependências que marcam o seu processo de vitimização e que condicionam a sua forma de olhar a violência. A pobreza, e a exclusão social que assola o país, são também a realidade de muitas que ali vivem. Uma das características mais visíveis nesse perfil da pobreza, no arquipélago, é a sua incidência nas mulheres, pois 56% dessas mulheres apresentam níveis elevados de pobreza, no qual 33% são chefes de famílias, contra 21% das famílias chefiadas por seus congéneres masculinos (Barbosa, 2016).

### **Violência de género, e determinantes culturais: breve abordagem**

Pese embora reconheçamos a existência de uma multiplicidade de variáveis suscetíveis de desencadear o abuso doméstico contra a mulher, o quadro analítico neste capítulo vai cingir-se à variável cultura. O estudo sobre as diferenças culturais é importante para nos fazer entender que a avaliação de um determinado comportamento como sendo violento depende dos determinismos culturais (Rodrigues, 2012).

Entretanto, a literatura alude a que, malgrado os agressores domésticos não possuam a mesma retaguarda social, e não são grupos homogêneos, a violência com base no género e as suas nuances parecem ter um denominador comum, nas suas formas de expressão, pois encontra-se mais ou menos persistente em aproximadamente todas as culturas.

A violência contra a mulher em Cabo Verde, como já foi mencionado, não é um problema recente. Lembre-se que a revolta de Ribeirão Manuel<sup>12</sup>, foi uma revolta protagonizada por mulheres contra as relações laborais e as condições de sobrevivência na época colonial<sup>13</sup> (Silva 2009). A realidades das mulheres cabo-verdianas são bem retratadas no conto "Foram as dores que o mataram" – presente no volume “mornas eram as noites” da escritora acima referida –. É um livro de contos com várias narrativas não longas em que é mostrado, numa conjuntura multifacetada, um conjunto de tópicos ambíguos (híbridos) e relacionados a condições vivenciadas por mulheres naquele país (Gomes, 2008).

No ponto de vista de Salústio, são estas *mulheres sem nome, sem rosto, sem voz*, que trazem à tona questões que levantam quesitos sociais e que tocam as mulheres em diferentes contextos sociais e culturais do mundo ao redor. *Mornas eram as noites* não passa despercebida aos olhos do leitor atencioso. Na arte de cantar as mornas, a autora reinventa o cotidiano de mulheres que estão inseridas no mundo doméstico feminino. Percebe-se na prosa salustiana as pegadas dos avanços à emancipação das mulheres, as violências sociais, as discriminações sofridas, a iniciação sexual, assim como a gravidez precoce, a falta de planejamento familiar, a prostituição, os emblemas sociais ainda visíveis no quadro de exclusão das mulheres cabo-verdianas. As figuras femininas expostas na escrita de Salústio são diferenciadas e representam um amplo apanhado de todas as idades e classes sociais diferentes. Diante da variedade de produções femininas pelo mundo, a produção literária em

---

<sup>12</sup> Foi fato histórico que marcaram a luta da população de Ribeirão Manuel, Assomada, na procura de isonomia social. Foi considerada uma das lutas mais emblemáticas dos homens e mulheres do campo, no país. E contou com a presença ativa de mulheres. Esta revolta popular, teve o seu início no dia 12 de novembro de 1910, e foi encabeçada por Ana da Veiga, conhecido por Nhanha Bombolom.  
Fonte: [https://www.agendacultural.cv/index.php?paginas=54&id\\_cod=77](https://www.agendacultural.cv/index.php?paginas=54&id_cod=77). Consultada no dia 24 de fevereiro de 2019.

<sup>13</sup> É de referir que, o nosso objetivo central não é colocar na agenda deste estudo, o passado de escravatura e colonização, outrossim é imprescindível não mencionar o papel e a situação das mulheres cabo-verdianas como sujeitos históricos de uma nação com histórias não poucas violentas.

Cabo Verde traz à tona textos cujos temas revelam as experiências sociais das mulheres cabo-verdianas, que, em situações insalubres, são tomadas como representantes de inúmeras realidades com dilemas de violência (Salústio, 1999) (...) *sem descanso num território não recuperado de seus traumas, a Sujeita boa é aquela que se mantém como a outra sem direitos, isto é; a não sujeito* (Gonçalves, 2019).

Ainda a respeito da violência doméstica e contexto cultural, confira-se, a seguir, algumas pesquisas feitas em outras coordenadas geográficas, para apoiar uma compreensão mais ampla sobre a VBG e as suas raízes. Como por exemplo no Brasil, a violência de gênero é um dos assuntos preferenciais a ser referenciados pela saúde pública e pelas organizações dos direitos humanos, assim como um desafio ao serviço da saúde. Contudo, apesar de caracterizar-se como um problema de alguma emergência social, a violência contra a mulher só adquiriu maior visibilidade social naquele país com a criação da Lei 11.340/2006 – conhecida até então como Lei Maria da Penha –. Neste sentido a VBG passou, então, a ser definido como um crime característico, e houve algumas mudanças na forma de punir os agressores (Silva & Oliveira, 2013).

Segundo a pesquisa, da Fundação Perseu Abramo (FPA) em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) estima-se que, no Brasil, cerca de cinco mulheres são agredidas a cada 2 minutos, em que o companheiro e ou ex-companheiro é o causador de mais de 80% dos casos reportados (FPA/Sesc, 2010). Considera-se ainda um dos países mais perigosos para as mulheres, ocupando o 5º lugar no ranking mundial de feminicídios, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), liderando a tabela, os países como El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de casos de assassinato de mulheres. 26% das vítimas de feminicídios haviam acionado a justiça, pedindo medidas de proteção, no entanto, como os dados nos indicam, a maioria dos casos não são

reportados. Isso significa que 74% das mulheres vítimas de feminicídios, naquele país, não haviam sido reportados e ou registados no boletim de ocorrência dos abusos perpetrados pelos seus abusadores, o que, por fim, lhes custaram a própria vida (Tribunal de Justiça do estado de Mato grosso, 2019).

Acresce dizer também que, as mulheres negras no Brasil estão entre as que mais sofrem violência doméstica – 59.4% - segundo os dados do Relatório Anual Socio-Económico da Mulher (Raseam, 2014), e ou pelo menos estão mais expostas ao risco, devido a normalização de preconceitos – sistema de desigualdades particularmente em relação a etnia e género – e confluência entre o racismo e sexismo por exemplo, indubitável e muito visível na história daquele país. Dados, alarmantes e preocupantes que, infelizmente, estão muito enraizados nas idiosincrasias de cada um, formando assim uma cultura que compactua com a violência contra a mulher, negando a sua gravidade, ao negligenciar e subestimar os impactos a ela aliada. Mecanismos históricos e culturais que geram e mantêm disparidade entre os dois sexos e alimentam um acordo de silêncio e conivência com estes crimes.

Nas outras paragens geográficas, enquanto a gravidade do abuso físico é entendida muitas vezes como o mais grave, as mulheres em Serra Leoa e Libéria estão de acordo de que uns dos piores efeitos da violência doméstica é o clima de medo e isolamento que ela cria. Mais do que os olhos negros e hematomas, as feridas mais profundas que, aliás nunca saram, são as menos visíveis, como a: vergonha, humilhação, degradação, alienação e o medo de serem julgadas como a má esposa, e ou a má mãe (IRC, 2012).

Em São Tomé e Príncipe, só a partir de 2003 o crime de violência doméstica ganhou alguma visibilidade académica; entretanto, a lei que criminalizava todos os atos de violência familiar, em particular contra a mulher, só foi aprovada em 2012 - a Lei n.º 6/2012 de 6 de agosto (Nascimento, 2014). Segundo os dados do Instituto Demográfico Sanitário, mais de

33% das mulheres em São Tomé e Príncipe foi vítima da violência física, desde os seus 15 anos, em algum momento das suas vidas. De salientar que os 27% das mulheres que declararam ter sido vítimas de atos de violência física, quer no passado quer recentemente, concentram-se maioritariamente na faixa etária compreendida entre 25-29 anos. Dados ainda mais surpreendentes mostram que “as mulheres que tinham uma atividade económica foram mais frequentemente violentadas do que as que não tinham. Ademais, as mulheres trabalhadoras não pagas em dinheiro, foram mais confrontadas com condutas de violência do que as remuneradas em dinheiro (54% contra 35%). Os dados deixam transparecer uma menor amplitude da violência doméstica entre as mulheres que têm uma autonomia financeira” (IDS STP, 2008-2009).

Importa, também analisar os países como: Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Segundo Casimiro (2004), não obstante a participação das mulheres nas guerras civis e de libertação colonial ter levado a se repensar as interações sociais entre homens e mulheres, em termos reais, pouco ou nada parece alargar na vida das mulheres naqueles países. Na verdade, as dinâmicas de poder, na maioria das vezes, continuam a afirmar a vassalagem das mulheres e a estorvar a notificação de ações de violência com base no género das vítimas. Como observa Moura e colegas (2009), a exiguidade de investigações e dados relativamente às mulheres e meninas nesses países, particularmente na Guiné-Bissau – menos em Moçambique e Angola –, afigura-se uma tarefa difícil de elencar com rigor. As diferentes formas de violência exacerbada contra esses grupos. O silêncio ao redor desse tema perpassa os dados revelados. Por outras palavras, a notoriedade que têm assumido certas práticas bárbaras, como é o caso da mutilação genital feminina, coabita com o obscurantismo de outras ações violentas, naturalizadas que tem como presa e ou vítima, mormente, as fêmeas.

Na Guiné-Bissau a magnitude da violência contra as mulheres é uma tarefa impossível de precisar, devido a inexistência dos dados. Não obstante a falta de dados e a escassez das queixas, um estudo realizado pela UNICEF, em 2007, deu algumas pistas de análises ao concluir que 51.5% das mulheres, concordam e acham aceitável que o marido as violento por motivos vários. O abuso físico e psíquico é o que mais encontra a expressão naquele país. A violência infligida de marido para mulher, e ou pais-filha, socialmente, é desvalorizada e não percebida como atos de violência, mas sim, vista como medidas corretivas. No que se refere ao abuso sexual, este é considerado apenas existir entre a camada mais jovem, pois as mulheres adultas, não considera o sucedido como ato de violência (Moura *et al.*, 2009).

Em Moçambique, os dados, de acordo com o gabinete de atendimento à mulher e criança, revelaram que, no período entre janeiro e outubro de 2006, foram contabilizados em todo o país, 5.302 casos de denúncia de violência contra a mulher. Em 2007 foram atendidas mais de 5600 mulheres. Não obstante, os números dados revelados, como é sabido, são muito inferiores àquilo que na realidade se passa, por motivos já apresentados algures. Acrescente-se que em Moçambique existe uma lei - Lei sobre a violência doméstica praticada contra a mulher, Lei nº 29/2009, de 29 de setembro – que criminaliza esse tipo de comportamento, protegendo as mulheres. Pelo menos no papel. Um estudo feito pela *International Violence Against Women Survey* – IVAWS<sup>14</sup>, chegou-se a concluir que a violência contra as mulheres em Moçambique, espelha-lhe de um modo alarmante (CEP, 2005). Como aludiu Osório e

---

<sup>14</sup> O estudo corroborou com o projeto *International Violence Against Women Survey* – IVAWS – objetivando a compreensão do abuso doméstico em determinados países. No estudo levado a cabo em Moçambique - efetuado pelo Centro de Estudos da População, em articulação com a *United Nations Office on Drugs and Crime*, o Ministério da Mulher e da Ação Social, o PNUD e outras organizações moçambicanas e estrangeiras – mais de metade das vítimas admitiram terem sido submetidas a atos de violência, cujo agressor era o homem e maioria eram seus companheiros íntimos. Contudo a queixa apresentada aos agentes legais, a respeito do abuso, era diminuta (Moura *et al.*, 2009).

Temba (2003), naquele país, a violência contra a mulher faz parte de um problema estruturante, onde atribuem a mulher uma posição de sujeição, dando poderes aos homens, efetivando cada vez mais o fenómeno. Excetuando a violência física, para Silva (2003), a violência contra a mulher, ostenta outras formas de expressão, em Moçambique – assim como nos outros países – a saber: perseguição e assédio no local de trabalho; descarte em assumir e auxiliar nas despesas de casa e responsabilidade para com os filhos menores; a danificação dos bens matérias e domésticos; chantagens emocionais e intimidações; humilhação – trazer amantes para casa da esposa.

Para além das diferentes formas de violência acima expostas – física, económica e psicológica – existem, ainda naquela sociedade, no imaginário de muitos, as feitiçarias<sup>15</sup>. Uma outra forma, camuflada ou não, de exercícios de poder. Para a autora, a vítima é acusada de deter poderes maléficis, e que a todo o custo deve ser vencido, condenando-a sem direito a recursos. Sendo acusadas de bruxaria, e vilipendiadas pela sociedade, são elas a causa dos males e de tudo que aconteça no seio daquela família, inclusive da morte dos maridos. Acusando-as de matar, por feitiçaria os maridos, conseqüentemente, são expedidos de casa e da comunidade, pela própria família. Como dizia Shankar (2015), no livro histórias e parábolas para a família, “as palavras de maldição são proferidas por pessoas da nossa família” ... a minha casa é o pior lugar do mundo” (Silva, 2003).

Assim como nos países supraditos, em Angola, acredita-se que a violência doméstica está fortemente relacionada com as instabilidades familiares, efeito de longo conflito armado que assolou o país, culminando com desapontamento a um sistema demorado e deficiente de incorporação e inclusão de ex-combatentes (Moura *et al.*, 2009).

---

<sup>15</sup> A acusação de feitiçaria, de não dormir em casa é um exemplo típico de violência emocional. Se o homem não consegue realizar-se sexualmente, a culpa é da mulher, que fez feitiço (Moura *et al.*, 2009).

Segundo o relatório do Comando de Polícia de Luanda, em 2006, houve o registo de 399 total dos casos de violência doméstica incluindo a violência sexual e ofensas corporais. Números esses que deixam muita margem para a dúvida, pois só relata os casos que chegaram às orlas da justiça. Ainda, segundo os dados revelados pela Organização de Mulheres Angolanas (OMA), as queixas diárias, em média, podem ultrapassar vinte. Para além da legislação nacional (Lei 25/11), existem um conjunto de ratificações e instrumentos internacionais como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação sobre a Mulher- CEDAW 1981, que foi publicada no diário da república (Resolução AN 15/84 19 Setembro 1984), segundo o Ministério da Família e Promoção da Mulher (2017).

Segundo os estudos, cerca de 32% das mulheres foram vítimas de violência física, desde os 15 anos; ao passo que 8% foi vítima de violência sexual, em algum período das suas vidas, e 34% das mulheres entre os 15- 49 anos e casadas em algum momento sofreram violência conjugal, física ou sexual. Os mesmos dados, concluíram que, o abuso contra as mulheres, advém, ainda da naturalização e perceções da sociedade angolana sobre o lugar e o desempenho da mulher na comunidade e no contexto familiar. Por isso, 25% das mulheres entre os 15 e 49 anos concede algum poder ao homem à violência contra a mulher, à medida que 20% dos seus conterrâneos – homens – corroboram na mesma diapasão (IIMS, 2015-2016).

Em Angola, assim como acontece em outros países africanos, particularmente em Cabo Verde, para além da pobreza, extrema, e dependência financeira, contribuem para fatores de risco, paradoxalmente a ascensão económica das mulheres, parece estar na base de muitos conflitos, porquanto, com o rápido crescimento do rendimento feminino, tanto no setor formal e ou informal, parece colidir com a cultura machista tóxica, desafiando assim, a capacidade masculina de produzir riquezas (AJPD, 2006). Neste sentido, o que parece ser a

liberdade para algumas – ter emprego e independência económica –, acaba por ser o atestado de perigo para muitas. “Se eu trabalhar, eu apanho, se não o fazer, também apanho” (*Sic*). No entanto, uma mulher ativa e independente financeiramente é mais difícil aceitar a dominação.

Como adverte Coutinho (1994), a normatividade e a tolerância social em relação ao abuso contra a mulher, na maioria das vezes, coloca a mulher numa encruzilhada. A descrença de que ela não vai ser ouvida. Contudo, existem ainda em alguns países, segundo os dados do Banco Mundial de 2016, onde as mulheres não têm a proteção legal e ou dispositivo legal que criminaliza esse tipo de ato, como por exemplo: Afeganistão, Camarões, Chade, República Democrática do Congo, Djibuti, Gabão, Guiné, Guiné Equatorial, Haiti, Irã, Libéria, Mali, Mauritânia, Omã, Federação Russa, Suazilândia, Sudão do Sul e Uzbequistão. Dos 173 países que fizeram parte dos estudos, apenas 127 apresentam legislações específicas sobre a violência contra a mulher, mas dos 127, apenas 92 dão ênfase à violência física e sexual, enquanto 122 inclui violência psicológica. E por último, temos a violência económica, que resulta na depreciação de bens essenciais e económicos, raramente é mencionada nas leis. Decerto que 94 países do total de 173, sujeitam as mulheres à violência económica, fator preponderante na saída de relacionamento violento e abusivo. Países como Bélgica, Canada, Estónia, Islândia, Marrocos, Holanda e Tunísia são países que não tem uma legislação específica sobre a violência doméstica, mas reconheceram o problema ao intensificar as medidas penais, quando da ofensa criminal é cometida no seio da família (World Bank, 2016).

A violência contra o corpo feminino parece não respeitar as barreiras geográficas, suprimindo as dissimilaridades socioeconómica, cultural, política. Em Cabo verde, não obstante se faça crer que o país dispõe presentemente de ferramentas jurídicas que suportam os

interesses dos que batem à porta da justiça, contudo, na prática, existem muitas falhas e, deficiências. Na verdade, a própria mulher sente-se impotente de afirmar, efetivamente, os seus direitos, continuando, assim, a ser objeto de discriminação. A desproteção das vítimas, em consequência do cavouco social arquitetado e fabricado entre os que detém o poder de decisão, traz à tona a fragilidade, não só do compromisso que Cabo Verde assinou – através das convenções internacionais –, como também da lei específica que condena o abuso doméstico.

Em jeito de síntese, com este capítulo pudemos verificar que os conceitos de violência, crime e violência doméstica não têm um significado universal, ou seja, eles foram sofrendo alterações ao longo do tempo e, simultaneamente, tentando adaptar-se consoante o meio físico, social, económico, geográfico e histórico-cultural. Não obstante as circunstâncias, a explanação da violência, e sua manifestação social, parece estar particularizada por pontos de vistas sistemáticos e multivariados que incrementa o interesse e curiosidade de várias ciências sociais. Depreendemos ainda que a violência de género, contra a mulher é influenciada por um conjunto de fatores, com especial destaque a estrutura social e a cultura, pois acredita-se que a violência de género transcende os limites sociogeográficos. No entanto, não poderemos descartar alguns fatores de risco e características individuais, que podem conduzir, inevitavelmente, a mulher a situação de relacionamento abusivo, como a dependência emocional, financeira, entre outros. As diferenças de género e de papéis sociais refletem uma relação milenar de dominação do homem em relação a mulher. E, conseqüentemente, esta acaba por se conformar numa relação violenta, pois a cultura em si inculca e espera que o seu papel, na construção social, é de procriar e preservar a família. O medo e a vergonha acabam por fazer parte da sua identidade, ao abraçar tais papéis, racionalizando e aceitando-os, como se de uma prerrogativa tratasse. Por isso, dismantelar a

violência contra a mulher não é uma tarefa fácil, pois não exige só as medidas punitivas (que tem de existir) mas sim medidas mais abrangentes que engloba mudanças de comportamento reais e definitivos.

No capítulo que se segue vamos debruçar sobre a lei VBG em Cabo Verde, a sua implementação, o panorama jurídico, os desafios e o que mudou após uma década da sua implementação.

## Capítulo II – Breve incursão ao processo de criminalização de VBG em Cabo Verde

### VBG: panorama jurídico - constitucional

A violência de género tem tido uma visibilidade crescente nos últimos anos, assistindo-se a um investimento gradativo nos mecanismos da sua prevenção e repressão, para o qual foi fundamental a atenção votada por diversas áreas do saber, como por exemplo o Direito e Psicologia, especialmente na área forense e jus psicológica. De acordo com Payne e Wermeling (2009), a criminalização de violência doméstica se refere ao esforço em lidar com fenómeno através do processo e aplicação das leis penais e civis.

Em Cabo Verde, as mobilizações iniciais para combater a violência com base no género levaram o país a ratificar vários instrumentos internacionais, como aconteceu com a Convenção para Eliminação de todas as formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW) a 5 de Dezembro de 1980 (CNDHC, 2010), a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos<sup>16</sup> a 27 de julho de 1979<sup>17</sup> (Jerónimo *et al.*, 2016), a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças (UNICEF) em 20 de Novembro de 1989, ratificada no país, a 4 de junho de 1992 (OIT & IPEC, 2012), e o Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos relativo aos Direitos da Mulher em África<sup>18</sup>, a 7 de Novembro de 2003<sup>19</sup>, dentre outros, que rapidamente deram lugar à formulação do Plano Nacional de Combate à Violência Baseada no Género (PNVBG), aprovado em Conselho de Ministros, em 2007, e implementado no período 2007/2009.

Nessa proposta foi operacionalizado um dos fundamentos estratégicos do Plano Nacional de Igualdade e Equidade de Género (PNIEG 2005-2011), e do combate à violência

---

<sup>16</sup> Também conhecido como Carta de Banjul (sediada em Gâmbia).

<sup>17</sup> Entrada em vigor a 21 de outubro de 1986.

<sup>18</sup> Conhecida como protocolo de Maputo.

<sup>19</sup> Entrada em vigor a 25 de novembro de 2005.

baseada no género, e sua aplicação, numa estreita parceria com organizações da sociedade civil. Com efeito, culminou na elaboração e aprovação da Lei especial contra a violência baseada no género, de 2010, publicada em 10 de janeiro de 2011, e com a entrada em vigor, em 11 de março do mesmo ano.

Nem sempre a violência de género, tal como hoje a conhecemos, foi tratada a nível legal de forma coerente e equilibrada e sem atitudes discriminatórias em Cabo Verde. Este é um dos oito países que, desde 2008, participou no programa “Juntos na Ação das Nações Unidas. O país tinha demonstrado a sua intenção na aproximação da União Europeia (EU), antes do início do programa, em 2007, chegando mesmo a estabelecer um “acordo especial” com a união europeia (EU) aludindo o seu interesse na adesão da mesma. As renovações políticas que o arquipélago tem estado a desenvolver até o momento, desde a sua independência em 1975, cremos não partir da motivação alheia, sobretudo no que toca às questões de género, mas por “interesse próprio”, pois o país, o seu orçamento, depende em larga maioria dos países terceiros. Porquanto as reformas internas eram um dos passos que Cabo Verde teria que dar para que pudesse posicionar-se ao nível de um país desenvolvido (Anjos, 2015). Portanto, os organismos internacionais e as ONGs que, operam com questões de isonomia de género tiveram um papel preponderante no processo de construção social das violências (Silva, 2022). Daí a obrigatoriedade em reformular leis penais, especificamente as que criminalizam a violência de género (Anjos, 2015).

Decerto que, antes da proposta da elaboração da lei VBG, a pressão internacional e algumas mobilizações internas já haviam levado o país a ratificar diversos instrumentos, como frisado acima. Deste modo, as responsabilidades na esfera externa, especificamente no que diz respeito à ascensão da igualdade de género e luta contra a VBG, deu espaço às mudanças legislativas, internas, levando o país a agir de forma mais pujante no que toca à

dignidade e respeito pelos direitos humanos fundamentais de ambos os sexos, através de dispositivos legais que proíbem os atos e ações que colidem com esses direitos as quais estão introduzidas na Constituição da República de Cabo Verde, no Código da Família que é parte integrante do Código Civil, no Código Penal e Código de Processo Penal, no Código Laboral, etc. (ICIEG, 2018).

Aliás um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), que o arquipélago assumiu, em setembro de 2000, a desigualdade de género<sup>20</sup> apareceu como um dos objetivos centrais a ser estudado, e neste percurso em função da mobilização e auxílio do ICIEG, no ano 2005, o Instituto Nacional de Estatística (INE), introduziu, pela primeira vez, indicadores específicos para medir a situação da violência doméstica no país (Instituto Nacional de Estatística, 2005).

Se, desde a independência do país, as agressões do marido à mulher eram consideradas legítimas, a partir desta data podemos considerar que ocorreu uma evolução legislativa do fenómeno, com a publicação do primeiro Código Penal de Cabo Verde (de 2004) e respetiva entrada em vigor, em seu artigo 134º, o crime de “maus-tratos” (Silva, 2021 e 2022). Portanto antes da entrada da Lei nº 84/VII/11, de 10 de janeiro – que estabelece as medidas destinadas a prevenir e reprimir o crime de VBG – Cabo Verde carecia de uma lei específica que criminalizava violência de género. O que existia era um tipo penal – o artigo 134º<sup>21</sup> - intitulado “maus-tratos a cônjuge”, que objetivava combater a violência entre os

---

<sup>20</sup> ODM III: Promover a igualdade de género e a autonomia das mulheres. Meta 3A: Eliminar disparidades entre sexos no ensino básico e secundário até 2005 e para todos os níveis até 2015. Instituto Nacional de Estatística, 2015.

<sup>21</sup> Artigo 134.º do CP – *Maus tratos a cônjuge e unido de facto – Quem provocar habitualmente ofensas ao corpo ou na saúde do seu cônjuge ou da pessoa com quem vive em união de facto, reconhecida, reconhecível ou não, ou lhe infringir maus-tratos físicos ou psíquicos ou tratamentos cruéis, designadamente através de ameaças, ofensas verbais, castigos corporais, ou privações da liberdade, será punido com pena de prisão de 1 a 4 anos, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal* (CP, 2021). Boletim Oficial da República de Cabo Verde. 1º série, nº 15 de 11 de fevereiro. Fonte: <https://kiosk.incv.cv/>.

cônjuges ou pessoas em situações semelhantes. Com base nessa ferramenta jurídica, as violências conjugais passaram do culturalmente aceito para se um crime de natureza semipúblico (Artigo 376º do Código Penal) (Silva, 2022).

Para Anjos (2015), os abusos entre os casais ou em união de factos eram considerados crimes de ofensa a integridade física, ameaça e abuso sexual. Para ser considerado o crime de maus-tratos a cônjuge, o crime tem de ser de muita severidade. Porém, muitas das vezes, devido a não consciência da questão, não eram incluídos nessa tipologia penal, pois os tais crimes proporcionavam medidas mais severas como alude o artigo 134º do Código Penal (CP). Em contrapartida, quando havia abuso por parte de pessoas que tinham ou mantiveram relações amorosas, no qual não havia laços matrimoniais e ou união de facto, como por exemplo namorados, ex-namorados, ex-cônjuges, e ou ex-uniões de facto, a diretriz tinha de ser feita como qualquer outro tipo de crime que não o previsto no artigo 134º do Código Penal (Anjos, 2015; Silva, 2021). Não obstante a VBG seja consequência de uma disparidade histórica da relação de poder e conflito entre os sexos, que dura há milénios, como já referimos, só a partir dos anos 90 esse fenómeno mereceu o devido atenção por parte dos organismos internacionais, como é o exemplo da Organização das Nações Unidas (ONU), e de outros países, particularmente Cabo Verde, que instaurou nessa época o Instituto da Condição Feminina (ICF<sup>22</sup>) com a ordem de construção de políticas públicas de promoção dos direitos das mulheres (Anjos, 2015; Silva, 2021; Silva, 2022).

Com a entrada em vigor da lei supradita, várias medidas<sup>23</sup> foram estabelecidas no combate a esse flagelo, com o intuito não só de punir os agressores, como meio de prevenção

---

<sup>22</sup> Atual ICIEG.

<sup>23</sup> *Tais medidas incluem: elaboração de plano de sensibilização e prevenção; implementação de medidas educativas que fomentam a igualdade de género; proteção de alguns direitos liberais no que tange às vítimas; o direito de acesso à justiça e de proteção; oferecimento de atendimento adequado, urgente e isento de*

do abuso, mas também chamar a atenção aos órgãos de controlo formal e informal, desde o Estado às famílias e à sociedade, para a realidade, camuflada em desigualdade de poder (ICIEG, 2012).

O país, com o auxílio de parceiros de desenvolvimento, e a comunidade civil, paulatinamente, foram instigando meios, criando estratégias e mecanismos de prevenção e de proteção da VBG com ganhos muito significativos (ICIEG, 2012). Desde as ratificações, citadas acima, a constituição do funcionamento da Rede SOL<sup>24</sup> (Silva, 2022); a implementação de campanhas de informação e sensibilização sobre VBG; a capacitação de diversos grupos de profissionais, incluindo profissionais de polícia em VBG e técnicas de atendimento as vítimas, a constituição de um núcleo de psicólogos forenses<sup>25</sup>; a constituição de Rede “Laço Branco Cabo Verde” (homens contra VBG) e a aprovação da lei que regula a VBG em Janeiro de 2011 (ICIEG, 2012).

De acordo com os dados estatísticos fornecidos pela polícia nacional, no período de 2015, foram assinalados 3.002 acontecimentos de VBG, um número que girou os 11.6%, da ocorrência, totais daquele ano. A maioria das vítimas de violência de género, em Cabo Verde, são mulheres. O número ronda os 89%. A maioria se encontra entre 22 e 30 anos, representando a totalidade de 34,7% e dos 31 a 45 anos constituem 31% da amostra total. É de salientar, também, que os delinquentes, na sua maioria são homens (89.5%), com a idade compreendida entre 31 e 45 anos, correspondendo a 38,6%. Ao passo que, 32,3%, dos transgressores, se encontram entre 22 e 30 anos de idade (Instituto Nacional de Estatística, 2017).

---

*pagamento de taxa na área de saúde; a assistência a vítima, como por exemplo nos centros de apoio as vítimas e casa de abrigo; a recuperação do agressor; etc. (ICIEG, 2012).*

<sup>24</sup> Rede inter-institucional de atendimento a vítima de VBG.

<sup>25</sup> Que não foi avante.

Em Cabo Verde, os primeiros dados demográficos produzidos no âmbito do Inquérito Demográfico de Saúde Reprodutiva (IDSR II) através do INE, em 2005, permitiram o país ter uma visão maior sobre a realidade do fenómeno, no que concerne à violência – física, psicológica e sexual – que decorria nos “cubículos” dos lares. Os dados obtidos, sobre os atos de violência praticados pelo companheiro e ou a figura masculina na família, revelam que 22% das mulheres na amostra, 1 em cada 5, declararam serem ou terem sido vítimas de VBG. 19%, havia sofrido mais de um tipo de crime de violência doméstica. Ou seja, 16% sofria de violência física; emocional, 14%, e a sexual 4% (Instituto Nacional de Estatística, 2005).

Ainda, de acordo com os dados estatísticos, a vítima de abuso transcende as habilitações literárias, pois a maioria das vítimas possuem o ensino básico (24%), seguido do ensino secundário (22%) e, significativamente, também entre as mulheres com níveis académicos superiores (20%) e por fim, as sem instrução académica 15% (Instituto Nacional de Estatística, 2005). As estatísticas revelam que a violência entre cônjuges é menos frequente – apenas 9% - nas mulheres de nível de instrução superior ao do marido, para qualquer tipo de violência. Ao contrário, o abuso tem maior ocorrência quando o companheiro tem um nível de escolaridade mais avançada (10% para a violência emocional e 13% para a física ou sexual), e é mais expressiva quando possuem nível igual e ou equivalente de habilitações – 14% no caso da violência emocional e 16% no caso da violência física ou sexual – (Instituto Nacional de Estatística, 2005).

Esses dados, levantam alguns quesitos e preocupações, em relação ao papel da educação “Porque entram...Ensinarão-nos que deveriam ser heróis de qualquer coisa. Exigem que façamos permanentemente exercícios de autoafirmação. Não nos educaram para corajosamente debatermos os nossos medos, falhas, hesitações, infernos. Apetrecharam-nos com o mito de supermachos e esperam que sejamos sempre vencedores, fazendo-nos

inimigos da própria maneira de estar, escamoteando a verdade, falseando as fronteiras”  
(Salústio, 1999).

Atkinson e colegas (2005) encontraram associação positiva entre mulheres economicamente independentes – *breadwinners* – com o companheiro mais tradicional. Concluíram que essas mulheres, igualmente estão expostas a riscos elevados de violência por parte dos seus parceiros. Uma das explicações, tem a ver com o baixo rendimento económico por parte dos companheiros, pois espera-se que o homem seja o ganha-pão de família. Como referenciado acima, situação semelhante, foi encontrado em Angola, através do relatório de AJPD, em 2006. Porém, tendo em conta a exiguidade de pesquisas relacionadas a esse especto, consideramos ser uma lacuna que possa ser investigada de uma forma mais aprofundada.

Ainda, no que concerne à instrução literária, os resultados estatísticos do IDSR-II divulgam que as ocorrências da violência de género contra a mulher, no arquipélago, é inversamente proporcional ao seu nível de instrução académica, dado que as mulheres com menos habilitações, seriam as que menos sofreriam atos de violência. Uma explicação plausível, segundo os dados encontrados, as mulheres menos cultas tendem a naturalizar e normalizar os atos violentos, não registando a queixa, enquanto as mais ilustradas rebelam-se (Fernandes & Fonseca, 2012).

Ancorado nos dados acima revelados, é de salientar que a violência com fins no género apresenta várias facetas e, por conseguinte, não está imune às mais letradas. Portanto, os estereótipos e preconceitos abundam, porque espera-se uma vítima pobre, iletrada, mulher de campo.

Os dados revelaram, ainda, que 17% das mulheres, comparadas com os seus congéneres masculinos, 16%, concordaram com pelo menos uma razão e ou motivo que

justifique o uso da força e violência do relacionamento, tendo os jovens, entre os 15 a 19 anos, a liderarem a pirâmide da legitimação do abuso (22.5% as raparigas e 24,2% entre os rapazes). Entre 2004 e 2008, a Rede sol deu atendimento a mais de 8 mil mulheres vítimas de VBG (ICIEG, 2012).

O argumento de que “ela não cuida adequadamente das crianças”, para a maioria (12%), está na origem da razão pela qual merecem ser punidas. Esta premissa é mais bem aceite nas áreas rurais do que urbanas. Esses dados, como já frisámos anteriormente, reforçam n contexto sociocultural, cabo-verdiano – misógino e retrograda – que se vive, e que consequentemente miopia as mentes das pessoas a se conformarem com certas práticas. A irreduzibilidade e a persistência, dos machistas, em continuar com a subordinação das mulheres, só revela a existência de um “culto fálico freudiano”<sup>26</sup> (Costa, 2010) que persiste categoricamente a discriminar as fêmeas, associando o seu valor individual e coletivo, à tarefa social que lhes é conferida no cárcere doméstico, que é cuidar das crias (Salústio, 1999; Osório, 1999; Costa, 2010).

Os dados revelaram-se preocupantes, porquanto não surpreendentes, pois a elevada proporção das mulheres – a acreditar que merecem apanhar – particularmente os jovens, só indica que ainda há um longo caminho a percorrer, no que toca a desconstrução do machismo, crenças, incutidas e enraizadas, no quotidiano de muitos. Pois como dizia Mary Wollstonecraft<sup>27</sup>, as inabilidades/fraquezas das mulheres, de que tanto falavam, eram fruto de

---

<sup>26</sup> Na antiguidade, o culto fálico era um dos rituais em que o espetáculo e falas contribuíam para a catarse do homem, mas também para desvelar o mistério. Fonte: <https://edtl.fcs.unl.pt/encyclopedia/falocentrismo>. Consultada a 2 de janeiro de 2020.

<sup>27</sup> Foi uma das principais feministas, considerado uma mulher atípica para o período, do século XVIII. Defendeu a liberdade feminina. Fez críticas duras aos discursos filosóficos cujo objetivo principal era expor a imagem patriarcal que tanto havia corroído a sociedade. Consequentemente, as suas ideias foram rejeitadas por intelectuais, da época, por considerá-la uma personagem polémica em defender o direito das mulheres. Claramente, uma mulher que não encaixava nos padrões estabelecido ao desafiar as convenções vigentes (Monroe, 1987).

um sistema opressor que as mantinha subjugadas e relegadas ao serviço do lar. Fundamentava que a dependência em relação aos homens, impedia que essa refletisse a condição feminina e o seu propósito de vida (Monroe, 1987). Um pacto social de aceitação e normatividade, de que o uso da violência é imprescindível na correção do “comportamento das fêmeas”, alteando, a hegemonia *Egoica* masculina, e a sua “ferida narcísica”, esse, que também crê no recurso à violência para resolver conflitos interrelacionais, satisfazendo a sua vaidade compulsiva.

Nas zonas rurais, onde a informação sobre os direitos humanos da mulher é parca, o controlo social informal tende a ocupar o lugar do legal. A exposição do marido em praça pública, é quase que um tabu, e emerge, a perpetuação do silêncio, no meio do sofrimento, tornando a violência quase invisível. Uma outra razão, plausível e assaz documentada, tem a ver com o facto de que as mulheres cujas instruções académicas são diminutas, além de normalizarem o ato violento, como já foi referido acima, por falta de informação sobre os seus direitos, a pobreza, dependência financeira, e a fraca retaguarda social, que as protegem, estão também na origem da decisão em ficar no tão iludido relacionamento (Fernandes & Fonseca, 2012). Concomitantemente, as que possuem um nível de escolaridade mais avançada, em princípio estão mais despertas para os seus direitos e menos dependente economicamente, tendem a não ficar no relacionamento e têm mais poder de resistir o abuso.

Entretanto, de acordo com IDSR-II, “aparentemente, nem o meio de residência, nem o nível de instrução da mulher tem uma influência significativa sobre a procura de ajuda”. Aludindo, ainda que “a procura de ajuda é fortemente dependente do poder económico da mulher. Ter um trabalho remunerado revela-se fator importante na procura de ajuda: cerca de 40% das vítimas que trabalham procurou ajuda, enquanto entre as que não trabalham esta proporção é de 31%” (Instituto Nacional de Estatística, 2005).

Em forma de síntese: a imperatividade no empoderamento das mulheres, a sua participação nos processos económicos, político e social, por si só, não são suficientes para mudanças de padrões vigentes. É necessário observar e sugerir mudanças na linguagem e práticas do dia-a-dia, que fundamentalizam o discurso absolutista, para produzir uma nova narrativa em torno da mulher, pois arriscamo-nos a cometer no mesmo erro que se critica (Henriques, 2010).

Beauvoir (2004) asseverou, ainda que, para que as relações de géneros se tornam mais iguais e efetivas ela tem de estar assente e acompanhada da revisão não só das práticas como também dos preceitos, teóricos dos discursos linguísticos que as suportam. Mesmo quando essa perspetiva parece dar vantagem a mulher, devemos concentrar-se nas relações, visto que não é só o homem que possui a ideia misógina, porquanto a mulher assumiu e naturalizou a sua posição de submissa e idolatra o papel do sexo oposto, endeusando-o como ser superior. Como dizia uma vítima, “tive muitos problemas no casamento, pois andava a meter na sua responsabilidade, e homens não gostam disso. Agora deixo que ele tome as decisões”. Daí que, qualquer estratégia para a sua eliminação e ou atenuação, deve confrontar-se com crenças culturais subjacentes que a perpetuam. A eficácia dessa estratégia tem de ser desenhada recorrendo a uma variedade de conhecimento e recursos tanto a nível governamental como não governamental (Heise, 1994). Acresce dizer que perante a complexidade relativamente à questão em apreço, para dar resposta ao crime da violência doméstica, é imperativo ter em consideração atuações entre os dispositivos de controlo social. Essas ações abarcam vários ângulos e seguimentos, mormente: a educação, a saúde no geral, a segurança pública, a assistência social, o poder jurídico, bem como organizações públicas. Estes dispositivos e as atividades aliadas aos mesmos colaboram para a tomada de decisões assertivas com um forte impacto a nível coletivo, que criam e fortalecem as redes de atenção,

com o intuito de melhorar, e de uma forma assaz, eficiente, resolver os problemas, e concomitantemente, o melhor suporte às vítimas (Freitas *et al.*, 2013).

### **Implementação da lei de VBG, uma década depois: ganhos e desafios**

Os dados estatísticos, até então revelados, sobre a problemática da violência contra a mulher, em Cabo Verde, afiguram-se de uma certa preocupação. Ratificações e leis foram escrita no papel, projetos e formações foram criados, não obstante os passos importantes, e necessários, a VBG e mortes continuam a existir a um número não menos inquietante.

De acordo com dados da Procuradoria-Geral, no ano 2016/2017 o total dos casos “transitados mais, entradas, foi de 11,001, apenas 862 foram acusados. Significando que, dos processos que entraram para o Ministério Público, apenas 7.84% chegaram ao tribunal. 24.40% foram arquivados, enquanto os restantes ficaram nas gavetas e ou pendentes para o ano que se aproximava (Ministério Público, 2017/2018).

Por conseguinte, no ano judicial, 2017/2018 deram entrada cerca de 9201 casos – transitados, mais os que deram a entrada (2080 novos casos e 7121 do ano judicial transato) – e apenas 584 foram acusados, significando que, dos casos que entraram no Ministério Público, somente 584 (7%) foram parar ao tribunal judicial. Ao passo que 37.40% foram arquivados e o resto ficou irresolvido, transitando para o ano seguinte, 2018/2019 (5.172 processos), ou seja, no ano 2017/2018, segundo o relatório, 4.029 casos de processos-crimes por VBG, foram indicados como resolvidos. De esses números, 3.441, não chegaram a ter acusações, sendo arquivados (Ministério Público, 2017/2018).

Os dados acima são preocupantes, pois a maioria dos processos, que deram entradas no MP, foram arquivados e tendem a aumentar com o passar dos anos, 24% para 37%, porquanto, não chegaram a ser julgados. Obviamente que o número de casos que passaram

para o MP foram diminutos, evidencia o relatório. Contudo, isso deve-se ao facto de haver menos denúncias (Ministério Público, 2016/2017 e 2017/2018).

A motivação que subjaz à diminuição da denúncia tem a ver – particularmente em Cabo Verde –, quase sempre, com o estigma e vergonha, aliados ao número de casos, exorbitantes, que não chegam a ser julgados, e consequentemente a não aceitação da denúncia da vítima. A subnotificação dos casos de VBG sempre existiu. A violência contra a mulher, como é sabido, tem consequências catastróficas, e afeta não só a vítima, como também o público em geral. Entretanto, percebe-se que muitos problemas de saúde pública não partilham do mesmo denominador comum que a violência contra a mulher, partilha. A condição afeta cerca de 25% da população. Contudo, poucos dos afetados, – 2.5% a 15.5% – reportam que estão a viver situações de violência (Krantz, 2002). Isso indica que, embora se possa estimar quantas mulheres são vítimas desse crime, os números podem induzir em erro por defeito, no sentido em que a maioria dos casos não são reportados (Vieira-Pinto *et al.*, 2022). O que indicia uma falácia, não só a nível do dispositivo legal, como também do dispositivo informal. O que se indaga, se realmente, todos esses casos, sub-reportados, são realmente invisíveis? – a familiares, amigos, setores públicos, hospitais, polícia, serviço social, etc –. Se a problemática é realmente visível – quando ao abuso acontece, quase sempre, to o mundo sabia – (Gracia, 2004), a parte imersa, de *iceberg*, de que tanto se fala, é um quesito ignorado, pois parece que, como já foi referido, há uma escolha social em se remeter ao silêncio.

A família, sendo o pilar de uma comunidade, muitas vezes não está preparada ou sensível o suficiente para suportar e apoiar as vítimas, coligando com o agressor, que parece ser um “excelente pai de família”, acusando a própria vítima de ser “difícil de lidar”. A família relembra-a dos seus deveres. A sociedade empurra-a para as ruas da amargura. O

isolamento, afastamento, é comum entre as vítimas. O que as coloca numa posição mais suscetível e vulnerável perante o transgressor. Jenkins (1996) advogou que o silêncio é uma forma de minar a violência. Muitos sabem, mas preferem não se imiscuir, mesmo não concordado com o sucedido. Não obstante o sigilo, a atitude passiva e negligente, são ingredientes fundamentais na perpetuação do crime. Turbando ainda mais a situação da vítima, levando a acreditar que realmente, ela é responsável pela situação, fazendo com que assumam total responsabilidade e acreditando que ninguém a possa ajudar, nem mesmo os dispositivos externos à situação (Biden, 1993). Contudo, acreditamos que na maioria das vezes, a família ou os amigos ao redor da vítima desejam participar mormente quando o acontecimento deu nas vistas, como no caso da violência física.

Ainda, de acordo com o estudo feito pelo Eurobarómetro sobre os europeus e as suas opiniões sobre a violência doméstica contra as mulheres, quando foi perguntado às pessoas "conhece uma mulher que tenha sido vítima de alguma forma de violência doméstica?", uma percentagem elevada sabia do sucedido. O estudo concluiu que muitos casos de violência doméstica contra a mulher, apesar de não denunciados, são conhecidos do círculo social da vítima, particularmente entre amigos e familiares. Portanto, muitos dos casos são obscurecidos pelas pessoas que estão em contacto com a vítima, ou seja, próximas de vítimas e agressores. A mesma fonte revela que 46% dos cidadãos europeus acham e acreditam que o comportamento provocativo da mulher é a causa de violência, indicando assim uma elevada prevalência de atitudes culpabilizantes das vítimas (European Commission, 1999). Uma vez responsabilizadas pelos seus abusos, a chance das vítimas em receber suporte fica cada vez mais reduzido.

Em Cabo Verde, os dados do III inquérito demográfico (IDSR-III) de 2018 revelaram uma diminuição do crime de VBG, comparado com os dados no II inquérito, o que causou

uma certa euforia nas instituições que trabalham com essa problemática. Como já foi frisado, no ponto acima, o II inquérito divulgou dados preocupante, 1 em cada 5 mulheres sofria de violência física e 17.3% aceita a violência como uma forma educativa, tendo a área rural uma maior percentagem (26%), números esses liderados pela ilha do Fogo (37%). Uma década depois, e com a implementação da lei, os dados do III inquérito demonstraram que houve um decréscimo considerável a todos os níveis. O número de mulheres vítimas de violência física passou a 11% ou seja 1 em cada 10 mulheres. De entre as vítimas, a maioria são separadas/divorciadas e viúvas (32.95); 69.8% revelaram o controlo por parte dos maridos – estes não acetam que elas convivam com os amigos –. (IDSR-III, 2018).

No país, não obstante os dados estatísticos do III inquérito, não remete para uma situação de alarme, o crime de VBG, ainda é muito prevalente, em todas as esquinas, e com recaimento populacional muito significativa. Mesmo que a tradução estatística não espelhe a sua realidade. Se é verdade que esses dados nos trazem algum alento, ao mesmo tempo, não deixa de ser menos preocupante, pois nos dá uma pista da real extensão social do problema, quando são colocados no contexto social em apreço. Não obstante, é sabido que a denúncia dos casos de VBG em Cabo Verde, ainda é um tabu. Já dizia uma vítima, “*de nada vale a pena falar, pois ficam a saber da minha vida e depois não fazem nada*”. Portanto, muitos acontecimentos ficam por não ditos e por conseguinte, não existente (Ministério de Justiça, 2006).

Cumprê observar por fim que a cultura machista e vaidade imperante dos que detêm o poder reflete sobre muitos aspetos da lei da VBG, pois muitos pontos da suposta lei, não passaram de papel, segundo o relatório de avaliação do estágio de implementação da lei VBG em 2018, pela ICIEG. A saber, temos o fundo de apoio às vítimas. As associações dependem das ONG estrangeiras e a boa vontade das doações. Os custos dos processos, as multas,

deveriam ser reservados ao fundo de apoio, para a aqueles que ficaram lesados por esse tipo de ato. Urge emprendermos o trabalho em rede – onde os que trabalham com essa tipologia de crime, deveriam receber formação contínua, parte do seu desenvolvimento profissional – pois a envolvência mútua e sinérgica das instituições que trabalham com casos de VBG, parece ter bases fragmentadas. A criação de centros e casas de abrigo. Algumas ilhas já beneficiaram, contudo, devido à sua fase embrionária, e o custo que esse tipo de projeto implica, os serviços deixam muito a desejar.

Portanto, os desafios na implementação de certos pontos na lei VBG prendem-se, por um lado, com a inexistência de soluções – claras – institucionais de incentivo e de prevenção do crime em apreço – apesar de alguns progressos –, por outro lado, tem a ver com a cultura de tolerância, dos valores patriarcais dominantes e de pacto social, que conseqüentemente, colonizam e condicionam o posicionamento da opinião pública e do dispositivo informal de controlo social.

*a) A Lei nº 84/VII/2011, de 10 de janeiro passa para o Código Penal (CP)*

Com a entrada em vigor do novo CP, em maio de 2021, a lei de VBG acabou por sofrer algumas alterações. O crime de VBG que fazia parte do artigo 23.º, saiu da Lei especial de VBG e passou a dar lugar ao artigo 131.ºC do CP (CP, 2021). Ou seja, não só a lei de VBG passou de especial para geral, como também, alguns artigos (que constavam na lei especial), além de expressamente revogados, tiveram que sair e articular-se com o novo CP e o novo Código do Processo Penal (CPP). Apesar dessa mudança, o que parece não favorecer a lei especial em vigor, a jurista e consultora, Dionara Anjos, no jornal expresso das ilhas, frisou que “o crime já existia dentro de uma lei especial que não apenas trata do crime, mas também de diversas outras medidas para a polícia, procuradoria, tribunal, entre outros (Ribeiro, 2021).

Em jeito de síntese, com este capítulo pudemos verificar a escassez dos estudos sobre VBG e justiça criminal em Cabo Verde, o que não é proporcional tendo em conta à sua emergência e gravidade. Dos que já estão publicados, grande parte requer atualizações, contextualização e indagações que possibilitem comparar e correlacionar dados, retratar sobre estatísticas, analisar práticas e exigir tomadas de medidas adequadas das autoridades e agentes com poderes de decisão.

Acreditamos que a lei da VBG foi criada não só para preservar o direito da mulher, como também para impedir e ou pelo menos atenuar a (re) vitimização por parte das instituições, criando setores de atendimento (só existem em algumas ilhas), apetrechando os profissionais com informações úteis. Acima de tudo, que esses serviços integrem profissionais capazes e sensibilizados para lidarem com a complexidade do problema, no que tange ao processo e dinâmicas do ciclo da violência e às discriminações existentes entre os géneros.

Depreendemos ainda que a lei VBG, que foi implementada há uma década, parece sofrer alterações severas, pois a sua passagem de especial para o código penal parece não beneficiar quem passa para o sistema jurídico. Acreditamos que essa mudança foi pouco inteligente, tendo em conta que muitos dos aspetos da lei especial não tiveram tempo de passar pela prática. Não obstante, a leitura política e social tende ainda a favorecer a domesticidade e coisificação da mulher, numa sociedade com uma visão assaz misógina.

No próximo capítulo, iremos aprofundar, no geral, a temática violência doméstica e o sistema criminal. Debruçaremos, também sobre a severidade das medidas penais como o fator dissuasor do crime de violência contra a mulher; falaremos, ainda da emergência de Psicologia Forense no campo judicial, a que se alia fatores que influenciam as decisões judiciais.

O objetivo, no capítulo *infra*, é entender as dinâmicas que compõem o dispositivo de poder, nomeadamente, o sistema judicial, assim como as suas insuficiências na compreensão do enredamento que confere as relações de violência. Não é da nossa intenção dissecar ou fechar questões relacionadas com a atuação da justiça, no crime contra as mulheres, pois é preciso reconhecer que as dinâmicas desiguais das relações de gênero têm fatores comuns, conexão e semelhança com outras dissimetrias relacionadas com a produção de diferenças tornadas desigualdades. O gênero não é uma dimensão isolada por si mesmo, nem pode ser vista como tal, muito pelo contrário, ele se camufla com outras dimensões, ocultadas, ou não, por relações de poder, como classe, e idade, status etc...

### Capítulo III – Legitimação

#### Introdução

Há muito que se tem procurado produzir conhecimentos sobre a violência. Esta tem sido tratada como um problema que, por um lado, é inerente a todas as culturas, e, por outro lado, é cheia de arestas, facetas, com pluralidades não finitas, vestindo e adotando interioridades e exterioridades diferentes, porém, de difícil compreensão (Trotha, 1997).

Por esse ângulo, aquilo que entendemos por violência no ocidente, não tem o mesmo significado para a cultura asiática e oriental. Como por exemplo, para converter certos costumes, ou um problema social, estes têm de estar em sintonia com a consciência comunitária, em querer promover os valores como a liberdade, felicidade e direitos iguais para todos (Domenach, 1981). Diante disso, as práticas sociais que eram vistas como inexoráveis para a ordem social passaram a ser desconfortantes e punidas. A violência, segundo a autora, é o poder real ou imaginado que se resiste e tem como intenção a subjugação do outro. Paradoxalmente, se ela é, na maioria das vezes reprovável, de outra forma é inerente a existência dos homens. A autora, adiantou ainda, que punir todas as práticas violentas é uma tarefa difícil e espinhosa, por outras palavras, inexecutável; contudo, fingir que o problema não existe, é criminoso (Domenach, 1981).

Na perspectiva de Minayo (2005), “a violência não pode ser analisada nem tratada fora da sociedade que a produz em sua especificidade interna e em sua particularidade histórica”. Nesta medida, e de entre várias definições de violência, é de destacar que não existe um conceito universal da mesma, como já mencionámos, visto que temos de ter em conta a sua historicidade, a tipologia e a captação intrínseca de quem está a frente da situação. Para Coimbra (2002) a inexistência daquilo que se considera a realidade absoluta acerca da violência, no fundo, o que existe são atos considerados como violentos em uma determinada

conjuntura social, política económica e cultural. A violência doméstica é um exemplo disso, pois era vista como uma forma de organização cultural e relação social. E o Estado só reconhece que uma prática é violenta quando há tal percepção e reconhecimento social.

O sistema criminal atua nas condutas sociais que não são toleradas pela norma, ou seja, quando há consciência social de que tais atos trazem consequências graves a nível público, familiar e individual. Depois de avaliado e aprovado, o dispositivo legal adquire o estatuto de crime, que passa a contar nos códigos e leis penais gerais e ou especiais (Morato *et al.*, 2009).

Cabo Verde ratificou vários instrumentos internacionais – já mencionámos no capítulo anterior – que à luz da Constituição se tornam diretamente aplicáveis. Temos por exemplo a CEDAW, o Programa de Ação para o Cairo<sup>28</sup> e a Plataforma de Ação de Beijing<sup>29</sup> (Barros, 2016-2020). A nível nacional, o país também aprovou a lei de VBG – então artigo 131°C do CP –. Contudo, apesar das leis nacionais e ratificações internacionais, os casos reportados de VBG que chegam aos tribunais não refletem a realidade desse fenómeno. Nos anos de 2010 e 2013 foi registado um total de 471 caso de violência sexual. Entre 2010 e 2014, deram entrada nos tribunais 12.423 casos de VBG. No ano judicial de 2013 a 2014, os processos de VBG representam 7.7% da totalidade dos processos-crime que deram entrada na procuradoria e 10,1% dos processos resolvidos. Como já foi referido, um número substancial de processos transita para o ano seguinte (Barros, 2016-2020).

---

<sup>28</sup> Em abril de 2000, foi realizada no Cairo a 1ª cimeira EU-Africa. O plano definiu algumas áreas de colaboração com os dois continentes, como por exemplo: direitos humanos, questões de desenvolvimento e economia, paz etc (Ferreira, 2008).

<sup>29</sup> Uma plataforma que foi assinalada em 1995 objetivando o empoderamento e participação da mulher com base na igualdade de género incluindo a inclusão no processo decisório e acesso ao poder. Fonte: [https://portais.parlamento.cv/rmpcv/legislacao/PNIG2015\\_18.pdf](https://portais.parlamento.cv/rmpcv/legislacao/PNIG2015_18.pdf). Acedido a 12 de dezembro 2021.

Desde 1970, nos Estados Unidos, a justiça criminal tem tido um papel preponderante no combate ao crime da violência doméstica. Como já foi referido, o crime era visto como medidas corretivas, benéfico, que faz parte de problemas familiares. O fenómeno em si não era percecionado como o resultado da negligência desenfreada, por parte dos dispositivos formais em desempenhar as suas funções – amenizar e prevenir a violência intrafamiliar. Ao contrário, acreditava-se que, se a sociedade interviesse em todos os casos – excetuando aos mais graves e flagrantes – provocaria danos incalculáveis à família. Esta era considerada a matriz de todo o desenvolvimento humano, e o seu papel poderia ficar altamente comprometida e enfraquecido (Buzawa & Buzawa, 2003).

A resposta da justiça penal à violência contra a mulher tem gerado críticas entre os investigadores. Inicialmente, as críticas concentraram-se principalmente nas respostas policiais, com relutância dos agentes em intervir nos casos de crimes "domésticos" – prender e acusar os delinquentes. A crítica, também, recaiu aos procuradores, pelo baixo número de agressores processados e os juízes foram vistos negativamente pela lenidade nas sentenças impostas à minoria de agressores condenados (Cretney & Davis, 1997; Cook *et al.*, 2004).

A ação dos agentes policiais a situações de violência contra a mulher não é apenas um mecanismo disponível de interromper o ciclo da violência. O envolvimento de polícia também tem uma função simbólica relevante, pois representa a desaprovação social do crime (Holder, 2001). Para Barnett *et al.*, (1997), antes de os casos serem transferidos para as instâncias superiores, e até mesmo antes de os tribunais darem resposta às práticas de violência, os agentes policiais são, no geral, os primeiros dispositivos legais a terem contacto com os casos e as vítimas de abuso. As experiências positivas com a polícia podem levar as vítimas a procurar ativamente assistência e outros meios legais, o que irá aumentar a sua segurança futura e diminuir a revitimização. Contudo, em alguns casos, acontece o efeito

reverso. A vítima pode ser detida juntamente com o seu abusador e responsabilizada pelo crime (Richie, 2014). Consequentemente, essas vítimas teriam, caso a prática se repetisse, mais incidentes, menos probabilidade de denunciar futuros acontecimentos às autoridades policiais, o que pode levar à sua vulnerabilidade perante o re-abuso (Martin, 1997; Finn *et al.*, 2004).

Convém referir que o Direito Penal lida com factos que evidenciam particularidades, ou melhor, segundo Galvão (2013), tipificações, como, por exemplo, tipos genéricos e materializados. O primeiro tem a ver com as representações gerais de certas condutas, do indivíduo, considerada anormais e não tolerados. O segundo tem a ver com a lei, ou seja, os fundamentos legais, dado que representa comportamentos que merecem ser vistos como crime. Portanto, com base no supradito, na perspetiva do autor, a definição de tipicidade é essencial no ponto de vista da proteção e defesa da liberdade individual. Com efeito, o texto constitucional requer que o tipo penal relate detalhadamente e exaustivamente a ação que compôs matéria de proibição, de maneira que, o que é geralmente e socialmente reprovado possa ser assinalado anteriormente à sua prática. O magistrado fica, por conseguinte, vinculado ao *script* legal e jurídico, sendo completamente vedado considerar como crime acontecimentos que não estão tipificados. Cada queixa narra uma violação particular e delimitada com espaço e tempo, tornando indispensável a uma sentença criminal a segura constatação de que os acontecimentos relatados na queixa sucederam conforme (exatamente) nos termos prescritos na lei. Essas normas têm como suporte os princípios comuns do direito penal, os quais impõe para o exercício do paradoxal e ou contraditório e ampla defesa do denunciado a delimitação daquilo que a ele está sendo incriminado (Marques, 2019).

De acordo com o supraexposto, no quadro da violência doméstica a literatura alude, que a vítima só reporta o agressor após muitos anos de submissão à violência. Essa denúncia,

por si só, compõe o ingrediente necessário para a ação penal. Todavia, não há um tipo penal que abarca toda a sequência do abuso. Ou seja, todo o ciclo da violência é captado como sendo um crime. De igual modo, nas atuações penais, são examinados todos os pormenores dos acontecimentos característicos e específicos. Assim, a mulher vê as suas expectativas serem bloqueadas, porquanto ela espera do sistema criminal a justiça face a todo o ato praticado contra ela (Richie, 2014). E ao chegar ali, ao tribunal, de uma forma geral, ela tende a relatar toda a experiência de abuso. Contudo, perante a sessão criminal, é exigida que a mesma relate-se acontecimentos específicos, ou seja, com dias, horas etc. Ora, no caso da violência psicológica, devido às características que a compõem, é muito difícil a vítima fazer a narrativa completa do acontecido, sem equívocos nos detalhes (Marques, 2019).

Adicionalmente, mesmo o agressor, tende a utilizar diversas táticas manipulativas para denegrir e colocar em causa a credibilidade da vítima, perante uma audiência, proferindo, narrativas como: “ela é leviana, é louca, anda a se esquecer das coisas” etc. Se os seus argumentos foram confrontados, o mesmo tende a rebater e a defender-se, reafirmando que, “ela tem o hábito de fazer tempestades em copo de água”; “excede nas coisas”; leva mal a tudo; compreendeu tudo errado” e assim por diante, fazendo-a duvidar das suas capacidades mentais. Uma tática clássica, do abusador, trazendo a crença de que se preocupa com o estado emocional da companheira (De Lara *et al.*, 2016).

Com base nisso, o que acontece é que a situação da mulher vítima tende a perpetuar-se, na maioria das vezes, com a “censura” de seu agressor. O agressor, no entanto, não é só o delinvente, mas sim o próprio sistema penal. Este com o dever de proteger as vítimas, mas que, no entanto, contribui, muitas vezes, para a sua penalização, re-vitimizando-as (Medeiros *et al.*, 2014, Erez & Belknap, 1998). Um sistema, que se afigura promíscuo e assistencialista, no que toca a condenação dos agressores domésticos.

**Sistema criminal de justiça e violência de doméstica contra a mulher: *relação de amor e ódio?***

Os movimentos feministas como outro “sujeito coletivo monumental” afiguraram-se de extrema importância, pois fizeram a ponte entre as narrativas do homem todo-poderoso e a história das fêmeas invisíveis e amarguradas, desconstruindo, dando novo significado à união entre ambas, não só na mudança de paradigmas como também na nova filosofia a respeito de gênero. Essa mudança, que abalou a ciência e a política e politicalha da época, particularmente a Criminologia, cujo saber científico ainda era totalmente obscuro e enclausurado nos conceitos falocráticos, quer no campo da matéria do saber – crime e delinquentes – quer para os agentes promotores do conhecimento – os criminólogos – ou até mesmo o saber em si. A obra do médico Lombroso, “*o homem criminoso*” (1871/1876), é um clássico exemplo (Andrade, 2005). Ainda, como alude a autora, a dualidade do gênero é bem visível no preconceito do homem ativo, valente e com as suas potencialidades, ao mesmo tempo, como o delinquente (construído socialmente), receando a sua narrativa desviante. Assim como, também, não é difícil no nosso imaginário, visualizar a mulher como dona de casa, encerrada nos confins privados, confinada aos serviços domésticos, condições essas, correspondentes à estereotipia da vítima (Andrade, 2005).

O aparecimento dos movimentos feministas em defesa dos direitos iguais tem demonstrado ações positivas, mas, como todo o movimento, também, apresenta lacunas. O que tem afetado drasticamente o cotidiano das mulheres, particularmente no que tange à aplicação das leis, que se afiguram como obstáculos ao triunfo da igualdade de gênero e dignidade entre os sexos prevista no artigo n.º 1 da Declaração Universal dos direitos

humanos<sup>30</sup>, e no artigo 23.º da Constituição cabo-verdiana n.º 2/III/90<sup>31</sup>. A fundação da paridade de género, constituída pelas e para as mulheres, é uma autêntica mudança de paradigma nas leis penais, que tem demonstrado inadaptação e resistência num sistema dirigido a séculos por conservadores e tradicionalistas.

Para transcender a questão que toma o arquétipo masculino como dominante na formação dos dispositivos legais, Facio (1999) apresentou alguma estratégia para a (re) construção dos preceitos legais, que se baseia, em primeiro lugar, no reconhecimento da discriminação estrutural contra as mulheres, quer pelos organismos internacionais, quer pelas investigações empíricas. Em segundo instante, a indispensabilidade em examinar a realidade em harmonia com a perspectiva de género, que possibilita distinguir os processos e particularidades que compõem a disparidade na aquisição e exercício de direitos.

A autora partiu de uma análise crítica da norma estabelecida que tem como protótipo o homem, isto é, que as normas foram originadas de acordo com as qualidades e papéis outorgados ao sexo masculino. Assim, a maior parte da legislação, que parte dos princípios a neutralidade e universalidade em relação aos homens e mulheres, no fundo não passa de uma miragem, ou seja, tem uma face oculta (*glass ceiling*)<sup>32</sup> das repetidas violações dos direitos sofridos pelas mulheres. É por esse ângulo que a autora inculca “pôr as relações de poder no centro de qualquer análise e interpretação da realidade” e, perante isto, tornar visível as

---

<sup>30</sup> Segundo o artigo, n.º 1, *todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos*. Fonte: <https://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-10.html>. Consultado a 30 de dezembro de 2021.

<sup>31</sup> Princípio da igualdade – “Todos os cidadãos têm igual dignidade social e são iguais perante a lei, ninguém podendo ser privilegiado, beneficiado ou prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de raça, sexo, ascendência, língua, origem, religião, condições sociais e económicas ou convicções políticas ou ideológicas”. Fonte: [file:///C:/Users/edili/Downloads/cr%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/edili/Downloads/cr%20(4).pdf). Acedido a 14 de fevereiro 2020.

<sup>32</sup> O termo *glass ceiling*, foi apresentado por Marilyn Loden em 1978. E significa “*intangible barrier within a hierarchy that prevents women or minorities from obtaining upper-level positions*”. Fonte: <http://www.loden.com/Site/Site/Articles%20-%20Videos%20-%20Survey/C615CFE8-A70C-4E3A-9F81-8EACB0E087D0.html>. Acedido a 18 de janeiro de 2021.

dissemelhanças no alcance e ofício de direitos, tanto no palco público como no espaço privado. Isso constitui identificar, primeiramente, em que medida a constituinte formal normativa é afetada por expressões culturais que condescendem a lei à tradição, e segundo, como a componente estrutural influencia, *suprime e determina o conteúdo da componente formal normativa da lei*” que se refere à sua aplicação e administração (Facio, 1999).

Dias (2010) aludiu que no contexto português, não obstante a lei contra a violência doméstica assumir um caráter público, a família como espaço de cooperação, solidariedade e não violência, é uma instituição dominante que ainda prevalece. A violência doméstica é uma prática que despreocupa os tribunais. A relação entre o que está previsto na lei e a sua aplicação desafia o sistema jurídico legal e judicial, porquanto confrontado com preceitos e mitos variados em relação ao papel e estatuto das mulheres na sociedade, sem se ter em consideração as mutações sociais, concretamente a sua presença no contexto laboral, que de uma forma ou outra, transfaz a dissimetria entre os papéis sociais na esfera doméstica.

Outrossim, a dominação com expressão milenar sobre as mulheres, e especificamente as parceiras íntimas, teve consequências e influências no campo jurídico, não só porque a lei e as normas, na maioria das vezes, foram escritas e ditados por homens – ou mulheres pertencendo o mesmo modelo de “neutralidade legal” –, mas porque também ratificaram seus poderes e índole de dominadores, e os magistrados, também são influenciados pelos estereótipos sociais organizados pela ordem do género. Neste sentido, o abuso físico e sexual entre os casais continua a encontrar alguns obstáculos aquando da sua denúncia perante o sistema legal. Por outras palavras, esses, por vezes não são criminalizados e quando os são, a tendência é ser julgado com tolerância (Dias, 2010).

Segundo Duarte (2013), ao debruçar sobre alguns acórdãos judiciais, deparou que a mulher é sempre atribuída, de uma forma ou de outra, algum nível de culpa pelo abuso

sofrido. Por exemplo, se porventura na recusa da relação sexual, ou caso ter feito a denúncia tardiamente, quando ela aparece acompanhada de um advogado nos postos policiais, ou mesmo quando apresenta um discurso que transcende a estereotipia da vítima – mulher pobre, ignorante e com baixa autoestima. A violência com fundamentos no gênero, não abre o caminho para a liberdade de quem está a ser agredida, pois na maioria das vezes as vítimas deparam-se com “becos sem saída”, fazendo com que elas permaneçam sob o jugo do agressor por motivos de laços afetivos, familiares, comunitários, aliados a dependência emocional, económico-financeira.

DeLanza (2001) refere que as razões dessas co-dependência, acrescida da não proteção legal – desconfiança do sistema judicial, inconsistência na aplicação das penas, bem como a falta de informação – fazem com que as vítimas permaneçam imóveis. Não obstante existirem medidas legais que condenam a violência doméstica, dando ênfase à equidade entre os gêneros, a interpretação deturpada da lei, faz com que a justiça menospreze e minimize o sofrimento das vítimas em ter de lidar com o agressor diariamente, expondo se a riscos maiores na esfera onde deveria reinar a proteção e o conforto. Advoga ainda que “a justiça, ao abrandar a incidência da lei sobre o réu, acaba penalizando a vítima. Acrescentou que existe na magistratura uma atitude presunçosa e discriminatória, estando, com efeito, a jurisprudência a praticar uma verdadeira violação da lei, um crime duplamente hediondo”.

Como já foi mencionado, muitas mulheres não acionam a justiça, pois frequente vezes ela não as protege. E quando o fazem, o perigo pode ser ainda maior. Adicionalmente, a passagem pelo dispositivo legal é um processo esgotante, e a maioria das vezes, sem veem os seus agressores a serem sentenciados, nada mais nada menos de que em liberdade condicional, uma medida que só funciona se for rigorosamente supervisionado com consequências reais, caso haja violação da mesma (Hanna, 1998).

Uma das razões, segundo o sistema criminal de justiça, que explica a baixa taxa de acusação de crimes domésticos é a elevada prevalência da retirada da queixa por parte da vítima. De acordo com a literatura (*e.g.* Taylor, 2013; Buzawa & Buzawa, 1990; Hartman & Belknap, 2003), as acusações e condenações por crimes de violência doméstica são raras.

Parnas (1969, 1970) salientou ainda que, há uma dessensibilização, por parte da justiça, no que concerne à violência doméstica. Acrescentou que à justiça faltam soluções, para lidar com esses casos. Outras investigações revelaram que a resposta legal à violência contra as parceiras, reflete, maioritariamente, o mesmo padrão de indiferença, inação, e frequentes vezes, a resposta ineficiente por parte da polícia (Dobash & Dobash, 1979). Whitney (1997), afina pelo mesmo diapasão – as reações do magistrado aos abusos contra as mulheres têm, historicamente, deixado as vítimas sem defesa ou solução apropriada. Rematou que o sistema judicial e a polícia tendem, a ver a violência doméstica como uma questão pessoal e ou familiar. Várias investigações, como, por exemplo, Taylor (2013), entendem que as experiências e a passagem da vítima pelo sistema legal é extremamente horrífica. A autora salienta, ainda que a proteção das vítimas, a longo prazo, não passa de uma miragem e o sistema penal não tem feito esforço suficiente para melhorar essa experiência. E que os procuradores raramente dão prioridade à segurança e bem-estar das sobreviventes.

No contexto português, o estudo de Louro (2017), que analisa uma amostra de 35 processos de crime de violência conjugal, conclui que a severidade punitiva no âmbito desse crime é branda. Domingos (2018) chegou à mesma conclusão que Louro. As sanções aplicadas e a severidade da pena exercida pelo aplicador são, em média baixas.

Em Nova Iorque, Bond e Jeffries (2014) chegaram a conclusão de que a decisão de encarcerar difere nos casos de violência doméstica e não doméstica. Pois, quando condenados em circunstâncias semelhantes, os agressores domésticos são menos suscetíveis de serem

condenados e presos do que os agressores fora dos contextos domésticos. Adicionalmente, quando são presos, os agressores de violência doméstica recebem penas significativamente mais curtas.

De acordo com Stark e Hester (2019), quando se trata de violência doméstica contra as mulheres, o sistema judicial e outras agências, transformam-se num ciclo perpétuo no qual milhares de agressores domésticos escapam anualmente à punição e a alguma forma de responsabilização. Consequentemente, porque estes delitos parecem triviais, isoladamente, muitas vezes, nem são denunciados. Cretney e Davis (1997) afirmaram nos seus estudos que o agressor doméstico raramente é punido pelo crime pelo qual foi condenado. Chegaram à conclusão de que apenas 16% dos crimes de violência doméstica é processada até à condenação. Em comparação com 40% dos crimes de violência não doméstica. Por outro lado, Hester (2006) constatou que apenas 14% das detenções resultaram em encarceramento. Num outro estudo, a utilização de penas de prisão variou de 11% (para crimes de violência doméstica) a 50% (outros tipos de crimes), dependendo da região (Hester & Westmarland, 2005).

De acordo com as literaturas citadas acima, o sistema judicial, salvo algumas excecionalidades, não é somente um espaço débil e não eficaz para salvaguardar as vítimas – principalmente o abuso sexual –, ele também replica a violência já praticada contra elas, (re) vitimizand-as (Andrade, 2005; DeLanza, 2001; Richie, 2014). Ademais, como assevera Oliveira (1999), a vítima ao acionar a justiça e a ação penal é mais uma vez obrigada a recontar e a prestar as declarações – numa situação já desgastante e exaustiva, ressentindo a sua vontade em querer desistir do depoimento e a não pretender o julgamento do delinvente, – isso transforma numa outra forma de vitimização, ou seja, a vitimização secundária – uma forma de violação, mascarada de proteção –; para Medeiros e colegas (2014) um sistema que

paradoxalmente, foi construído com o objetivo de preservar e proteger a vítima, irá, de todas formas penalizá-las.

Acresce dizer que a vitimização secundária é o fruto de um sistema penal instituído para a punição do crime, como já foi supradito, da ausência do treinamento e formação no ramo vitimológico por parte dos agentes judiciários, e também da carência dos recursos materiais e humanos (Oliveira, 1999). Neste sentido, cabe referir que a vitimização secundária acaba por ser mais grave e conseqüentemente mais nefasta para a vítima do que o acontecimento criminoso em si (vitimização primária), uma vez que patenteia o afastamento da vítima, ao procurar o alívio nessas instâncias. Assim, face a esta situação, há um descreditar por parte dessa em relação a um sistema disfuncional e, conseqüentemente, leva com que a maioria dos casos, nem sequer sejam notificados, uma realidade já bem conhecida. Por seu turno, Karam (2006) frisou que a desestima para com o desejo da vítima cimenta o pensamento patriarcal, fundamentado no estereótipo contra a vítima, já que inculca a falta de habilidade da mulher para tomar decisões sobre a própria vida. A partir de inúmeras observações de sessões de julgamentos de casos de violência doméstica, Debert e De Oliveira (2007) concluíram que os casos de violência doméstica pouco importam aos juízes, e é tido como desperdício de tempo; as vítimas são catalogadas como tendo pouco carácter; e por fim, caso o processo for encaminhado para as instâncias superiores, a consequência poderá ser ainda maior para as vítimas, que na maioria das vezes é persuadida a desistir.

De acordo com Epstein, (1999) a resposta do Estado à violência doméstica continua a ser inadequada, pois em contraste com os notáveis progressos feitos pelos legisladores, os responsáveis pela aplicação e execução da lei – juízes e o sistema judicial – têm ficado muito a quem. Há muito que é prática comum a polícia recusar-se a prender, os procuradores recusarem-se a apresentar queixa, e os juízes mostrarem-se relutantes em emitir ordens de

proteção civil ou impor sentenças significativas aos agressores. Globalmente, a resposta do sistema à violência doméstica tem sido pouco reativa e orientada para a não aplicação da lei. Uma lei só é boa quando cumpre as suas promessas, e a incapacidade dos tribunais e instituições relacionadas em acompanhar o progresso legislativo tem tido um sério impacto prejudicial nos esforços para combater a violência doméstica. Esta lacuna, entre o ramo legislativo e o ramo judicial, sugere onde a próxima geração de reformas deve concentrar-se numa reestruturação fundamental da abordagem do sistema de justiça tradicional a este problema social antigo.

### **E a mediação, funciona nos casos de VBG?**

Alguns quesitos são levantados quando se quer investigar as instituições legais. Uma das indagações tem a ver com as representações e ideais sobre o que constitui a violência, da parte de quem tem o dever de administrar a justiça, quer na fase de atendimento e registo de boletim de ocorrência, quer na de transferência de processo para tribunal judicial, assim como na imissão policial e julgamento (Osório, 2015).

A polícia é o primeiro dispositivo legal a ser acionado, como refere Cortizo e Goyeneche (2010). A polícia, segundo as autoras, não pode ser considerada apenas um elo de transmissão entre os conflitos intrafamiliares e o campo jurídico, mas deve ser entendida como espaço institucional de mediação no interior de relações sociais privadas”. A mediação de vínculos afetivos com o delinquente, acarretando particularidade na união entre parceiros, ultrapassa à legalidade. Rifiotis (2004) afina pelo mesmo diapasão. Contudo, de acordo com Cortizo e Goyeneche (2010), a estratégia da mediação pode ser perigosa, pois pode levar ao silenciamento das vítimas, retirando os seus poderes decisórios, contribuindo, assim, como aludiram, Digneffe e Parent (1998) para a (re)vitimização e (re)privação da violência do género, como já foi citado acima.

Nesta mesma linha, no momento em que a violência doméstica é conduzida para a esfera pública, e os oficiais da justiça desvalorizam os atos, e os remetem para o espaço privado, onde os mesmos foram originados – alegando o amparo e a harmonia familiares – essa desvalorização terá efeitos malévolos no reconhecimento das mulheres como pessoas de direito, sendo capaz de frutificar conformidades com a sua condição de não sujeitos (Osório, 2015).

O apaziguamento da relação abusiva e conflituosa, a partir da mediação, pode ter consequências, que é a legitimação de concessão de poderes masculinos para a ação violenta. Como salienta Ortega (1999), para que haja a mediação, no caso da violência doméstica, tem de haver paridade na repartição de poder entre ambas as partes envolvidas em conflito, pois é muito difícil intervir, nesses casos, quando uma das partes, a maioria mulheres, se encontra em extrema desvantagem e disparidade estrutural. Para a autora, não é possível mediar a violência doméstica, pelas instâncias judiciais, que são o único poder com legitimidade para gerir a justiça. Acrescentou ainda que a mediação viola direitos humanos das mulheres, porquanto quando a mulher finalmente decide procurar nos dispositivos judiciais, o alívio e a proteção, não pode ser sugerida ou submetida a uma mediação, esquecendo as relações de poder de abuso praticada contra ela. Ou melhor, a reposição dos dispositivos legais pela mediação acarreta como consequência a privatização da violência doméstica e sua especificação de crime público. Por esse motivo, justifica-se o porquê que tantos casos serem arquivados, e ou sentenciados com penas suspensas, e ou penas leves, que, no fundo, acaba por estimular a perpetuidade da violência contra a mulher (Stoleru *et al.*, 2012).

No Brasil, por exemplo, houve o hiato da mediação, com a entrada em vigor da lei Maria da Penha – Lei nº 11.340. Segundo Nobre e Barreira (2008), as delegacias fragmentaram e perderam o poder de mediação de conflitos. O seu poder, agora, na

perspetiva dos autores, rege exclusivamente como força repressiva e investigativa. Por outras palavras, voltando ao sistema penal retributivo clássico. E isso, conseqüentemente, dificulta a detenção e punição do delinquente, por causa da morosidade e burocracia aliada ao sistema. Ou seja, ou 8 ou 80, no sentido figurado, síndrome da bipolaridade. O que demonstra que, até então, o sistema judicial, pouco ou nada tem aprendido. Ainda segundo os investigadores, a punição do delinquente, apenas com a pena de prisão, não tem levado, nem a diminuição dos casos de abuso, nem à prevista reabilitação, muito menos à sua inclusão social. “As prisões ressocializam para a violência”, frisaram. Neste sentido, Medeiros e companheiros (2014) colocaram em causa a serventia e a legitimidade do sistema punitivo e as leis criadas, ao admitirem a incapacidade da estrutura penal em salvaguardar os bens jurídicos, em diminuir a violência, a marginalidade e ao mesmo tempo ressocializar o recluso. Muito pelo contrário, pois, segundo as autoras, o sistema penal replica a delinquência, ao limitar e condicionar o sujeito à recidiva (Medeiros *et al.*, 2014). Basta ver a inflação dos delitos existentes na atualidade. É por falta de medidas penais ou inconsistência na forma como aplicam as leis? Uma questão que poucos colocam, mas que se mostra imperativa.

#### **Em forma de síntese**

Para compreendemos o sistema judicial e como o mesmo funciona, temos de ir além das peças que o edificam, ou seja, os seus elementos constituintes. Para isso temos de fazer uma incursão ao macro sistema de controlo informal de maior dimensão, uma vez que o sistema penal (microsistema), não criminaliza, vitimiza, rotura, estigmatiza, inclui, exclui, sem que estas rotulagens advenham, primeiro, do macro sistema de controlo informal, liderada, em primeiro instante, pela família, escalando para o resto, como as escolas, o mercado de trabalho e assim por diante. Qualquer mecanismo de controlo, estruturalmente arraigado, é construtor e cocriadora de adversidades que, com efeito, emaranham-se e

sustentam as preconceções e diferenças, consagrando as posições e ou hierarquias (Andrade, 2003). O sistema punitivo é um arsenal legal que se acredita em mais e melhores resultados; contudo, não é desprovido de sofismas e incapacidades no cumprimento das suas funções, como é o caso de proteção das vítimas de VBG (Richie, 2014; Andrade, 2003; Medeiros *et al.*, 2014). Por conseguinte, a revisão da literatura supra, concluiu que para explicar a resposta, muitas vezes inadequada do sistema criminal de justiça às vítimas de violência doméstica, é necessário explorar o contexto social em que o mesmo se opera. Ou seja, deve ter em consideração, em particular, a posição das mulheres naquela sociedade e o desequilíbrio de poder associado a mesma (sociedade falocrática e um sistema jurídico, também patriarcal) quando se procura compreender as respostas do dispositivo em questão, em relação à violência contra as mulheres.

*“Once a guy starts abusing women he locks in, in many ways”.*

*“Jail takes a bigger bite out of recidivism than even the good batterers intervention programs do” (Bancroft, 2015).*

### **Severidade punitiva no crime de VBG: o “impacto de intervenção legal como estratégia de prevenção terciária”**

A indagação sobre a severidade punitiva como um meio de dissuasão de um crime, neste caso crime de violência doméstica, ou até mesmo como uma forma de prevenção de uma provável recidiva, ainda gera muito debate. Segundo Medeiros e colegas (2014), o desígnio das medidas penais é sobretudo criar o impacto sobre o transgressor da infração, no sentido de este interiorizar as normas sociais, (re)educando-se e reinserindo-se. O racional da obrigação das sanções, como aludem as autoras, aparenta apelativa e quase que perfeita, pois a punição, a pena e o castigo, são considerados terapêuticos, e a prisão o lugar de reflexão e

redenção do indivíduo, pois ali, durante a sua estadia, serão disponibilizadas condições (o que não acontece na maioria dos casos) meios e técnicas para a reprogramação aquando a sua liberdade, garantindo, com efeito a segurança dos penalizados, corrigindo o delituoso (Medeiros *et al.*, 2014). Contudo, ainda não é claro se a intervenção do sistema criminal penal, utilizando, nomeadamente a severidade das penas, pode resultar na diminuição do abuso, e ou se a mesma pode conduzir ao aumento de condutas abusivas, em determinadas circunstâncias. Pois como asseveram as autoras Medeiros e colegas (2014), evidências internacionais apontam para o aumento dos delitos, quanto mais pesada são as censuras, ou seja, as penas pesadas não têm consequências sobre ofensas no caso dos criminosos domésticos.

Wacquant (1999), por exemplo, frisou que em 15 anos, a população prisional aumentou três vezes mais, por causa das medidas duras que foram tomadas no combate a criminalidade. Medidas essas, seguidas por quase todos os países do mundo, incluindo os da União Europeia. Em 1997, menos de 15 anos, houve um *boom* nas cadeias europeias, em especial, Espanha, Holanda e Portugal, chegando a ultrapassar os 135%. Não deixando para trás o Brasil, onde, em 15 anos, o encarceramento quase que quadruplicou, segundo Departamento Penitenciário de, 2010.

Em Inglaterra, por exemplo, o governo propôs um conjunto de medidas para combate ao crime da violência doméstica, em que um dos objetivos era condenações e sentenças mais duras. O estudo feito pela escola policial chegou à mesma conclusão: não há evidências de que as penas pesadas impeçam os agressores de cometerem os atos, muito pelo contrário, pois quanto mais severa é a sentença maior é a taxa de reincidência criminal. A prisão parece ser um instrumento de dissuasão, usada há séculos, mas com fraco poder dissuasor e de mudança (Gibbs, 2018). Como refere Cullen *et al.* (2011), de facto, as elevadas taxas de reincidência

sugerem que para muitos delinquentes a prisão não é o motivo para que não estejam engajados com delitos. Portanto, as sanções criminais punem, mas não ajudam as vítimas a longo prazo (Gibbs, 2018). A escola policial (Gibbs, 2018) publicou uma análise do efeito das sanções penais na reincidência de abuso doméstico. Concluíram que há uma margem muito pequena da eficácia do sistema criminal em reduzir a violência doméstica. A partir de várias análises chegaram ao consenso de que as “sanções penais” nos crimes da violência doméstica não têm efeito consistente nas ofensas subsequentes. A pena de prisão, pode aumentar ou diminuir o número de reincidência, no caso de violência doméstica. A escola, depois de várias pesquisas realizadas, concluiu (nos 15 estudos) que a pena de prisão está associada à redução de ofensas. Nos outros dezassete (17), as medidas penais não tiveram nenhum efeito. Em apenas quatro (4) estudos, houve um aumento de delitos. Neste sentido, decidiram avaliar o impacto de diferentes tipos de sanções. E chegaram à conclusão que as sentenças mais severas – como as sentenças prisionais - estão associadas ao aumento de número de ofensas, e taxas mais elevadas de reincidência criminal em 36%. Nos restantes (64%), a pena de cadeia não surtiu nenhum efeito. Portanto, perante esta situação, depara-se com alguns quesitos: ou os que foram presos têm mais propensão para a reincidência, ou a própria sanção penal exacerba o comportamento abusivo? O relatório assevera: “não foi possível separar o efeito dessas sanções na reincidência criminal, pelo tipo de infrator” (Gibbs, 2018).

Os entrevistados nessa pesquisa – incluindo policias e magistrados – não estavam convencidos de que a maioria das sanções penais tivesse alguma influência sobre a reincidência criminal nos agressores domésticos, muito menos da eficácia da multa - 59 de 66 entrevistados consideraram pouco ou muito pouco eficaz. No que tange às medidas condicionais, 41 de 67 entrevistados responderam que não eram muito eficazes. Entretanto,

as sentenças comunitárias, e ou trabalhos a favor da comunidade, desenhados para o efeito – reduzir o nível de recidiva – foram considerados, segundo os entrevistados, como mais eficazes na resposta para sentenças mais curtas (Garner & Maxwell, 2010).

Gendreau e companheiros (2000), nos seus estudos, e em todas as comparações, descobriram que a prisão efetiva resultou num aumento de 7% de reincidência, em comparação com sanção comunitária. Estudos subseqüente alcançaram resultados semelhantes, como por exemplo Smith *et al.* (2002) que concluíram que as sanções privativas de liberdade estão associadas a um aumento de 8% de reincidência. De acordo com alguns inquéritos feitos aos agressores, as sanções comunitárias, para além de punitivas, implicam custos sociais e financeiros para os agressores (Moore *et al.*, 2008; Petersilia & Deschenes, 1994), o que é um facto curioso, e que não está estudado em Cabo Verde. Este facto converge com as considerações de uma escritã do Tribunal do Concelho de Santa Cruz (Ilha de Santiago/Cabo Verde), com quem tivemos uma conversa informal, segundo a qual a taxa de reincidência dos agressores que tem cumprido trabalho comunitário é extremamente baixa, porquanto tal pena – limpeza das ruas, por exemplo - fere o *Ego* dos machos. Face ao que consideram uma degradante humilhação, preferindo a cadeia.

Uma outra medida, que é muito frequente, particularmente nos casos de violência doméstica, é a ordem da proteção. A eficácia desta medida depende em grande parte da forma como ela for aplicada, pois muitas das vezes ela não passa de uma mera ordem escrita no papel, sem aplicabilidade nenhuma, porquanto a polícia e os magistrados recusam a imposição de sanções aquando do não cumprimento da ordem. Contudo, quando elas são cumpridas rigorosamente, podem oferecer benefícios necessários para a proteção às mulheres e tornar assim possível a sua permanência e dos filhos em casa. Claro que para alguns

agressores, particularmente os mais possessivos e violentos, a ordem protetiva é inútil e a única forma de proteger a vítima seria encarceramento (Heise, 1994).

No que tange à prevenção, muitos estudos foram desenvolvidos. As teorias relativas<sup>33</sup>, ou da prevenção defendem que a prevenção, que pode ser geral<sup>34</sup> e especial<sup>35</sup>, é uma função necessária e utilitária da pena em benefício da sociedade, pois o objetivo é evitar-se que futuras ações delituosas aconteçam. Ademais, Roxin (1993) mencionou na sua primeira versão da teoria a prevenção geral positiva e a prevenção especial positiva. A primeira debruça-se sobre a imposição de castigos aos crimes, a obrigação, para a decisão do julgamento, cujos aspeto positivo tem a ver com fortalecer a confiança, fazendo fé no poder de aplicação da lei, onde a função é dar a conhecer à comunidade que a lei existe e que não pode ser violada, assim, corroborando a sua segurança jurídica e os princípios protegidos pelas leis penais (Roxin 1997). A segunda – prevenção especial positiva – tem a finalidade ressocializadora aquando da aplicação da punição (Roxin, 1993). Neste sentido, segundo a teoria do autor, o papel da pena de prisão tem como objetivo, não só a transmissão da confiança judicial e proteção dos bens jurídicos, com também a reprogramação do agressor (Roxin, 1997).

Ora, o propósito da pena severa, no caso da violência doméstica, vai além da reabilitação. Tem de se saber aplicá-la na prática, pois parece inútil, por si só, aumentar a

---

<sup>33</sup> De acordo com a teoria relativa, a pena deixa de ser apenas um fim, para se transformar num meio para que o delinqüente seja reinserido na sociedade com uma nova visão sobre ele, não voltando a (re) ofender (Araújo, 2011).

<sup>34</sup> A atribuição da pena, na prevenção geral, baseia-se mais na intimidação, como meio de dissuasão, pois acredita-se que, inculcando o medo no sujeito - caso não se obedecer, vai lhe ser atribuído uma pena de prisão – a motivação para cometer o crime, simplesmente desvanece. O castigo e o sofrimento do indivíduo punido, sirva como exemplo para o resto da comunidade (Medeiros *et al.*, 2014).

<sup>35</sup> A prevenção especial, que muitas vezes se mistura com o da função ressocializadora, a sentença baseia-se na promessa de (re)adaptação, do criminoso à sua vida em liberdade (Medeiros *et al.*, 2014).

pena e ou introduzir legislação para aumentar a severidade punitiva das sentenças (prevenção primária), se não houver evidências de que ela está a ter efeitos na prática, nesse caso, reduzir o índice de reincidência. Ao contrário do que se pensa, no senso comum, as sanções penais não são sinónimas de intimidação. Kuhn e Da Agra (2010) são de acordo que, tanto na prevenção geral, como na especial, o efeito preventivo não aumenta de uma forma sequencial com o aumento da severidade punitiva. A prevenção geral, em particular, depende principalmente da rigidez e da certeza de que a pena funciona na prática, porquanto, não interessa as penas muito severas se os agressores percebem que ao chegarem aos tribunais não correm o mínimo risco de serem presos e julgados pelas suas ações (Beccaria, 2007).

Embora as leis possam proibir a violência física e possivelmente emocional e económica, a lei está mal equipada para lidar com o controlo social e a privação de direitos que caracteriza a maioria das relações tóxicas e violentas. Ou seja, embora a violência doméstica seja melhor entendido como um padrão de comportamento na esfera privada – que reflete padrões mais amplos de opressão na esfera pública –, a lei não está equipada para responder às grandes dinâmicas, sociais e culturais, que o permitem. Em vez disso, isola um foco nas violações privadas (baseadas na incidência) e nada faz para responder, com profundidade, a essas dinâmicas que lhe consentem (Weissman, 2013; Richie, 2014). Mesmo quando conseguimos que o sistema responda mais eficazmente aos abusos (como no caso de conseguir que a polícia prenda o agressor), pouco se faz para impedir que o homem tenha a permissão de abusar do poder. O autor advoga que a punição não responde às necessidades maiores das vítimas, nem oferece à vítima o controlo sobre o processo legal criminal (Richie, 2014).

A pena por si só, não vai fazer com que o delinquente deixe a prática criminosa, muito menos só com a intimidação. O sujeito pode ficar, por exemplo preso durante 5 anos. Pena

máxima na lei da VBG, no entanto se nenhum trabalho for feito com o agressor a quando a sua estadia na cadeia, ele corre grande risco de sair e cometer o mesmo ato. Mas, acatelemos, pois, não é porque isso acontece, que tem de se dar ao benefício de dúvida, sendo benevolentes com esse tipo de crime. A punição não pode deixar de existir.

A pena é imprescindível que seja auxiliada por um conjunto de processos educativos na sociedade, e isso conseqüentemente leva a integridade das instituições e seus elementos interligados. Não é a dureza e ou incremento da sanção, mas sim o molde da pena para se alcançar a certeza do castigo, já dizia Beccaria, há 256 anos. Na sua obra *Dos delitos e das Penas* (em 1764) aludiu que a pena, não tem de ser obrigatoriamente dura, no entanto, ela tem de ser justa e eficaz. Ou seja, é fundamental para o domínio do crime a certeza da punição prevista na lei, que como se sabe, muito raro acontece, particularmente nos crimes da violência doméstica contra mulher. Lado a lado, à precisão do castigo, temos a prevenção primaria, nesse caso, a educação (Beccaria, 2007). Ou seja, não e só intimidar o sujeito que ele terá medo de praticar o delito, mas ensiná-lo. Um dos fundamentos básicos do pensamento do autor é a convicção da proporcionalidade. O objetivo do castigo não é o supliciar o delinquente, humilhá-lo, e muito menos fazer apagar na memória das vítimas aquilo que aconteceu, mas, evitar que o crime se repita. Por esse motivo, mesmo que a dureza da pena não consista numa parte essencial da punição, a limitação da autonomia do sujeito necessita ser diminuída ao máximo possível, sendo equivalente ao ato cometido.

Até então não há muitos estudos que examinam o impacto de uma medida específica de sentença criminal, juntamente com a sua duração e severidade na reincidência nos crimes na violência doméstica. A relação entre qualquer intervenção e o comportamento agressivo consecutivo é uma tarefa complexa. Muitas variáveis que medeiam essa relação variam de agressor para agressor. Sherman e Berk (1984) sustentaram que os agressores que foram

presos e responsabilizados pelos seus atos podem vir a evitar a envolvimento em novos episódios de violência, com a finalidade de evitar as consequências advinda da condenação, nas outras esferas da sua vida, como por exemplo o emprego. Caso contrário, a pena de prisão pode ter efeito reverso, que é conduzir o aumento de comportamentos abusivos.

Sherman *et al.* (1992) examinaram os resultados de 7 campos de experiência do Instituto Nacional de Justiça e concluíram que o mandato de prisão pode prevenir futuros comportamentos violentos como por exemplo: a) nas cidades com elevada proporção de suspeitos; b) entre os infratores que receberam um mandato de captura porque fugiram do local antes da chegada da polícia; e c) entre pessoas que percebem que têm algo a perder, pessoas empregadas nos bairros socioeconómicos mais altos. Contudo, o mandato de prisão acelerou os comportamentos transgressivos nos sujeitos com baixo nível de conformidade, ou seja, os que se percecionam como “não têm algo a perder”, como por exemplo, os desempregados e aqueles que vivem nas cidades com grande proporção de afro-americanos desempregados. À luz desses dados, parece evidente que a prisão obrigatória, por si só, pode não ser a resposta mais efetiva em todos os casos de violência doméstica, mas, a maior flexibilidade nas políticas de intervenção, no qual permita uma variedade de estratégias interventivas pode ser mais produtivo e ter resultados mais satisfatórios.

Outro fator significativo que tem impacto na reincidência na violência doméstica é o programa de intervenção comunitária, como já foi mencionado acima, e ou acompanhamentos psicológicos. Os programas emergiram a intervenção e acompanhamentos nas cadeias. Syers e Edleson (1992) estudam esses impactos e concluíram que a detenção tem de ser acompanhada e combinada com tratamento obrigatório logo após o primeiro mandato de captura para que essa possa ser efetiva. Similarmente, outros investigadores (Dutton, 1986; Palmer *et al.*, 1992) concluíram também que a participação em programas de intervenção a

ordem do tribunal, baixa reincidência criminal, pois os agressores que puderam telefonar psicólogos, no momento da crise, eram menos prováveis de cometer atos abusivos às suas parceiras (De Maris & Jackson, 1987; Tijeras, 2022).

No entanto, os estudos de *Thistlewaite* e companheiros (1998) evidenciaram que com os agressores que receberam a sentença criminal mais elevada – no caso do crime da violência doméstica – a reincidência era menos provável, particularmente os agressores que foram presos e logo a seguir foram colocados em liberdade condicional. Esses exibiram menor índice de reincidência comparados com os seus congêneres sentenciados a, apenas uma das seguintes punições: só a cadeia, apenas a liberdade condicional, só a multa e ou sujeitos cujos casos foram arquivados ou absolvidos (*Thistlewaite et al.*, 1998). Os estudos feitos na cidade de Hamilton, onde a prisão é obrigatória nos casos de violência doméstica, apesar da política restrita, quase 20% dos agressores presos por esse delito, reincide mesmo tipo de ato. As diferenças na reincidência podem ser influenciadas por disparidades nas medidas tomadas pelos tribunais. As medidas mais severas podem resultar em menor reincidência casos os delinquentes sejam particularmente desencorajados por tais punições. Os autores eram de hipótese de que as punições mais duras estariam relacionadas com uma taxa mais baixa a nível de reincidência, como já foi frisado, pois os arguidos que foram processados, condenados e sentenciados podem ter menos probabilidades de reincidência em comparação com aqueles cujas acusações são retiradas, cujos casos são arquivados, ou que são absolvidos no julgamento.

Ainda na perspectiva das autoras, relativamente à severidade da pena, no geral a reincidência pode diminuir consideravelmente em relação aos arguidos condenados: a) os condenados ao pagamento de uma multa; b) os condenados à liberdade condicional ou à prisão; c) os condenados ao pagamento de uma multa para além do cumprimento de um

período de liberdade condicional ou prisão, e d) os condenados tanto à prisão como à liberdade condicional. Finalmente, assumindo que as penas longas são mais severas, as penas de liberdade condicional ou penas de prisão prolongada podem estar relativamente associadas a menos reincidência. Os suspeitos que receberam penas mais leves eram mais propensos a reincidir do que os suspeitos que receberam sentenças mais severas. Contudo, a duração da liberdade condicional e a duração da prisão não eram preditores significativos de reincidência (Thistlewaite *et al.*, 1998). Por outro lado, Gross *et al.* (2000) aludiram que o tempo de prisão ou liberdade condicional por si só, não teve efeito significativo na reincidência, pois algumas variáveis estiveram associados à recidiva, como por exemplo os indivíduos empregados. Esses eram menos prováveis a reincidir-se – porque têm mais a perder.

Os resultados dos estudos de Thistlewaite *et al.* (1998) sugerem que pode não ser suficiente simplesmente processar, condenar, e impor qualquer sentença a um delinquente doméstico. Pelo contrário, a importância de "fazer algo" *versus* "não fazer nada" pode residir no tipo de sentença imposta – não na sua duração –. Neste sentido, parece que a severidade da pena pode ser importante para reduzir significativamente a probabilidade de reincidência no crime de violência doméstica. Embora, segundo alguns autores, os agressores que são processados e condenados, em geral, possam representar um maior risco de reincidência; para Thistlewaite e colaboradores (1998) este risco pode ser significativamente reduzido com sanções e ou penas mais severas.

Ademais, ainda de acordo com os autores Gross *et al.* (2000), tendo em conta que a duração da pena não teve uma diferença significativa na reincidência, as medidas penais destinadas a reduzir os níveis de recidiva nos casos de violência doméstica não se deveriam basear apenas nos recursos prisionais ou liberdade condicional, pois a mudança do comportamento não acontece dessa forma. Embora os dispositivos formais e ou sentenças

judiciais tenham uma maior probabilidade e influência na reincidência quando comparado com os dispositivos de controlos sociais informais, para que haja a eficácia das sanções formais, tem de haver sinergia e mediação entre ambas. Como por exemplo, um ano de prisão efetiva combinado com um ano de liberdade condicional e trabalhos comunitários.

Klein (2008), a partir de vários estudos e uma série de experiências em múltiplas jurisdições revela que a detenção dissuade a repetição de (re)abusos, quer os agressores estejam empregados ou não. Em Portugal, de acordo com os estudos de Vieira-Pinto *et al.* (2022) numa amostra de 1488 casos de violência doméstica contra a mulher, verificaram que a violência doméstica diminui após o primeiro contacto do agressor com o sistema de justiça. E o número dos que reincidiram após o contacto com o sistema judicial era bastante baixo (15%). Não obstante, esses foram considerados os mais violentos e responsáveis por mais reentradas no sistema de justiça, pelo mesmo crime (Vieira-Pinto *et al.*, 2022).

Para Maxwell *et al.* (2001), em nenhum dos *sites* (Charlotte, Colorado Springs, Dade County, Milwaukee e Omaha), a prisão esteve associada ao aumento do (re)abuso entre os parceiros íntimos. Pelo contrário, a detenção dos agressores estava relacionada com a redução da agressão subsequente, contra a mulher, embora nem todas as relações eram estatisticamente significativas. Por seu turno Felson *et al.* (2005), num estudo realizado com 2.564 agressores domésticos reportados ao NCVS<sup>36</sup> (1992-2002) chegaram à conclusão de que, quer a polícia tenha ou não prendido o agressor, apenas o seu envolvimento tem um forte efeito dissuasor. Um estudo feito em Berkeley, onde o objetivo era criar um instrumento para ajudar a polícia a standardizar a sua prática e classificar os agressores, colocar-lhes em categorias, consoante os riscos, conclui que o envolvimento e as medidas tomadas pelos

---

<sup>36</sup> National Crime Victimization Survey

agentes policiais, incluindo a detenção, o fornecimento de panfletos informativos às vítimas, a recolha de depoimentos das testemunhas e o suporte às vítimas na obtenção de ordem protetiva, estavam todos associados a uma redução do (re)agressão. Em contraste, quando os policiais não se envolvem, deixando as vítimas e as testemunhas à deriva, os níveis de agressões e re-agressões aumentaram drasticamente (Wordes, 2000).

O estudo realizado por Klein e seus colaboradores (2014) pretendendo investigar a eficácia das medidas penais nos crimes da violência doméstica, numa amostra de quase 500 agressores, que se encontravam em liberdade, vigiados, por crimes de violência contra a mulher e outros tipos de crimes, durante os seus primeiros 6 anos de carreira criminal – e para os quais tinham sido acusados de pelo menos 1 caso de violência doméstica e 1 caso de não violência doméstica – . Analisaram todos os seus processos e acusações dos crimes – violência doméstica e não só – desde os 18 anos de idade até a data do estudo (abril de 2012). A maioria dos agressores eram criminosos ativos (medida da primeira à última detenção) com pelo menos 8 anos de atividades, e 44% possuíam cerca de 10 anos. Por conseguinte, consultaram os números de acusações de violência doméstica contra cada agressor - após os primeiros 6 anos –, para determinar se as acusações/sentenças, nos casos de violência doméstica e de não violência doméstica, estabelecidos nesses primeiros 6 anos das suas ações criminosas, estavam associadas às detenções posterior e reincidência. Nesse estudo, descobriram que mais de 57% dos agressores foram condenados a sentenças mais duras por crimes de violência de género de que por outro tipo de crime. O estudo também demonstrou que, dos 38 gabinetes do Ministério Público naquela ilha, o crime de violência contra a mulher era o que tinha menor probabilidade de ser processado comparado com outras tipologias criminais. Não obstante os agressores condenados por crimes de violência doméstica, a probabilidade de serem encarcerados era significativamente maior, com

sentenças que iam, na sua maioria, de 1 a 30 dias de prisão. Depois dos primeiros 6 anos, 46.1% dos agressores foram presos por pelo menos 1 nova ofensa de violência doméstica até abril de 2012. Dos que foram condenados por crimes de violência doméstica com penas mais pesadas, apenas 0,96 transgrediram-se, cometendo o mesmo tipo de crime. Os que as penas foram mais leves, apresentaram uma média de reincidência mais elevada, 1.65, sobre o mesmo crime. Concluíram que os delinquentes que foram processados e condenados, mais severamente, por crimes de violência doméstica, em comparação com outros tipos de crimes, durante os primeiros anos das suas atividades criminosas em adulto, tinham menos probabilidades de posteriormente cometerem o mesmo crime e serem presos (Klein *et al.*, 2014).

A severidade punitiva pode não estar diretamente relacionada com a diminuição do abuso doméstico, sobretudo do marido contra a mulher. A sua motivação é fazer com que os delinquentes domésticos interiorizem os interditos, deixando bem claro que isso é a única resposta possível, ou seja, responsabilizando-os pelos seus atos, demonstrando que a sociedade não compactua com esses comportamentos. A pena de prisão, como uma limitação da liberdade, é necessária para a prevenção dos delitos, pois, como afirma Cusson (2007), essa é a consequência do crime cometido e a sua severidade punitiva tem a ver com a gravidade do mesmo. A pena, como referiu Poiares (2001) é uma ferramenta jurídica que garante a repressão das divergências onde a infração se constitui, tentando trazer o transgressor às esferas disciplinadoras.

É evidente que qualquer esforço sistemático na erradicação da violência tem de ser multidimensional, com base nos conhecimentos e intervenção de vários fatores, dos governamentais aos não governamentais, como supradito. Apesar do setor de saúde, ter elevado importância, a estratégia tem de ir para além de “tratamento dos sintomas”, ou seja,

o foco tem de ser naquilo que causa o sintoma em si, a desconstrução de atitudes e crenças que afirmam, legitimam a violência e justificam o controlo masculino em relação ao comportamento e ao corpo dos seus congéneres femininos. A outra estratégia tem a ver com facilitar às mulheres o acesso aos recursos e poder, de modo a dar-lhes uma alternativa para a saída da relação violenta. A estratégia de prevenir a violência, também tem de promover a forma não violenta na resolução dos conflitos, entre todos os membros da sociedade (Heise, 1994).

Por exemplo, em Inglaterra, de facto, há evidências de alguns programas (a *REPAIR* por exemplo)<sup>37</sup> direcionados aos agressores – que têm tido resultados satisfatórios – ao atenuar, de uma forma significativa os comportamentos agressivos, contribuindo assim para a melhoria do relacionamento entre os casais. Pois sendo o abuso um comportamento aprendido, esse pode ser mudado com programas de intervenção focado para tal. Os agressores precisam ser contabilizados e responsabilizados pelas suas práticas e condutas, no sentido de proteger as vítimas e futuros relacionamentos.

A despeito disso, em Cabo Verde, foram implementados alguns programas de reabilitação para os agressores de VBG, no qual visava proporcionar-lhos o acesso a um grupo de reflexão que lhes permitisse não só assumir a responsabilidade das suas ações, como também desenvolver atitudes e forma alternativa de relacionar. No entanto, o programa foi avaliado, e apenas 36 grupos de reflexão foram realizados desde o início do programa, em 2012, até à data. Neste momento, restam apenas 2 (dois) grupos. O relatório de avaliação revelou que, por exemplo, no caso de penas suspensas, estas devem ser

---

<sup>37</sup> *REPAIR* (Resolve to End the Perpetration of Abuse in Relationships) é m Programa de Intervenção de Base Comunitária e Familiar para os perpetradores de violência doméstica em Devon. O programa foi um sucesso pois houve diminuição do risco de re-abuso entre os agressores e uma melhoria psicológica significativa entre esses, vítimas e crianças (Kelly & Westmarland, 2015).

condicionadas à participação do arguido, no programa de reabilitação, conforme ditam os artigos 26º e 36º da lei VBG. Mas isso não tem sido o caso. O que demonstra, por um lado, a falta de sensibilidade por parte dos juízes e, por outro lado, a falta de comunicação com as instituições implementadoras do programa (Cardoso *et al.*, 2021). A conclusão de que se tira, a partir da avaliação do programa, é que o programa para agressores de VBG não foi eficaz, por elevado número de desistências, falta de encaminhamento por parte dos magistrados, a não comunicação entre instituições, e a escassez de profissionais especializados, por exemplo, psicólogos forenses, e outros constrangimentos sociais, são apenas alguns dos principais obstáculos à implementação efetiva do programa (Cardoso *et al.*, 2021).

Inúmeros estudos referem que os agressores que foram referenciados pelos tribunais participaram num programa de violência doméstica com um "pacote terapêutico, no qual incluiu *imput* de profissional especializado, como um psicólogo, e tiveram uma taxa muito menor de recidiva (Rosenbaum *et al.*, 2002; Hasisi *et al.*, 2016; Gannon *et al.*, 2019; Beaudry *et al.*, 2021). Os resultados destes estudos sugerem que as terapias baseadas na comunidade, aliadas às intervenções que asseguram a continuidade dos cuidados em ambientes comunitários deveriam ser consideradas prioritárias. Em Cabo Verde não se sabe, até então, de nenhum programa de intervenção com base terapêutica nem para os agressores, nem para as vítimas de VBG, excetuando atendimentos esporádicos. Em nenhum momento nas consultas dos processos foram encontradas referências a acompanhamentos aos programas de intervenção psicológica, por exemplo, às vítimas, após o abuso.

**Síntese:** Cumpre observar, enfim, que o sistema criminal de justiça, por muito tempo, tem resistido criminalizar atos de violência intrafamiliar. Atitude essa que tem levado a inúmeras investigações nessa área, com o intuito de uma melhor compreensão, a saber, as causas da violência doméstica, os padrões dos comportamentos abusivos, a reação das

vítimas; contudo, muitas questões, ainda estão por se desvendar, sobre *modus operandi* na conceptualização da violência doméstica contra a mulher e o estabelecimento de estratégias de intervenção que beneficie, no geral, a comunidade, e em particular a vítima, e que ao mesmo tempo sirva de correção aos comportamentos abusivos do arguido.

Entretanto, o que se tem verificado, de acordo com alguns estudos, que avaliaram os impactos do esforço dos dispositivos legais, que as medidas aplicadas até então, tiveram apenas um efeito limitado na transmutação e desmantelamento da estrutura tradicional em lidar com as mulheres vítimas de abuso. Estereótipos esses que continuam a fazer parte dos agentes da lei, desde os criadores a aplicadores, justificando as suas práticas legais – policiais e jurídicas. Finalmente, é preciso acentuar que levar um caso para o sistema jurídico penal consome recursos e dá muito trabalho, pois a lógica da punição está quase acima das análises empíricas ou da crítica substantiva da criminalização como resposta à violência baseada no género.

Há um descrer no que tange à resposta judicial na dissuasão do crime em apreço. Alguns defendem apenas medidas punitivas; contudo, a maioria concluiu que tem de haver a dosagem certa nas medidas aplicadas. A nosso ver, e tendo em conta o contexto do objeto de estudo acredita-se que a medida penal tem de existir. É de verificar que não se tenciona de maneira alguma, defender a perpetuação de penas de prisão *tour cour*. Ela tem que ser implementada com outras medidas. As sentenças comunitárias (com base no rigor), provam que são a mais eficazes, no caso de crime de VBG; entretanto, tem que se ter em conta a *suigeneridade* do contexto social e cultural onde a violência ocorre. Pois como sugere Bowman (2003) *the remedies that are both possible and likely to be effective in a particular setting must be sensitive to the context in which the violence occurs; ou seja, não se pode transferir um programa de intervenção para o outro contexto, só porque funcionou num*

determinado contexto. A ineficácia do programa de intervenção dos agressores de VBG, pode ter, ou não, a ver com isso.

### **Justiça restaurativa: desafios?**

O aumento da criminalidade e as dificuldades dos dispositivos de controlo formal em reduzir essa taxa tem criado internacionalmente discussões em torno do assunto. A necessidade de criação de mecanismos alternativos de combate ao crime está em todas as agendas, pois sabe-se que o foco maior do sistema penal é o controlo e a punição do delinquent, e não a reconstrução dos relacionamentos; com efeito, houve a necessidade de uma justiça não apenas na retributiva, mas sim restaurativa, na qual o objetivo é reparar relações que tenham sido afetadas por conta da conduta transgressiva (Araújo & Ribeiro, 2019).

A justiça restaurativa é uma abordagem à resolução de problemas que, nas suas várias formas, envolve a vítima, o infrator, as suas redes sociais, as associações de apoio às vítimas e a comunidade. Os programas de justiça restaurativa assentam no princípio fundamental de que o comportamento criminoso não só viola a lei, mas também causa danos às vítimas e à comunidade. Quaisquer esforços para fazer face às consequências de um comportamento criminoso deve, sempre que possível, envolver o agressor, bem como as partes lesadas (United Nations, 2006).

Contudo, o principal desafio da implementação da justiça restaurativa e participativa é, no entanto, encontrar formas de mobilizar eficazmente o envolvimento da sociedade civil e, ao mesmo tempo, protegendo, os interesses das vítimas. Pois como alerta o *restorative justice*<sup>38</sup> *council*, no caso de violência doméstica, o processo restaurativo tem que ser sempre

---

<sup>38</sup> Fonte: <https://restorativejustice.org.uk/blog/restorative-justice-and-domestic-violence-%E2%80%93-getting-it-right>. Acedido a 12 de dezembro de 2021.

levado a cabo por um processo rigoroso de avaliação de risco, e segurança, conduzido por profissionais competentes e treinados para o efeito e que sabem como lidar com casos que implicam dinâmicas de poder e controlo de, como é o caso de violência nas relações íntimas. Isto garantirá que o processo seja conduzido de forma segura e que a vítima seja devidamente apoiada pelos serviços locais.

A lei VBG, como dispositivo originado não só para o carácter punitivo, mas também preventivo, tenta implementar – não tão eficiente, tendo em conta a realidade de país e as estruturas técnicas e humanas das instituições públicas – os mecanismos de proteção. No entanto, a lei, por possuir um carácter preventivo, que “favorece” mais as vítimas, ela acaba por negligenciar o carácter punitivo da aplicação da pena, onde no processo de prevenir os interesses da vítima, esquece do outro importante componente. Punir responsabilizar e ressocializar os agressores – como podemos verificar nas dezenas de processos consultados, onde a maioria teve a sua pena suspensa, particularmente os agressores primários, seja por incongruência com os dispositivos de aplicação da lei seja por minimização dos danos associados a esse crime. Convém salientar que a lei VBG apresenta ainda raízes frágeis, pois em muitos pontos do país, a implementação não é plena em todas as modalidades, particularmente a dimensão punitiva que, perde vez diante de fragmentadas medidas protetivas em relação às vítimas.

Um dos princípios da justiça restaurativa, é a intervenção dentro da comunidade. Ora a comunidade, muito antes do tribunal, é sempre o primeiro a saber sobre o caso de violência. Já foi mencionado nos capítulos prévios: alguns casos, são resolvidos a partir dos dispositivos informais (Bowker, 1983), todavia a maioria chega às portas da justiça, precisamente porque as estratégias tradicionais falharam (Lewis *et al.*, 2000). A literatura alude que a maioria das mulheres procuram a intervenção legal como a forma de mobilizar recursos adicionais, pois,

há evidência de que é mais provável a polícia envolver-se nos casos de violência doméstica e proteger a vítima quando há ordem do tribunal (Stubbs, 2002). Contudo, se a comunidade, como adverte Kelly (1996), é composta de conflitos pessoais e identitários, então o processo que se diz apoiar em normas comunitárias não pode ajudar na resolução dos conflitos, mas enraizar ainda mais o problema. A comunidade não é neutra, acrescenta a autora.

Outros autores advogam que o interesse da vítima será mais bem servido quando se encontrem mecanismos que oferecem maior segurança e proteção. Contudo, muitos quesitos se levantam, no que diz respeito a responsabilidade das decisões alcançadas na justiça restaurativa e sobre a capacidade desta prática em produzir recursos para assistir vítimas de violência doméstica. Não se deveria assumir que a comunidade dispõe de capacidade ou que há um desejo coletivo em oferecer suporte tangíveis ou exercer a vigilância e controlo sobre os agressores (Stubbs, 2002; Kohn, 2010). O processo da justiça restaurativa, como acrescenta Coker (2002), pode falhar tanto nas vítimas – certas dinâmicas de abuso, não são bem entendidas – como os agressores, numa sociedade subordinada, pois falha em abordar o contexto social.

Não obstante, acredita-se que a justiça restaurativa, e os seus princípios básicos, se for implementada *tout court*, pode ser um complemento à justiça oficial e tradicional. Sem esquecer que há certos crimes que colocam desafios particulares ao processo de restauração, como, crimes sexuais, crimes de ódio e violência doméstica” de acordo com *restorative justice council*<sup>39</sup>. No caso de Cabo Verde, por razões várias, há tentativa da justiça restaurativa; contudo, esta fica muito àquem, pois, por um lado, a reforma legal, segundo Bowman (2003) *may be ineffective if it contradicts deeply held notions of gender relations*

---

<sup>39</sup> Fonte: <https://restorativejustice.org.uk/about-restorative-justice>. Acedido a 23 de setembro de 2021

*and masculinity among the population.* Por outro lado, a falta de recursos não só a nível de estrutura como também, humano, financeiro, económico etc, para implementar com eficiência as demandas da justiça restaurativa.

### **Psicologia Forense e violência doméstica: a intervenção juspsicológica**

A Psicologia Forense aborda inquietações sociais, procurando compreender e explicar as motivações subjacentes que levam com que os indivíduos colidam com os preceitos institucionais. Há muito que anda a infiltrar os territórios do Direito, cuja meta se prende com a análise de condutas nos contextos judiciais, particularmente antes da aplicação de medidas penais – procurando, assim, servir de contributo na sentença judicial –, assim como uma ferramenta de coadjuvação em várias técnicas de intervenção utilizadas pelos operadores judiciais, desde os delinquentes até aos colaboradores dessa instituição, a saber, magistrados, juízes, peritos, etc (Gonçalves, 2010).

A Psicologia Forense e o Direito são duas áreas bastante distintas e a forma como procuram e interpelam as questões, também, são diferentes. A Psicologia relata o comportamento humano, em contraste com o Direito que dita e exige como os indivíduos devem se comportar. Como adverte Poiares (2001), a Psicologia, particularmente a forense, em virtude da sua particularidade, o seu papel é ir para além do dito, do visível. Decifrando as peças que edificam uma ação ou um comportamento e as suas “internalidades”, objetivando a apropinuação da verdade. No fundo, o papel do psicólogo forense é colaborar, assessorar o dispositivo legal (Huss, 2011).

A Psicologia Forense, por um lado, ocupa uma função de “quase legitimador” da justiça, porquanto, em vários momentos, são solicitadas respostas para esclarecer os decisores judiciais. Por outro lado, é ainda a ela que se confiam as responsabilidades de uma explanação dos intuitos, que conduziram um sujeito a práticas ilícitas ou não, assim como o

apuramento da verdade e confidencialidade dos acontecimentos narrados e declaração das pessoas envolvidas, como a vítima e outros partícipes judiciais ou cíveis (Gonçalves, 2010).

É uma disciplina que dispõe de uma vasta gama de metodologias forjadas pela Psicologia, que se complementam, ou se quisermos, aliam-se ao conhecimento do Direito, traduzindo no que se convencionou designar de intervenção jus psicológica, incidindo sobre os variados fenómenos desviantes, nomeadamente, a violência doméstica (Poiares & Ramos 2004). Ou seja, a Psicologia Forense/criminal baseia-se na questão, *what is it about the individuals and their experiences that cause them to commit crime and/or to become criminal?* (Wortley, 2011).

Embora a sua história remonte há quase dois séculos, a relação entre a Psicologia e o Direito ainda se encontra muito fragmentada, apesar do reconhecimento do seu contributo para o exercício da justiça. A sua compreensão e integração encontram-se repletas de resistência e desafios, existindo tensões e não comunicações com origem nas suas diferenças; entretanto, não obstante as suas dificuldades, a crescente procura da Psicologia Forense pelo sistema legal e ou tribunais, indica que a Psicologia contribuiu com eficiência para os interesses e necessidades desses dispositivos (Manita & Machado, 2012).

Como adverte Huss (2011), o sistema judicial pode ter um impacto a favor ou prejudicial nas pessoas que chegam às margens da justiça, como por exemplo o caso da violência doméstica. Se o magistrado, a partir das suas decisões, concordar que o delincente doméstico não deveria responder pelos seus atos e muito menos ser acompanhado pelos peritos das áreas comportamentais, ele não só está a afirmar os atos, como também estará a perpetuar o comportamento abusivo, que conseqüentemente irá ter efeitos negativos não só nas vítimas como também nas comunidades locais.

Nesse sentido, consoante o supradito, o psicólogo forense recorre à metodologia jus psicológica para fazer o diagnóstico psicossocial e jurídico do problema. O trabalho de um psicólogo forense nos tribunais tem sido uma mais-valia, sobretudo no crime de violência doméstica. Por isso, a sua indispensabilidade nos tribunais em Cabo Verde, como já aludimos, pois ela inverte-se nestes cúmulos de transtornos sociais. No caso por exemplo de violência doméstica, a metodologia jus psicológica configura uma importante ferramenta de auxílio, do ponto de vista da prevenção primária, contemplando nomeadamente a formação dos professores, polícias, médicos, a criação de respostas às vítimas com apoio de equipas multidisciplinares. Por outro lado, também ao nível da intervenção terciária, designadamente em programas de intervenção com agressores, e entre outras estratégias de intervenção (Milan & Evans, 1987). Haja em vista a necessidade e a indispensabilidade de (re)educação não só dos agressores, mas também de toda a comunidade, em prol da defesa e promoção dos direitos e deveres humanos.

A Psicologia Forense comporta uma valência acrescida, podendo intervir não só ao nível do indivíduo, como também ao nível da comunidade na qual se encontra inserida, estabelecendo assim parcerias para a integração, igualdade e não discriminação em todas as áreas de vida. O psicólogo forense para poder trabalhar em casos de violência doméstica tem de adotar uma intervenção mais comunitária onde abrange suporte socioeducativo e apoio psicológico, sempre com objetivos de aliviar o sofrimento dos envolvidos, como a vítima, ao mesmo tempo traçar estratégias de ações que auxiliam nas mudanças e na segurança dos envolvidos. Daí que o seu trabalho não envolve estar sentado num escritório, mas é junto da justiça, em ambientes distintos com intervenções individuais (Costa & Brandão, 2005).

A entrada da Psicologia Forense na sede do Direito nunca foi uma tarefa fácil. Ela é definida por diversos autores, como uma subdisciplina, que surgiu dentro da Psicologia da

Justiça, que se encarrega da execução do saber psicológico ao ofício das decisões jurídicas (Manita & Machado, 2012), pelo que a perícia da personalidade, é a ela imprescindível, ou seja, um campo da Psicologia que se dedica na colheita, pesquisa/exames e apresentação de resultados para finalidades jurídicas, aplicadas de maneira específica a um determinado processo legal (Gudjonsson & Haward, 2016; Haward, 1981). O fator chave para o sistema judicial, especialmente no decorrer da sentença, são os relatórios do estado mental do arguido. Os relatórios de avaliação, que envolve um exame do estado mental, juntamente com a avaliação de risco, são imprescindíveis para o tribunal na tomada da decisão final (Adjorlolo & Chan, 2019).

Já dizia o Braman (2010), que um magistrado consciente das suas limitações e erro na hora de tomar decisões, recorre à psicologia forense em especial, com base no conhecimento científico, para analisar e investigar o que caracteriza esse erro e tentar minimizá-lo, com o intuito de auxiliar os juízes na tomada de decisão mais manteúda e imparcial, como através da avaliação psicológica e da perícia da personalidade. Porque a avaliação psicológica forense objetiva trazer à clareza, através de uso de ferramentas próprias de saber científico, a conduta do delinquente (Machado, 2006). Ou seja, uma visão radioscópica do sujeito (Poiars, 2001). Um panorama, que já é bem aceite e desenvolvido nas instâncias judiciais europeias e americanas, mas que não tem implicações e aplicabilidade nas práticas judiciais e nas instâncias africanas, mais precisamente em Cabo Verde.

Na ordenação jurídica cabo-verdiana, quando uma decisão é tomada, esta tem de ser justificada através da composição de uma sentença ou acórdão, no qual, explicam, segundo Latas (2006), a motivação que consideram verídica e provada de uma “dada facticidade com base em algumas provas produzidas e não noutras, dando visibilidade e tornando pública a forma como, em concreto, valorou as provas produzidas”. Assim, uma das ferramentas que

podem ser usadas como testemunho, solicitadas pelo juiz, é a perícia da personalidade, como mencionado acima, cada vez mais em voga nos outros países, nomeadamente em Portugal, como a perícia da personalidade do abusador sexual de menores (Manita & Machado, 2012).

Consideramos imprescindível que haja aplicação e recurso às perícias psicológicas, tanto do arguido como das pessoas envolvidas, a nosso ver fundamental na ação do julgador, que aquando do seu procedimento decisório, como postula o artigo 216º *Perícia sobre a personalidade do CPP do país* (Código de Processo Penal, 2005).

Na perspetiva de Carmo (2005) a perícia da personalidade e avaliação psicológica no contexto penal, conforme está relatada no artigo 261.º do CPP cabo-verdiano, “tem lugar quando a perceção ou a apreciação dos factos exigem especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos”. Entretanto o que se faz crer é que a perícia psicológica e avaliação psicológica até então não tem vindo a assumir grande importância na decisão do juiz em Cabo Verde. Por falta de técnicos especializados na área, ou por desconhecimento da sua necessidade?

### **Fatores que influenciam as decisões judiciais**

A decisão judicial depende de fatores díspares, particularmente no que diz respeito ao Direito Penal. Esta sua função não recai só na análise concreta do caso, mas em julgar a ação em si. E isso implica analisar estórias pessoais únicas que terão efeitos consideráveis no destino do indivíduo que transgrediu (Louro, 2017).

Sendo seres humanos dotados de idiossincrasias próprias, existe um conjunto de fatores que influencia o juiz nas suas tomadas decisórias. A mente, na sua essência, distorce a realidade de acordo com o meio envolvente, ou seja, “não produz a realidade com a qual contacta”, mas sim faz uma reconstrução daquela “realidade”, fundamentando a partir das experiências vividas, o contexto cultural, religioso e político, onde o sujeito se encontra

inserido (Kunin *et al.*, 1992). A decisão jurídica, não é inata aos magistrados, muito pelo contrário, é a confluência de diversos fatores – educação, cultura, família, redes de amigos, comunidade, comissão política, atitudes e crenças pessoais, leis judiciais etc.. A cada um dos magistrados, carrega consigo o saber de vida e o saber judicial, por outras palavras, sistema formal e informal, que interagem entre si, camuflam e conjugam-se, dando resultados como decisão judicial sobre um determinado processo, que tem ao seu encargo (Manita & Machado, 2012). Ainda, como adverte Salinas (2003), tanto o juiz como a juíza, não têm imunidade as crenças, aliás, estas os auxiliam, sem muitas vezes, conscientes disso, persuadindo nas suas tomadas de decisão.

Alisson e companheiros (2006) advertem que a decisão judicial, não é assim, um procedimento maquinal da execução da lei. Desde modo, para que haja a apropriabilidade e ajustabilidade, ela tem de ser amparada em processos metódicos e canónicos, nos saberes científicos, dar mais ênfase às informações da pesquisa relativamente a aspetos não judiciais, e acima de tudo, fazer uma avaliação dos casos com base no saber científico.

Todavia, o percurso para a tomada da jurídica está aliada um conjunto de processos, desde a pesquisa e execução da lei em si até a interpretação da mesma e dos factos. A interpretação dos factos tem a ver com a subjetividade de cada juiz. Porquanto, como já foi frisado, são seres humanos com as suas idiossincrasias, e não é menos verdade que podem ser afetados pelas suas crenças pessoais, culturais e até mesmos processuais nos seus papéis como agentes com poder de decisão.

Por depender de fatores díspares, a imparcialidade nas decisões das sentenças, não é condição *sine qua non* da promoção da real justiça (Sena, 2010). Como diziam Viehweg (2008) e Perelman (2000) o magistrado, sem se aperceber, transforma-se prisioneiro dos termos da linguagem comum. Depois, ainda que de forma inconsciente, os juízes simbolizam o

representar da teoria do senso comum. Ele está longe de ser imparcial, muito pelo contrário, pois encontra-se apinhado de pensamentos ideais que contêm normas estáticas através de leis jurídicas, que não são impreterivelmente justas (Sena, 2010). Os seres humanos, parafraseando Michon e Pakes (1995), são limitantes ou ineptos de se racionalizar na sua percepção íntegra e estrita, pois não são aptos de ter em conta todas as alternativas abrangíveis. Aquilo que se considera real, porém, é muitas das vezes um enigma, o incógnito, o invisível. Assim, seja qual for a norma estabelecida pela racionalização, este opta por escolher algumas perspectivas em desabono de outras. Daí que, o racional não é o denominador comum daquilo que é a essência, mas sim aquilo que generaliza a experiência (Wittgstein, 2002).

Ademais, o aplicador da lei, de antemão, não determina de uma só vez, o conflito, porquanto, ao juiz é permitido tomar decisões ou optar sobre, se a norma jurídica a ser empregue é ou não adequada. Nesse sentido, pode induzir a um realismo judicial em que coloca o juiz no centro das decisões como senhor e dono da verdade. Não dando conta de que a decisão judicial sobre um assunto jurídico não é o desfecho ou consequência de um pensamento que se publicize, dado que a decisão da aplicação jurídica não está mormente presidida por um pensamento característico, mas por um alegar entre vários sujeitos (Amado, 1996).

Estudos revelaram que existem vários fatores que influenciam os juízes aquando da tomada das decisões acerca da severidade das medidas penais (Poiares & Louro, 2012). Nos Estados Unidos por exemplo algumas pesquisas revelaram que os juízes recorrem a fatores legais, extraleais e empíricos – factos gerais sobre o mundo, sociedade, instituições e comportamento humano – como parte das suas decisões judiciais, de acordo com Baum, 2008 e Posner, 2010.

No entanto como refere, Brown e Halley (2002) nem todos os dados empíricos e fatores legais são utilizados de forma justa na tomada de decisões judiciais, pois a forma como os magistrados utilizam esses fatores, como parte dos seus processos de tomada de decisão, assenta na perspectiva judicial individual. Como tal, os juízes devem estar cientes dos efeitos diretos das suas tomadas de decisões sobre a equidade no processo de julgamento (Blanck, 1990).

### ***Antecedentes criminais***

Um dos fatores legais e que está muito bem documentada na literatura são os antecedentes criminais. Para Roberts (1997), os antecedentes criminais desempenham um papel vital no sistema judicial, particularmente em quase todos os países ocidentais, seguidos de outras variáveis, como a gravidade do crime e o histórico criminal do agressor. Nos estudos de Chandler e Torney (1981), Kingsnorth *et al.* (1999), quando o agressor possuía antecedentes criminais, haveria maior probabilidade de o caso culminar em condenação do sujeito. Pois, os que teem reincidência, apresentam maior risco (Vieira-Pinto *et al.*, 2022). A repetição do crime, e reincidência, principalmente nos casos de abuso doméstico, tendem a ser mais graves ou resultar em danos mais graves comparativamente aos arguidos primários (Vieira-Pinto *et al.*, 2022). Nos estudos de Davis *et al.* (2003), e Cunha (2014), no caso do crime de violência doméstica, por exemplo há uma relação significativa entre antecedentes criminais e severidade de medidas penais.

### ***Escolaridade dos arguidos***

Numerosos estudos constataram que o nível de educação influencia a tomada de decisões judiciais, apesar de não ter sido encontrada qualquer relação significativa. Como por exemplo Wooldredge (2010) e Freiburger (2011) descobriram que os agressores que possuem pelo menos o ensino secundário têm menos probabilidades de serem presos comparados com

os seus congéneres que não possuem o secundário. Numa amostra de 115.674 agressores que foram condenados por crimes federais, Franklin (2015) examinou até que ponto o nível de educação tem algum impacto na condenação e duração da pena. O autor conclui que da totalidade da amostra, um terço não tinha concluído o ensino secundário. Nos estudos de García *et al.* (2014) observaram que os agressores sem uma qualificação profissional tinham uma probabilidade consideravelmente maior de serem condenados à prisão do que os que tinham uma qualificação profissional. *As Reitz (1996) notes, judges . . . make decisions about whole people, and not about generic offenders who have committed offense X and have criminal history Y. Not surprisingly, they often feel moved to take the individual offender's circumstances into account in deciding what to do.*

### **Idade**

Alguns estudos concluíram que a socialização do sujeito no ambiente familiar desestruturado são um dos fatores de risco na transmissão de violência entre as gerações, embora nenhum fator isolado possa por si só explicar o fenómeno de violência doméstica. (Kalmuss, 1984; Oliveira & Sani, 2009). Todavia, a literatura alude que a idade é outro fator que influencia as decisões judiciais. Autores como Doerner e Demuth, 2010; Spohn e Holleran, 2000; Steffensmeier *et al.* 1998, nas suas pesquisas descobriram que os juízes consideram os jovens infratores como mais perigosos do que os seus homólogos mais velhos, representando uma maior ameaça para a sociedade. No entanto, não foi encontrada nenhuma relação com significância estatística no que diz respeito à severidade da punição. Uma das razões da disparidade nas sentenças – entre os mais novos e os mais velhos – foram encontradas nos estudos de Steffensmeier, *et al.* (1995). Numa entrevista aos juízes, descobriram que preocupações como culpabilidade, proteção da comunidade, etc faziam parte dos critérios extralegais que consideram nas decisões.

### ***Presença dos filhos na altura da agressão***

A preocupação sobre como o sistema de justiça de família responde a crianças que presenciam violência em casa não é nova. Inúmeros estudos concluíram que as crianças que vivem ou viveram com experiências de violência doméstica expressam problemas generalizados, como ansiedade, medo, insegurança, relutância em confiar nos outros, baixo desempenho escolar, e delinquência (McGee, 2000; Mullender *et al.*, 2002; Buckley *et al.*, 2007).

Vários estudos, como por exemplo, Radford *et al.* (1997); Mullender *et al.* (2002); Harrison (2008); Thiara (2010); Thiara e Gill (2012), salientam que é problemático presumir que a relação entre uma criança e um pai agressor não é afetada pela violência, e que os procedimentos de contacto são frequentemente invocados pelos agressores como arma de arremesso para continuar a controlar as suas parceiras e conseqüentemente as crianças. As decisões judiciais sobre contactos com um dos agressores, que não têm em conta a segurança do menor, põem em perigo, não só fisicamente, como também emocionalmente as vítimas e as crianças.

Num estudo levado a cabo por Dinovitzer e Dawson (2007), onde examinaram o papel da família na sentença dos arguidos – a probabilidade de prisão efetiva, e as variáveis (idade, presença dos filhos, emprego etc) determinantes da duração da pena –, concluíram que quando o arguido tem um filho com a vítima, a duração da pena aumenta em nove dias. E quando há presença dos filhos na agressão, a pena é mais pesada para os agressores do sexo masculino.

Segundo Harne (2003 e 2011), poucos agressores entendem que a violência contra a mãe, afeta emocionalmente os seus filhos. O autor ainda acrescentou que os pais que são violentos para com os seus parceiros estão em média menos envolvidos com os seus filhos e

são, na maioria das vezes, inconsistentes com, os cuidados físicos. A exposição da criança à violência entre os progenitores, é uma forma de maus-tratos à criança, e, conseqüentemente, uma ofensa criminal (Whitcomb, 2004).

Portanto, cabe às instituições, que trabalham com crianças, particularmente as em situações de risco, investigar nesses casos e intervir. Em Cabo Verde, existe, por exemplo o Instituto de Cabo-verdiano da Criança e Adolescente<sup>40</sup> (ICCA). Cabo Verde ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1991, que entrou em vigor no ordenamento jurídico nacional através da Lei nº29/IV/91 de 30 de dezembro.

#### ***Vítimas observadas no hospital/ gravidade do ferimento***

No que tange a gravidade do ferimento, no qual a vítima foi observada no hospital, um fator também a ter em consideração na altura da tomada da decisão, os estudos encontraram resultados mistos. Os estudos de Schmidt e Steury (1989) aludiram que a intervenção médica sobre a vítima não teve qualquer efeito na tomada de decisão, mas foi relevante para acusações mais graves (Kingsnorth *et al.*, 2001). Contudo, Hirschel e Hutchison (2001) descobriram que o ferimento da vítima apoia a alegação desta de ter sido violentada pelo agressor e isso conseqüentemente aumenta a probabilidade de condenação, daí a gravidade do ferimento, correlacionou significativamente com a tomada das decisões judiciais. Numa investigação simulada às sentenças aplicadas, em UK, Gilchrist e Blisset (2002) chegaram a conclusão de que os magistrados muitas vezes minimizam a gravidade da agressão quando esta é cometida contra o parceiro íntimo, e que os danos causados por outro

---

<sup>40</sup> O Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), anteriormente designado por Instituto Cabo-verdiano de Menores (ICM) foi criado pelo Decreto nº 90/82 de 25 de setembro há cerca de 35 anos. Entretanto, decorridos que foram, 17 anos sobre a data da aprovação do último Estatuto do ICM, aprovado pelo Decreto regulamentar n.º 1/2000 de 27 de março, este continua a vigorar, não obstante as diversas transformações ocorridas, designadamente a nível estrutural. B.O. I série – Nº 52-2017

tipo de violência são vistos como sendo mais graves, porquanto os delitos não domésticos parecem ter impacto maior na comunidade em geral (Fradella & Fischer 2010; Hartman & Belknap 2003; Hessick 2007). Não obstante, se estas percepções – de que a violência doméstica é um assunto de foro privado e que afeta somente quem está no relacionamento – persistem, é mais provável que as leniência das sentenças perdurem (Bond & Jeffries, 2014).

Alguns autores consideram que é inadequado, falar de infrações, "mais" e "menos" severa, quando se trata de violência doméstica, porque o contexto em torno do delito é de extrema importância. Uma infração que parece ser "menos severa" no papel pode, de facto, fazer parte de um ciclo vicioso de controlo, ameaça e comportamento coercivo. O que muitas vezes leva ao homicídio (Regan *et al.*, 2007). Por esse motivo, todos os crimes de abuso doméstico deveriam ser considerados graves, devido à forma como essa se interconecta (Westmarland *et al.*, 2018).

#### ***Uso de armas na altura do abuso***

Kerstetter (1990) defendeu que o envolvimento de uma arma na ofensa constituía um preditor significativo da decisão de acusar por parte do procurador, em casos em que vítima e agressor eram conhecidos, já que por um lado constitui prova do crime e, por outro, acarreta um efeito agravante. Também em Spohn e Holleran (2001), a presença de uma arma se mostrou positivamente correlacionada com acusação por parte do magistrado. Beichner e Spohn (2005) também concluíram que, em relação aos casos de agressão sexual, investigados pelo Departamento Policial de Miami, nas situações em que o suspeito tinha usado uma arma, a probabilidade de haver acusação era mais elevada. Apesar de não ter sido encontrado a significância estatística, García *et al.* (2014) descobriram que os agressores foram condenados de forma mais severa como resultado do uso de armas ou ameaças de morte ao seu parceiro. Schmidt e Steury (1989) salientaram que a utilização de uma arma por parte do

arguido durante um episódio violento aumenta a probabilidade de acusação; contudo não houve nenhuma correlação significativa com a medida punitiva (Alderden, 2008; LaFree, 1981).

### ***Consumo de substâncias***

Um dos fatores de riscos mais investigados e mais comuns encontrados na maioria dos casos da violência doméstica é o consumo de substâncias, como o álcool e as drogas. Estudos encontraram correlações positivas entre a dependência de álcool e marijuana durante o ato de violência (Gonzalez *et al.*, 2014, Reingle *et al.*, 2013). As conclusões destes estudos foram suportadas pela investigação realizada por Lund (2014), que frisou que em todos os casos que envolviam violência física e psicológica, 61.9 dos delinquentes eram consumidores, principalmente álcool e droga e, contudo, concluíram que o consumo dessas substância, não são fatores determinantes da violência doméstica. Os estudos de Kingsnorth *et al.* (2001) aludiram que o consumo de substâncias correlacionou positivamente com a decisão jurídica do procurador na altura de acusação, pois a prática aditiva é vista como um fator de risco para futuras recidivas. Martin (1994) afina na mesma linha referida, que a probabilidade de acusação em relação ao arguido que consumia substâncias, como álcool e droga eram maiores.

Na Inglaterra, por exemplo, de acordo com *British crime survey figure*, em 2013/2014, o álcool está relacionado com 53% dos incidentes violentos<sup>41</sup>. Os custos sociais e económicos dos danos relacionados com o consumo dessa substância rondam os 21,5 mil milhões de libras por ano, e é visto como um dos motores dos crimes domésticos.

---

<sup>41</sup> Fonte: [https://www.alcoholpolicy.net/domestic\\_violence/page/2/](https://www.alcoholpolicy.net/domestic_violence/page/2/). Acedido a 10 de dezembro de 2021.

Consequentemente, o país, resolveu tomar medidas drásticas, ao implementar *sobriety tag*<sup>42</sup>. Este será implementado por profissionais treinados para o efeito, sinalizando os infratores, auxiliando naquilo que necessitam, com foco na prevenção de futuros crimes e vítimas.

Em Cabo Verde, de acordo com os dados da INE, em 2018, mais da metade da população prisional havia consumido bebidas alcoólicas (83.6%). O uso desta substância encontra-se maioritariamente no género masculino, 84.4%. Em termos de idade, a maioria consumidora (acima de 85%) está entre 25 anos de idade a 39. O relatório, acrescenta ainda que *70,1% dos reclusos declararam que realmente cometeu o crime que está sendo julgado ou condenado, alegando como principais causas o efeito das bebidas e/ou drogas (35,3%)*. Não obstante o consumo de substâncias podem aumentar a prevalência de comportamentos violentos, entretanto, como já foi mencionado, a violência contra a mulher não é resultado do consumo de álcool ou de drogas, mas da própria estrutura social baseada na construção da masculinidade tóxica e misógina.

A parte que se segue debruça-se sobre a componente mais prática, a metodologia, os resultados, a discussão, conclusão e as implicações práticas do nosso estudo.

---

<sup>42</sup> O álcool *tag* é uma medida que foi implementada em Inglaterra e Wales com o objetivo de diminuir os crimes relacionados com o consumo de álcool. As *tags* podem distinguir a diferença entre bebidas e outros tipos de álcool - tais como álcool sanitário ou perfume. Funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e também podem dizer se o indivíduo tenta bloquear o contacto entre a *tag* e a sua pele. Desde o seu lançamento, em outubro de 2021, mais de 100 agressores foram sinalizados em Wales e esse provou ser eficaz, pois 95% dos infratores permanecerem sóbrios nos dias monitorizados. De notar que a *tag* não é usada em agressores com dependência de álcool. Fonte: <https://www.gov.uk/government/news/sobriety-tags-launched-in-england-to-tackle-alcohol-fuelled-crime>. Acedido a 15 de dezembro de 2021.

## Parte II

### Método

O propósito que alicerça a nossa investigação tem a ver, por um lado, com o suporte teórico acerca do tópico em apreço, ancorando-se, em termos de coleta de dados, numa abordagem quantitativa, utilizando o desenho descritivo-correlacional. O que vai ao encontro com os objetivos propostos, que é analisar as decisões judiciais através da severidade das penas e, ao mesmo tempo, perceber quais são as variáveis que se encontram relacionados com decisões judiciais.

Convém salientar, também, que o nosso estudo seguiu uma abordagem jus psicológica na recolha dos dados, numa metodologia que segue quatro passos: *captação/assimilação*, *descodificação*, *compreensão* e *explicação* (Poiares, 2004). No quadro da nossa investigação, a primeira fase (*captação*) enformou-se em pesquisas bibliográficas e informações estatísticas obtidas junto de entidades que recolhem informações do fenómeno de VBG, nomeadamente Ministério da Justiça, Polícia Nacional, INE, ICIEG, etc, através dos dados estatísticos – que se mostram de acrescida relevância para a estruturação desta fase de investigação – Ainda na primeira fase, foram consultados os processos das decisões judiciais do crime em estudo, e a sua severidade penal, procurando descortinar se existiu qualquer abordagem juspsicológica que permita a utilização da dimensão psicologização prevista no índice.

Recolhidas as informações consideradas pertinentes, procuramos *descodificar e compreender* essa problemática, assim como interpretar o que está subjacente às decisões judiciais com a intenção de conferirmos uma maior profundidade aos resultados chegados. A exploração das decisões judiciais em Cabo Verde, decorreu a partir do uso do Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização - Criminalização Secundária versão Revista (ISPP

(CS) - R) - (Poiares e Branco, 2021), facultando a colheita, organização da informação recolhida, bem como, ao mesmo tempo, explorar o conteúdo discursivo do julgador. Os dados inseridos no instrumento são depois tratados quantitativamente.

### **Amostra**

Nesta pesquisa, usamos a amostragem não probabilística, por conveniência, dado que, de forma intencionada, recolhemos apenas os processos que têm a ver com o crime da VBG, transitados em julgados, com o intuito de adequar-se ao objetivo do estudo em questão. Por conveniência, pois foram abordados os tribunais, a partir de um pedido por escrito, simplesmente, porque representa o local onde se encontra disponíveis a população da pesquisa, nesse caso, as decisões judiciais.

Neste sentido, foram consultados 85 processos judiciais e, desses, foram retirados 13. Seis por os arguidos terem sido absolvidos, dois, porque a vítima desistiu do processo criminal contra o arguido, e três, porque houve a tentativa de homicídio, e neste sentido, a moldura penal e a pena mínima e máxima foram superiores ao que está previsto na lei VBG (12-60 meses). Finalmente, em 2 processos, a vítima era a filha do agressor. Desta forma, a amostra relevante para a análise, foram 72 processos.

Dos 72 processos, 44 foram obtidos em tribunais de 1ª instância, e 28 no Tribunal da Relação de Sotavento e no Supremo Tribunal de Justiça. Esses últimos, foram consultadas *online* através da base de dados do Conselho Superior de Magistratura e os restantes, foram disponibilizados por um dos operadores, em formato digital. No que diz respeito a esses 28 processos, embora fosse possível, para todos eles, recolher informação sobre as penas aplicadas em 1ª instância, a informação sobre alguns dados sociodemográficos, como por exemplo a idade e anos de escolaridade, faltava em alguns deles.

***Decisões jurídicas consultadas em diferentes tribunais judiciais do país***

As decisões judiciais foram consultadas em diferentes tribunais do país, nomeadamente, os tribunais judiciais das comarcas de: Tarrafal (13.9%); Santa Catarina, (23.6%); Santa Cruz (22.2%) e Praia, com 11.1% (Ilha de Santiago). São Filipe (11.1%), e Mosteiros com 1.4% (Ilha do Fogo). Ribeira Grande (1.4%) e Porto Novo, com 1.4%. (Ilha de Santo Antão). Na ilha do Sal constamos com 6.9%, a que acrescem com 4.2% na Boa Vista; e por fim, temos São Vicente, com 2.8%.

### ***Tipo de Tribunal***

No que se refere ao tipo de tribunal, verificamos que 61.1% são sentenças do tribunal da 1ª instância, e 34.7% são os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Ao passo que, 4.2% são os acórdãos do Tribunal da Relação de Sotavento. No entanto, só foram consideradas as penas aplicadas nos tribunais da 1ª instância, como já referimos.

### ***Género do magistrado do julgamento***

Considerando o número dos magistrados envolvidos nos processos, verificamos que 62.2% são do sexo masculinos, 37.8% são do sexo feminino.

### ***Idade dos arguidos***

No que concerne ao fator idade (n=55) verificamos que a idade dos arguidos varia entre 20 e 63 anos, cujo a média total é de 38.1 e desvio-padrão de 10.34.

### ***Níveis de Escolaridade***

No que se refere às habilitações literárias, a maioria possui o ensino primário, 64.2%, seguido do ensino secundário, 22.6%, iletrado 5.7%, enquanto a licenciatura conta com 3.8% e o mestrado 3.8%.

### ***Estado Civil***

Quanto ao estado civil, a maioria dos agressores é solteira (85.7%) e os restantes são casados.

### ***Profissão***

No que concerne ao enquadramento laboral dos agressores), verificamos que 31% trabalha no setor primário (pescador, agricultor, pastor etc.); 42.9% no setor secundário (pedreiro, barbeiro, carpinteiro etc.) e 9.4% no setor terciário (Professor e Polícia), Contudo 16.7% dos arguidos declararam serem trabalhadores, sem especificação do que realmente fazem.

### ***Concelho/Naturalidade***

Quanto ao concelho dos arguidos, a 26.7% são do conselho de Santa Catarina; 13.3% Santo Amaro Abade; 13.3 de São Tiago Maior; 6.7% são da Nossa Senhora da Graça, 6.7% de São Lourenço, e 6.7% de São Miguel. 4.4% da Nossa senhora das Dores e 4.4% São Salvador do Mundo. Nossa Senhora de Conceição consta com 2.2%; Nossa Senhora da Luz, 2.2%; Santo António das Bombas, 2.2%; Santa Catrina Fogo com 2.2%; Mosteiros 2.2%, e por último 2.2% dos arguidos declararam sendo naturais de Guine Bissau; 2.2% naturais da ilha do Fogo, e 2.2% declarou ser natural da ilha São Tomé e Príncipe.

### ***Anamnese Judicial dos arguidos: dimensão clínica***

#### ***Consumo de substâncias - álcool***

No que consta ao consumo de bebidas alcoólicas, 58.3% dos arguidos declararam-se como não consumidores de álcool. Nos restantes (41.7%), no entanto, foram referidos nos processos como consumidores constantes de bebidas alcoólicas.

#### ***Consumo de substâncias – outras drogas***

Relativamente ao consumo de droga, apenas havia indicação de que 4.2%, dos agressores consumiam drogas.

### ***Dimensão Forense***

#### ***Posse de armas***

Quanto à posse de armas, verificamos que 26.4% dos agressores possuíam armas na altura da agressão e 73.6% não possuíam.

#### ***Tipo de armas usadas***

Dos que possuíam armas na altura da agressão, 8.3% usou a faca para agredir a vítima, seguido de catana, 4.2%; maxim, 4.2%; pau, 4.2%; enquanto, 1.4% usou chave de fenda; 1.4% a pedra; 1.4.% garrafa, e chicote, também, com 1.4%.

#### ***Antecedentes Criminais***

No que diz respeito aos antecedentes criminais, verificámos que 62.5% eram arguidos primários e 37.5% tinham antecedentes criminais.

#### ***Crimes anteriores***

Dos agressores que tinham antecedentes criminais, em 28.6%, tinham praticado crimes da VBG; 2.9% crimes de danos; 1.4% crime de injúria; 1.4% VBG e ofensa e por fim, 1.4% abuso sexual de menores.

#### ***Penas aplicadas relativamente ao crime anterior***

A respeito da pena aplicada ao crime anterior em 29.2% dos agressores foi atribuída a suspensão da execução da pena simples, e a 2.8% foi aplicada apenas multa. Os absolvidos (1.4%), com termo identidade e residência (1.4%), Prisão com pena suspensa, serviços comunitários (1.4%) e a suspensão da pena com multa, conta também, com 1.4%.

#### ***Tipos de violências praticadas***

No que concerne aos dados dos processos relativamente aos episódios de violência, deparamos com o seguinte: Física (19.4%); Psicológica (5.6%); Física e Psicológica (61.1%); Física e Sexual (4.2%); Física, Psicológica e Sexual (4.2%); e Física, Psicológica e Económica (5.6%).

#### ***Consequência do abuso***

Quanto ao efeito visível do abuso, verificamos que 38.9% das vítimas foram observadas nos hospitais, 61.1% não chegaram a ir aos serviços de saúde.

***Tempo que decorreu entre a queixa e a sentença***

No que corresponde ao tempo que mediou entre a queixa e a sentença (n = 45), verificamos que o tempo medio foi de 19.5 meses com um desvio-padrão de 11.6 meses, sendo o mínimo 4 e o máximo 54 meses.

***Presença dos filhos na altura da violência***

Em referência à presença dos filhos no ato da agressão, podemos verificar que em metade (50%) os filhos presenciaram o abuso e mais outra metade (50%) não se encontrava presente no local onde ocorreu a violência.

Os dados sociodemográficos suprarreferidos encontram-se em apêndice I.

**Material**

***Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização (Criminalização Secundária) – Revisto (ISPP (CS) – R)***

Como já foi referido, com o intuito de alargar os conhecimentos em relação à medida penal e as suas aplicações no que concerne ao crime *sub judice*, iremos utilizar o Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização - Criminalização Secundária versão revista - (ISPP (CS) - R) (Poiares, 2009; Poiares & Branco, 2021).

O ISPP (CS) – R é um instrumento que engloba duas escalas: ISP – Índice de Severidade Penalizadora e IP – Índice de Psicologização. O instrumento, está agrupado em três partes: arguido, processo atual e medida final adotada.

A primeira secção encontra-se dividida em quatro dimensões: sociodemográficas (*e.g.* naturalidade, género, estado civil), cultural (*e.g.* etnia, escolaridade), clínica (referência

a diagnóstico de saúde mental, adições) e forense (realização de avaliação psicológica forense, realização de perícia de personalidade, antecedentes criminais).

Na segunda secção temos medidas de coação e crimes imputados. Deparamos com *itens* referentes a informação sobre o processo atual, como por exemplo, crimes o sujeito está pronunciado, medida de coação, tipo de crime acusado, princípio incriminador

E o último eixo, a medida final adotada, (*e.g.* pena aplicada, pena não reclusiva, pena acessória) medidas que foram determinadas em tribunal, se foram promovidas ou requeridas, assim como, se foram tidas em conta as avaliações psicológicas ou perícias da personalidade, quer no agravamento quer na atenuação da pena.

Em relação ao preenchimento do instrumento, as respostas dos *itens* variam entre a escolha múltipla, resposta específica e direta. O instrumento é exclusivamente aplicado a casos com trânsito em julgado. A duração da aplicação depende do volume processual do caso. Após o preenchimento do instrumento, os dados são normalmente inseridos e tratados através do método estatístico com programas como SPSS ou Excel.

O ISPP (CS) – R possui também uma folha de rosto, com informações sobre o tribunal, nomeadamente a comarca, se é singular ou coletivo. Também solicita o número de arguidos; as penas aplicadas a cada um; a data e a assinatura do(a) assistente de investigação (Poiars & Branco, 2021). O instrumento encontra-se em anexo I).

### ***Cotação do Índice de Severidade Penalizadora (ISP)***

Para efeitos de cotação, há um manual de instruções com todas as informações precisas para a elaboração da informação recolhida, existindo ainda uma plataforma de cotação desenvolvida por Branco e Poiars (2013), Poiars e Branco (2021), onde os

resultados são introduzidos, permitindo a aquisição do índice de severidade punitiva aplicada a cada decisão judicial.

O ISP avalia a severidade penalizadora, resultando o seu valor da combinação de quatro cotações parciais: Pena Reclusiva (PR); Suspensão da Pena Reclusiva; Pena Não Reclusiva (PNR); e Pena Acessória.

Convém salientar que cotação parcial da PR, é a mais importante, com maior peso na cotação do ISP. Para a pena a atribuir a um determinado crime, a legislação penal define um limite mínimo e um limite máximo. Para o crime de VBG, por exemplo, esses limites são (em meses) de 12 e 60. Neste caso, a severidade da PR aplicada varia numa escala de 12 a 60, que é transformada numa escala de 0 a 100. Assim, a penas aplicadas de 12, 36 e 60 meses, por exemplo, correspondem respetivamente cotações de 0, 50 e 100. Essa transformação para uma escala de 0 a 100 tem a vantagem de permitir que para outros crimes, quaisquer que sejam os seus limites mínimo e máximo, a severidade da PR seja sempre representada numa mesma escala (Branco & Poiars, 2013; Poiars & Branco, 2021).

Se ocorrer suspensão da PR, subtrai-se à cotação da PR anteriormente calculada o valor 30; se a suspensão da pena for acompanhada com deveres ou regras de conduta ou regime de prova, subtrai-se à cotação da PR o valor 20. Se a PR aplicada for substituída por uma PNR, subtrai-se à cotação da pena PR o valor 45. Se for aplicada uma Pena Acessória, adiciona-se à cotação da PR o valor 15 (Branco & Poiars, 2013; Poiars & Branco, 2021). Ainda, segundo os autores, a cotação final do ISP, que resulta destas quatro cotações parciais, é apresentada numa escala de 0 (severidade mínima) a 100 (severidade máxima).

### ***Índice de Psicologização (IP)***

No que diz respeito aos IP, acrescentamos que este é uma escala que avalia o grau de integração de procedimentos psicológicos/psiquiátricos no processo e decisão condenatória.

O valor do IP é o somatório da cotação dos seguintes sete *itens* (os números entre parênteses indicam-se a cotação de cada um): 1. Realizada avaliação psicológica forense (2); 2. Realizada perícia de personalidade (2); 3. Consta informação psicológica, por exemplo, parecer (1); 4. Consta informação psiquiátrica, por exemplo, parecer. (1); 5. As avaliações, perícias ou outras diligências psicológicas serviram de fundamento à decisão (2); 6. As avaliações, perícias ou outras diligências psiquiátricas serviram de fundamento à decisão (2); 7. A avaliação psicológica forense, a perícia de personalidade ou outras diligências psicológicas e psiquiátricas determinaram o agravamento ou atenuação da pena (2) (Branco & Poiares, 2013; Poiares & Branco, 2021).

A razão que deu azo à escolha do instrumento (ISPP (CS) – R) tem a ver, primeiramente, com o fato de proporcionar uma avaliação mais concreta das decisões judiciais, *captar* e possibilitar a descodificação da atuação da arquitetura judicial sobre o acusado e a vítima, viabilizando, assim, ao pesquisador uma percepção mais concreta, no que respeita à severidade punitiva das penas aplicadas aos arguidos em relação a certos tipos de crime, assim como o *índice de psicologização* envolvido no mesmo, constatando-se, ou não, a influência do saber psicológico no exercício da justiça.

A outra razão tem a vez, com os valores fundamentais dos cidadãos defendidos na Constituição da República portuguesa e na cabo-verdiana (valores jurídico-constitucionais, nomeadamente, os referentes à vida, à integridade pessoal, à dignidade da pessoa humana e à família), como também pela dualidade de legislação, atendendo aos vínculos históricos, e a atual cooperação existente entre os dois países. As grandes linhas da cooperação bilateral para o desenvolvimento na área da justiça estabelecem: apoio a reformas legislativas; assessorias técnico-jurídicas às entidades do Ministério da Justiça; formação inicial e complementar de magistrados (judiciais e do Ministério Público) e de outros operadores

judiciais; formação de dirigentes, quadros técnicos e administrativos da área da justiça; oferta de “bibliotecas jurídicas” e equipamentos (Direção-Geral da Polícia de Justiça, 2016).

### **Procedimentos**

Após a definição do objetivo do estudo, importou, portanto, a solicitação da autorização para a recolha da amostra, mediante o contacto com o Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ) e também, aos tribunais das comarcas judiciais mencionadas anteriormente, explicando a intenção e os objetivos do estudo, através da consulta de decisões tomadas pelos juízes nos referidos processos (anexo II). Nesta primeira etapa, o pedido de autorização foi reformulado, pois o enquadramento jurídico cabo-verdiano não utiliza na sua tipificação a violência doméstica (que abrange outras manifestações da violência) mas sim VBG.

Após a autorização para consultar os processos, procedemos com a recolha das amostras. Por questões geográficas, e as restrições impostas pelo covid-19, não foi conveniente visitar todas as instituições que autorizaram a consulta das sentenças.

Foram também disponibilizados, através do *pen drive* e endereço do *email* alguns acórdãos que também continham decisões judiciais das diferentes instâncias do arquipélago, nomeadamente as ilhas do Fogo, Santo Antão e São Vicente. Consideramos uma mais-valia, e até mesmo mais enriquecedor, as decisões judiciais das várias ilhas, pois isso nos possibilita ter informações mais alargada da situação do país, no que diz respeito a atuação do sistema judicial penal em Cabo verde, no âmbito do crime da VBG. Igualmente, foi fornecido um *link* que dava acesso, publico e anónimo, aos acórdãos. onde, através deste *site* ([www.jurisprudencia.cv](http://www.jurisprudencia.cv)) conseguimos encontrar alguns acórdãos das outras comarcas. O estudo foi realizado seguindo de rigoroso procedimento ético de anonimato e

confidencialidade, e nenhuma informação pessoal que identifique o indivíduo foi utilizada no estudo.

Tendo em conta que o instrumento foi feito para processo crime, não especificando um tipo de crime, tivemos a necessidade de acrescentar algumas variáveis, de acordo com a consulta das sentenças, e também, de acordo com o encontrado na literatura e que caracteriza o fenómeno de violência doméstica, para poder adequar-se ao objetivo da pesquisa que estamos a abordar. Característica, que ao nosso ver, são fundamentais no auxílio do entendimento da dinâmica que compõem o crime em si, como por exemplo: tipos de violência praticados, presença da arma na altura em que ocorreu a violência; tipo de arma utilizado e presença dos filhos na altura do abuso.

Como supramencionado, alguns processos foram recolhidos em formato digital – *online* –. Dada a dispersão geográfica entre as ilhas, o método de consulta das informações *online* foi muito vantajoso, pois permiti-nos recolher informações nas diferentes ilhas do país, porquanto, como assevera Fallows (2005), nos últimos tempos, as informações digitais, sobretudo a internet tornou-se viral, como um meio importante de comunicação, se não mesmo, uma ferramenta indispensável de informação. É de verificar que, com o avanço tecnológico, as informações digitais têm sido valorizadas, cada vez mais, na medida em que, feitas de uma forma eficiente, há uma poupança de economia temporal dos profissionais, distâncias geográficas e custos associados, modificando assim, a instrução e as circunstâncias dos profissionais, sem, entretanto, excluir a opinião e as condutas dos mesmos face as consequências do seu uso (Smyth & Pearson, 2018).

Deste modo, a internet, enquanto objeto de pesquisa de informação, poderá ser utilizada para informações e investigações de índole qualitativa, como por exemplo a análise dos textos trocados entre os utilizadores da internet -, quanto para a pesquisa quantitativa, que

pretende a análise, por exemplo a entrevistas online, os grupos focais online, observação participante, a etnografia virtual, estudos de interação, e não menos importante, a análise documental online (Flick, 2009). Assim, assumindo que são técnicas que utilizam as mesmas inferências usadas nas pesquisas empíricas, embora com alterações que possibilitem a sua aplicação na esfera da web. Daí que as técnicas utilizadas na pesquisa, tem de ajustar ao processo da mesma, adaptando assim os instrumentos analíticos. Adverte Freitas *et al.* (2005) da essencialidade de ecletizar os métodos de colheita de pesquisa quantitativa, sem que haja o aviltamento em recorrer do auxílio das informações de cariz qualitativa, a saber, análise dos textos e ou, transportando para o nosso propósito de estudo, as decisões judiciais, analisando os documentos, organizando as informações, implementando-a como um meio de edificação do saber.

### **Análise dos dados**

Para descrever as variáveis sociodemográficas dos agressores, as variáveis que caracterizam a agressão, as variáveis relativas ao tribunal e os resultados do ISP - Índice de severidade penalizadora, utilizámos estatísticas descritivas (frequência, percentagem, média e desvio-padrão). Usámos o coeficiente de correlação de *Pearson* para avaliar a relação entre as variáveis Idade, Anos de escolaridade, Posse de armas na agressão, Antecedentes criminais, Vítima observada no hospital, Presença de filhos, Consumo de álcool e Consumo de drogas, com o ISP. Finalmente, para estimar a influência das variáveis Antecedentes criminais e Anos de escolaridade sobre o ISP, utilizámos a análise de regressão múltipla. Em todos os testes estatísticos considerámos significativos os valores de probabilidade iguais ou inferiores a 0.05. Todos os cálculos foram realizados com o programa SPSS versão 26 (IBM Corp., 2019).

## Resultados

### *Resultados do Índice da Severidade Penalizadora (ISP)*

Para responder a primeira questão de investigação – *Qual o grau de severidade punitiva relativamente ao crime de VBG contra a mulher em Cabo verde?* – utilizamos o ISP cujo resultados se encontram na Tabela 1.

### **Tabela 1**

#### *Índice da Severidade Penalizadora*

Índice da Severidade Penalizadora	
<i>M</i>	33.9
Mediana	31.0
<i>DP</i>	19.98
Mínimo	0
Máximo	91

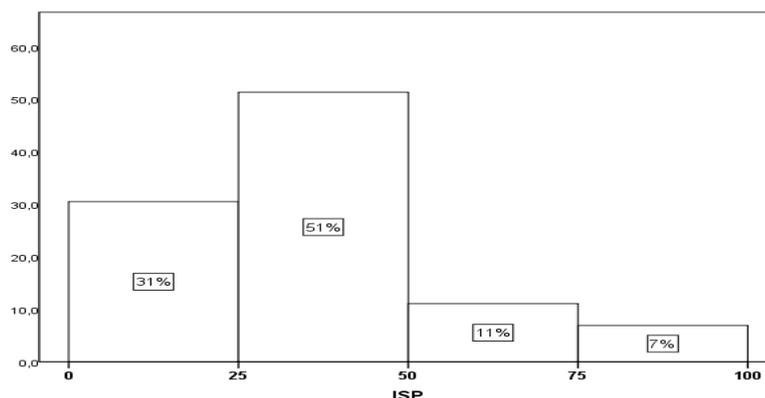
*Nota. M = média; DP = desvio de padrão.*

Tendo em conta que o valor do ISP se encontra entre 0 e 100, os resultados observados na Tabela 1 apresentam grande dispersão, indo de 0 a 91, mas com um valor médio baixo (33.9) da severidade penalizadora (ver apêndice II). A hipótese segundo a qual “A severidade penalizadora no crime de VBG em Cabo Verde é baixa” se confirma.

Para mostrar como se distribuem os valores do índice, apresentamos no Gráfico 1 as percentagens de valores em quatro classes.

**Gráfico 1**

*Índice da Severidade Penalizadora Distribuído em Quatro Classe*



Examinando o Gráfico 1, podemos constatar que 82% dos valores estão abaixo do ponto médio do índice. E que apenas 18 % dos valores se situam acima do ponto médio, que indica maior severidade.

***Pena Reclusiva (PR) e Pena Não Reclusiva (PNR)***

Para responder a nossa segunda questão de investigação – *Para além das penas efetivas, que outro tipo de resposta tem produzido o sistema judicial cabo-verdiano para dissuasão do crime de VBG?* – apresentamos na Tabela 2 as frequências e percentagens das PR e PNR.

**Tabela 2**

*Frequência das Penas Reclusivas e Penas Não Reclusivas*

	Frequência	Percentagem
PR	21	29.2
PNR		
Dispensa da pena	2	2.8

Multa	2	2.8
Suspensão da execução da Pena (simples)	13	18.1
Suspensão de execução da pena (com multa)	6	8.3
Suspensão de execução da pena (com obrigações)	22	30.6
Suspensão de execução da pena (com multa e obrigações)	6	8.3
<i>Total</i>	72	100

Conforme nos é dado a ver pela Tabela 2, uma percentagem muito baixa recebeu PR. O que demonstra que há um evidente domínio das PNR, totalizando os 70.9%. dos arguidos, que não receberam penas efetivas de prisão

### ***Fatores que influenciam a severidade punitiva***

No que diz respeito à terceira questão de investigação “Que fatores influenciam a severidade das medidas penais no crime de VBG em Cabo Verde?” – usamos a análise de correlação entre as variáveis Idade, Anos de escolaridade, Posse de armas na agressão, Antecedentes criminais, Vítima observada no hospital, Presença de filhos, Consumo de álcool, e Consumo de drogas, e o ISP.

### **Tabela 3**

*Correlação entre ISP e outras variáveis*

Variáveis	ISP		
	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>n</i>

Idade	-.08	.574	54
Anos de escolaridade	-.37	.006*	53
Posse de armas na agressão	-.11	.369	72
Antecedentes criminais	.58	.000*	72
Vítima observada no hospital	.01	.905	72
Presença de filhos	-.07	.620	58
Consumo de álcool	.07	.545	72
Consumo de drogas	.04	.700	72

*Nota.*  $r$  = coeficiente de correlação linear;  $p$  = probabilidade;  $n$  = participantes; \*Valor significativo para  $*P > 0.05$ .

Podemos verificar que apenas os Anos de escolaridade e Antecedentes criminais estão significativamente correlacionados com o ISP. A grande maioria das outras variáveis, além de não serem significativas, os valores da correlação são muito baixos (ver apêndice III).

Para determinar em que medida Anos de escolaridade e Antecedentes criminais predizem a severidade punitiva recorremos à análise de regressão múltipla, cujo resultados se apresentam na Tabela 4.

#### **Tabela 4**

*Análise de Regressão Múltipla Predizendo ISP de Anos de Escolaridade e Antecedentes Criminais*

Variáveis	$b$	$beta$	$t$	$p$
Constante	35.078		6.470	.000*
Anos de escolaridade	- 1.316	-.257	- 2.386	.021*
Antecedentes criminais	23.723	.563	5.214	.000*

$R^2 = .442$ ;  $F(2.50) = 19.811$ ,  $p = .000$

*Nota.*  $b$  = coeficiente de correlação parcial;  $beta$  = coeficiente de regressão parcial padronizado;  $t$  = estatística de teste;  $p$  = probabilidade;  $R^2$  = coeficiente de determinação;  $F$  = valor do coeficiente

\*Valor significativo para  $P > 0.05$ .

Tendo em conta os resultados da análise de correlação, foi realizada uma regressão múltipla para investigar em que medida as variáveis Anos de Escolaridade e Antecedentes Criminais poderiam prever a Severidade Penalizadora (ISP). Os resultados desta análise são apresentados na Tabela 4. Podemos ver que os dois preditores, Anos de Escolaridade e Antecedentes Criminais, explicaram conjuntamente 44,2% da variância do ISP. Ambos os preditores contribuíram significativamente para o modelo (ver apêndice IV). A hipótese segundo a qual “O baixo nível de escolaridade dos arguidos encontra-se relacionado com a severidade da pena” confirma-se, pois, o valor do coeficiente de regressão parcial para Anos de Escolaridade diz-nos que por cada ano de escolaridade adicional o valor do ISP diminui, em média, 1,32. O valor do coeficiente de regressão parcial para Antecedentes Criminais indica que os infratores com antecedentes criminais têm, em média, um valor de ISP 23,72 superior ao dos infratores sem antecedentes criminais. Neste sentido a hipótese na qual “As penas mais altas ocorrem quando o agressor tem antecedentes criminais” afirmam-se, como era de esperar. Comparando os valores dos coeficientes de regressão padronizados, vemos que a influência sobre o ISP de Antecedentes Criminais é duas vezes maior que a de Anos de Escolaridade.

***O que acontece quando os arguidos recorrem da sentença para o tribunal superior?***

Apresenta-se na Tabela 5 as PR dos 29 processos em que houve recurso da sentença aplicada em 1ª instância para um tribunal superior.

**Tabela 5**

*Penas Reclusivas Aplicadas no Tribunal da 1ª Instância e no Tribunal Superior*

---

*Pena Reclusiva (em meses)*

---

SEVERIDADE PUNITIVA NA VIOLÊNCIA DE GÊNERO EM CABO VERDE  
 SEVERIDAD PUNITIVA EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CABO VERDE

142

Número de Processos	1ª Instância	Tribunal Superior	Observações
7	12	12	
1	16	16	
2	18	18	
7	24	24	
1	30	25	
1	32	32	
1	32	0	<i>Declarou nulo todo o processo</i>
1	32	0	<i>Pena Reclusiva substituída por multa</i>
1	34	34	
1	36	36	
1	36	36	<i>Suspensão da Pena Reclusiva</i>
1	38	38	
1	48	48	
1	50	40	<i>Mais multa</i>
1	54	26	
1	60	48	

Como se pode observar a PR ou foi mantida ou foi reduzida, nunca tendo sido agravada. Parece, assim, que a severidade punitiva do tribunal superior é mais baixa que a dos tribunais de 1ª instância.

*Análise descritiva entre o ISP e fatores que influenciam as medidas penais*

Apesar de não haver relação estatística significativa, entre as variáveis – *Posse de armas na agressão, Vítima observada no hospital, Presença de filhos, Consumo de álcool e drogas* –, e tendo em consideração o facto de trabalharmos com uma amostra de pequena dimensão e, por isso, suscetível de se consubstanciar num fator condicionante dos resultados, é conveniente emprendermos uma análise descritiva das médias do ISP com as variáveis supra.

#### ***Análise descritiva entre o ISP e o Uso de armas na altura da agressão***

Quanto ao uso de armas, os resultados indicam que os agressores que tinham posse de armas na altura de violência, a média da severidade penalizadora foi de 30.37, com desvio-padrão de 21.77, enquanto os que não possuíam armas na altura do acontecimento a média foi de 35.21 e o desvio-padrão 19.35.

#### ***Análise descritiva entre o ISP e Vítima observada no hospital***

No que se refere a variável vítima observada no hospital, os dados indicam que quando a vítima foi observada no hospital por consequências do abuso sofrido, a severidade punitiva aplicada aos agressores foi ligeiramente mais elevada ( $M = 34.29$ ;  $DP = 21.17$ ) comparado com os agressores, cujo a vítima não foi assistida no hospital ( $M = 33.70$ ;  $DP = 19.43$ ).

#### ***Análise descritiva entre ISP e presença dos filhos na altura da agressão***

Quanto à presença dos menores, os dados demonstram que, a pena foi ligeiramente mais severa ( $M = 32.76$  e  $DP = 20.66$ ) para os agressores cujos filhos estavam ausentes na altura da agressão, comparado com os agressores cujo filhos estavam presentes na altura do abuso ( $M = 35.41$  e  $DP = 19.90$ ). De acordo com esses dados, a hipótese de que “A severidade punitiva é mais elevada no caso da presença dos filhos na altura da agressão”, não se confirma.

### *Análise descritiva entre ISP e Consumo de álcool*

Quanto ao consumo de álcool, constatamos que os arguidos que consumiam o álcool, a severidade penalizadora foi mais alta ( $M = 35.63$ ;  $DP = 19.72$ ) comparado com os que não consumiam ( $M = 32.71$ ;  $DP = 20.27$ ).

### *Análise descritiva entre ISP e Consumo de drogas*

No que conste ao consumo de drogas e a severidade punitiva, os resultados demonstram que os agressores que se declararam como consumidores de drogas, a pena, em média, foi mais severa ( $M = 38.33$ ;  $DP = 23.58$ ), comparado com os que não consumiam ( $M = 33.74$ ;  $DP = 19.98$ ) (ver as análises descritivas entre o ISP e fatores que influenciam as mediadas penais em apêndice V).

### *Medidas Aplicadas*

#### ***PNR***

De acordo com o mencionado acima, dos processos consultados, constatamos que 70.9% foram aplicados PNR. Os dados encontrados demonstraram que 30.6% receberam a suspensão da execução da pena por meio de cumprimento das obrigações. 18.1 %, a suspensão da execução da pena simples, enquanto, 8.3% a suspensão da execução da pena atendendo o pagamento da multa. A mesma percentagem, 8.3%, recebeu a suspensão da execução da pena mediante ao pagamento de multas e cumprimento das obrigações. Ao passo que, em 2.8% houve a dispensa da pena, e 2.8% teve apenas multa.

#### ***PNR Obrigações***

Dos que receberam obrigações, 11.1% foram submetidos a programa de acompanhamento e reinserção social; 6.9% assistiram ao programa e tiveram que, simultaneamente fazer o serviço a favor da comunidade; 5.6% fizeram jardinagem e saneamento a favor da comunidade. 6.9% serviços a favor da comunidade; Ainda 1.4% foram

inquiridos a grupo de reflexão sobre VBG, 1.4% receber informação sobre VBG, 1.4% fez trabalho a favor da direção de saneamento da câmara, 1.4% desempenhou o trabalho de saneamento a favor da câmara, e 1.4% programa de reabilitação do alcoolismo na delegacia de saúde.

### ***Referência a programa de intervenção***

Como mencionamos acima, da totalidade das decisões judiciais, verificamos que, apenas 11.1%, foi indicado o acompanhamento por parte da Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais. No entanto, em apenas um caso (1,1%), houve a indicação para tratamento das adições, como medidas de obrigação.

Desta investigação almeja perscrutar as respostas alternativas para a mitigação da VBG no país, deste modo conforme nos evidenciam os resultados, há uma maior prevalência dos arguidos a serem encaminhados aos serviços de acompanhamento e reinserção social, o que era de esperar, fazendo fé de que o sistema criminal lhe é atribuída, também a função ressocializadora.

### ***Índice de Psicologização – Intervenção psicológica ao arguido***

O IP sendo uma escala que avalia o grau de integração de procedimentos de saúde mental no processo e decisão condenatória; neste estudo, em nenhum dos processos consultados, houve a referência ou foi mencionada a intervenção do saber psicológico – acompanhamento psicológico, psiquiátrica, ou a perícia da personalidade conforme demanda o artigo 216º e 395º, ambos do CPP. Portanto, a Psicologização, no estudo em apreço, é nula, apesar de, 20.8% dos arguidos, foram encaminhados para os serviços de reinserção social (SRS) como medidas de obrigação. Ao passo que 79.2% não foram obrigados a apresentar-se nesses serviços/programas (ver os dados em apêndice VI).

Antes de passar para a discussão dos resultados, convém salientar que, apesar de algumas sentenças consultadas, não dispunham de todos os dados sociodemográficos do arguido, como já foi mencionado, nomeadamente, idade, profissão, naturalidade, etc., acreditamos que a mesma continha todas as informações, relativamente às medidas penais aplicadas, essencial, no nosso estudo, e, portanto, serviu para ter uma abordagem reflexiva da resposta da justiça criminal no país em estudo. Acreditamos, também, que a recolha dos dados, tanto *online*, como presencial, nos favoreceu, pois conseguimos ter uma amostra mais abrangente, abarcando várias ilhas do arquipélago, ficando de fora apenas as ilhas da Brava, e São Nicolau. Neste sentido, alcançamos um panorama mais amplo, daquilo que se passa no sistema judicial em relação ao crime de VBG.

### **Discussão**

Os resultados obtidos com relação ao problema de investigação permitem-nos engendrar uma discussão visando a sua clarificação, com base numa análise compreensiva dos dados, e à luz das perspectivas teóricas emergidas no contexto da severidade penalizadora no quadro do crime de VBG.

#### ***Severidade penalizadora e VBG***

Com relação à nossa primeira questão de investigação – *Qual o grau de severidade punitiva relativamente ao crime de VBG contra a mulher em Cabo Verde?* – a utilização do instrumento, ISPP (CS) – R, permite-nos dizer que a severidade punitiva no crime da VBG, em Cabo Verde, é baixa - (33.9) numa escala de 0 a 100. Não obstante a grande dispersão (0 a 91) encontrada no ISP, para o mesmo tipo de crime.

A hipótese de que *A severidade penalizadora no crime de VBG em Cabo Verde é baixa* confirma-se. Apesar de não existência de estudos desse âmbito, a nível nacional, com

diferentes tipologias criminais, podemos salientar que os resultados alcançados no estudo em apreço vão ao encontro das mais variadas investigações efetuadas a nível internacional sobre a problemática de violência doméstica. Em Portugal, por exemplo, a severidade punitiva na violência conjugal é baixa (Louro, 2017), particularmente no caso de reincidência criminal (Domingos, 2018).

Saliente-se, igualmente, que os dados alcançados, também são consistentes com os encontrados em outros estudos (Sherman, 1992, 2000; Buzawa & Buzawa, 1990; Cretney & Davis, 1997; Cook *et al.*, 2004; Taylor, 2013; Hartman & Belknap, 2003; Stroshine & Robinson, 2003; Hester, 2006), que concluíram que a acusação e condenação por crimes de violência doméstica é infrequente e muito raramente ocorre. Bond e Jeffries (2014) também chegaram à mesma conclusão segundo a qual os agressores domésticos têm menor probabilidade de serem condenados e presos, comparados com os que cometem o crime fora do contexto doméstico.

O estudo da severidade punitiva como uma ferramenta de dissuasão de um crime sempre gerou muita polémica na comunidade científica. Alguns estudos apontaram para a ineficácia do seu uso singular, e da prisão como medida corretiva, ao colocarem em causa o seu efeito ressocializador (Medeiros *et al.*, 2014; Wacquant, 1999; Johnson 2008; Pence & Paymar 1993; Gibbs, 2018). Contudo, alguns estudos frisaram o seu benefício, particularmente no caso de violência doméstica contra a mulher (Sherman *et al.*, 1992; Thistlewaite *et al.*, 1998; Klein, 2008; Vieira-Pinto, 2022), onde resultados apontaram para a diminuição de recidiva dos agressores sentenciados com medidas mais severas.

Apesar de, até agora, não ser claro que a severidade das penas esteja correlacionada com declínio do abuso doméstico contra as mulheres, a verdade é que certeza da punição, parece estar. Porquanto, ao punir os agressores, ao levar em conta as queixas, a lei, não só

passa a mensagem simbólica – que rejeita o discurso subalterno e misógino –, ela também apoia a narrativa e a preocupação das vítimas. O contexto que deu azo ao nosso estudo, o sistema judicial, evidencia que pouca vontade tem no que tange à condenação dos agressores domésticos. Estes até zombam da inconsistência da justiça, menosprezando que “a justiça em Cabo Verde não funciona. A asserção “pode chamar a polícia” é muito usual entre os agressores.

Com base na revisão da literatura, uma explicação plausível da punição indulgente da VBG pode ter a ver com o fracasso da sociedade em geral, e em particular, do dispositivo judicial no país, em proteger e promover o direito das mulheres, apesar de existirem, legislações e convenções que protejam os seus direitos. Por outro lado, pode, também, ter a ver com a perceção dos juízes, sobre gravidade do crime de VBG (um assunto que carece de estudo). Portanto, o sistema penal, ao punir de forma branda os agressores domésticos, além de estar a recompensar, de acordo com Whitney (1997), os agressores por exercerem o controlo social, económico, emocional, e físico sobre as vítimas, parece inábil em compreender a profundidade e gravidade do comportamento criminoso em relação ao crime em questão, ao considerar, no caso do nosso estudo, a necessidade de dissuasão total da pena aos agressores como encontramos, por exemplo, a maioria dos casos consultados.

Ora, convém esclarecer que não se está a incitar a severidade da prisão efetiva, porquanto, à luz da literatura especializada, parece evidente que o encarceramento, *per si*, não é a resposta mais efetiva. Pelo contrário, maior flexibilidade nas políticas de intervenção, permitindo uma variedade de estratégias interventivas, parece apresentar resultados mais satisfatórios. Beccaria já tinha dito que não basta só a pena, antes eficácia na prática, a certeza do castigo.

No que diz respeito à segunda questão de investigação – *Que fatores influenciam a severidade das medidas penais no crime de VBG em Cabo Verde?* – os resultados, a partir da análise de correlação, sugerem que houve dois fatores que influenciaram as decisões dos juízes, como por exemplo as habilitações literárias e antecedentes criminais.

Ao analisarmos a hipótese de que “O baixo nível de escolaridade dos arguidos encontra-se relacionado com a severidade da pena”, os resultados obtidos, no presente estudo, contradizem o que se encontra plasmado em algumas literaturas internacionais, porquanto, apesar de os níveis de escolaridade terem uma forte influência na decisão judicial, essa relação não se revela significativa (Wooldredge, 2010; Freiburger, 2011; García *et al.*, 2014; Franklin, 2015). A inconsistência com a literatura pode ter a ver com o contexto e as variações culturais. O nosso estudo permite-nos dizer que a severidade da pena diminui à medida que o nível de educação do agressor aumenta. Isso poderá corroborar a asserção segundo a qual os agressores menos instruídos, especialmente aqueles das classes menos favorecidas, têm maior probabilidade de cumprirem pena, comparados com os seus congéneres com maior nível académicos, nutrindo os estereótipos e crenças dos quais o sistema punitivo não está imune, sobre certos agressores, particularmente, os que atingiram um baixo nível de educação, como indivíduos propensos ao crime (Franklin, 2015).

Para além do efeito “educação”, outro fator a destacar são os antecedentes criminais, cuja influência sobre as decisões judiciais não é negligenciável. A respeito disso, embora não tenhamos nenhum estudo exploratório no contexto das decisões judiciais em Cabo Verde, outra hipótese do nosso estudo – *As penas mais altas ocorrem quando o agressor tem antecedentes criminais* – suporta fortemente o que já consta na literatura especializada. Isto é, a severidade punitiva para os agressores que têm antecedentes criminais é mais elevada. Nos estudos de Davis *et al.* (2003); Cunha (2014), por exemplo, relataram que, no caso de crimes

de violência doméstica, há relações significativas entre antecedentes criminais e dureza da pena. No nosso estudo, evidenciamos que para os agressores com antecedentes criminais, a severidade punitiva foi em média de 48.89, numa escala de 0 a 100. Enquanto para os arguidos primários, a severidade penalizadora foi, em média, bastante baixa (24.96). As penas atribuídas aos arguidos primários só foram atribuídas, segundo os processos consultados, porque houve tentativas de homicídio.

A razão por detrás da severidade da pena em relação aos arguidos com repetidas passagens pelo sistema criminal pode ter a ver, por um lado, com o facto de os magistrados entenderem que a recorrência de ações de violência pode culminar em algo mais grave, podendo infligir maiores danos do que os primeiros atos violentos (Roberts, 1997, Vieira-Pinto *et al.*, 2022). Por conseguinte, os agressores reincidentes são vistos como mais perigosos do que o arguido primário. Por outro lado, a pena mais pesada para os reincidentes era espectável. Porém também esperava-se maior investimento no encaminhamento de intervenções especializadas em áreas comportamentais. Pois as penas de prisão, quando aliadas de outras medidas preventivas, parecem ter efeito dissuasor (Gannon *et al.*, 2019; Beaudry *et al.*, 2021; Hasisi *et al.*, 2016).

#### ***Dados descritivos ISP e outras variáveis***

Incidindo sobre os dados da estatística descritiva relativamente às variáveis em estudo – *Presença dos filhos na altura da agressão, Vítima observada no hospital, Uso de armas na altura do abuso e Consumo de substâncias* –, podemos destacar aspetos mais salientes, conjugando esses resultados com os de outras investigações. De acordo com a análise estatística, não há relação significativa entre essas variáveis e a severidade punitiva. Contudo em termos da média, notou se ligeiras diferenças no que diz respeito à severidade das penas.

E ao analisarmos o perfil demográfico da amostra, verificamos que a média de idade é de 38 anos, num universo que vai dos 20 a 63 anos. Portanto existe uma clara evidência de que não é só os jovens que o praticam esse crime, pois um número muito acentuado dos que praticam a VBG se encontra em idade mais avançada, evidenciando que a violência pode ser um fenómeno intergeracional (Kalmuss, 1984; Oliveira & Sani, 2009).

Analisando a hipótese – *A severidade punitiva é mais elevada no caso da presença dos filhos na altura da agressão* –, verificamos que os nossos dados não nos permitem a sua confirmação. O que não se harmoniza com a literatura especializada (Dinovitzer & Dawson, 2007), a qual assevera que a presença da criança exacerba as medidas penais, particularmente aos infratores do sexo masculino.

No presente estudo verificamos que as decisões judiciais não se viram afetadas pela presença de menores na altura da agressão. Muito pelo contrário, pois através dos resultados dos dados descritivos, constatamos que, curiosamente, para perpetradores de agressões com a presença de menores, a média da severidade penalizadora foi ainda mais baixa ( $M=32.76$ ), comparada à das agressões cometidas na ausência de menores ( $M=35.41$ ). Ora, embora a dissemelhança das médias seja baixa, podemos verificar que essa diferença poderá estar relacionada com uma certa “dissonância” na forma como os magistrados lidam com os casos em que há presença dos filhos menores (*colocar o pai na cadeia ou deixar os filhos com fome*, visto que, na maioria dos casos, a família depende do agressor) e a “não sensibilização e ou não consciencialização” da perceção do impacto da mesma. Neste sentido, os resultados reforçam as expectativas de que há uma dessensibilização sistemática, por parte dos magistrados, pois em nenhum momento houve referência, nos processos consultados, a medidas protetivas par com os menores que presenciaram o abuso, porque essas crianças não são vistas como vítimas, mas como testemunhas da agressão. Facto que não converge com o

constante no artigo 131.º C, número 3 (Código Penal) – *A pena prevista no número 1 (moldura penal 1 a 5 anos de prisão por crimes de VBG) é agravada de um terço nos seus limites mínimo e máximo, quando, paragrafo a) existam crianças que estejam, ou tenham estado, a cargo da vítima ou do agente (CP, 2021)*. Embora não esteja especificado “que tenham presenciado a violência.

É evidente que, de uma forma geral, a exposição do menor ao abuso não influenciou os magistrados na altura da aplicação das penas efetivas de prisão. O que, para além do acima exposto, poderá estar relacionada:

- i)* com o contexto cultural, onde as crianças, na maioria das vezes, são vistas como adultos, e frequentemente, o seu bem-estar, emocional e psicológico é negligenciado.
- ii)* com a intervenção da instituição responsável pelos direitos da criança. Isso confirma-se em todos os casos consultados, pois não houve, em nenhum deles, a intervenção ou referência ao ICCA. Neste sentido, o ICCA, sendo uma organização de referência, assim como outras organizações que trabalham nesse âmbito, parece não estar a cumprir com as obrigações e competências que lhe foram atribuídas. Como por exemplo, segundo o artigo 7º, paragrafo, a) – *Garantir o desenvolvimento harmonioso e integral da criança e do adolescente. A Instituição tem o duty of care de intervir proactivamente nesses casos, no sentido de prevenir mais danos, aplicando os pontos referidos na sua constituição.*
- iii)* com condições socioeconómicas extremamente desiguais, aliadas à pobreza, dado que a grande maioria das vítimas dependem economicamente dos seus companheiros, e a pena de prisão pode colocar em causa todo o sustento da família. Muitas, se não todas, são abandonadas à sua sorte, quando deixam um relacionamento abusivo, pois o Governo, por razões várias, não serve de retaguarda social para essas mulheres, não há subsídio para as vítimas com filhos que desejam deixar o agressor.

Com isso, verificámos que a aplicação da lei da VBG deveria estar em sintonia com a instituição de apoio à criança, neste caso, o ICCA. Esta instituição, em nenhum dos momentos, nos processos consultados, foi acionada. O que seria mais-valia no que diz respeito a proteção dos que se encontram em situações de precariedade e vulnerabilidade emocional. Porquanto, conforme frisou Strecht, 2003, quando um dos dispositivos de controlo falha, todo o processo do desenvolvimento psicossocial do indivíduo compromete-se. Os menores, não possuem condições de defesa, e muitos acabam por não dar depoimento por medo da retaliação e mesmo punição física, por parte do pai. Muitos estudos apontam para a desarmonia no bem-estar de crianças que presenciam uma relação abusiva (McGee, 1997; Mullender *et al.*, 2002; Buckley *et al.*, 2007).

Como assevera Harne (2003 e 2011), muitos dos agressores não estão cientes de que ao abusar das suas parceiras, estão a pôr em causa e/ou, a comprometer, direta ou indiretamente, o desenvolvimento físico e psicossocial dos seus filhos. Daí que, é também imprescindível que haja intercâmbio entre o tribunal cível e tribunal criminal, assim como apoios psicológicos, quando há presença de menores nos contextos de violência entre os pais. Seria importante que constasse, nas leis VBG, uma disposição que considerasse a exposição da criança à violência entre os progenitores forma de mau-trato infantil, e conseqüentemente, uma ofensa criminal. E especificar, na lei VBG, que quando haja presença dos filhos menores, na altura da agressão, a pena efetiva de prisão será mais severa. Contudo, convém salientar que as medidas aqui sugeridas podem implicar algum risco, principalmente para às vítimas. Pois elas estão mais suscetíveis de serem acusadas de maus-tratos infantis e ou falha em proteger os seus filhos, arriscando a perder a sua custódia (Whitcomb, 2004). Como em muitos casos consultados onde a criança é colocada sob a guarda do agressor, sem nenhuma supervisão, o que é inaceitável.

Em relação à *hospitalização da vítima*, alguns estudos declararam que a gravidade do ferimento é um determinante significativo nas decisões judiciais (Hirschel & Hutchison, 2001). Contudo, as nossas conclusões apoiam outros estudos relacionados, que afirmam que a acusação é mais provável em circunstâncias em que a vítima tenha sido ferida e levada ao hospital, mas que não existe uma associação significativa com a gravidade da punição (Schmidt & Steury, 1989; Kingsnorth *et al.*, 2001). Apesar de não haver investigação, a nível nacional, a possível explicação da contradição com estudos especializados poderá estar relacionada com a perceção do que consiste a violência por parte da justiça penal do país, a qual poderia pesar fortemente na gravidade dos danos físicos. E o crime onde há ou houve uma relação íntima entre o agressor e a vítima, considerado um assunto privado, pode ser visto como sendo menos prejudicial/perigoso do que crimes cometidos fora dos contextos relacionais. E a leniedade das sentenças vai continuar, enquanto prevalecer a perceção segundo a qual o crime de violência doméstica é um assunto privado (Bond & Jeffries, 2014) e de menor importância para o sistema judicial.

Assim, no que diz respeito *ao ISP e o uso da arma durante a agressão*, os nossos resultados indicam que a presença de arma não influenciou os aplicadores da lei, pois aos agressores armados foi aplicada penas mais brandas, comparada com a atribuída aos desarmados. Não obstante o uso de armas, durante as agressões ser visto como um sinal da gravidade do crime (Alderden, 2008; LaFree, 1981), constituindo um fator preponderante para o aumento da pena (García *et al.*, 2014; Schmidt & Steury, 1989; Beichner & Spohn, 2005) nenhuma relação com significância estatística foi encontrada em termos de punição.

No caso do nosso estudo, uma explanação plausível, para a atribuição de penas mais brandas aos agressores que possuíam armas na altura da agressão, pode ter a ver com a subestimação dos riscos e estereótipos aliados a esse tipo de crime, como frisámos no

parágrafo anterior (Bond & Jeffries, 2014). A avaliação dos riscos é particularmente relevante nos casos de violência doméstica. Portanto, a percepção de que, por serem agressores domésticos, consequentemente, apresentam menos riscos (Hessick, 2007), é um tanto ingênuo por parte dos que detêm o poder de aplicar as penas e proteger os que estão em risco.

No que diz respeito ao *consumo de substâncias e a severidade punitiva*, o nosso estudo demonstrou que a severidade punitiva tende em média a ser mais alta para os agressores que consomem substâncias (drogas e álcool). Facto que vai ao encontro do que alegada a literatura especializada (Kingsnorth *et al.*, 2001; Martin, 1994). O que sugere uma certa consciencialização, por parte dos juízes, em não considerar o consumo dessas substâncias, como forma de desculpabilizar o abuso e a violência no relacionamento íntimo. Embora, o consumo de substâncias possa ser um fator de risco para o incidente, ele não está na origem da violência contra a mulher. Na verdade, não há evidências científicas de que o álcool e a droga têm uma relação direta com a VBG (Lund, 2014).

Sobre a terceira questão de investigação – *Para além das penas efetivas, que outro tipo de resposta tem produzido o sistema judicial cabo-verdiano para dissuasão do crime de VBG?* – verificou-se que, em Cabo Verde, apenas 29.2% das decisões judiciais seguia a moldura penal prevista na lei VBG, ou seja, a prisão. E isto só aconteceu porque o arguido era reincidente (A percentagem de reincidentes na nossa amostra cifrou-se em 37.5%). Em 70.9% dos casos, os aplicadores da lei optaram por medidas alternativas à prisão efetiva. Medidas essas que, ao nosso ver, não garantem de todo que haja menor número de vítimas. Pois essas medidas não combatem o que está no cerne do comportamento abusivo – o controlo. E piora, ainda mais, quando há dispensa da pena e nenhuma obrigação é atribuída, porque priva a vítima de qualquer forma de proteção contra o agressor (Rioseco, 1999; Stoleru *et al.*, 2012).

O baixo índice de encarceramento com relação ao crime de VBG não é fenômeno novo, pelo menos nos países europeus (Hester & Westmarland, 2005; Hester, 2006) onde estudos concluíram que apenas 31 suspeitos foram condenados em 869 incidentes de violência doméstica, ou seja, apenas 1 em cada 200 incidentes resultou em condenação e aplicação da pena de prisão. A inconsistência das medidas penais pode passar a mensagem ao agressor de que há uma certa corroboração por parte da justiça.

Quanto ao *percurso criminal dos indivíduos*, o nosso estudo mostra que dos agressores que já haviam passado pelo sistema criminal (e que nenhuma medida foi aplicada), a maioria (28.6%) tinha praticado crimes de VBG. Dados que se mostraram preocupantes e que vão ao encontro do que a literatura alude (Cullen *et al.*, 2001; Gibbs, 2018; Vieira-Pinto *et al.*, 2022) em relação a reincidência criminal nos crimes domésticos, e não só. Ou seja, que a maioria dos agressores tende a reincidir, caso não sejam tomadas outras medidas.

Quanto às *penas aplicadas aos crimes anteriores praticados*, verifica-se que a maioria dos agressores foi atribuída a suspensão da execução da pena. A razão dessas medidas penais pode ter a ver com a trivialização dos comportamentos abusivos que constituem crime de VBG, por parte dos magistrados. Refletindo-se em fracas medidas punitivas e ressocializadoras do agressor, principalmente quanto à primariedade do arguido, como consta em muitos processos – *medida privativa da liberdade deve ser a ultima ratio, pelo que, sempre que possível, uma opção a afastar em se tratando de delinquentes primários e em que o grau de ilicitude não se situe acima da mediana* –, e isso, com efeito, reflete nos crimes futuros. Portanto o problema, muitas vezes, não está na lei, mas sim na sua aplicabilidade. Por exemplo, Thistlewaite *et al.*, 1998; Klein, 2008; 2014, Maxwell *et al.*, 2001, na análise que fazem sobre o crime de violência doméstica, concluíram que os agressores condenados com penas mais pesadas – penas de prisão e outras intervenções –, denotam uma média de

reincidência mais baixa. Estudos de Kelly *et al.* (2014) e Vieira-Pinto *et al.* (2022) já tinham concluído que no contexto dos agressores condenados por crimes domésticos contra a mulher, pela primeira vez, com penas mais severas, apenas um número muito baixo (0.96; 15%) reincide pelo mesmo tipo de crime.

Portanto, no caso do nosso estudo, primeiro, a justificação encontrada em todos os processos consultados sobre a “primariedade do arguido” e o “grau de ilicitude” como a justificação para não aplicação da prisão efetiva e medidas adicionais é um tanto insensível por parte do aplicador da lei (Poiares, 2022). O facto de ser a primeira vez que o agressor esteja a ser acusado do crime, não significa que é a primeira vez que está a praticá-lo (Stoleru *et al.*, 2012). E o uso de que, é da justificação segundo a qual a não aplicação da pena ao agressor é “para o bem-estar da família” é inadequado no contexto da condenação dos agressores domésticos. Porquanto romantizar o bem-estar da família, aceitando comportamentos violentos como atos isolados (Dinovitzer & Dawson, 2007; Stoleru *et al.*, 2012), e momentos de raiva, só demonstra astigmatismo por parte dos juízes em relação aos riscos e as consequências nefastas (como por exemplo, homicídio) desse crime (Westmarland *et al.*, 2018; Regan *et al.*, 2007).

Não obstante esse crime machista ter por base valores e crenças culturalmente enraizadas, a nosso ver é ingenuidade ficar à espera que o agressor se decida mudar, que a cultura se se altere, porque estas mudanças são lentas e dolorosas. Assim, os magistrados, na justificação das suas decisões, têm que ser objetivos, não inferindo questões ideológicas e culturais, como encontramos em todos os processos, como forma explicativa do fenómeno, para justificar a agressão. Porém, não é líquido que essas decisões sejam tomadas tomadas de forma consciente. Porque, se a lei que condena o crime de VBG está a ser justificada com questões culturais, o magistrado, então, precisa aplicar-se no estudo dos fundamentos

constitucionais do país, no qual consagra um dos princípios fundamentais dos direitos humanos – o princípio da igualdade, equidade e da dignidade entre os homens.

***Perspetiva psicológica no contexto judicial***

No que se refere a introdução do saber psicológico no contexto judicial, nos processos consultados não houve, nas decisões judiciais, informações relativamente a avaliação psicológica do agressor e ou perícia de personalidade. Nenhum dos agressores foi referenciados a esses serviços. Os nossos resultados apontam para a necessidade da legitimação da intervenção das ciências comportamentais, como a Psicologia Forense, a Educação e a Criminologia no campo judicial em Cabo Verde, pois há uma clara violação da não aplicação do que consta nos artigos 216º. 395º. do CPP. Porquanto vários estudos confirmaram a sua importância no auxílio das decisões judiciais (Huss, 2011; Adjorlolo & Chan, 2019; Braman, 2010; Gudjonsson & Haward, 2016; Haward, 1981; Machado, 2006).

Convém salientar que, no caso de violência doméstica, seria imprescindível um *assessment* inicial junto dos agressores domésticos, como dizia Domingos (2018), com o intuito de melhorar o desempenho do sistema de justiça, começando pelas definições de estratégias de medidas iniciais a aplicar, que não só favorecem a vítima, assegurando a sua proteção e segurança, como também responsabilizar o agressor pelas suas práticas delituosas. Como frisou Domingos, o processo de acompanhamento do sujeito transgressor deve ser quanto antes (principalmente quando o crime é a VBG, e pelo risco que envolve quando a vítima aciona o dispositivo legal) com principal enfoque na medida de coação aplicada. Em todos os processos consultados, a maioria das vítimas, ou fica na casa dos familiares, ou volta para a casa, junto do agressor, após a queixa. Salvo alguma exceção em que o agressor é afastado de casa, o que não garante, em muitos casos, a segurança da vítima.

No que diz respeito à medida ressocializadora da ação jurídica adotada pelo sistema criminal em Cabo Verde, verificamos que em apenas 26% da totalidade das decisões judiciais foi indicado o acompanhamento por parte da Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais. Num caso houve a indicação para tratamento das adições. E, num outro caso, a obrigatoriedade em participar em “workshop” digamos assim, onde o arguido recebe informações sobre VBG. Um número preocupante, haja em vista o desinvestimento do sistema punitivo, no arquipélago, no que diz respeito à ressocialização dos que cometem crimes desta natureza. A não coligação com o saber, principalmente a intervenção juspsicológica, não só demonstra um problema de estrutura, como também um sistema desinteressado para com o bem-estar dos que ali vão parar, a “ignorância” e, não conhecimento aprofundado da importância dessa intervenção na ressocialização do sujeito. Portanto, diríamos que, no pressuposto ressocializador, no crime de VBG, em Cabo Verde, o sistema judicial falha, particularmente quando se tem um número elevado dos agressores reincidentes. Isto acontece, apesar de haver provas científicas de que as intervenções psicológicas estão associadas à redução de reincidência (Beaudry *et al.*, 2021).

Convém salientar ainda que, no que diz respeito aos arguidos primários, nenhuma intervenção ou acompanhamento foi feito, indicando a falhanço do sistema em atuar e prevenir a reincidência e futuros crimes, como já mencionámos. Daí a necessidade de auxílio de técnicos, das áreas comportamentais, nomeadamente, a Psicologia Forense. Esta se reveste cada vez mais imprescindível na mitigação do quadro acima exposto. Esta imprescindibilidade radica no facto dessa disciplina estar dotada de ferramentas fundamentais, passíveis de desvendar os fatores que estão na base dos comportamentos transgressivos e desviantes, ao mesmo tempo que, fomenta a otimização de programas de intervenção comunitária e juspsicológica, fundamentais para a maximização do bem-estar das

estruturas familiares (Poiars, 2004), que enformam os agressores e vítimas. Como diria Strecht (2003), é muito importante entender que, depois de conhecidas as origens do problema, se possa intervir, ainda antes da evolução desses comportamentos tomar contornos desastrosos. Diante disso, a importância da prevenção em vez de domesticação.

Esta investigação não oferece certamente uma resposta definitiva às questões de investigação levantadas neste estudo. Contudo, contribui para a compreensão da severidade das punições impostas pelos juízes e ao mesmo tempo entender os seus processos de tomada de decisão, no que diz respeito ao crime de VBG no contexto criminal cabo-verdiano. O que em tempos foi tácita e comumente defendido pela opinião pública (“no crime de VBG, ninguém vai para a cadeia”), passa agora a ser visto, em resultado do nosso estudo, como um facto empírico.

Além disso, a sociedade, particularmente o sistema de justiça criminal, parece incapaz de se expressar de forma positiva quando se trata de violência contra as mulheres, porquanto esse fenómeno parece transpor as fronteiras culturais e linguísticas, e não se conhece nenhum lugar no mundo onde a questão de género parece encontrar alento. E, Cabo Verde não é uma exceção, e o nosso estudo confirma o que já foi dito por outros investigadores.

À vista do até aqui exposto, o sistema jurídico cabo-verdiano mostra alguma inconsistência nas tipologias das medidas penais e severidade punitiva aplicada, não obstante haver diferenças significativas entre o ISP e algumas variáveis, como antecedentes criminais. Muitos estudos concluíram que a severidade das penas funciona no caso de VBG. Contudo, não se está a referir à exclusividade da prisão efetiva, mas a combinação de medidas – preventivas, prisionais e ressocializadoras –, conforme estabelecidas na lei. Porquanto em Cabo Verde, o aplicador, não só optou pela baixa severidade da pena no crime de VBG, como também, não optou pela área do saber. Não houve investimento na psicologização do

processo jurídico, ao longo de todo o processo criminalizador o que conseqüentemente culmina no fraco e ou não, investimento nas políticas ressocializadoras.

### **Estudo complementar**

O capítulo que se segue surgiu a partir dos resultados do estudo principal, acima descrito, pois tendo em conta que os juízes optarem por medidas penais branda em relação ao crime de VBG contra a mulher, o intuito do estudo complementar é tentar perceber qual é a perceção do público no que se refere à gravidade, frequência e aceitabilidade desse crime. O estudo da perceção da gravidade de crime pode ser uma ferramenta poderosa na identificação daquilo que constitui prioridade em termos de prevenção e controlo da criminalidade (Sherman *et al*, 2016; Beccaria, 2007).

Para Adriaenssen e companheiros (2020), a gravidade do crime apresenta-se de forma proeminente em pelo menos quatro áreas políticas de controlo da criminalidade, como por exemplo, a criminalização, controlo da criminalidade, prevenção da criminalidade, e por fim, a sentença. A perceção da gravidade do crime constitui um critério importante para se decidir se um determinado comportamento deve ou não ser criminalizado (Ashworth, 2006). De facto, se o público não considera determinado crime, como grave, nem do ponto de vista ético, nem do ponto de vista social, então não se pode fazer fé de que esse crime será punido pelas autoridades (Davis & Kemp, 1994).

De acordo com Blumstein e Cohen (1979), a perceção da gravidade do crime pode servir-se como pano de fundo na discussão da pena legal que se lhe deve aplicar. Ou seja, a perceção da gravidade de um crime pode afetar as reações legais, desde a probabilidade de ser denunciado à polícia até à pena a ser cumprida (Warr, 1989). Contudo, como asseveram Kwan e colegas (2002), se for encontrada uma grande discrepância entre a perceção pública da gravidade do crime e a pena legal aplicada, a preocupação seria sobre até que ponto as penas aplicadas são adequadas. Robinson e Darley (2007), concordam que o público pode dar pistas orientadoras da gravidade do crime e culpabilidade do agressor, porquanto, só tais

"desertos empíricos<sup>43</sup>" podem garantir a legitimidade e credibilidade moral das políticas de controlo do crime. Não obstante, tal percepção da gravidade, só deve ser considerado caso haja a percepção da maioria (Kwan *et al.*, 2002).

Por isso, é imprescindível que a percepção do público esteja em conformidade com os dispositivos legais de controlo e as leis do país. Ou seja, se um crime é punido, severamente, pelo mecanismo legal, mas o público o percebe como não grave, há, por assim dizer, um desajuste entre o dispositivo legal e aquilo que a sociedade pensa. O que vai em conformidade com o que Herzog (2006) já tinha frisado. Que é, independentemente da ordem – se são os dispositivos formais, judiciais e legislativos que comportam a grande influência na percepção do público, moldando a sua atitude, ou se é, por outro lado o dispositivo informal de controlo que influencia a criação e aplicação da lei – seria importante, que haja um consenso entre a percepção do público acerca da gravidade de um crime e a pena atribuída. No fundo, o que queremos saber, do estudo adicional, é se há esse consenso. Como dizia Robinson (2008), a credibilidade do sistema penal é essencial no controlo eficaz do crime. No entanto, essa credibilidade e confiança na justiça só vai existir se a atribuição da responsabilidade e punição estiverem em conformidade com o que a comunidade percebe como consonante com as suas instituições comuns de justiça.

---

<sup>43</sup> Deserto empírico, tem a ver com o facto de que não é a noção de justiça deontológica da filosofia moral que tem o poder de controlar o crime, mas sim, o que a comunidade define como noção de justiça (Robnson, 2008).

### **Parte III**

#### **Perceção da Gravidade, Frequência e Aceitabilidade de violência baseada no género contra a mulher em Cabo Verde**

##### **Introdução**

Se, por um lado, é certo que a violência de género é um problema social que afeta milhões de mulheres em todo o mundo e transversal a quase todas as sociedades humanas, por outro lado, é difícil engendrar um conceito universal da violência, haja em vista os padrões específicos de tais comportamentos que evoluem: violência física, psicológica (Arias e Pape, 1999; Follingstad *et al.*, 1990) sexual (Bergen, 1996), e económica (Raphael, 1996; Adams *et al.*, 2008; Sedziafa *et al.*, 2017).

O estudo da perceção do público, no que diz respeito ao crime de violência doméstica, revela-se de grande importância, pois a forma como o público percebe questões como a gravidade do crime podem moldar as respostas institucionais. Porquanto o sucesso ou o fracasso de estratégias que visam a implementação de medidas preventivas depende das atitudes e crenças que um determinado grupo, pessoas ou comunidades tem sobre esse tipo de violência e suas consequências (Gracia, 2004; Calson & Worden, 2005; Diemer, 2014; Lu, 2015).

Vários fatores podem estar na base das atitudes, desde o individual ao social (Gracia & Lila, 2015; Diemer, 2014). As atitudes também influenciam a detenção precoce e determina se a violência é reconhecida ou não. E isso influencia a forma como as vítimas são apoiadas e influencia também a forma como os agressores são responsabilizados (Newby-Clark *et al.*, (2002). Adicionalmente, de acordo com Flood e Pease (2006), tendo em conta que a violência contra a mulher é praticada maioritariamente por homens, as atitudes e perceções dos homens são fundamentais na responsabilização dos mesmos. Convém salientar

que as atitudes, por si só, não apoiam abertamente e conscientemente a violência; contudo, as opiniões e o suporte dessas atitudes, que justificam, e conseqüentemente desculpam, banalizam, trivializam, negam e minimizam aquilo que se já se acredita sobre a violência dos homens contra as mulheres, (Diemer, 2014), tem conseqüências nefastas para os que sofrem esse tipo de violência.

Como mencionamos anteriormente, o estudo adicional nasceu a partir dos resultados do estudo empírico principal, cujo intuito, através da criação de um inquérito, foi não só avaliar os níveis de percepção da gravidade dos diferentes tipos de violência doméstica, a frequência e a aceitabilidade, mas também perceber se essas percepções se encontram relacionadas com algumas características sociodemográficas dos participantes. Com isso pretendemos saber há uma congruência entre as respostas judiciais em relação ao crime em apreço e a percepção do público.

## Capítulo I: O estado da arte

### Percepção de diferentes tipos de violência de gênero contra a mulher

*Violência física.* A violência física contra a mulher é a mais óbvia e difícil de esconder, dado que há uma visibilidade que se reflete no seu aspeto físico. A violência física é entendida como toda ação que implica o uso da força, podendo manifestar-se por pancadas, chutes, beliscões, mordidas, lançamento de objetos, empurrões, bofetadas, surras, lesões com arma branca e armas de fogo, arranhões, socos, feridas, queimaduras, fraturas, e qualquer outro ato que atente contra a integridade física, produzindo marcas, ou não, no corpo (Casique & Furegato, 2006; Silva *et al.*, 2007; Kunnuji, 2014).

Tendo em conta a sua visibilidade, o abuso físico é considerado mais grave que o abuso psicológico (Hammock *et al.*, 2015; Cappelz & Arriaga, 2008a; Cappelz *et al.*, 2017).

Por outro lado, parece haver uma diferença de gênero na forma como a violência é captada. Os homens tendem a perceber as ameaças, físicas e corporais, perpetradas pelas mulheres como menos graves do que as ameaças, físicas ou corporais perpetradas pelos homens (Nybergh *et al.*, 2013).

A cultura também influencia a forma como se percebe a severidade de violência. O estudo levado a cabo por Peek-Asa (2001) conclui que as mulheres nos EUA consideraram os indicadores de violência no relacionamento íntimo como mais graves do que as mulheres no México. Concluiu que embora as mulheres em ambos os países tenham globalmente classificado os *itens* que constituem diferentes formas de violência, com padrões semelhantes. Em ambos os países, a violência física foi vista como a mais severa, seguida da violência sexual e depois da violência emocional. Contudo, houve exceções em relação aos estudantes graduados. Estes, nos EUA, classificaram diferentes tipologias de violência como mais grave quando comparado com os estudantes mexicanos.

*Violência psicológica:* Nota-se, porém, que nem todas as agressões envolvem confrontos físicos, pois em muitos casos incluem formas diferentes de violência. O abuso psicológico, de acordo com alguns autores, é o primeiro a dar sinal de alerta no relacionamento abusivo. Contudo, por razões várias, é o menos reconhecido. Nos estudos de Follingstard *et al.* (1990), a maioria (99%) das mulheres vítimas de violência psicológica relatou ter sofrido violência física. Estudos advertem que o abuso psicológico serve como pano de fundo para outras formas de violência, particularmente a física. Ou seja, o abusador, primeiro usa a violência psicológica como ferramenta base, para exercer o poder sobre a vítima e mantê-la submissa, e, a maioria das vezes, tende a escalar para de violência física (Murphy e O'Leary, 1989; Bandeira, 2014; Silva *et al.*, 2007; Miller, 2002). O abuso emocional consiste geralmente numa série de comportamentos que geram medos, cujo intuito do agressor é exercer dominância. Estes comportamentos ocorrem durante muito tempo ao longo do relacionamento e não são tão frequentemente documentados e registados, comparado com um só incidente de violência física ou sexual (Stark, 2007).

A violência psicológica passa sem deixar sinais óbvios, camuflando em comportamentos como o ciúme, controlo, humilhação, desprezo, manipulação, ironias, ofensas, sarcasmo, vigilância constante, isolamento, depreciação, agressão verbal repetitiva etc. (Johnson, 1995; Coker *et al.*, 2002; Silva *et al.*, 2007; Cappelletti *et al.*, 2017). Na mesma linha, Wynter (2001) refere que a violência psicológica se dá através da ausência de afeto, imposição de obstáculos à companheira de construir amizades, este com o intuito de mantê-la isolada dos familiares e amigos. Contudo, o autor, ainda foi mais além, ao afirmar que a violência psicológica se expressa e se manifesta de forma diferente e a classificou em seguintes categorias: *Abuso verbal:* rebaixar, insultar, ridicularizar, humilhar, utilizar jogos mentais e ironias para confundir. *Intimidação:* assustar com olhares, gestos ou gritos, atirar

objetos contra a parede. *Ameaças*: de ferir, matar, suicidar-se, levar consigo as crianças.

*Isolamento*: controle abusivo da vida do outro, por meio da vigilância de seus atos e movimentos, escutar conversas, impedir-lhe de cultivar amizades. *Desprezo*: tratar o outro como inferior, tomar as decisões importantes sem o consultar (Wynter, 2001).

Resultados de pesquisas anteriores mostraram que as mulheres agredidas descreviam a degradação psicológica, o medo e a humilhação como uma das formas mais dolorosas de violência, e consideraram que a violência psicológica causa mais danos do que a violência física (Walker, 1984; Follingstard *et al.*, 1990; Seff *et al.*, 2008; Arias & Pape, 1999; Cappelz & Arriaga, 2008; Williams *et al.*, 2012; Hammock *et al.*, 2015).

Walker (1984) foi um dos primeiros investigadores a relatar que as mulheres agredidas descreveram a degradação psicológica, o medo e a humilhação como sendo das mais dolorosas formas de violência sofrida. Outrossim, Follingstard *et al.*, (1990) concluíram que 72% das mulheres, vítimas de violência física, classificaram a violência psicológica como a mais devastadora, e com consequência mais severa – particularmente quando são ridicularizadas – do que a agressão física. Resultados similares foram encontrados nos estudos de Seff *et al.*, (2008) realizados em mulheres com idades compreendidas entre 45 a 85 anos. Concluíram que o abuso não físico foi considerado o mais difícil de ultrapassar, e consequentemente, possuem efeitos mais duradouros do que a violência física. Arias e Pape (1999) sugerem que o impacto da violência psicológica pode ser mais difícil de transpor do que o impacto da agressão física. Os efeitos da violência psicológica não ficaram por aqui, pois o estudo de Aguilar e Nightingale (1994) revelou que as mulheres que experienciam o controlo emocional apresentavam, também, valores mais baixos na variável autoestima.

Os resultados dos estudos de Follingstard *et al.*, (1990) foram corroborados pelos dados das pesquisas conduzidas por Cappelz e Arriaga, 2008; Williams *et al.*, 2012;

Hammock *et al.*, 2015. As vítimas consideram que a violência psicológica provoca mais danos, comparado com a violência física. Contudo, esta última é percebida e considerada como a mais nociva pelos observadores externos, ou seja, pelas pessoas que não estão envolvidas no relacionamento. Estas, segundo Capezza e Arriaga (2008), ao lerem cenários hipoteticamente de conflito conjugais, avaliaram até mesmo as formas menos severas de violência física, como mais graves do que qualquer nível de violência psicológica.

Hammock e colegas (2015) compararam o cenário físico de abuso, com o cenário de abuso psicológico, variando ao mesmo tempo o sexo do agressor e da vítima. O estudo revelou que as pessoas não só negligenciaram em categorizar o abuso psicológico como negativo e destrutivo, como também falharam em não punir agressor que abusava psicologicamente da vítima. Os participantes perceberam os agressores físicos – tanto homens como mulheres – como mais severos e agressivos do que os que praticavam a agressão psicológica.

Contudo, o abuso psicológico tende a ser negligenciado e não percebido como grave (Capezza & Arriaga, 2008; Hammock *et al.*, 2015). Os comportamentos acima mencionados, para muitos fazem parte da dinâmica do relacionamento do casal, pois são vistos como “pequenas brincadeiras” e bem aceites na sociedade. Todavia, a consequência que advém dessa realidade traz implicações que, apesar de não direta ou perceptível, podem ter efeitos catastróficos, tanto físico, como psíquico nas vítimas, interferindo assim, com toda a sua trajetória de vida – familiar, social, cultural e económica –. Neste sentido, o impacto do abuso emocional se expressa desde duvidar-se de si mesma, confusão mental e depressão (Sackett & Saunders, 1999) conduzindo a vítima, muitas das vezes ao desespero, e o não reconhecimento do seu eu. A degradação física e psicológica leva à sua vulnerabilidade em contrair outras enfermidades como, doenças pélvicas e inflamatórias, aborto, depressão,

obesidade (desordem alimentar), problemas respiratórios, comportamento obsessivo compulsivo. etc. (Teles & Melo, 2002).

A percepção da violência de gênero pode ser influenciada por variáveis díspares, como gênero (Capezza *et al.*, 2017). A capacidade de identificar a violência psicológica foi considerada, geralmente, menor nos homens do que nas mulheres (Álvarez *et al.*, 2015). Consequentemente, os homens são menos propensos a compreender este tipo de abuso. Uma interpretação plausível, por um lado, é que os homens parecem ser menos afetados por esta forma de violência, e como resultado, a denunciam como menos grave, comparado às mulheres quando sofrem a mesma forma de violência (Diemer, 2014). Neste sentido, e ainda de acordo com a autora, os homens, para além de uma menor compreensão da experiência e das formas de abuso, são mais propensos do que as mulheres em reforçar mitos e estereótipos de violência, bem como minimizar, banalizar e negar o impacto da mesma. Não obstante, neste particular, torna-se necessário termos em consideração de que nem todos os homens têm atitudes que apoio à violência. Contudo, para a autora, os homens que apresentam menores conhecimentos sobre a violência contra as mulheres, parecem ter menor compreensão da dinâmica da violência, apoiando menos as causas que dão primazia à igualdade entre mulheres e homens. Consequentemente, esses são mais propensos a ter atitudes que favorecem a violência. A tendência dos homens em minimizarem a violência que praticam, e das mulheres em minimizarem a violência que sofrem, como consequência da relação entre masculinidade e violência, pode contribuir para explicar porque é que homens e mulheres relatam, de forma não igual, o uso da violência (Álvarez *et al.*, 2015). Segundo os autores, a cultura também pode influenciar a percepção da severidade da violência. Na população espanhola, por exemplo, há uma maior percepção da violência psicológica do que na população mexicana. Em Cabo Verde há falta de estudos sobre a percepção da violência

psicológica e o seu impacto, apesar de um estudo, ainda não publicado, realizado com estudantes universitários ter constatado que 59,95 dos estudantes admitiram que em algum momento já abusaram psicologicamente e 56,1% admitiram serem vítimas de violência psicológica (Inforpress, 2019, 13 de fevereiro).

*Violência sexual:* A literatura sublinha que a violência sexual nas relações de intimidade não era reconhecida como um comportamento criminoso, mas como algo socialmente aceite e legal<sup>44</sup> (Bergen & Barnhill, 2006; Martin *et al.*, 2007), porquanto a atividade sexual era vista como um dever da mulher, implicando que seja obrigada a manter relações sexuais, face à exigência do parceiro, ainda que seja contra a sua vontade, não tendo a percepção de que esteja a ser vítima de violência sexual. E isso, favorece o abuso sexual no casamento, o mais das vezes, é visto como algo natural e não abusivo, mantendo o *statu quo* da ideia cultural da masculinidade. Desta forma, as mulheres auto-agridem, tolerando a prática sexual sem desejo, pois foram ensinadas, com o passar do tempo, que assim o deveria ser e que é a sua responsabilidade e obrigação entreter sexualmente o marido/parceiro (Dantas-Berger & Giffin, 2005; Mahoney *et al.*, 2001).

Para WHO (2003), a violência sexual define-se como a ação de uma pessoa que se encontra em posição de poder, relativamente a outra, obrigando-a a práticas sexuais contra a sua vontade. Inclui sexo forçado, ameaça, intimidação, participação forçada em atos sexuais degradantes, bem como a negação do direito de usar contraceptivos ou a adoção de medidas para proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. Para a APAV (2013), a violência sexual inclui toda a conduta, ou alusões de cariz sexual exercidos de modo desconfortável

---

<sup>44</sup> Apesar de existir uma condenação social para com a violência nas relações íntimas, ainda predominam, embora em minoria, um número significativo de crenças e atitudes legitimadoras da violência nas relações íntimas. Tais crenças e mitos legitimadores são menos aceites e visíveis nos jovens e adolescentes (Caridade & Machado, 2006).

perante a outra pessoa sem que essa a permita ou queira. A violência sexual no âmbito de relacionamento íntimo é uma das mais difíceis de ser identificada nomeadamente: a dificuldade da vítima em definir a sua experiência como vítima; quando não implica o uso de estratégias como a força física, a ameaça ou o recurso a armas; quando a vítima não apresenta lesões físicas que provam a agressão e/ou quando a vítima não oferece resistência; quando existe antecedência sexual consentida com o agressor, principalmente, se esse for o próprio parceiro ou ex-marido; sentimentos como auto culpabilização, vergonha, impotência, humilhação e medo de eventuais retaliações do agressor ou da sociedade (APAV, 2013).

Há muito que a sociedade tem estado a falhar com as vítimas de violência sexual, no âmbito de relacionamento, porquanto os agressores sexuais tendem a ser tipicamente vistos como estranhos com alguma perturbação mental, de acordo com Donat e D'Emilio (1992). Adicionalmente, a sociedade forjou um conjunto de estereótipos, relativamente à violência sexual, designadamente no que toca ao perfil do agressor e das vítimas (Du Mont, 2003). Estereótipos esses que até hoje persistem e influenciam as perceções que as pessoas têm desse tipo de violência.

A violência e o assédio sexual são problemas sérios em Cabo Verde. De acordo com o ativista e presidente da associação cabo-verdiana de VBG, tem havido várias alegações de violência e assédio sexual, afetando principalmente adolescentes e mulheres. No entanto, não existem estudos ou dados que abordem estas questões (Notícias do Norte, 2019).

Em Portugal, por exemplo, um dos motivos que levam algumas mulheres a não apresentar queixa de violência sexual numa relação de intimidade é o dever conjugal., efetivamente, num inquérito feito com 150 mulheres, 39.3% concordaram que o ato sexual é um dever conjugal, independentemente da vontade da mulher. O estudo concluiu que “as mulheres que vêm o ato sexual como um dever conjugal se encontravam sobretudo no distrito

de Vila Real (74.6%), com idades compreendidas entre os 46-55 anos (25.4%), casadas (57.6%), com ensino secundário (37.3%) e empregadas (57.6%)” (Fonseca, 2015).

Um estudo feito por Walby e Allen (2004), com uma amostra total de 22.463 homens e mulheres (idades compreendidas entre 16 e 59 anos) pertencendo a vários contextos sociais e económicos, descobriu que o abuso doméstico que incorpora violência física, muitas das vezes é acompanhado de violência sexual e, de entre os participantes entrevistados, 23% sofreram agressão sexual pelo parceiro. Os atos degradantes advindos do abuso sexual estão aliados de consequências nefastas sobre a vítima, incluindo problemas do foro físico, como por exemplo náusea, fadiga, nódos negros, assim como problemas a nível ginecológico como a infertilidade, aborto, infeções nas partes íntimas, etc. (Campbell & Alford, 1989; Adams, 1993; Bergen, 1996). Um estudo realizado no KwaZulu-Natal, na África do Sul, concluiu que os rapazes apresentam uma visão mais positiva em relação ao sexo forçado do que as raparigas, uma vez que, frequentemente, associam-no a sinais de amor e uma forma apropriada de satisfazer os impulsos sexuais, sendo aceitável, em caso de dependência financeira (De Vries *et al.*, 2014).

*Violência económica:* Inúmeras pesquisas têm examinado a prevalência e as consequências de abuso físico, psicológico e sexual. A violência económica é a que recebeu menos atenção da comunidade científica. Ela envolve comportamentos que comprometem a capacidade da mulher em adquirir, usar e manter recursos económicos, ameaçando a sua segurança financeira e capacidade em adquirir as coisas por si própria. Uma das táticas, clássicas, que o agressor usa, para interferir nas habilidades da mulher em adquirir recursos económicos e financeiros, é impedi-la de obter e manter um emprego. Muitas das vezes proíbe, desencoraja e consecutivamente impede a parceira de trabalhar fora de casa,

mantendo-a completamente dependente (Adams, *et al.*, 2008; Walker, 2016; Aguilar & Nightingale, 1994; Sable, *et al.*, 1999; VonDeLinde, 2002; Brewster, 2003).

Segundo Raphael (1996), outras evidências que também os delinquentes usam frequentemente para sabotar e, ou impedir a mulher na procura e ou manter o emprego são, por exemplo: infligir ferimentos físicos visíveis; desligar o despertador; recusar a prestar cuidado infantil para impedir que participe nas feiras, entrevistas e *workshops* de emprego. Outra forma de abuso económico envolve impedir que a mulher use o seu próprio recurso. Ou seja, o companheiro exerce o poder, controlando a forma como os recursos devem ser gastos, onde devem ser gastos, e em que devem ser gastos, dando assim poucas ou nenhuma margem para gastos extraordinários, para além daquilo que ele estabeleceu. Deixando assim a mulher completamente desamparada, caso aconteça alguma emergência, ou simplesmente, quando ela quiser comprar, por exemplo, um batom essa tem que pedir o dinheiro ao companheiro (Dobash & Dobash, 1979; Anderson *et al.*, 2003; Brewster, 2003).

Na mesma linha, Adams *et al.*, (2008) afirmam que o abuso económico promove não só a dependência económica perante o agressor, como também ameaça a saúde económica da vítima tanto a curto como a longo prazo e conseqüentemente a sua saúde mental. O estudo levado a cabo pelas autoras, concluiu que das mulheres entrevistadas, todas tinham sofrido abusos psicológicos, 98% tinham sofrido abusos físicos durante os últimos 6 meses das suas relações e que, 99% delas foram sujeitas a alguma forma de abuso económico em algum momento.

Um estudo qualitativo sobre a violência económica, realizado numa pequena amostra das mulheres na região oriental do Gana, concluiu que o abuso económico ocorre lado a lado com outras formas de violência nas relações íntimas, tais como a violência emocional, física e sexual. Adicionalmente, a violência económica, pode colocar em causa a capacidade

económica da mulher em procurar ajuda para cuidados de saúde, resultante das lesões físicas sofridas (Sedziafa *et al.*, 2017).

A literatura sublinha que o abuso económico é um fator de risco para outros tipos de violência. Outrossim está relacionado à violência física, exploração sexual, tráfico de mulheres e meninas e risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis como HIV (Fawole, 2008). Em Cabo Verde faltam dados sobre agressores de violência económica e ou patrimonial<sup>45</sup> como está tipificada na lei VBG artigo 131°C e D do CP. Parte do problema, em relação a não documentação da violência económica, pode ser que as mulheres cabo-verdianas raramente problematizem o abuso económico e, como resultado, não relatam as suas experiências. Como conclui o estudo de Fortes (2015), através da sua investigação etnográfica na ilha de São Vicente com mulheres solteiras e chefes de família, elas (...) *assumem o papel de sustento da casa, mas, porque querem uma casa de respeito e respeitada pelos outros, negoceiam a possibilidade de ter um homem dentro de casa, mesmo que não sustente, mas que mande. Porque, para essas mulheres, casa sem homem é um navio à deriva* (Araújo, 2004; Fortes 2013a; Fortes, 2015). Uma outra explicação pode ter a ver com o facto de, como adverte Gomes (2008), as mulheres cabo-verdianas sempre se sentirem obrigadas a aceitar, comumente, a obrigação de criar sozinhas os filhos ao mesmo tempo que os homens se emigravam à busca de melhores condições de vida, pois sendo um país com poucos recursos, cercado de imensas penúrias provocadas pelas secas e fome, o homem não tinha escolha senão deixar o país. E isso com certeza trouxe consequências adversas.

---

<sup>45</sup> Apesar de em Cabo Verde usarmos o termo violência patrimonial, neste estudo, utilizamos a violência económica, porquanto a maioria da literatura faz referência a violência económica. E a violência patrimonial está incluída na violência económica.

Usta *et al.* (2013), nos seus estudos em Líbano, concluíram que as mulheres enfrentam uma série de obstáculos para resistir os abusos económicos. O divórcio é um deles. Essas são culpabilizadas pela rutura da conjugalidade, pois o “dinheiro não é considerado uma boa razão para separação de uma família”, de acordo com as normas culturais. Em segundo lugar, as mulheres geralmente não têm evidências que prove que foram abusadas e podem também não dispor de meios financeiros para contratar advogados para as representar.

### **Perceção da frequência e aceitabilidade de violência de género contra a mulher**

É difícil abordar eficazmente, a problemática de violência de género, reduzindo a sua taxa, se não houver mudança, particularmente nas atitudes sociais que encorajam, toleram e perpetuam esse tipo de violência. Carlson e Worden (2001) acrescentaram que é fundamental a compreensão das atitudes, e até que ponto o público está consciente da questão relacionada com a violência doméstica, porquanto perceções das pessoas sobre determinado problema e as suas crenças sobre o que deve ser feito em relação ao mesmo, influenciam não só, a forma como a política pública é desenvolvida, como também afeta a forma como o sistema de justiça criminal responde essa problemática. Tais crenças e atitudes culturais obstruem frequentemente a implementação da lei que protegeria as mulheres.

Como advertem Arisukwu *et al.* (2021), quando a violência é justificada pela cultura e pela religião torna-se aceite e tolerada pelos membros da sociedade. A cultura molda a atitude e o comportamento dos seus membros. Pois, uma cultura que apoia e sustenta qualquer que sejam práticas abusivas, particularmente contra a mulher, constituirá uma barreira social a qualquer esforço de erradicação de tais comportamentos violentos ou abusivos.

O estudo da perceção da frequência da violência doméstica contra as mulheres é importante, pois possibilita a mobilização de respostas públicas e institucionais como forma de resolver o problema (Herrero & Gracia, 2005). Os dados da *Statista* (2016) sobre a

percepção pública da frequência da violência doméstica contra as mulheres na União Europeia (UE), revelam que, no total, 74% dos inquiridos acreditavam que a violência doméstica contra as mulheres era comum no seu país. Em contraste, apenas 2% dos inquiridos pensavam que não era de todo comum. Carlson e Worden (2005), nos seus estudos, entrevistaram 1,200 residentes de seis comunidades em Nova Iorque e concluíram que os inquiridos acreditaram que a violência doméstica era comum nas suas comunidades, e que afetava uma minoria significativa de casais. Em Espanha, de acordo com Herrero e Gracia (2005), a violência doméstica contra as mulheres é vista como sendo mais frequente nas mulheres cujo nível de educação e estatuto socioeconómico é mais baixo.

Por sua vez, a aceitabilidade da violência doméstica contra as mulheres desempenha um papel importante na formação do ambiente social em que as vítimas estão inseridas, o que por sua vez pode contribuir para perpetuar ou reduzir os níveis de violência (Gracia & Herrero, 2006). Com efeito, as atitudes de aceitabilidade foram consideradas fatores de riscos de violência doméstica contra a mulher (Flood & Pease, 2009; Gracia & Lila, 2015).

De acordo com o estudo de Gracia e Herrero (2006), levado a cabo em quinze países europeus, os níveis mais elevados de aceitabilidade foram relatados por aqueles que consideravam a violência doméstica contra as mulheres como menos severa e menos frequente.

No Reino Unido, de acordo com o estudo sobre níveis de aceitação pública relativos à violência doméstica contra as mulheres a grande maioria dos participantes declarou que a violência doméstica contra as mulheres era inaceitável e deveria ser sempre punida pela lei. Contudo 13% dos inquiridos concordaram que estes incidentes nem sempre deveriam ser processados e punidos por lei, mesmo que 32% dos inquiridos naquele país acreditavam que a violência doméstica era uma prática muito comum (Statista, 2016).

De acordo com um inquérito conduzido pelo United Nations (2015), a aceitação de bater na esposa é regra geral, maior em alguns continentes, tais como África, Ásia e Oceânia. Contudo, na América Latina, nas Caraíbas e nos países desenvolvidos, o número é mais baixo.

Em termos do género, na Europa os homens aceitam mais a violência contra a mulher, particularmente quando conhecem o agressor, comparado com as mulheres (Gracia & Herrero, 2006; Carlson & Worden, 2005; Gracia *et al.*, 2015; Martin-Fernandez *et al.*, 2018).

O relatório de United Nations, de 2015, assevera, que se tem observado que a aceitação da violência, tanto por mulheres como por homens tem diminuído ao longo do tempo, nos países onde a violência doméstica contra as mulheres tem sido alvo de campanha há mais de um ano.

Contudo, Sardinha e Catalán (2018) revelaram que para os homens, nos países ocidentais, a aceitação de violência doméstica contra a mulher é mais baixa. E que as mulheres, na África Subsaariana e no Sul (leste) da Ásia, tendem, mais do que os homens, a aceitar e desculpar a violência doméstica, porque este tipo de violência é mais aceitável, socialmente, e mais assente nestas regiões do que na América Latina, Caraíbas, Ásia Central/Oeste, e Europa (Uthman *et al.*, 2009; Kunnuji, 2014).

Quando se trata da aceitabilidade ou aceitação de violência doméstica contra as mulheres, convém salientar que nem todos os países em África apresentam o mesmo nível de aceitação. Em alguns, a questão de aceitabilidade parece estar mais enraizada. Em Mali as taxas de aceitação entre as mulheres, podem chegar a 74%, enquanto outros países a percentagem de aceitação é mais pequena, 13% no Malawi (Rani *et al.*, 2004) e 21% em Moçambique (IDS, 2011).

Não surpreendentemente, o principal fator distintivo na aceitação da violência doméstica é a educação, muito mais do que o rendimento, ou mesmo a idade. O ensino secundário ou superior e a riqueza familiar emergiram como os preditores mais significativos e consistentes da não aceitação de abuso contra as mulheres (Rani *et al.*, 2004; Amir-ud-Din *et al.*, 2018; Sardinha & Catalán, 2018). As mulheres com elevado nível de instrução académica têm 31% menos probabilidades de tolerar e ou aceitar a violência doméstica, comparadas com as despojadas de instrução académica. E as mulheres com instrução secundária têm 16% menos probabilidades de serem tolerantes. Em Moçambique, por exemplo, a aceitação da agressão conjugal diminui significativamente com o aumento do nível de escolaridade (IDS, 2011). À medida que as mulheres atingem a educação, o emprego e a capacidade financeira ao nível dos homens, produz-se um conflito entre a realidade e a noção de superioridade masculina. Isto pode levar as mulheres a questionar as normas sociais relativas aos papéis de género e violência com base no género que apoiam a noção de superioridade masculina (Rani *et al.*, 2004). Uma mulher educada tem mais probabilidades de ser respeitada pelo seu marido, e a educação feminina tende a expor as mulheres a disposições igualitárias que criam um ambiente propício à igualdade e equidade na relação de poder (Oyediran & Isiugo-Abanihe, 2005).

Um estudo qualitativo com mulheres nas zonas rurais em Kuje, Nigéria, explorou as experiências, consciência e perceção da violência doméstica, concluiu que existe uma relação significativa entre o nível de educação e a perceção do que constitui violência doméstica entre os inquiridos (Arisukwu *et al.*, 2021).

Em Cabo Verde, as que possuem um nível de escolaridade mais avançado, em princípio estão mais cientes dos seus direitos e menos dependentes economicamente, tendem a não ficar no relacionamento e têm mais poder de resistir o abuso. Entretanto o IDSR-II

frisou que “aparentemente, nem o meio de residência, nem o nível de instrução da mulher tem uma influência significativa sobre a procura de ajuda”. Aludindo, ainda que “*a procura de ajuda é fortemente dependente do poder econômico da mulher. Ter um trabalho remunerado revela-se fator importante na procura de ajuda: cerca de 40% das vítimas que trabalham procurou ajuda, enquanto entre as que não trabalham esta proporção é de 31%*” (Instituto nacional de Estatística, 2005).

As crenças relacionadas com os papéis de género no casamento lançam as bases para a violência no relacionamento íntimo em muitas regiões de África. As crenças misóginas e patriarcais não são as únicas explicações para a violência doméstica contra a mulher, mas sim as atitudes de tolerância e aceitação das tais práticas por parte da comunidade em relação a esse tipo de violência, reduzindo a hipótese de uma resposta social mais sistémica (McCloskey *et al.*, 2016).

No que diz respeito à aceitabilidade em relação a idade, a mulher mais velha geralmente tem menos probabilidades de aceitar a violência contra as mulheres. Contudo, nenhuma associação estatisticamente significativa com a idade foi observada nos países onde a aceitação é mais elevada, Etiópia e Malawi, por exemplo. A relação com a idade era semelhante à existente entre as mulheres. Os homens mais velhos tinham menos probabilidades de aceitar o abuso contra a esposas, exceto no Mali e Uganda, onde não se observou qualquer associação estatisticamente significativa com a idade (Rani *et al.*, 2004). Ainda no que diz respeito a idade, outro estudo sugere que as atitudes de apoio à utilização de violência no relacionamento íntimo contra a mulher, tende a ser mais prevalente nos mais velhos (Gracia *et al.*, 2015).

*Em suma:* A literatura especializada sobre os estudos de violência demonstra que os atos violentos sempre fizeram parte da história humana, mas nem sempre recebeu a plateia

que damos hoje, pois a percepção de uma determinada ação varia de acordo com estandardizações fixadas num contexto específico, espaço e tempo.

As práticas e crenças culturais enraizadas em muitas comunidades africanas estabelecem obstáculos específicos para o género feminino, criando barreiras à prevenção ou intervenção (McCloskey *et al.*, 2016).

Embora tenha havido um aumento de ativismo e da consciência pública, as mulheres continuam relutantes em falar sobre as suas experiências de violência, e estão ainda menos inclinadas a apoiar aqueles que o fazem (Thomas, 2018). Como em todos os países em vias de desenvolvimento, um país como Cabo Verde torna difícil acompanhar a exigência e cumprir com a paridade de género, pois a história tende a repetir, levando consigo crenças culturais. Porquanto, uma sociedade misógina é difícil de dismantelar, pois exige a rejeição das tradições inerentes (Basu, 2015; Thomas, 2018). Não obstante, Cabo Verde, atualmente tem demonstrado algum progresso, como por exemplo a nível de implementação da lei, projetos de intervenção etc., é certo que as ONG que tem estado a operar no terreno teve e tem um papel primordial no processo, que certamente lento, contudo algumas mudanças visíveis.

## Capítulo II - Método

### Amostra

Todos os participantes da amostra residiam em Cabo Verde e em diferentes ilhas: Santiago 89.8%; a que acrescem 3.9% dos da ilha do Maio; 2.3% da ilha do Sal, 1.6% da ilha do Fogo; 1.2% da ilha de São Vicente e 0.4% que se reporta a outras ilhas, mormente a Boavista, Brava, e São Nicolau. Portanto pode-se constatar que 90% dos participantes são da ilha de Santiago e 10% distribuem-se entre as outras ilhas.

### Género e Idade

No que se refere ao fator Idade, a amostra distribui-se por um intervalo de idade predefinido que apresenta como mínimo 14 anos. A Tabela 6, ilustra os valores encontrados

**Tabela 6**

*Caraterização da Amostra de Acordo com Género e Idade dos Participantes*

	Género		Idade	
	<i>N</i>	%	<i>M</i>	<i>DP</i>
Masculino	120	46.9	28.46	7.170
Feminino	136	53.1	26.02	7,775
Total	256	100	27.23	7.581

*Nota. M = média; DP = desvio padrão; n = participantes.*

Neste estudo participaram 256 indivíduos, sendo que 46.9 % dos participantes pertencem ao género masculino e 53.1% ao género feminino. Como se pode observar pela Tabela 6, a maioria dos participantes são do género feminino, e a média de idades entre os dois géneros não difere muito, rondando os 28 para os homens e 26 anos para mulheres. Assim, em termos gerais, a média total de idades é de 27.16, e desvio-padrão de 7.581.

Contudo, dividindo as idades por classe, verifica-se que acima de 50 anos, apenas 1.5% participaram nos estudos. A razão para a baixa representatividade, pode ter a ver com os atuais constrangimentos que se vive no momento (covid -19), o que obrigou a recolha da amostra online, e isso teve consequências, pois nem todas as pessoas em Cabo Verde têm acesso à internet, principalmente a geração mais idosa, e na altura da recolha da amostra (março a junho), o país se encontrava em confinamento total.

### *Níveis de escolaridade*

No que se refere ao nível de escolaridade, a amostra contou com 50% dos participantes que possui o ensino secundário; 45.3% a licenciatura; 4.3% mestrado e 0.4% doutoramento. Pode se verificar que a maioria dos inquiridos possui o ensino secundário e licenciatura. Contudo, agrupando em dois grupos, podemos constatar que 50% possuem o ensino secundário, e os restantes 50% possuem licenciaturas e acima. Daí resolvemos agrupar (licenciatura, mestrado e doutoramento) e criar a variável, licenciatura ou +.

### *Profissão*

Em relação às profissões dos participantes, a maioria declarou serem estudantes (32.5%). Todos os participantes estavam empregados, dos quais 9.8% tinham trabalhado em profissões docentes, e os restantes desempenhavam diferentes profissões, conforme se pode ver no apêndice VII, caracterização sociodemográfica dos participantes.

### **Instrumento**

O inquérito de percepção de VBG contra a mulher foi criado especificamente para a população cabo-verdiana e destinado a indivíduos com idade igual ou superior a 14 anos. As perguntas do questionário foram surgindo, de acordo com a revisão de literatura e houve a necessidade de adaptá-las de acordo com o contexto do estudo. Antes da colheita dos dados

definitivos, o questionário foi pré-testado entre 20 cabo-verdianos residentes em Cabo Verde (recrutados por correio eletrónico e informados de que as suas respostas não faziam parte do estudo final), no sentido de verificarmos se há alguma ambiguidade nas questões colocadas. O pré-teste confirma se os *itens* são precisos exequíveis e claros (Gil, 1999; Saunders *et al.*, 2009). Após esses resultados, foi avançado a coleta definitiva dos dados.

Este estudo foi moldado em um modelo de inquérito com questionário estruturado, de autopreenchimento, com 36 questões, no total. O questionário é informado por variáveis sociodemográficas, questões sobre a percepção da gravidade de violência, frequência e a aceitabilidade de VBG contra a mulher em Cabo Verde.

O inquérito é dividido por três secções. Na primeira, temos os dados sociodemográficos (género, idade, nível de escolaridade, ilha e profissão).

Na segunda secção, temos os indicadores de violência de VBG contra a mulher, enformada por 30 questões que avaliam quatro (4) dimensões da violência. Cada tipo de violência é composto por 6 perguntas, excetuando a violência psicológica com 12 perguntas (6 para violência expressiva e 6 para controlo coercivo, segundo Dim e Elabor-Idemudia, 2018).

As questões foram, por exemplo, violência física: *torcer um braço ou puxar a mulher pelos cabelos; tentar sufocar ou queimar a mulher de propósito (...)*. Violência psicológica: *controlar os passos da mulher, querendo sempre saber onde ela está e com quem está; dizer à mulher que ela não presta para nada, que é um fracasso; mostrar mudanças de humor súbitas, não falar com a mulher durante dias sem razão aparente; apresentar mudanças brusca de humor, não falar com a mulher durante dias sem motivo aparente; insultar a mulher, chamando-lhe nojenta, burra, estúpida, leviana; ameaçar que vai suicidar-se, caso a mulher decida acabar com o relacionamento (...)*. Indicadores de violência sexual são por

exemplo: *forçar a mulher a ter relações sexuais quando esta não quer; engravidar a mulher por se ter negado a usar contraceptivos (...)*. Finalmente, os exemplos de indicadores de violência económica são: *forçando a mulher a dar-lhe satisfação pelo dinheiro que gastou em compras domésticas; não contribuir com dinheiro para os gastos da casa; guardar o dinheiro, dizer que não tem, mesmo sabendo que a mulher precisa para os cuidados médicos (...)*.

A forma de resposta, para os tipos de violência, é dada através de uma escala de *Lickert* de 1 a 4, em que “1 é nada grave, e 4 é muito grave”.

A última parte do questionário está relacionada com a Frequência e Aceitabilidade. No presente estudo, as questões utilizadas para avaliar a aceitabilidade e frequência de VBG em Cabo Verde foram derivadas do estudo de Gracia e Herrero (2006). No que se refere a percepção da Frequência as respostas vão desde “1 (nunca) a 4 (muito frequente)”, como por exemplo: *Em sua opinião, qual a frequência de comportamentos de VBG contra a mulher em Cabo Verde? Considere, por exemplo, a aceitabilidade, a questão – Na tua opinião, a VBG de género do marido contra a mulher é: 1) Aceitável em todas as circunstâncias; 2) Aceitável em algumas circunstâncias; 3) inaceitável, mas, não deveria sempre ser punida pela lei; 4) inaceitável e deveria sempre ser punida por lei*". (Ver o questionário em anexo III).

### **Procedimento**

Este estudo é um estudo transversal que foi conduzido entre março, e junho de 2020. Devido à pandemia, o estudo foi feito *online* usando o questionário do *google form*. A razão por detrás da escolha da recolha *online*, deve-se, em primeiro lugar, à circunstância que se viviam, e as recolhas empíricas seriam uma tarefa não possível. Em segundo lugar, deve-se à acessibilidade, e rapidez na coleta das informações.

Os dados para o estudo final foram recolhidos entre Abril e Junho de 2020. O inquérito esteve online durante um período de recrutamento de oito semanas. Foi utilizado um formulário de consentimento informado, *online*, obtendo a o consentimento dos participantes.

Os participantes, tanto do pre-teste como do estudo final, foram informados do objetivo do estudo, não havendo respostas certas ou erradas, as mesmas serão confidenciais e anónimas, sendo a sua participação voluntária, podendo os mesmos desistir a qualquer momento. Não foram solicitadas informações pessoais que identificassem os participantes, e era menos provável que os mesmos completassem o inquérito mais do que uma vez, pois o questionário foi criado de forma a restringir o acesso aos inquiridos que tinham previamente completado o inquérito. O preenchimento do questionário demoraria, em média, cerca de 20 minutos.

Foram, igualmente, fornecidos contactos, informando os participantes que caso surgisse alguma dúvida, poderiam vê-la esclarecida.

A divulgação da pesquisa foi feita através de *emails* e *link* nas redes sociais, a saber, o *Facebook*, que remeteu os participantes à página *online* com o inquérito. Para o efeito, foi utilizado a técnica de amostragem chamada “bola de neve”, – os sujeitos convidados para o estudo, vão passando informações e *links* para outros participantes –. Uma técnica que, de acordo com Thornton *et al.*, (2016) tem se mostrado efetiva e eficiente não só em termos de custo, mas uma técnica que tem sido muito utilizada durante a pandemia (Ogueji *et al.*, 2021).

### **Análise dos dados**

Para analisar as variáveis sociodemográficas dos inquiridos e as que indicam a sua perceção sobre a gravidade, frequência e aceitabilidade dos comportamentos de violência

doméstica sobre a mulher, usámos estatísticas descritivas (frequência, percentagem, média e desvio-padrão). No que respeita à gravidade, analisámos também as respostas pelos seus quatro tipos: física, psicológica, sexual e económica. Dado que as distribuições das variáveis não eram gaussianas, decidimos usar testes não-paramétricos. Assim, para comparar os quatro tipos de violência quanto à gravidade usámos o teste de *Friedman*; para comparar as diferenças por género e por nível de escolaridade dos tipos de violência, da frequência e aceitabilidade utilizámos o teste de *Mann-Whitney*; finalmente, para avaliar a relação da variável idade com a gravidade dos tipos de violência, frequência e aceitabilidade utilizamos o coeficiente de correlação de *Spearman*. Como medida da magnitude do efeito, usámos o delta de Cliff ( $\delta_{Cliff}$ ) (Cliff, 1996). Para a sua interpretação seguimos Vargha e Delaney (2000), que indicam os valores .11, .28 e .43 como correspondendo, respetivamente, a efeitos pequenos, médios e grandes. Em todos os testes considerámos significativos os resultados com um valor de probabilidade igual ou inferior a 0.05. Todos os cálculos foram realizados com o programa SPSS, versão 26 (IBM Corp., 2019).

## **Resultados**

### ***Perceção da Gravidade dos comportamentos de violência de género contra a mulher***

Apresentamos, na Tabela 7, os resultados sobre a perceção da gravidade dos comportamentos de VBG contra a mulher, agrupados nos quatro tipos de violência: física, psicológica, sexual e económica.

**Tabela 7**

*Gravidade dos Comportamentos de VBG Contra a Mulher*

	<i>M</i>	<i>DP</i>
V. Física	3.77	.302
V. Económica	3.59	.367
V. Sexual	3.57	.370
V. Psicológica	3.42	.414

*Nota. M = média; DP = desvio padrão.*

Os valores expostos na Tabela 7 mostram que as médias dos vários tipos de comportamentos de violência são todas muito elevadas, atribuindo os inqueridos maior gravidade à violência física, a que se segue a violência económica, e sexual e, finalmente, a violência psicológica.

#### ***Análise descritivas dos itens***

Os resultados totais da percepção da gravidade dos comportamentos, como um todo mostrou-se bastante alta, pois as medias dos *itens* assumiram valores 3.92 (máximo) *ameaçar a ou atacar a mulher com uma faca, uma pistola e outra arma*”, a 3.10 (mínimo) *controlar os passos da mulher, querendo saber sempre onde está e com quem está*”, demonstrando claramente o descontentamento e a censura social em relação a esses tipos de práticas (apêndice VIII).

#### ***Comparação por tipo de violência – Teste estatístico não paramétrico de Friedman***

A fim de aclararmos a existência ou não de diferenças estatisticamente significativas entre diferentes tipos de violência de género, propusemo-nos utilizar a análise estatística de

*Friedman*. Este teste permite verificar que os quatro tipos de violência diferem significativamente ( $\chi^2 = 271.96$ ,  $p = .>001$ ).

As comparações de pares (Comparando os tipos de violência dois a dois) com valores de P ajustados, verificamos que todos os pares, salvo a par violência económica – violência sexual, diferem significativamente entre si. Neste sentido, a análise dos tipos de violência confirma a existência de diferenças significativas entre a violência psicológica e sexual ( $\chi^2 = .850$ ,  $P = .001$ ), entre a violência psicológica e económica ( $\chi^2 = .953$ ,  $P = .001$ ). Assim como entre a violência psicológica e física ( $\chi^2 = 1.705$ ,  $P = .001$ ). A diferença, estatisticamente significativa, foi também encontrada entre a violência sexual e a violência física ( $\chi^2 = .855$ ,  $P = .001$ ), e entre violência económica e física ( $\chi^2 = .752$ ,  $P = .001$ ). Porém, tal assimetria significativa não se verifica entre violência sexual e económica ( $\chi^2 = .104$ ,  $P = 1.000$ ).

Seguidamente, para cada um destes tipos de violência, vamos ver se diferem por Género e por Nível de Habitações, usando o teste de *Mann-Whitney (U)*, e se estão relacionados com a Idade, calculando o coeficiente de correlação de *Spearman*.

### ***Comparação por Género***

*Violência Física*: comparando as respostas por género, verificamos que as mulheres (Média dos *ranks* = 138.15) vêem a violência física como mais grave que os homens (Média dos *ranks* = 117.56), sendo esta diferença estatisticamente significativa ( $U = 6847.500$ ,  $p = .019$ ). No entanto, verificamos que a essa diferença significativa é pequena de acordo com o tamanho de efeito ( $\delta = .16$ ).

A *Violência Psicológica*, apresenta um valor de  $U = 5738.000$ ,  $p < .001$ , que nos permite concluir, também, que existe diferenças significativas entre os dois géneros, com um tamanho do efeito moderado ( $\delta = .30$ ). As mulheres (Média dos *ranks* = 146.31) vêem a violência psicológica como mais grave que os homens (Média dos *ranks* = 108.32).

*Violência Sexual:* comparando as respostas por gênero, verificamos que as mulheres (Média dos *ranks* = 145.44) a vêm como mais grave que os homens (Média dos *ranks* = 109.30), sendo esta diferença estatisticamente significativa ( $U=5855.500$ ,  $p < .001$ ) com um tamanho de efeito moderado ( $\delta = .28$ ).

*Violência Económica:* comparando as respostas por Género, verificamos que as mulheres (Média dos *ranks* = 140.24) a vêm como mais grave que os homens (Média dos *ranks* = 115.20), e esta diferença é estatisticamente significativa ( $U=6564.000$ ,  $p = .006$ ), apesar do tamanho do efeito ser pequeno ( $\delta = .20$ ).

Em forma de síntese, de acordo com os dados acima indicados na tabela 9, para cada tipo de violência podemos observar uma disparidade entre os dois gêneros, ou seja, clara repúdio na forma de percepção de comportamentos, em todo o tipo de violência, por parte do gênero feminino.

### ***Comparação por habilitações***

*Violência Física:* comparando as respostas por nível de escolaridade (Secundário vs. Licenciatura ou +), não observamos diferença entre as respostas destes dois grupos. Porém, os participantes com licenciatura ou +, (Média dos *ranks* = 136,50) tendem a ver a violência física como a mais grave em relação aos que têm níveis de ensino secundário (Média dos *ranks* = 120.50).

*Violência Psicológica:* comparando as respostas por nível de escolaridade (Secundário vs. Licenciatura ou +), verificamos que o grupo com mais habilitações (Média dos *ranks* = 141.15) consideram a violência psicológica mais grave que o grupo com menos habilitações (Média dos *ranks* = 115.85), sendo esta diferença significativa, do ponto de vista estatístico ( $U=6573.000$ ,  $p = .006$ ). Contudo, os dados demonstram que, ao calcular a

magnitude de efeito, a diferença significativa em relação à violência psicológica o efeito é pequeno ( $\delta = .19$ ).

No que se refere à Violência Sexual, não houve diferença estatisticamente significativa. Contudo os licenciados percecionaram esse tipo de violência como menos grave (Média dos *ranks* = 121.67) comparado com licenciados ou + (Média dos *ranks* = 135.33).

A Violência Económica, comparando as respostas por nível de escolaridade (Secundário vs. Licenciatura ou +), não observamos diferença significativa entre estes dois grupos, apesar de licenciados percecionarem esse tipo de violência como a mais grave (Média dos *ranks* = 135.42) comparado com os do ensino secundário (Média dos *ranks* = 121.58).

De acordo com os resultados aferidos acima, para cada tipo de violência, as médias são sempre superiores para os participantes com níveis de escolaridade licenciatura ou +. Ou seja, esses tendem a ver a violência doméstica contra a mulher como a mais grave, sendo a nota maior vai para a violência psicológica.

### ***Relação com a Idade***

Com o objetivo de verificar a existência ou não de relações estatisticamente significativas entre a idade e diferentes tipos de violência doméstica, como já foi supradito, propusemo-nos utilizar a correlação de coeficiente de *Spearman*. A Tabela 8 ilustra os resultados.

**Tabela 8**

*Gravidade dos Tipos de Violência contra a Mulher em Relação à Idade*

Tipos de violência	Idade correlações		
	<i>r<sub>s</sub></i>	<i>p</i>	<i>n</i>
V. física	.072	.253	256
V. psicológica	.088	,160	256

V. sexual	,011	,863	256
V. económica	,083	,187	256

*Nota.  $r_s$  = correlação de Spearman;  $p$  = probabilidade;  $n$  = participantes.*

Os resultados, na Tabela 8, das correlações entre a idade em relação a tipos de violência revelam que não há relação com significância entre a idade e a gravidade dos tipos de violência (ver os dados em apêndice IX para gravidade de tipos de violência contra a mulher).

### ***Perceção da Frequência de VBG contra a mulher***

Analisando a questão “Em sua opinião, qual a Frequência de comportamentos de VBG contra a mulher em Cabo Verde”? a grande maioria dos inquiridos, cerca de 88%, considera-a frequente ou muito frequente (ver a Tabela 9).

### **Tabela 9**

#### *Perceção da Frequência de Comportamentos de VBG Contra a Mulher*

Frequência	N	%
Nunca	5	2.0
Às vezes	26	10.2
Frequentemente	140	54.7
Muito frequentemente	85	33.2
Total	256	100

*Nota.  $n$  = participantes.*

Ao passo que só 12% dos participantes é que responderam que, a frequência de violência de género em Cabo Verde, nunca ou às vezes, acontecem. Nessa escala em 4 pontos, a média é igual a 3.12, sendo a mediana igual a 3. Estes valores significam que a

generalidade dos inquiridos reportam a VBG contra a mulher como sendo frequente ou mesmo muito frequente.

### ***Comparação por género***

Como já foi referido acima, para saber se há diferença entre os grupos recorreu se a teste não paramétrico, teste estatístico (U) de *Mann-Whitney*.

**Tabela 10**

*Frequência de VBG contra a Mulher por Género*

	Género	n	Média dos <i>ranks</i>
Frequência de violência de género	Feminino	136	140,23
	Masculino	120	115,20
	Total	256	
<i>Mann-Whitney U</i>			6564,500
<i>Wilcoxon W</i>			13824,500
<i>Z</i>			-3,020
<i>Sig</i>			,003*

*Nota. n = número de Indivíduos; sig = significância estatística; z = valor da curva normal*

*padronizado; \*Valor significativo para  $P > 0.05$ .*

Os resultados apresentados na Tabela 10, ao comparar a perceção da frequência de violência doméstica por géneros, conclui que as mulheres (Média dos *ranks* = 140,23) veem a violência doméstica contra a mulher como mais frequente que os homens (Média dos *ranks* = 115,20), sendo esta diferença estatisticamente significativa (U=6564.500, p =.003).

### ***Comparação por habilitações***

Do ponto de vista de uma eventual diferença entre níveis de escolaridade e frequência de VBG, vejamos a Tabela 11.

**Tabela 11**

*Frequência de VBG contra a Mulher por Níveis de Escolaridade*

	Níveis de escolaridade	n	Média dos <i>ranks</i>
Frequência da violência de género	Secundário	128	128,37
	Licenciatura ou +	128	128,63
	Total	256	
<i>Mann-Whitney U</i>			8175,000
<i>Wilcoxon W</i>			16431,000
<i>Z</i>			-,032
<i>Sig</i>			,974

*Nota. n = participantes; sig = significancia estatística; z = valor da curva normal padronizado.*

Os resultados apresentados na Tabela 11, ao comparar as respostas por níveis de escolaridade (Secundário vs. Licenciatura ou +), pode se verificar que não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos quanto à frequência de VBG contra a mulher.

***Relação com a idade***

Com o objetivo de verificar a existência ou não de correlações estatísticas significativas entre a idade e frequência, propusemo-nos utilizar a correlação, de coeficiente de *Spearman*.

**Tabela 12**

*Frequência de VBG contra a Mulher em Relação à Idade*

Variáveis	Idade		
	<i>r<sub>s</sub></i>	<i>P</i>	<i>n</i>
Frequencia de violência de género	.032	.616	256

*Nota.*  $r_s$  = correlação de Spearman;  $p$  = probabilidade;  $n$  = participantes.

Não existe, também, relação entre a Idade e a percepção da frequência da violência de gênero.

### ***Percepção da aceitabilidade dos comportamentos de VBG contra a mulher***

No que concerne a aceitabilidade da violência doméstica sobre a mulher – quanto à pergunta “na sua opinião, a violência doméstica contra a mulher é” – a quase totalidade dos inquiridos respondem que a consideram inaceitável, e a grande maioria (91,4%), julga que deve ser sempre punida por lei, como se pode ver na Tabela 13.

### **Tabela 13**

#### *Aceitabilidade de Comportamentos de VBG Contra a Mulher*

Aceitabilidade	<i>n</i>	%
Aceitável em todas as circunstâncias	2	0.8
Aceitável em algumas circunstâncias	4	1.6
Inaceitável, mas não deveria ser sempre punida pela lei	16	6.3
Inaceitável e deveria ser sempre punida pela lei	234	91.4
Total	256	100

*Nota.*  $n$  = participantes.

Nesta escala, a média atinge o valor de 3.88 (sendo a mediana igual a 4). Assim, podemos concluir que a violência doméstica é, de um modo geral, considerada inaceitável e que deve ser punida pela lei.

### ***Comparação por género***

A Tabela 14 representa a análise das possíveis diferenças entre o género do ponto de aceitabilidade de violência doméstica contra a mulher.

**Tabela 14**

*Aceitabilidade de VBG contra a Mulher por Género*

	Género	n	Média dos <i>ranks</i>
Aceitabilidade da violência de género	Feminino	136	135,65
	Masculino	120	120,39
	Total	256	
<i>Mann-Whitney U</i>			7187,000
<i>Wilcoxon W</i>			14447,000
<i>Z</i>			-3,387
<i>Sig</i>			,001*

*Nota.* n = número de Indivíduos; sig = significância estatística; z = valor da curva normal padronizado.

\*Valor significativo para  $P > 0.05$ .

Os resultados apresentados na Tabela 14, no que se refere a aceitabilidade de violência de género, comparando as respostas por géneros, podemos verificar, através do teste *U* de *Mann-Whitney*, que as mulheres (Média dos *ranks* = 135.65) reportam a VBG como mais inaceitável que os homens (Média dos *ranks* = 120,39), sendo esta assimetria estatisticamente significativa ( $U=7187,000$ ,  $p=.001$ ).

### ***Comparação por habilitações***

A Tabela 15 evidencia os resultados dos níveis de escolaridade recorrendo ao Teste de *Mann-Whitney* no sentido de se ocorreram diferenças estatisticamente significativas entre os mesmos.

**Tabela 15**

*Aceitabilidade de VBG contra a Mulher por Níveis de Escolaridade*

Níveis de escolaridade	n	Média dos <i>ranks</i>
------------------------	---	------------------------

	Secundário	128	128,42
Aceitabilidade da violência de género	Licenciatura ou +	120	128,58
	Total	256	
<i>Mann-Whitney U</i>			8182,000
<i>Wilcoxon W</i>			16438,000
<i>Z</i>			-,035
<i>Sig</i>			,972

*Nota. n = participantes; sig = significância estatística; z = valor da curva normal padronizado.*

Os resultados apresentados na Tabela 15, comparando as respostas por nível de escolaridade (Secundário vs. Licenciatura ou +), não indicam diferença entre as respostas destes dois grupos quanto à aceitabilidade da violência.

#### ***Relação com a idade - Coeficiente de Correlação de Spearman***

Com o objetivo de verificar a existência ou não de correlações estatísticas significativas entre a idade e aceitabilidade, propusemo-nos utilizar a correlação, de coeficiente de *Spearman*.

#### **Tabela 16**

##### *Aceitabilidade de VBG Contra a Mulher Em Relação à Idade*

Variável	Idade		
	<i>r<sub>s</sub></i>	<i>p</i>	<i>n</i>
Aceitabilidade de violência de género	-.034	.586	256

*Nota. r<sub>s</sub> = correlacao de spearman; p = probabilidade; n = participantes.*

De acordo com os resultados na Tabela 16, não se observou também relação entre a Idade e a aceitabilidade da violência de género contra a mulher (ver os dados em apêndice X para Frequência e Aceitabilidade de violência de género contra a mulher).

### Discussão

#### *Percepção de Gravidade de diferentes tipos de violência de género contra a mulher*

O primeiro objetivo do estudo foi examinar a percepção dos cabo-verdianos, da gravidade dos indicadores de violência doméstica contra a mulher, a percepção da frequência com que o crime ocorre e a aceitabilidade do mesmo.

No que diz respeito à percepção da gravidade dos tipos de violência, os nossos resultados revelaram que a maioria dos participantes do estudo consideram a violência doméstica contra a mulher grave. Contudo, há uma maior percepção da gravidade dos comportamentos quando a violência se manifesta fisicamente. E essa diferença é estatisticamente significativa. Uma explicação plausível baseia-se no facto de a violência física ser mais visível, e com efeito, há um maior entendimento. Por outras palavras, é mais fácil entender que, dar uma bofetada, murros ou pontapés é agressão física (Capezza & Arriaga, 2008; Hammock *et al.*, 2015).

Supreendido foram os resultados encontrados em relação à gravidade dos comportamentos de violência económica, seguida da violência física. O que pode ter a ver com o encontrado em alguns estudos, onde indicaram que a violência económica é considerada fator de riscos para outros tipos de violência (Fawole, 2008; Adams *et al.*, 2008; Sedziafa *et al.*, 2017). Cabo Verde como um país onde as dificuldades económicas são visíveis, (Silva, 2009; Gomes, 2008), a privação económica pode levar as mulheres a se sujeitarem a relações abusivas, e conseqüentemente, colocem-se em posições vulneráveis e subalternos, para outro tipo de violência como a física, psicológica e sexual.

A percepção da gravidade dos comportamentos de violência sexual, que caiu para o terceiro tipo de violência mais grave, de uma certa forma não foi novidade. Alguns estudos concluíram que as pessoas concordam que o ato sexual é um dever da mulher (Dantas-Berger

& Giffin, 2005; Mahoney *et al.*, 2001; Fonseca, 2015). Os nossos resultados poderão encontrar respaldo na naturalização dos comportamentos sexuais presentes nas percepções dos participantes. Em Cabo Verde, hodiernamente, a cada dia, emerge novos casos de violência sexual, incluindo contra meninas, menores de idade, estabelecendo a sociedade cabo-verdiana uma forte descrença e desilusão com a forma como o sistema judicial está a operar no que diz respeito a esses crimes. Apesar de haver, não frequentemente, responsabilização de determinados agressores, por outro, a sensação de impunidade é bastante percebida. E isso pode ter influência na forma como as pessoas percebem e trivializam comportamentos relacionados com violência sexual. No fundo, a coisificação cultural da sexualidade feminina, a escassez do estudo sobre o tema, a diminuta consciência sobre a gravidade deste crime, e as suas consequências, pode, também, estar na origem dessa percepção.

No que se refere à percepção de gravidade de comportamentos de violência psicológica, os nossos resultados indicaram que essa foi considerado menos grave de todas. O que de certa forma, foi ao encontro com o encontrado em algumas literaturas (Capezza & Arriaga, 2008; Capezza *et al.*, 2017). Tal poderá ter a ver com o não reconhecimento das consequências negativas, “camufladas”, que advêm desse tipo de violência (Sackett & Saunders, 1999; Follingstard *et al.*, 1990; Follingstard *et al.*, 2009; Teles & Melo, 2002). Porquanto, segundo Stark (2007) devido a alguns aspetos insidiosos que caracterizam esse tipo de violência, muitas das vezes ela não é denunciada, e não muito documentada, comparando com outros tipos de violência doméstica. A intimidação, por exemplo, pode não ser entendida, que é umas das formas de violência psicológica. O que faz com que a sociedade, muitas vezes, acabe validando esses comportamentos como parte das relações a dois. E, no caso da vítima desse tipo de violência, na maioria dos casos nem ela própria se identifica/reconhece como vítima, pois a acredita que o sucedido não constitui o motivo de

alarme para a ação, impedindo essas atitudes, ao denunciar o agressor (Wynter, 2001). Com base nisso, reforçamos a importância de reconhecer e identificar atitudes subtís, principalmente quando se encontram em fase inicial do relacionamento. Sem, contudo, descartar a dificuldade em identificar esse tipo de violência, pois ela, na maioria das vezes, aparece diluída em atitudes aparentemente não relacionadas ao conceito clássico de violência (Silva, *et al.*, 2007). Em Cabo Verde, a trivialização de abuso psicológico é bem visível nas narrativas públicas, o que pode estar na raiz de percepção desse tipo do abuso como menos severo. Infelizmente, pouco se sabe sobre o assunto pois não existem, até o momento, estudos científicos que o confirme. O que conseqüentemente, demonstra a dessensibilização em relação a esse tipo de prática, apesar de efeitos devastadores, cientificamente comprovado. Por isso, urge mais estudos sobre este assunto e um maior envolvimento institucional, abordando a gravidade do abuso psicológico e o seu impacto na saúde pública.

#### ***Género e percepção da Gravidade de diferentes tipos violência de género contra a mulher***

O segundo objetivo deste estudo foi perceber se a percepção da violência contra a mulher se encontra associada com algumas características sociodemográficas dos participantes.

No respeitante às percepções da gravidade de diferentes tipos de violência em função do género, o nosso estudo encontrou diferenças estatisticamente significativas. Os resultados encontrados vão ao encontro com o que está registado em alguma literatura (Peek-Asa, 2001; Nybergh *et al.*, 2013; Diemer, 2014). Na amostra em apreço, o género feminino percecionou todos os tipos de violência como mais grave comparado com o género masculino. Uma explanação plausível pode ter a ver, com o facto de vivemos numa sociedade predominantemente patriarcal, ainda dominada pelo sexo masculino. E estes tendem a reforçar mitos e preconceitos relacionados com a violência que praticam, minimizando-a.

***Níveis de escolaridade e percepção da Gravidade de tipos de violência de género contra a mulher***

Não foram encontradas relações de significância com o ensino secundário e ensino superior, para cada tipo de violência doméstica, com exceção da violência psicológica. O que em parte vai ao encontro com os achados no estudo de Arisukwu *et al.*, (2021), onde encontraram relações de significância entre o nível de educação e a percepção do que constitui violência doméstica entre os inquiridos. A diferença significativa em relação à violência psicológica pode ter a ver com o facto de os participantes com Licenciatura e acima estão mais *aware* das formas subtis que compoem esse tipo de abuso. O que pode significar que a violência psicológica tem que ser mais falada nos currículos escolares, particularmente nos ensinios primário e secundário, porquanto acredite-se que a educação, centrada na emancipação humana, tende a capacitar, aumentando tanto a consciência – não só dos que frequentam a educação escolar, mas do público e a comunidade em geral – como também vantagens advindas dela.

***Percepção da Frequência e Aceitabilidade de violência de género contra a mulher***

Os resultados do nosso estudo, descritivamente, revelaram que mais de metade dos inquiridos são da opinião de que a violência doméstica em Cabo Verde é frequente. O que alinha com alguns estudos internacionais em relação aos quais a maioria da população reconhece que a violência contra a mulher é um problema nos seus países e cidades (Carlson & Worden, 2005; Statista, 2016; Herrero & Gracia, 2005). A elevada percepção, dos inqueridos, da frequência de violência doméstica contra a mulher, em Cabo Verde, pode ser parte da implementação da lei e da campanha nacional contra a VBG.

No que se refere à Aceitabilidade de violência doméstica contra a mulher, os nossos resultados mostram que, a maioria dos participantes é de opinião de que a violência contra a mulher, é inaceitável e que deveria ser sempre punida pela lei. Nos outros países, como por exemplo, Reino Unido e Espanha (Statista, 2016; Gracia & Herrero, 2006), a maioria dos participantes entende que a violência doméstica é inaceitável e que deveria sempre ser punida pela lei. Em alguns países africanos, como Malawi, a taxa de aceitação de violência doméstica foi considerada baixa. Facto que não se verifica em outros países, como por exemplo, Mali e Nigéria, onde a aceitação de violência contra a mulher atingem números surpreendentes (Rani *et al.*, 2004 Oyediran & Isiugo-Abanihe, 2005). Uma explanação plausível da baixa aceitação, nos países referido, inclusive Cabo Verde, pode ter a ver com o facto de que nesses países, há muito que houve a implementação da lei que condena a violência de género. E consequentemente, a baixa aceitação. Tenha se presente que a não aceitabilidade de violência de género contra a mulher, de certa forma constituem o reflexo de transformações sociais ocorridas em cabo verde. Não só a nível de implementação das leis como na consciência pública. Por isso, acredita-se que os resultados do estudo, embora não se olvide da pequenez da mostra, nos alertou para um público, aparentemente mais alerta acerca de um crime que há muito tem enviesado o comportamento humano, o discurso público.

#### ***Género e percepção da Frequência e Aceitabilidade de violência de género contra a mulher***

O nosso estudo revelou resultados estaticamente significativos entre o Género masculino e feminino, no que diz respeito à percepção da Frequência e Aceitabilidade de violência doméstica contra a mulher. Os dados da amostra indicaram que as mulheres apresentam um nível mais baixo de aceitação, e acham que a violência doméstica contra a mulher é mais frequente em Cabo Verde, do que os homens. Os nossos dados não suportam alguns estudos feitos, particularmente em alguns países africanos, onde revelam que o nível

de aceitabilidade é mais acentuado entre as mulheres do que os homens (United Nations, 2015; Oyediran & Isiugo-Abanihe, 2005; Uthman *et al.*, 2009; Sardinha & Catalán, 2018). No entanto, encontramos resultados semelhantes dos outros estudos feitos em países europeus, onde concluíram que os homens tendem a apresentar maior taxa de aceitabilidade de violência no relacionamento íntimo contra a mulher (Gracia & Herrero, 2006; Carlson & Worden, 2005; Gracia *et al.*, 2015; Martin-Fernandez *et al.*, 2018), particularmente, quando conhecem o agressor (Gracia & Herrero, 2006)

A elevada proporção, da não aceitação, de violência doméstica contra a mulher, por parte das mulheres, indica que alguns trabalhos já foram feitos. Contudo, muito falta por fazer, no que toca a desconstrução das crenças, incutidas e enraizadas, no quotidiano de muitos. No caso dos sujeitos masculinos da amostra, a mais aceitação de violência de género, comparativamente às mulheres, parece ter explicação plausível no pacto social de aceitação e normatividade, de que o uso da violência é imprescindível na correção do “comportamento”. Como dizia Rani *et al.*, (2004), a elevada aceitação entre os homens pode dificultar-lhes a perceção dos abusos que cometem.

#### ***Níveis de escolaridade e perceção da Frequência e Aceitabilidade de violência de género contra a mulher***

Em relação a níveis de escolaridade e sua relação com a Frequência e Aceitabilidade de violência doméstica, não houve diferenças significativas. Apesar do nosso estudo não encontrar evidência de que Níveis de escolaridade influenciam a perceção da Frequência e Aceitabilidade, os inqueridos que possuem a Licenciatura e acima acham que a violência doméstica contra a mulher, é mais Frequente em Cabo Verde, e menos aceitável.

A literatura alude que tanto o ensino secundário como o ensino superior são fatores protetivos contra a violência doméstica, apesar de impacto menor ser encontrado nos que detêm ensino secundário e ou médio, comparado com o ensino superior (Amir-ud-Din *et al.*, 2018). Nos estudos de Rani *et al.*, (2004), Oyediran e Isiugo-Abanihe, (2005) e segundo os dados de IDS (2011), as mulheres com alto nível de escolaridade têm menos probabilidade de aceitar e tolerar a violência doméstica, pois elas estão numa posição mais privilegiada de desafiar as normas culturalmente construídas que apoiam a hegemonia masculina. Entretanto, como é sabido, só a educação escolar em si não é suficiente para mudança de normas e valores, culturalmente enraizado – porquanto quem criou essas normas e valores são os mesmos que fundaram a educação escolar, que na maioria das vezes é o reflexo da ideologia que se vive. Se não, não teríamos a necessidade de implementar, nos currículos escolares, a violência com base no gênero.

Acreditamos que a família e a comunidade têm um papel crucial na eliminação de VBG. Essas podem envolver em meios não formais de educação ao socializar os seus membros para uma educação mais assente na igualdade e aceitação das diferenças biologicamente determinadas. A educação voltada para o humanismo, principalmente das mulheres, ajudará a preservar a dignidade da mulher, pois, algumas décadas atrás, em Cabo Verde, muitas mulheres viviam em cenários onde o percurso de subalternidade (Salústio, 1999) foi marcado precocemente, pela não existência de estruturas de apoio – a não existência de leis, na época, e o não reconhecimento de VBG nos currículos escolares, por exemplo – e retaguarda social. Com efeito a falta dessas estruturas de apoio eliminam referências estáveis válidas que possibilita a emancipação da mulher.

*“At any given moment, you have the power to say this is not how the story is going to end”. Christine Mason Miller.*

### **Considerações finais**

A conclusão a que chegamos, no quadro desta investigação, aponta para o facto de que a violência com base no género é um problema complexo, em todas as áreas do globo. Em Cabo Verde este fenómeno vem ganhando contornos que suscitam alguma preocupação, não só pela dimensão do fenómeno, mas também porque, não obstante o quadro legislativo referente à VBG ter sido implementado há mais de 10 anos, a retórica discursiva em prol do combate a este fenómeno não tem convergido com prática.

A ação que visa a eliminação da violência de género não se mostra uma tarefa fácil de fazer e de compreender. Pois isso *i*) implica, a reestruturação dos mecanismos informais, outros *modi operandi* de (co) criar a família. Ela implica, também *ii*) não só o reconhecimento legal, como também social. O reconhecimento de que certas tipologias da violência constituem abuso e são crimes, o que demanda descodificar práticas conflituosas que anuem posições de poder desiguais entre os envolvidos. Não basta só emendar os abusos perpetrados pelos chefes de família (referindo a agressores), com penas suspensas e algumas obrigações, que segundo a literatura, não funciona.

A erradicação da violência implica impedir que a diferença de poder no meio familiar se torne uma arma de opressão. Para isso é necessário sancionar qualquer atitude que subjugu e oprima os direitos fundamentais dos envolvidos. E o sistema criminal, por não estar a par das dinâmicas que compõem o crime de VBG, e as suas consequências – não só a nível individual, mas também coletivo – acaba por ser manipulado pelo agressor, não sendo

capaz de estabelecer diferentes medidas de procedimentos e/ou práticas que constituem obstáculos, tornar mais difícil a ocorrência desse crime.

Haja em vista o quadro exposto, a nossa análise compreensiva incidiu sobre uma amostra constituída por 72 sentenças judiciais, no sentido de perceber, não só as decisões proferidas pelos magistrados, mas também os fatores influenciadores dessas decisões, a nosso ver, fundamentais para a compreensão do fenómeno em estudo. Saliente-se que a leitura dos resultados obtidos operou-se, maioritariamente, em consonância com os principais quadros teóricos de referência e, neste sentido, considerando o que discutimos sobre os resultados principais deste estudo, podemos asseverar que:

Com recurso ao ISP, aludido previamente, podemos concluir que a severidade punitiva exercida pelo aplicador, no crime de VBG em Cabo Verde é, em média, baixa – mesmo estando cientes da inexistência de estudos relacionados com esse fenómeno. O que nos permite dizer que há uma inconsistência na atuação do sistema punitivo particularmente no que diz respeito à lei escrita no papel e a lei praticada.

Houve um fator legal, antecedentes criminais, que se correlacionou significativamente com a severidade da pena, o que era de se esperar. A inconsistência na aplicação da pena, e o não encaminhamento para intervenções especializadas, aquando do contacto, pela primeira vez, com o sistema judicial, refletiu no comportamento criminal futuro dos agressores, porquanto a condenação anterior (pena suspensa sem obrigação, multa, etc) não dissuadiu o indivíduo do crime. Daí houve a necessidade do aplicador intensificar as exigências preventivas, aplicando de uma forma mais severa a pena para os que reincidiram, excluindo, no entanto, a intervenção psicológica.

A decisão do aplicador em relação à severidade punitiva foi significativamente influenciada por outro fator, extralegal, relativo às características sociodemográficas do

arguido, designadamente o nível de escolaridade. Resultado que contraria o que diz a literatura especializada, acentuando a expectativa e o preconceito de que os menos instruídos, academicamente, são indivíduos mais tendentes ao crime.

Os resultados obtidos também alertam-nos para a omissão total do saber psicológico no campo judicial. Ou seja, não houve a intervenção das ciências comportamentais, particularmente a psicologização, quer às vítimas quer aos agressores. Em nenhuma das decisões consultadas, o aplicador recorreu a intervenções especializadas, e/ou peritos na área, no auxílio da sua decisão – nem no início nem no final da mesma. O que demonstra um sistema penal mais voltado para a punição, particularmente, aos reincidentes, e arguidos com baixo nível de escolaridade, negligenciando o seu papel ressocializador. A punição, já diziam os investigadores, só com penas de prisão, despojada de outras intervenções *“não tem levado, nem à diminuição dos casos de abuso, nem à prevista reabilitação, muito menos à sua inclusão social”* (Nobre & Barreira, 2008).

Neste sentido, fazendo fé nos resultados do nosso estudo, é inquestionável a necessidade de projetos de intervenção jus psicológica no âmbito da VBG, não só nos tribunais criminais e cíveis, mas também em espaços dedicados e dirigidos aos agressores, vítimas e crianças. Portanto, é imperativo que haja a legitimidade do saber psicológico no sistema judicial em Cabo Verde. Além disso, seria benéfico se os juízes consultassem peritos de áreas comportamentais para os assessorar na compreensão da complexidade, que é a VBG.

Ora, face ao evidente problema de VBG contra a mulher, o qual sempre maculou a sociedade cabo-verdiana, tendencialmente falocrática, recorreu-se ao sistema penal para se tentar mitigar esse tipo de violência. A Lei VBG, conseqüentemente, surgiu como uma ferramenta criminalizante e repressiva.

A partir dos resultados dos dois estudos depreendemos que os dispositivos formais de controlo, particularmente o sistema criminal de justiça, punem de forma branda o crime de VBG, pois a maioria dos casos que vão parar aos tribunais nem sequer chegam a ser sentenciados, e quando são, a maioria dos agressores, recebe penas suspensas, embora com obrigatoriedade, mas que, muitas vezes, não chegam a cumprir, por razões várias. Portanto, fazendo a ponte com o estudo adicional, verificamos que há uma incongruência entre as penas legais aplicadas e a perceção dos respondentes – maioria jovens e com níveis de escolaridade igual ou superior ao secundário –. A maioria acha que a violência doméstica contra a mulher é grave, frequente e que deveria ser sempre punida pela lei.

Assim sendo, e de acordo com o Herzog (2006), seria importante que houvesse uma congruência entre a perceção do público acerca da gravidade de um crime e a pena atribuída. Como dizia Robinson (2008), a credibilidade do sistema penal é essencial no controlo eficaz do crime. No entanto, essa credibilidade e confiança na justiça só vai existir se a atribuição da responsabilidade e punição estiverem em conformidade com o que a comunidade percebe como consonante com as suas instituições comuns de justiça.

Com este estudo concluímos ainda que não se pode ser benevolente, particularmente quando o crime é VBG. A passagem (pela primeira vez) do agressor pelo sistema criminal, não significa a primariedade do ato, daí a aplicação da pena efetiva, em vez de intimidação, seria justa. Mesmo estando ciente da ineficácia da pena, só por si, na dissuasão do crime, a punição tem de existir e alguns estudos mencionados, demonstraram a sua eficácia, no caso de violência doméstica contra a mulher, coadjuvada por outro tipo de intervenção envolvendo técnicos preparados rumo a uma comunidade mais educada.

Concluímos, também que é imprescindível a implementação da Psicologia Forense no campo judicial cabo-verdiano. As instâncias judiciais, não estão preparadas e nem

conseguem, por si só, garantir a segurança das vítimas, nem ressocializar o agressor só com penas efetivas de prisão, como já foi mencionado. Porquanto, isso implica a promoção e aplicação de medidas eficazes suscetíveis de atuar numa reconstrução e reprogramação ética, no caso dos agressores. E isso, com efeito, abre um panorama alargado de uma efetiva psicologização no processo de criminalização, de técnicas psicológicas embrenhadas em programas de intervenção, capacitando os que colidam com as leis – focada não na doentificação e ou patologização do individuo mas desafiá-lo de um conjunto de sistema de valores aprendidos (e posta em prática) –. Quanto à intervenção junto das vítimas, o foco primordial tem que ser nos planos de segurança, informar a vítima dos seus direitos, os recursos externos disponíveis e como acedê-los, inclusive acionar a polícia etc., dotando-as, de estratégias adequadas e eficazes. Se ainda estiver no relacionamento, a informação e o apoio tem que ser dados no sentido de sair da relação de uma forma segura, se assim for o desejo da vítima; informá-la sobre a os riscos, a sua segurança, o ciclo de relacionamentos abusivos e os primeiros sinais de alerta. Neste sentido, o psicólogo assessoria os magistrados nas tomadas das decisões, de forma a alindar com os pressupostos na lei.

### ***Implicações do nosso estudo, na prática***

Os resultados alcançados possibilitam levantar quesitos pertinentes, relacionados com o fenómeno da severidade punitiva das decisões judiciais, no crime de VBG em Cabo Verde. Além disso, o estudo também contribuiu para a compreensão dos fatores que podem influenciar a tomada de decisões dos magistrados no arquipélago.

Deste modo, a investigação em apreço, em primeiro lugar, afigura-se um contributo no quadro das investigações sobre a problemática da VBG e resposta de justiça criminal no arquipélago, tendo em conta que é o primeiro trabalho sobre a problemática até então realizado em Cabo Verde, a adicionar aos poucos que existem em África. Os resultados desta

investigação afiguram-se um contributo para o ramo de investigação – a análise da resposta da justiça penal, no contexto da violência de género. Acreditamos na importância deste estudo, uma vez que nos permite comparar as nossas conclusões com outras investigações internacionais

Perante a necessidade constante de mudança de estratégia e de reconhecimento de mecanismos eficazes de intervenção – tanto com os agressores, como com as vítimas – acreditamos que esta investigação seja o enceto de abertura de novos paradigmas, e horizontes, no que concerne à intervenção da Psicologia na justiça em Cabo Verde. Almejar a sensibilização das entidades públicas e privadas para a necessidade de se realizar e implementar programas de intervenção jus psicológica.

A partir da análise dos dados, verificamos que a introdução de Psicologia Forense no campo judicial – pese embora os enormes desafios, aliados ao não reconhecimento da sua importância no auxílio das decisões judiciais em Cabo Verde – afigura-se de extrema urgência. Face ao exposto, o psicólogo forense pode servir de mais-valia nas instâncias criminais, pois a ele cabe caracterizar o vínculo de condutas criminais do indivíduo, apurar a autenticidade das testemunhas, a responsabilidade criminal do sujeito, e não só. A implementação da Psicologia na justiça visa melhorar serviços legais aos cidadãos, através da aplicação desta ciência para melhorar leis, normas, procedimentos, documentos legais, e linguagem, em geral da justiça. Esta completamente ignorada, contudo, fomentadora de estereótipo, numa instância com raízes assentes na injustiça, impactando de forma negativa a vida das pessoas, nomeadamente, as mulheres em situações de VBG.

O estudo complementar, também se mostrou útil, pois o diagnóstico social é fundamental no auxílio da compreensão do problema – que insiste ser considerado de pertencer do foro privado, “sensível”, desconfortável, como se das vidas humanas não

tratasse. Reconhecemos que Cabo Verde tem vindo a percorrer um longo caminho, pois a violência contra as mulheres sempre foi vista como um "problema de mulheres" ou um "assunto privado, de casais", e a crescente consciencialização da violência contra a mulher é um passo enorme para o caminho da mudança. Adicionalmente, esses resultados podem auxiliar as instituições, profissionais, governos e partes interessadas a tomar decisões mais informadas e educativas sobre o problema da VBG, particularmente o que afeta as mulheres, não esquecendo aos perpetradores desta violência.

#### *Limitação do estudo e algumas pistas para futuras linhas de intervenção*

Não obstante os resultados do nosso trabalho terem possibilitado responder algumas das questões tidas como relevantes, à luz da revisão da literatura especializada, é importante fazer notar que ele padece de algumas limitações:

No que diz respeito ao estudo principal, em primeiro lugar, registem-se as posições geográficas das ilhas onde obtivemos a autorização para a recolha da amostra. Neste particular, tivemos algumas dificuldades na recolha dos processos, limitando assim a dimensão da amostra. Daí que tivemos de recorrer ao serviço *online*, onde encontramos algumas sentenças e acórdãos. Contudo, utilizando essa técnica, deparamos com alguns processos que não continham todas as informações sociodemográficas, apesar de terem todas as informações respeitantes às medidas aplicadas

Uma outra limitação tem a ver com o facto de, aquando da recolha dos processos, março 2020, estávamos no meio da pandemia mundial e o país estava a se preparar para a declaração do estado de emergência, e isso nos dificultou na recolha da amostra, pois tivemos que sair do país.

Contudo, apesar dos obstáculos, em termos de tempo e recursos que, de certa forma, limitaram esta investigação, acreditamos que a metodologia adotada permitiu-nos chegar a conclusões importantes.

Podemos considerar que Cabo Verde é um terreno baldio para qualquer investigação, não só nesta área, como também em outras relevantes. Tendo em conta os resultados deste estudo, sugerimos as seguintes recomendações:

- Alargar a amostra a outras ilhas, com o intuito de aferir assimetrias, proceder a comparações; seria um processo interessante, do ponto de vista da severidade das medidas penais, entre as ilhas. Este empreendimento metodológico seria fundamental, a nosso ver, na conceção, adequação e implementação de programas de intervenção juspsicológica em cada ilha.
- Construção de um observatório de prevenção de conflitos e violência, não só a nível de VBG, como também em relação a outros tipos de crime que apoquentam a sociedade civil cabo-verdiana.
- Seria, também interessante utilizar o mesmo instrumento de medida para comparar o resultado da severidade penalizadora com uma tipologia diferente de crime no contexto judicial cabo-verdiano. Isto poderia dar-nos uma visão mais precisa da severidade da pena não só no crime de VBG, como também noutras tipologias criminais.

Quanto ao estudo complementar, sugerimos que nos estudos futuros poderia ser interessante utilizar o mesmo inquérito para alargar as amostras em todas as ilhas, alcançando diferentes faixas etárias e níveis de educação. Isto poderia dar-nos uma visão mais precisa do problema. Ademais, para estudos futuros, o inquérito poderia ser adaptado à VBG, não só

contra as mulheres, porém, mais neutros em termos de género. Estamos cientes de que os estereótipos de género e a desejabilidade social pode ter influenciado os nossos resultados, apesar dos esforços em minimizar, por exemplo, a desejabilidade social (anonimato e confidencialidade das respostas); um estudo que abordasse todas as ilhas, seria necessário para diminuir, ainda mais, esses efeitos.

*Sugestão de medidas a tomar*

- Rever as leis existentes para garantir que os direitos das mulheres sejam estabelecidos em conformidade com as convenções internacionais ratificadas por Cabo Verde, como por exemplo a convenção de Maputo – CEDEAW.
- Maior interligação com centros de apoios às vítimas e agressores.
- Aumentar os fundos para o ministério da justiça e as agências que lidam e trabalham diretamente com as vítimas.
- Incluir os módulos de treino contínuo sobre a violência contra as mulheres e meninas para os profissionais que trabalham (in) diretamente com as vítimas, aumentando a sensibilização, melhorar a capacidade de identificar e de dar respostas adequadas, quando, nesses contextos, a pessoa revela ser vítima de VBG.
- Criar protocolos que orientem o atendimento e capacitação para os profissionais, cuja atuação é muitas vezes balizada por convicções pessoais e julgamentos de valor que nada têm a ver com os direitos humanos e da vítima.
- Estabelecer e reforçar parcerias com ordens de advogados (não só no papel) para que os custos judiciais não recaiam sobre as vítimas.
- Estabelecer, para as vítimas de VBG, uma estrutura de acompanhamento mais holística e mais integrada, seja dentro da polícia, seja em centros de saúde ou centros

sociais. Ter psicólogos, preparados e permanentes nesses centros, que atuam em casos de emergências, e não só.

- Estabelecer um sistema de gravação (com autorização) do depoimento das vítimas, no sentido de reduzir a (re) vitimização e a exaustiva repetição do que aconteceu em cada instituição para que ela for encaminhada.
- Interligar as instituições, através de um sistema único, de modo que tenhamos um sistema judicial híbrido que partilha os casos entre os tribunais, e outras instituições. Um sistema que dá alerta, por exemplo quando o agressor já tem passagens pela justiça.
- Nem todas as cidades do país oferecem serviços especializados para acompanhar as mulheres em situação de violência. Portanto, criar serviços para esse fim.
- Arranjar condições e espaço para que a vítima, o agressor, e as testemunhas sejam entrevistadas separadamente.
- Intervir junto dos arguidos com problemas de bebidas alcoólicas, para reduzir casos de reincidência, pois de acordo os nossos resultados, um número elevado dos agressores, 42%, consomem álcool.
- Desenvolver mais estudos que permitam conhecer a real dimensão da violência que ocorre tanto no âmbito privado como no público e as consequências a nível individual, familiar e social.
- Disponibilizar fundos para introdução da Psicologia Forense e projetos de intervenção jus psicológicos no sistema judicial do país. Reconhecer a função do psicólogo forense nas seguintes áreas: formação dos magistrados e de outros intervenientes no sistema judicial; no âmbito do sistema prisional; reinserção social;

proteção de crianças e jovens em risco e perigo; perícias; laudo e parecer psicológico; consultoria aos tribunais; nos processos de adoção e na regulação do exercício das responsabilidades parentais; no trabalho, junto das forças de segurança, etc.

- Desenvolver ferramenta, com base na Psicologia Forense, para utilização dos profissionais, na avaliação e gestão dos riscos para vítimas, e para os agressores

*Pontos a considerar*

- Todos nós temos o papel a desempenhar na luta contra a violência doméstica.
- Todo o sistema e interações humanas estão conectados e interligados, inclusive a violência. Por isso que o trabalho tem que ser feito de uma forma conjunta para que possamos mudar a atitude cultural e as crenças erróneas em relação ao sexo oposto.
- O sistema de justiça criminal é o dispositivo que pode garantir e impor a condenação social desse tipo de crime. A violência de género é um crime e deve ser tratado como tal, pelo sistema de justiça criminal. Não é um problema social a ser gerido somente por associações de caridade e assistencialismo.
- A lei VBG precisa de ser revista – pois ainda gera muita confusão – e aplicada de forma mais assertiva e justa para que realmente não seja apenas papel objetivando apenas as boas intenções. Ela tem que ter funcionalidade prática.
- O ideário do sistema judicial está mais voltado para a neutralização temporária dos delitos – penas suspensas, o que não diminui a reincidência, como já descrevemos – do que a mitigação.
- Reestruturar normas que honrem e respeitem as mulheres como seres desiguais, mas com afirmações próprias e dignas, com direito à justiça e à igualdade.

- O denominador comum da violência doméstica é poder e controlo. A assunção de que “ele descontrolou” não é problema central no relacionamento abusivo, mas sim uma forma de punição, por perder o controlo da vítima. Neste sentido o abuso não advém da inabilidade do agressor em resolver o conflito, mas da decisão pessoal, em proclamar a superioridade, – que pode ser económica, financeira, social, física, e afins – e o controlo em relação à sua parceira. O agressor pune a mulher quando é desafiado ou quando percebe a perda de poder e controlo sobre ela. É por isso que a maioria dos feminicídios acontece quando a vítima tenta sair do relacionamento abusivo.
- A comunidade e as instituições têm que ser os promotores dos processos de educação e consciencialização social, para que os resultados das intervenções, por exemplo, com as vítimas, possam espelhar o seu desenvolvimento e a resolução dos problemas reais e sentidos. Modificação de lógica que exige uma atitude participativa, responsiva e de construção da intervenção com as vítimas e agressores com que se trabalha.

### ***Reflexão final***

A investigação veio reiterar a nossa convicção da emergência da coligação entre Direito e Psicologia Forense em Cabo Verde. A importância de implementar medidas proativas e efetivas que podem conduzir a baixos níveis de reincidência e novos (re)incidentes.

Durante esta investigação verificámos que o equacionar de estratégias alternativas, não apenas prisão efetiva, passa necessariamente por mudanças significativas nas atitudes e mentalidades de todos os atores sociais envolvidos. Por isso, acreditamos sinceramente que a

implementação de projetos de intervenção juspsicológica não só fará sentido como fará toda a diferença no sistema de justiça em Cabo Verde.

Várias inquietações foram surgindo, mas foram ultrapassadas com o desenrolar dos trabalhos. Contudo, ainda é possível ir mais além. O estudo paralelo, que fizemos, nos deu uma visão mais alargada daquilo que a uma faixa da sociedade civil acha, e o que o dispositivo legal considera. Mas muitas questões ficaram por responder.

Terminamos a nossa reflexão com a seguinte declaração de uma vítima de VBG: *queria que fosse dia todos os dias. Não queria que anoitcesse, pois, à noite, é que começava todo o terror... todos os dias (...)*. Erradicar a violência contra a mulher é uma tarefa de todos, como cidadãos e como seres humanos. Se uma parte, a maioria, não pode se expressar, viver, livremente, a consequência será para todos nós. Pois afeta a nossa economia, política, finança, sistema de saúde, e, mexe com todo o ecossistema, onde todos nós pertencemos independentemente dos nossos sinais biológicos.

Que a nossa geração não se deixe ofuscar pelo *Ego* e vaidade, ao ponto de aniquilarmos o Outro só por ser diferente. Porque *“harmful gender stereotypes must end. Females must not be viewed in terms of what they “should” do – but instead seen as they are – equal beings and unique individuals with needs and desires – and the right to exercise them”*.

Para terminar, consideramos bastante enriquecedora a realização deste estudo, por permitir-nos aquilatar os seus resultados com os de outras investigações, mas também porquanto abriu os nossos horizontes relativamente a uma problemática que, num registo crescente, vem ganhando novos contornos internacionais, mas que precisa, e com urgência, ganhar visibilidade em contextos africanos, principalmente o meu país.

### Referências bibliográfica

- Abourabi, Y., & Lubaale, E. C. (2022). Criminal accountability for gender-based violence in North Africa: Beyond legal reforms. In E. Lubaale & A. Budoo-Scholtz (Eds.), *Violence against women and criminal justice in Africa: Volume I. Sustainable development goals series*, 225–267. Palgrave Macmillan.
- Adams, A. E., Sullivan, C. M., Bybee, D., & Greeson, M. R. (2008). Development of the Scale of Economic Abuse. *Violence Against Women*, 14(5), 563–588. <https://doi.org/10.1177/1077801208315529>.
- Adjorlolo, S., & Chan, H. C. O. (2019). Risk assessment of criminal offenders in Ghana: An investigation of the discriminant validity of the HCR-20V3. *International Journal of Law and Psychiatry*, 66, 101458. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.101458>
- Adriaenssen, A., Visschers, J., Van den Bulck, J., & Paoli, L. (2020). Public Perceptions of the Seriousness of Crimes: To What Extent are They Driven by Television Exposure?. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 26(4), 481-500.
- Aguilar, R. J., & Nightingale, N. N. (1994). The impact of specific battering experiences on the self-esteem of abused women. *Journal of family violence*, 9 (1), 35-45.
- AJPD – Associação Justiça Paz e Democracia –. (2006), Relatório anual dos direitos humanos 2005 em Angola. A violação escondida dos meus direitos na pacificação do país e na expectativa das próximas eleições. <https://www.ajpdangola.co/publicacoes/relatorio-anual-de-direitos-humanos-2005-2006>.
- Alderden, M. A. (2008). Processing of sexual assault cases through the criminal justice system. University of Illinois, Chicago. <https://www.proquest.com/docview/304361231>

- Alisson, L., Kebbell, M., Lewis, P. (2006). Considerations for experts in assessing the credibility of recovered memories of child sexual abuse: The importance of maintaining a case-specific focus. *Psychology, Public Policy, and Law*, 12(4), 419–441.
- Almeida, J. F., Machado, F. L., Capucha, L. & Torres, A. C. (1994). *Introdução à Sociologia*. Lisboa: Universidade Aberta.
- Álvarez C. D., Aranda B. E., & Huerto J. A. L. (2015). Gender and cultural effects on perception of psychological violence in the partner. *Psicothema*, 27(4), 381-387  
<https://doi.org/10.7334/psicothema2015.54>.
- Amado, A. J. G. (1996). Tópica, derecho y método jurídico. In: *Doxa: cuadernos de filosofía del derecho*, Alicante, n. 4.  
[https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10908/1/Doxa4\\_12.pdf](https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10908/1/Doxa4_12.pdf)
- Amaral, N. de A., Amaral, C. de A., & Amaral, T. L. M. (2013). Mortalidade feminina e anos de vida perdidos por homicídio/agressão em capital brasileira após promulgação da Lei Maria da Penha. *Texto contexto - enferm.* 22(4):980-988.  
<https://doi.org/10.1590/S0104-07072013000400014>.
- Amir-ud-Din, R., Fatima, S., & Aziz, S. (2018) *Is Attitudinal Acceptance of Violence a Risk Factor? Na Analysis of Domestic Violence Against Women in Pakistan*. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(7–8), NP4514–NP4541.  
<https://doi.org/10.1177/0886260518787809>.
- Anderson, M. A., Gillig, P. M., Sitaker, M., McCloskey, K., Malloy, K., & Grigsby, N. (2003). “Why doesn’t she just leave?”: A descriptive study of victim reported impediments to her safety. *Journal of Family Violence*, 18, 151-155.

- Andrade, V. R. P. (2003). de Sistema penal máximo x cidadania mínima: códigos da violência na era da globalização / Vera Regina Pereira de Andrade. Porto Alegre, Livraria do Advogado.
- Andrade, V. R. P. (2005). A soberania patriarcal: O sistema de justiça criminal no tratamento da violência sexual contra a mulher. *Revista Sequência*, 50: 71-102.
- Anjos, D. (2015). Políticas Públicas Cabo-Verdianas contra a Violência Baseada no Género. [Tese de Doutoramento, Universidad de Salamanca].
- APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. (2013). Manual unissexo para o atendimento a vítimas adultas de violência sexual, 13-72.
- Araújo, A. B. E., & Ribeiro, L. E. G. (2019). Nas Asas do Assum Preto: Práticas restaurativas no combate à violência contra a mulher e alcance da cidadania no estado da paraíba. In G. Baggenstoss, S. Sommariva, P. Santos e M. Hugill (org) *Não há lugar seguro. Estudos e práticas sobre violências contra a mulher à luz da multidisciplinariedade*”. Volume 2- Florianopolis.
- Araújo, F. R. (2011). O princípio da proporcionalidade referido ao legislador penal. Salvador, Juspodivm.
- Araújo, N. F. (2004). “Sustenta, mas não manda: dilemas de uma ação sócio-política de mulheres chefes de família no nordeste brasileiro”. In: Anne Cova, Natália Ramos & Teresa Joaquim (orgs), *Desafios da Comparação: Família, Mulheres e Género em Portugal e no Brasil*. Oeiras: Celta Editora, 313-331.
- Arias, I., & Pape, K. T. (1999). Psychological abuse: Implications for adjustment and commitment to leave violent partners. *Violence & Victims*, 14, 55-67.
- Arisukwu, O., Igbolekwu, C., Adebisi, T., & Akindele, F., (2021). Perception of domestic violence among rural women in Kuje. *Heliyon* (7) e06303.

- Arowolo, G. A. (2020). Protecting women from violence through legislation in Nigeria: Need to enforce anti-discrimination laws. *International Journal of Discrimination and the Law*, 20(4), 245–288. <https://doi.org/10.1177/1358229120971953>.
- Ashworth, A. (2006). *Principles of criminal law*. Oxford: Oxford University Press.
- Atkinson, M. P., Greenstein, T. N., & Lang, M. M. (2005). For women, breadwinning can be dangerous: Gendered resource theory and wife abuse. *Journal of Marriage and Family*, 67(5), 1137-1148.
- Bancroft, L. (2015). *Why does he do that? Inside the minds of angry and controlling men*. Berkley Books, New York.
- Bandeira, L. M. (2014). Violência de gênero: a construção de um campo teórico e de investigação. *Sociedade e Estado*, 29(2), 449-469.
- Barbosa, E. Da G. L. (2016). Violência sexual em Cabo Verde: Uma análise diagnóstica. [Dissertação de mestrado]. Universidade Estadual de Campinas.
- Barnett, O. W., Miller-Perrin, C. L., & Perrin, R. D. (1997). *Family violence across the lifespan: An introduction*. Sage Publications, Inc.
- Barros, C. M. (2016-2020). Análise de género de plano de ação de género no âmbito da cooperação UE – Cabo Verde. Elaborado no âmbito do GAP II (2016-2020). “Transformando as Vidas de Meninas e Mulheres através das Relações Externas da UE. UE, Cabo Verde.
- Basu, M. (2015). Angles of approaching gender equality: Top-Down vs. Bottom-Up. *CUNY Academic Works*. [https://academicworks.cuny.edu/cc\\_etds\\_theses/353/](https://academicworks.cuny.edu/cc_etds_theses/353/)
- Baum, L. (2008). Probing the effects of judicial specialization. *Duke LJ*, 58, 1667.

- Beaudry, G., Yu, Ronggin., Perry, A. E., & Fazel, S. (2021). Effectiveness of psychological intervention in prison to reduce recidivism: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *The Lancet Psychiatry*, 8:759-773.
- Beauvoir, S. (2004). *Le deuxième sexe*. Paris: Editions Champion.
- Beccaria, C. (2007). *Dos delitos e das penas*. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2ª edição.
- Beichner, D., & Spohn, C. (2005). Prosecutorial charging decisions in sexual assault cases: Examining the impact of a specialized prosecution unit. *Criminal Justice Policy review*, 16(4), 461-498.
- Bennett, L., & Bland, P. (2008) Substance abuse and intimate partner violence. *Harrisburg, PA: VAWnet*, 16, 2009. <https://vawnet.org/material/substance-abuse-and-intimate-partner-violence>.
- Bergen, R. K. (1996). *Wife rape: Understanding the response of survivors and service providers*. Sage Books.
- Bergen, R., Barnhill, E. (2006). Marital rape: New research and directions. *National Online Resource Center on Violence Against Women*. <https://vawnet.org/material/marital-rape-new-research-and-directions>.
- Biden, J. R. (1993). Violence against women: The congressional response. *American Psychologist*, 48, (10), 1059-1061. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.48.10.1059>.
- Blanck, P. D. (1990). What empirical research tell us: Studying judges' and juries' behavior. *Am. UL Rev.*, 40, 775.
- Blumstein, A., & Cohen, J. (1979). Sentencing of convicted offenders: An analysis of the public's view. *Law & Soc'y Rev.*, 14, 223. <https://doi.org/10.2307/3053313>.

- Bond, C. E., & Jeffries, S. (2014). Similar punishment? Comparing sentencing outcomes in domestic and non-domestic violence cases. *British Journal of Criminology*, 54(5), 849-872. <https://doi.org/10.1093/bjc/azu034>.
- Bowker, L. H. (1983). *Beating Wife-beating*. Lexington Books.
- Bowman, C. G. (2003). Domestic violence: Does the african context demand a different approach?. *Int J Law Psychiatry*, 26(5), 473-91. [https://doi.org/10.1016/S0160-2527\(03\)00082-7](https://doi.org/10.1016/S0160-2527(03)00082-7).
- Braman, E. (2010). Searching for constraint in legal decision making. In D. Klein & G. Mitchell (Eds.), *The psychology of judicial decision making* (203-217). New York: *Oxford University Press*.
- Branco, F., Poiares, C. A. (2013). Plataforma de cotação. Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização (Criminalização Secundária - ISPP-CS). Manuscrito não publicado.
- Brewster, M. P. (2003). Power and control dynamics in prestalking and stalking situations. *Journal of Family Violence*, 18(4), 207-217.
- Brown, W., & Halley, J. (2002). *Left legalism/left critique*. Durham: Duke University Press.
- Buckley, H., Holt, S., & Whelan, S. (2007). Listen to Me! Children's experiences of domestic violence. *Child Abuse Review*, 16(5), 296-310.
- Budoo-Scholtz, A., & Lubaale, E. C. (eds. 2021). *Violence against women and Criminal Justice in Africa: Volume II, Sustainable Development Goals Series*, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-75953-7\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-030-75953-7_10).
- Buzawa, E. S., & Buzawa, C. G. (1990). *Domestic violence: The criminal justice response*. Sage.
- Buzawa, E. S., & Buzawa, C. G. (2003). *Domestic violence: The criminal justice response* (3<sup>a</sup> ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

- Campbell, J. C., & Alford, P. (1989). The dark consequences of marital rape. *American Journal of Nursing*, 89(7), 946-949.
- Capezza N. M., & Arriaga X. B. (2008). You can degrade but you can't hit: Differences in perceptions of psychological versus physical aggression. *Journal of Social and Personal Relationships*, 25(2), 225-245. <https://doi.org/10.1177/0265407507087957>.
- Capezza, N. M., & Arriaga, X. B. (2008a). Factors associated with acceptance of psychological aggression against women. *Violence Against Women*, 14, 612-633.
- Capezza, N. M., D'Intino, L. A., Flynn, M. A., & Arriaga, X. B. (2017). Perceptions of Psychological Abuse: The Role of Perpetrator Gender, Victim's Response, and Sexism. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(3-4), 1414-1436. <https://doi.org/10.1177/0886260517741215>.
- Cardoso, C., Anjos, D., & Amado, R. (2021). Avaliação do programa de reinserção de homens arguidos por violência baseada no género. Cabo Verde.
- Caridade, S., & Machado, C. (2006). Violência na intimidade juvenil: Da vitimação à perpetração. *Análise Psicológica*, 4(24), 485-493.
- Carlson, B. E., & Worden, A. P. (2001). Public opinion about domestic violence. Draft Report: National Institute of Justice 98-wt-vx-0018.
- Carlson, B. E., & Worden, A. P. (2005). Attitudes and beliefs about domestic violence: Results of a public opinion survey: I. Definitions of domestic violence, criminal domestic violence, and prevalence. *Journal of Interpersonal Violence*, 20(10), 1197-1218. <https://doi.org/10.1177/0886260505278530>.
- Carmo, R. (2005). A Prova pericial: enquadramento Legal. In Gonçalves, R. & Machado, C. (2005) (Coords.). *Psicologia Forense*. Coimbra: *Quarteto*.

- Casimiro, I. (2004). “Paz na terra, guerra em casa”. Feminismo e organizações de mulheres em Moçambique. Maputo: *Promédia*.
- Casique, C. L., & Furegato, A. R. F. (2006). Violence against women: theoretical reflections. *Rev Latino-am Enfermagem*; 14(6), 950-956.
- CEP (2005). - Centro de Estudos da População da Universidade Eduardo Mondlane -, Inquérito internacional sobre a violência contra a mulher (relatório completo do inquérito). Maputo: CEP.
- Chandler, S. M., & Torney, M. (1981). The decisions and the processing of rape victims through the criminal justice system. *California Sociologist* 4(2),155-169.
- Cliff, N. (1996). *Ordinal methods for behavioral data analysis*. Routledge.
- CNDHC – Comissão Nacional para Direitos Humanos e a Cidadania –. (2010). Declaração Universal dos Direitos humanos. Imprensa Nacional. Praia.
- Código de Processo Penal. (2005). Código de Processo Penal de Cabo Verde. *Ministério da Justiça. Índice Analítico da Responsabilidade da Comissão de Reformas Legislativas do M.J., Praia, Cabo Verde*.
- Código Penal. (2021). Boletim Oficial da República de Cabo Verde. 1º série, nº 15 de 11 de fevereiro. Fonte: <https://kiosk.incv.cv/>.
- Coimbra, C. M. B. (2002). Violência do estado e violência “doméstica”: o que têm em comum. *Clínica e política: subjetividade e violação dos Direitos Humanos*, 77-88.
- Coker, A. L., Davis, K. E., Arias, I., Desai, S., Sanderson, M., Brandt, H. M., & Smith, P. H. (2002). Physical and mental health effects of intimate partner violence for men and women. *American Journal of Preventive Medicine*, 23, 260–268.

- Coker, D. (2002) Transformative justice: Anti-subordination process in cases of domestic violence. In H. Strang e J. Braithwaite (eds) Restorative Justice and family violence. Cambridge university press.
- Comissão Nacional de Direitos Humanos em Cabo Verde. (2010). Disponível em [http://cndhc.org.cv/images/download/Relatorio\\_CEDAW.pdf](http://cndhc.org.cv/images/download/Relatorio_CEDAW.pdf).
- Cook, D., Burton, M., Robinson, A., & Vallely, C. (2004). Evaluation of Specialist Domestic Violence Courts/Fast Track Systems. Home Office: London.
- Cortizo, M., & Goyeneche, P. (2010). “Judicialização do privado e violência contra a mulher”. *Revista Katályses*, 1(13), 102-109. Florianópolis.
- Costa, L. F., & Brandão, S. N. (2005). Abordagem Clínica no Contexto Comunitário: uma perspectiva integradora. *Psicol. Soc.*, Porto Alegre , 17(2), 33-41.
- Costa, S. (2010). “Do Falocentrismo Estéril: Mulheres e Participação Política em Cabo Verde”, in *Jornal A Semana*, 23.
- Costa, S. (2011). Mulheres e Participação Política no Cabo Verde Democrático. In C. Fonseca e C. Fortes (Org.), "As Mulheres em Cabo Verde: Experiências e Perspectivas", Praia: Edições da UNICV, pp. 77-108.
- Coutinho, R. M. L. (1994). Tecendo por trás dos panos: a mulher brasileira nas relações familiares. Rio de Janeiro: *Rocco*.
- Cretney, A., & Davis, G. (1997). The significance of compellability in the prosecution of domestic assault. *British Journal of Criminology*, 37(1), 75–89.  
<https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a014151>
- Cullen, F. T., Jonson, C. L., & Nagin, D. S. (2011). Prisons do not reduce recidivism: The high cost of ignoring the science. *The Prison Journal*, 91, 48S-65S.  
<https://doi.org/10.1177/0032885511415224>

Cunha, L. A. F. (2014). *Factores que influenciam as decisões judiciais no crime de violência doméstica conjugal*. [Tese de Mestrado].

[https://sigarra.up.pt/feup/en/pub\\_geral.pub\\_view?pi\\_pub\\_base\\_id=32359](https://sigarra.up.pt/feup/en/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=32359).

Cusson, M. (2007). *Criminologia* (2ª Ed.). Cruz quebrada. *Casa das Letras*.

Dantas-Berger, S., Giffin, K. (2005). A violência nas relações de conjugalidade: invisibilidade e banalização da violência sexual? *Caderno Saúde Pública*, 21(2), 417-425.

Davis, R., Smith, B., & Taylor, B. (2003). Increasing the proportion of domestic violence arrests that are prosecuted: A natural experiment in Milwaukee. *Criminology e Public Policy*, 2(2), 263-282. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2003.tb00125.x>

Davis, S. A. B., & Kemp, S. (1994). Judged Seriousness of Crime in New Zealand. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 27(3), 250-263.

Dawson, M. (2003). The cost of “lost” intimacy: The effect of relationship state on criminal justice decision-making. *British Journal of Criminology*, 43, 689-709. <https://doi.org/10.1093/bjc/43.4.689>

De Lanza, S. M. (2001). Programa de assistência a vítimas de delitos. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 9(33), 203-216.

De Lara, B., Rangel, B., Moura, G., Barioni, P., Malaquias, T. (2016). Meu amigo secreto: Feminismo além das redes. Edições de Janeiro, Coletivo não me khalo.

De Maris, A., & Jackson, J. K. (1987). Batterers' reports of recidivism after counseling. *Social Casework*, 68(8), 458-465.

De Vries, H., Eggers, S. M., Jinabhai, C., Mayer-Weitz, A., Sathiparsad, R., & Taylor, M. (2014). Adolescents' beliefs about forced sex in KwaZulu-Natal, South Africa. *Arch Sex Behav* 43, 1087-1095. <https://doi.org/10.1007/s10508-014-0280-8>.

- Debert, G. G., & De Oliveira, B. M. (2007). Os modelos conciliatórios de solução de conflitos e a “violência doméstica”. *Cadernos Pagu*, 29, 305–338.
- Debert, G. G., & Gregori, M. F. (2008). Violência e Género Novas Propostas, velhos dilemas. *RBCS*, 23 n°. 66.
- Delphy, C. (1993). Rethinking sex and gender. *Women's Studies International Forum*, 16(1), 1-9.
- Dias, I. (2010). “Violência doméstica e justiça”. *Sociologia: Revista do Departamento de Sociologia da FLUP*, Vol. XX, 245-262.
- Diemer, K. (2014). Women’s safety is a men’s issue: Men’s attitudes to violence against women and what that means for men. *Family Court Review*, 41(3), 367-380.
- Digneffe, F., & Parent, C. (1998). “La Mediation face aux situations de violence contre les conjointes: quelques elements a verser au debat”. In: Y. Cartuyvels *et al.* Politique, police et justice au bord du futur. Montreal: L’Harmattan, pp. 153-169.
- Dim, E. E., & Elabor-Idemudia, P. (2018). Prevalence and predictors of psychological violence against male victims in intimate relationships in Canada. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 27(8), 846-866.
- Dinovitzer, R., & Dawson, M. (2007). Family-based justice in the sentencing of domestic violence. *The British Journal of Criminology*, 47(4), 655-670.
- Direção-Geral da Polícia de Justiça (2016). Síntese da cooperação entre Portugal e Cabo Verde na área a Justiça. <https://docplayer.com.br/79308261-Sintese-da-cooperacao-entre-portugal-e-cabo-verde-na-area-a-justica.html>.
- Dobash, R. E., & Dobash, R. P. (1979). Violence against wives: a case against the patriarchy. New York: Free Press, 179-206

- Doerner, J. K., & Demuth, S. (2010). The independent and joint effects of race/ethnicity, gender, and age on sentencing outcomes in US federal courts. *Justice Quarterly*, 27, 1–27. <https://doi.org/10.1080/07418820902926197>
- Domenach, J. M. (1981). La violencia. In: UNESCO (Org.). *La violencia y sus causas*. Paris: Unesco, p. 33-45.
- Domingos, R. (2018). *Severidade punitiva e reincidência criminal: O caso da violência doméstica em Portugal*. [Tese de Doutorado, Universidade de Murcia]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=157933>
- Donat, P. & D’Emilio, J. (1992). A feminist redefinition of rape and sexual assault: Historical foundations and change. *Journal of Social Issues*, 48 (1), 9-22.
- Du Mont, J., Miller, K. L., & Myhr, T. L. (2003). The role of “real rape” and “real victim” stereotypes in the police reporting practices of sexually assaulted women. *Violence Against Women*, 9(4), 466-486.
- Duarte, M. (2013). *Para um direito sem margens: Representações sobre o direito e a violência contra as mulheres*. [Tese de Doutorado, Universidade de Coimbra]. <https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/24287>.
- Dutton, D. G. (1986). The outcome of court-mandated treatment for wife assault: A Quasi-experimental evaluation. *Violence Victim* 1(3),163-75. <https://doi.org/10.1891/0886-6708.1.3.163>.
- Eckert, P. (1989). The whole woman: Sex and gender differences in variation. *Language Variation and Change*, 1(3), 245-267. <https://doi.org/10.1017/S095439450000017X>.
- Elias, N. (2001). *A Sociedade de Corte. Investigação sobre a sociedade da relaeza e da aristocracia de corte*. Jorge Zahar (ed.) 1ª edição, Rio de Janeiro

- Epstein, D. (1999). Effective intervention in domestic violence cases: Rethinking the roles of prosecutors, judges, and the court system. *Yale JL & Feminism*, 11, 3.
- Erez, E., & Belknap, J. (1998). Battered women and the criminal justice system: The perspectives of service providers. *European Journal of Criminal Policy and Research* 6(1), 37-87. <https://doi.org/10.1023/A:1008614014986>.
- European Commission (1999). Europeans and their views on domestic violence against women. Eurobarometer 51.0. Brussels: European Commission, Directorate General X.
- Facio, A. (1999). Cuando el género suena cambios trae : una metodología para el análisis de género del fenómeno legal ([3a. ed.]). ILANUD Programa Mujer Justicia y Género.
- Fallows, D. (2005). Search engine users: Internet searchers are confident, satisfied and trusting—But they are also unaware and naïve. Report for the Pew Internet and American Life Project. [http://www.pewinternet.org/PPF/r/146/report\\_display.asp](http://www.pewinternet.org/PPF/r/146/report_display.asp)
- Fawole, O. I. (2008). Economic violence to women and girls: Is it receiving the necessary attention? *Trauma, Violence, & Abuse*, 9(3), 167-177.  
<https://doi.org/10.1177/1524838008319255>.
- Felson, R., Ackerman, J., & Gallagher, C. (2005). Police intervention and the repeat of domestic assault. Report for the Department of Justice. Award number 2002-WG-BX-2002, National Institute of Justice, NCJ 210301. Washington D.C. U.S.
- Fernandes, I. C. da C., & Fonseca, V. P. da S. (2012). A Cobertura da violência contra as mulheres nos jornais de Cabo Verde. *Em Questão*, Porto Alegre, 18(2), 215-228.
- Ferreira, A. B. de H., dos Anjos, M., Ferreira, M. B. (1999). Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: *Nova Fronteira*.

- Ferreira, E. (2006). Bullying em contexto escolar: Narrativas e significados em adolescentes e pré-adolescentes. [Dissertação de licenciatura]. Universidade Fernando Pessoa.  
<https://bdigital.ufp.pt/handle/10284/1009?mode=full>.
- Ferreira, M. Da C. (2008). The Joint Africa-Europe Partnership Strategy: from Cairo to Lisbon. From an EU strategy for Africa to a joint Africa-EU strategy. [Dissertação de mestrado]. Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras.  
<https://repositorio.ul.pt/handle/10451/464>.
- Finn, M. A., Blackwell, B. S., Stalans, L. J., Studdard, S., & Dugan, L. (2004). Dual arrest decisions in domestic violence cases: The influence of departmental policies. *Crime & Delinquency*, 50(4), 565-589.
- Fischer, G. (1994). A dinâmica social: Violência, poder, mudança. Lisboa, *ISPA*.
- Flick, U. A. (2009). Pesquisa qualitativa online: a utilização da Internet. In Introdução a pesquisa qualitativa. Porto Alegre: *Artmed*, p. 238-253.
- Flood, M., & Pease, B. (2009). Factors influencing attitudes to violence against women. *Trauma, Violence, & Abuse*, 10, 125-142.  
<https://doi.org/10.1177/1524838009334131>.
- Flood, M., Pease, B. (2006). The Factors Influencing Community Attitudes in relation to Violence against Women: A Critical review of the Literature Violence Against Women Community Attitudes Project. Carlton South, Victoria: *Victoria Health Promotion Foundation*.
- Follingstad, D. R., Rutledge, L. L., Berg, B. J., Hause, E. S., & Polek, D. S. (1990). The role of emotional abuse in physically abusive relationships. *Journal of family violence*, 5(2), 107-120.

- Fonseca, F. R. (2015). A violência sexual nas relações de intimidade. Das perícias forenses às decisões judiciais. [Dissertação de mestrado]. Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto.
- Fontes, L. A., & McCloskey, K. A. (2011). Cultural issues in violence against women. In C.M. Renzetti, J.L. Edleson and R.K. Bergen (Eds). *Sourcebook on violence against women (2<sup>nd</sup> ediction)*,151-168. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Fortes, C. (2013<sup>a</sup>). 'M t' studa p'm k ter vida k nha mãe tem'. Género e Educação em Cabo Verde". *Ciências Sociais Unisinos*, 49(1),80-89  
<https://doi.org/10.4013/csu.2013.49.1.10>.
- Fortes, C. (2015). "Casa sem homem é um navio à deriva": Cabo Verde, a monoparentalidade e o sonho de uma família nuclear e patriarcal. *Anuário Antropológico*, 40(2), 151-172. <https://doi.org/10.4000/aa.1425>.
- Foucault, M. (2013). *Vigiar e punir. Nascimento da prisão*. Edições 70, Almedina, S.A. Lisboa, Portugal.
- Fradella, H. F., & Fischer, R. G. (2010). Factors impacting sentence severity of intimate partner violence offenders and justification for the types of sentences imposed by mock judges. *Law and Psychology Review*, 34, 25–53.
- Franklin, T. W. (2015). Sentence outcomes in U.S. district courts: Can offender's educational attainment guard against prevalent criminal stereotypes? *Crime and Delinquency* 63(2), 137-165. <https://doi.org/10.1177/0011128715570627>.
- Freiburger, T. L. (2011). The impact of gender, offense type, and familial role on the decision to incarcerate. *Social Justice Research*, 24(2), 143–167.  
<https://doi.org/10.1007/s11211-011-0133-8>.

- Freitas, H.; Janissek-muniz, R.; Moscarola, J. (2005). Modelo de formulário interativo para análise de dados qualitativos. *Revista de Economia e Administração*, 4(1), 27- 48.
- Freitas, W., Oliveira, M., & Silva, A. (2013). Concepções dos profissionais da atenção básica à saúde acerca da abordagem da violência doméstica contra a mulher no processo de trabalho: necessidades (in)visíveis. *Saúde debate*, 37(98), 457- 466.
- Fundação Perseu Abramo (FPA/Sesc, 2010). Pesquisa Mulheres Brasileiras no Espaços Público e Privado. Instituição/Orgão: Fundação Perseu Abramo (FPA)Serviço Social do Comércio (Sesc).
- Galego, C. (2004) Violência nas escolas: representação social dos mass media. Actas dos ateliers do V Congresso Português de Sociologia.  
[http://www.aps.pt/cms/docs\\_prv/docs/DPR4628bc0b8d9c4\\_1.pdf](http://www.aps.pt/cms/docs_prv/docs/DPR4628bc0b8d9c4_1.pdf).
- Galvão, F. (2013). Direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva.
- Gannon, T. A., Olver, M. E., Mallion, J. S., & James, M. (2019). Does specialized psychological treatment for offending reduce recidivism? A meta-analysis examining staff and program variables as predictors of treatment effectiveness. *Clinical Psychology Review*, 73, 101752. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2019.101752>
- García, J. J., Fernández, C. G., Llor-Esteban, B., & Hernández, J. A. R. (2014). Differential profile in partner aggressors: Prison vs. mandatory community intervention programs. *The European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 6, 69–77.  
<https://doi.org/10.1016/j.ejpal.2014.06.003>.
- Garner, J. H., & Maxwell, C. D. (2010). The crime control effects of criminal sanctions for intimate partner violence. Final Report, National Institute of Justice.  
<https://nij.ojp.gov/library/publications/crime-control-effects-criminal-sanctions-intimate-partner-violence>.

- Gendreau, P., Goggin, C., Cullen, F. T., & Andrews, D. A. (2000). The effects of community sanctions and incarceration on recidivism. *Forum on Corrections Research*, 12, 10-13.
- Gibbs, P. (2018). *Love, fear and control—Does the criminal justice system reduce domestic abuse?* Transform Justice. London.
- Gil, A. C. (1999). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 5. ed. São Paulo: Atlas.
- Gilchrist, E., & Blissett, J. (2002). Magistrates' attitudes to domestic violence and sentencing options. *The Howard Journal of Criminal Justice*, 41(4), 348-363.
- Girard, R. (1990). *A violência e o sagrado*. São Paulo: UNESP.
- Gomes, C., Fernando, P., Ribeiro, T., Oliveira, A., & Duarte, M. (2016). *Violência doméstica: estudo avaliativo das decisões judiciais*. Lisboa: Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
- Gomes, S. (2008). *Cabo-Verde: literatura em chão de cultura*. São Paulo. Ateliê.
- Gonçalves, J. A. F. (2019). Não há lugar Seguro. Estudos e práticas sobre violências contra as mulheres à luz da multidisciplinarietà. Vol. 2. Florianópolis. Editora Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR).
- Gonçalves, R. (2010). Psicologia Forense em Portugal: Uma história de responsabilidades e desafios. *Análise Psicológica*, 1(28), 107-115.
- Gontijo, D. T., Alves, H. C., Paiva, M. H. P., Guerra, R. M. R., & Kappel, V. B. (2010). Violência e saúde: uma análise da produção científica publicada em periódicos nacionais entre 2003 e 2007. *Physis* 20(3), 1017-1054
- Gonzalez, J. M. R., Connell, N. M., Businelle, M. S., Jennings, W. G., & Chartier, K. G. (2014). Characteristics of adults involved in alcohol-related intimate partner violence: results from a nationally representative sample. *BMC Public Health*, 14, 466.

- Gracia, E. & Lila, M. (2015). Attitudes Towards Violence Against Women in the EU. European Commission – Luxembourg: *Publication Office of the European Union*.  
<https://doi.org/10.2838/045438>.
- Gracia, E. (2004). Unreported cases of domestic violence against women: towards an epidemiology of social silence, tolerance, and inhibition. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 58(7), 536-537.
- Gracia, E., & Herrero, J. (2006). Acceptability of domestic violence against women in the European Union: a multilevel analysis. *Journal of Epidemiology & Community Health*. 60 (2):123-129. doi: 10.1136/jech.2005.036533.
- Gracia, E., Rodriguez, C. M., & Lila, M. (2015). Preliminary evaluation of an analog procedure to assess acceptability of intimate partner violence against women: The Partner Violence Acceptability. Movie Task. *Frontiers in Psychology*, 6(1567).  
<https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2015.01567>.
- Gross, M., Cramer, E. P., Forte, J., Gordon, J. A., Kunkel, T., & Moriarty, L. J. (2000). The impact of sentencing options on recidivism among domestic violence offenders: A case study. *American Journal of Criminal Justice*, 24(2), 301-312.
- Gudjonsson, G. H., & Haward, L. R. (2016). *Forensic psychology: A guide to practice*. Routledge.
- Guillotte, A. (1999), *Violence et education – Incidents, incivilités et autorité dans le contexte scolaire*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Habermas, J. (1994), “Lutas pelo reconhecimento no Estado constitucional democrático”, in Charles Taylor (org.), *Multiculturalismo, examinando a política do reconhecimento*, Lisboa, Instituto Piaget.

- Hammock, G. S., Richardson, D. S., Williams, C., & Janit, A. S. (2015). Perceptions of psychological and physical aggression between heterosexual partners. *Journal of Family Violence, 30*, 13-26.
- Hanna, C. (1998). The paradox of hope: The crime and punishment of domestic violence, *William & Mary Law Review, 39*, 1505.
- Harne, L. (2003) 'Childcare, violence and fathering: Are violent fathers who look after their children likely to be less abusive?' in Klein, R. & Waller, B. (eds) (2003) *Gender, Conflict and Violence* Vienna: Studien Verlag Wien.
- Harne, L. (2011). *Violent fathering and the risks to children: The need for change*. Policy Press.
- Harrison, C. (2008). Implacably hostile or appropriately protective? Women managing child contact in the context of domestic violence ' *Violence Against Women 14*(4), 381-405.
- Hartman, J., & Belknap, J. (2003). Beyond the gatekeepers: Court professionals' self-reported attitudes about and experiences with domestic violence cases. *Criminal Justice and Behavior, 30*(3), 349-373. <https://doi.org/10.1177/0093854803030003005>
- Hasisi, B., Shoham, E., Weisburd, D., Haviv, N., & Zelig, A. (2016). The "care package," prison domestic violence programs and recidivism: A quasi-experimental study. *Journal of Experimental Criminology, 12*, 563-586. <https://doi.org/10.1007/s11292-016-9266-y>.
- Haward, L. R. (1981). *Forensic psychology*. London: Batsford.
- Heise, L. (with Pitanguy, J., & Germain, A.). (1994). *Violence against women: The hidden health burden*. World Bank Discussion Paper 255 Washington, DC: The world bank.

- Henriques, F. (2010). Conceções filosófica e representações do feminino: subsídios para uma hermenêutica crítica da tradição filosófica. *Revista crítica de ciências sociais*, 89, 10-29.
- Herrero, J., Gracia, E. (2005). Perceived Frequency of Domesrtic Violence Against Women and Neighbourhood Social Disorder. *Psychological Reports*, (97), 712-716.
- Herzog, S. (2006). Public perceptions of crime seriousness: A comparison of social divisions in Israel. *Israel Law Review*, 39(1), 57-80.
- Hessick, C. B. (2007). Violence between lovers, strangers, and friends. *Washington University Law Review*, 85, 343.
- Hester, M. (2006). Making it through the criminal justice system: Attrition and domestic violence. *Social Policy and Society*, 5(1), 79-90.  
<https://doi.org/10.1017/S1474746405002769>
- Hester, M., Westmarland, N. (2005). *Tackling domestic violence: effective intervention and approaches*. Report for the Home Office Research, Development and Statistics Directorate. Report no 290. London: Home Office.
- Hirschel, D., & Hutchison, I. W. (2001). The relative effects of offense, offender, and victim on decision to prosecute domestic violence cases. *Violence Against Women*, 7(1), 46-59.
- Holder, R. (2001). Domestic and family violence: Criminal justice interventions. *Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse*.  
[https://www.academia.edu/13006154/Domestic\\_and\\_Family\\_Violence\\_Criminal\\_Justice\\_Interventions](https://www.academia.edu/13006154/Domestic_and_Family_Violence_Criminal_Justice_Interventions).
- Huss, M.T. (2011). *Psicologia forense. Pesquisa, prática clínica e aplicações*. Porto Alegre: Artmed.

IBM Corp. (2019). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 26.0. Armonk, NY: IBM Corp.

ICIEG – Instituto Cabo-Verdiano para Igualdade Equidade de Género. (2012).

Implementando Mecanismos de Combate à Violência Baseada no Género. Guia de assistência às vítimas de Violência Baseada no Género para profissionais das forças policiais.

ICIEG – Instituto Cabo-Verdiano para Igualdade Equidade de Género –. (2018). Avaliação do estágio de implementação da lei VBG. Lei nº 84/VII/2011. Relatório intercalar. <https://1library.org/document/y62jkloz-relatorio-de-avaliacao-icieg-fev.html>.

IDS – Inquérito Demográfico e Sanitário –. (2008/2009). Instituto Nacional de Estatística Ministério da Saúde São Tomé, São Tomé e Príncipe. Measure DHS ICF Macro Calverton, Maryland, U.S.A.

IDS – Inquérito Demográfico e Sanitário. (2011). Inquérito Demográfico e de Saúde. Instituto Nacional de Estatística. Ministério de Saúde. Moçambique. <http://mozdata.microdatahub.com/index.php/catalog/15/study-description>

IDS STP – Inquérito Demográfico e Sanitário, São Tomé e Príncipe. (2008/2009). Instituto nacional de estatística, Ministério de Saúde de São Tomé e Príncipe. <https://www.ine.st/index.php/informacoes-estatisticas/inqueritos/ids>

IDSr-III – Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva. (2018). *Instituto Nacional de Estatística. Ministério da Saúde e da Segurança Social*. Praia, Cabo Verde. Utica International, Columbia, Maryland USA. <https://ine.cv/publicacoes/inquerito-demografico-saude-reprodutiva-isdr-iii-2018/>.

- IIMS – Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde. (2015-2016). Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde em Angola. Luanda, Angola.  
<https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr327/fr327.pdf>.
- Ilze, Z., (2011). O lugar da mulher na antropologia pragmática de Kant. Kant e-Prints. Campinas, 2(6), 50-68.
- Inforpress. (13 de fevereiro de 2019). Estudos revelam que mais de metade dos estudantes já usou da violência psicológica. [Jornal Inforpress]. <https://inforpress.cv/estudo-revela-que-mais-de-metade-dos-estudantes-ja-usou-da-violencia-psicologica/>.
- Instituto Nacional de Estatística. (2005). IDSR-II Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva. Praia. <https://ine.cv/publicacoes/inquerito-demografico-e-de-saude-reprodutiva-2/>
- Instituto Nacional de Estatística. (2017). Mulheres e Homens em Cabo Verde, Factos e Números. <https://ine.cv/publicacoes/mulheres-homens-cabo-verde-factos-numeros-2017/>.
- Instituto Nacional de Estatística. (2018). Iº Recenseamento prisional. Ministério da justiça e trabalho. Cabo Verde. <https://ine.cv/publicacoes/i-recenseamento-prisional-cabo-verde-2018-2/>.
- IRC – International Rescue Committee. (2012). Let me not Die before my time, Domestic Violence in West Africa. International Rescue Commission, (May), 32.  
<https://www.rescue-uk.org/sites/default/files/.../newircreportdomviowafrikauk.pdf>
- Jenkins, P. (1996). *Threads that link community and family violence: Issues of prevention*. In R. L. Hampton, P. Jenkins & T. P. Gullotta (Eds), *Preventing violence in América*, 33-52, London, Sage.

- Jerónimo.P, Garrido. R., & Pereira. M. de A. do V. (2016). Observatório lusófono dos direitos humanos direitos humanos – centro de investigação interdisciplinar.
- Johnson, I. M. (1995). Community attitudes: A study of definitions and punishment of spouse abusers and child abusers. *Journal of Criminal Justice*, 23, 477-487.
- Johnson, M. P. (2008). A typology of domestic violence: intimate terrorism, violent resistance and situational couple violence. Lebanon, *Northeastern University Press*.
- Kalmuss, D. (1984). The intergenerational transmission of marital aggression. *Journal of marriage and family*, 46, 11-19.
- Karam, M. L. (2006). Violência de gênero: o paradoxal entusiasmo pelo rigor penal. Boletim do IBCCRIM, ano 14 (168), 6-7.
- Kelly, L. (1996). Tensions and possibilities: enhancing informal responses to domestic violence, in J. Edleson & Z. Eisikovits (eds). *Future interventions with battered women and their families*, Thousand Oak, CA, Sage.
- Kelly, L., & Westmarland, N. (2015). Domestic violence perpetrator programmes: Steps towards change. Project Mirabal Final Report. London Metropolitan University and Durham University.
- Kern, R., Libkuman, T. M., & Temple, S. L. (2007). Perceptions of domestic violence and mock jurors' sentencing decisions. *Journal of Interpersonal Violence*, 22, 1515–1535.  
<https://doi.org/10.1177/0886260507306476>
- Kerstetter, W. (1990). Gateway to Justice: Police and Prosecutorial Response to Sexual Assaults against Women. *The Journal of Criminal Law and Criminology (1973-)*, 81(2), 267-313.  
<https://doi.org/10.2307/1143908>.
- Kingsnorth, R. F., MacIntosh, R. C., Berdahl, T., Blades, C., & Rossi, S. (2001). Domestic violence: The role of interracial/ethnic dyads in criminal court processing. *Journal of*

*Contemporary Criminal Justice*, 17(2), 123–141.

<https://doi.org/10.1177/1043986201017002004>

Kingsnorth, R., Cummings, D., Lopez, J., Wentworth, J. (1999). Criminal sentencing and the court probation office: The myth of individualised justice revisited. *The Justice System Journal* 20(3), 255-273.

Klein, A. R. (2008). *Practical implications of current domestic violence research: For law enforcement, prosecutors and judges* (Report no 225722, 9 June. National Institute of Justice). US Department of Justice.

Klein, A., Centerbar, D., Keller, S., Klein, J., (2014). *Impact of differential sentencing severity for domestic violence offenses and all other offenses over abusers' life spans*. Document No.: 244757. Award Number: 2011-WG-BX-0001. National Institute of Justice, Office of Justice Programs, U. S. Department of Justice.

Kohn, L. (2010). What's so funny about peace, love, and understanding? restorative justice as a new paradigm for domestic violence intervention. *Seton Hall Law Review*: 40 (2).  
<https://scholarship.shu.edu/shlr/vol40/iss2/3>.

Krantz, G. (2002). Violence against women: a global public health issue!. *Journal of epidemiology & Community health*, 56(4), 242-243.

Kuhn, K., & Da Agra, C. (2010). *Somos todos criminosos?* Alfragide: Casa das Letras.

Kunin, C. C., Ebbesen, E. B., & Konecni, V. J. (1992). An archival study of decision-making in child custody disputes. *Journal of Clinical Psychology*, 48(4), 564-572.

Kunnuji, M. O. N. (2014). Experience of domestic violence and acceptance of intimate partner violence among out-of-school adolescent girls in Iwaya community, Lagos State. *Journal of Interpersonal Violence*, 30(4), 543–564.

<https://doi.org/10.1177/0886260514535261>.

- Kwan, Y. K., Chiu, L. L., Ip, W. C., & Kwan, P. (2002). Perceived crime seriousness: Consensus and disparity. *Journal of Criminal Justice*, 30(6), 623-632.
- LaFree, G. D. (1981). Official reactions to social problems: Police decisions in sexual assault cases. *Social problems*, 28(5), 582-594.
- Latas, A. (2006). Processo penal: Caracterização sumária e prova pericial. In A. Fonseca, M. Simões, M. T. Simões, & M. Pinho (Eds.), *Psicologia forense*. Coimbra: Almedina.
- Lewis, R., Dobash, R. P., Dobash, R. E., & Cavanagh, K. (2000). Protection, prevention, rehabilitation or justice? Women's use of the law to challenge domestic violence. *International Review of Victimology*, 7(1-3), 179-205.
- Louro, M. C. (2017). *Uma perspetiva psicológico-jurídica da violência de género* [Tese de Doutoramento, Universidade de Murcia].  
<https://tesisenred.net/handle/10803/404818#page=1>.
- Lu, R. (2015). Public perceptions of crime. In book: *Encyclopedia of Crime & Punishment*.  
<https://doi.org/10.1002/9781118519639.wbecpx132>.
- Ludsin, H. & Vetten, L. (2005). Spiral of entrapment: Abused women in conflict with the Law', Johannesburg, *Jacana*.
- Lund, I. O. (2014). Characteristics of a national sample of victims of intimate partner violence (IPV): Associations between perpetrator substance use and physical IPV. *NAD, Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 31(3), 261-270.
- Machado, C. (2006). Psicologia forense: Desenvolvimentos, cientificidade e limitações. *Revista do Ministério Público*, 106, 5-24.
- Mahoney, P., Williams, L. M., & West, C.M. (2001). Violence against women by intimate relationship partners. In C. M. Renzetti, J. L. Edleson and R. K. Bergen (eds) *Sourcebook on Violence Against Women*. London: Sage.

- Manita, C., & Machado, C. (2012). A Psicologia Forense em Portugal – novos rumos na consolidação da relação com o sistema de justiça. *Análise Psicológica*, 30(1/2), 15-32.
- Marques, B. de O. M. (2019). O elefante e a cristaleira: O sistema de justiça criminal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher a partir de uma análise crítica. [Tese de Mestrado, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca]. Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.  
<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/37356?locale=es>
- Martin, E., Taft, C. & Resick, P. (2007). A review of marital rape. *Aggression and Violent Behavior*, 12 (3), 329-347.
- Martin, M. (1997). Double your trouble: Dual arrest in family violence. *Journal of Family Violence*, 12(2), 139-157.
- Martin, M. E. (1994). Mandatory arrest for domestic violence: The courts' response. *Criminal Justice Review*, 19(2), 212-227.
- Martin-Fernandez, M., Gracia, E., Marco, M., Vargas, V., Santirso, F., & Lila, M. (2018). Measuring Acceptability of Intimate Partner Violence Against Women: Development and Validation of the A-IPVAW Scale. *The European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 10(1), 26-34. <https://doi.org/10.5093/ejpalc2018a3>.
- Matadi, T., & Calvino, L. R. (2022). *Addressing gender-based violence epidemic through criminal justice: A case study of South Africa and the DRC*. In E. Lubaale & A. Budoo-Scholtz (Eds.), *Violence against women and criminal justice in Africa: Volume I. Sustainable development goals series* (53–91). Palgrave Macmillan.
- Maxwell, C. D., Garner, J. H., & Fagan, J. A. (2001). *The effects of arrest on intimate partner violence: New evidence from the spouse assault replication program*. Washington, DC: National Institute of Justice.

- McCloskey, L.A., Boonzaier, F., Steinbrenner, S.Y., & Hunttee, T. (2016). Determinants of Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa: A Review of Prevention and Intervention Programs. *Partner Abuse*, 7(3), 277-315. <https://doi.org/10.1891/1946-6560.7.3.277>.
- McGee, C. (2000). *Childhood experiences of domestic violence*. Jessica Kingsley Publishers
- Medeiros, C. S. L. Q., & Mello, M. M. P. (2014) O que vale a pena? O impacto da lei maria da penha no encarceramento de “agressores” e seus efeitos colaterais sobre a mulher vítima de violência doméstica e familiar. In: CONPEDI/UFPB (Org.). *Criminologias e política criminal I: XXIII Congresso Nacional do CONPEDI*. Florianópolis: CONPEDI, p. 447- 469.
- Michon, J. A., & Pakes, F. J. (1995). Judicial decision-making: A theoretical perspective. In R. Bull & D. Carson (Eds.), *Handbook of Psychology in Legal Contexts* (509-527). Chichester: John Wiley & Sons.
- Milan, M. A., & Evans, J. H. (1987). Intervention With Incarcerated Offenders. In B. Irving & K. Allen (Eds.), *Handbook of Forensic Psychology*, P 557-583, 1987, NCI-107500.
- Miller, L. (2002). *Protegendo as mulheres da violência doméstica. Seminário de treinamento para juízes, procuradores, promotores e advogados no Brasil*. 2.ed. Brasília: Tahirid Justice Center.
- Minayo, M. C. de S. (2005). Violência: um problema para a saúde dos brasileiros. In: Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. *Impacto da violência na saúde dos brasileiros*. (Série B. Textos Básicos de Saúde). Brasília: Ministério da Saúde, 9-41.
- Ministério da Família e Promoção da Mulher. (2017). *I Relatório Analítico de Género de Angola*. República de Angola.

[https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AGO/1%20Relat%C3%B3rio%20Anal%C3%ADtico%20de%20G%C3%A9nero%20de%20Angola\\_2017.pdf](https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/AGO/1%20Relat%C3%B3rio%20Anal%C3%ADtico%20de%20G%C3%A9nero%20de%20Angola_2017.pdf)

Ministério de Educação. (2010). Anuário da Educação 2009/2010. Gabinete de Estudos e Planeamento. Direcção Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão Serviço de Estudos, Planeamento e Cooperação. Praia.

[https://minedu.gov.cv/media/estatistica/2020/08/19/Anu%C3%A1rio\\_Educa%C3%A7%C3%A3o\\_2009\\_2010.pdf](https://minedu.gov.cv/media/estatistica/2020/08/19/Anu%C3%A1rio_Educa%C3%A7%C3%A3o_2009_2010.pdf)

Ministério de Justiça. (2006). Unidade de implementação de projecto ICIEG – instituto cabo-verdiano para a igualdade e equidade de género plano nacional de combate à violência baseada no género. Praia, Cabo Verde.

<https://www.svri.org/sites/default/files/attachments/2016-07-20/Cape%20Verde%20GBV%20NAP.pdf>

Ministério Público. (2017/2018). Relatório anual sobre a situação da justiça. Ano judicial 2017-2018. Procuradoria-Geral da República. Conselho Superior de Magistratura. Cabo Verde.

Ministério Público. (2018). Dados violência baseada no género. Procuradoria-Geral da República. Conselho Superior de Magistratura. Cabo Verde.

Monroe, J. A. (1987). A feminist vindication of Mary Wollstonecraft. *Iowa Journal of Literary Studies* 8(1)143-152. <https://doi.org/10.17077/0743-2747.1247>.

Moore, N. T., May, D. C., & Wood, P. B. (2008). Offenders, judges, and officers rate the relative severity of alternative sanctions compared to prison. *Journal of Offender Rehabilitation*, 46(3-4), 49-70.

- Morato, A.C., Santos, C., Ramos, M. E. C., & Lima, S. C. C. (2009). Análise da relação criminal de justiça e violência doméstica contra a mulher. *Escola Superior do Ministério Público da União*. Brasília, DF.
- Moult, K. (2005). Providing a sense of justice: Informal mechanisms for dealing with domestic violence. *South African Crime Quarterly*. <https://doi.org/10.17159/2413-3108/2005/v0i12a1016>.
- Moura, T., Roque, S., Araújo, S., Rafael, M., Santos, R. (2009). Invisibilities in war and peace: Violence against women in Guinea-Bissau, Mozambique and Angola. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 86, 95-122. <https://doi.org/10.4000/rccs.240>.
- Muchembled, R. (2012). *A History of violence: From the end of the middle ages to the present*. 1st, Polity Press.
- Mullender, A., Hague, G. M., Imam, I., Kelly, L., Malos, E. M. & Regan, L. (2002) *Children's perspectives on domestic violence*, London: Sage.
- Murphy, C. M., & O'Leary, K. D. (1989). Psychological aggression predicts physical aggression in early marriage. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 57(5), 579-582.
- Nascimento, S. L. (2014). A violência doméstica no ordenamento jurídico – Penal São-Tomense. [Dissertação de Mestrado, ISCP e Segurança Interna]. <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/15395/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Sheila%20final%20-.pdf>.
- Neto, M. S. (2018). A violência em Portugal na idade moderna: Olhares historiográficos e perspectivas de análise. *Revista Portuguesa de História*, (37), 9-27. [https://doi.org/10.14195/0870-4147\\_37\\_1](https://doi.org/10.14195/0870-4147_37_1).

- Newby-Clark, I. R., McGregor, I., & Zanna, M. P. (2002). Thinking and caring about cognitive inconsistency: when and for whom does attitudinal ambivalence feel uncomfortable? *Journal of Personality & Social Psychology*, 82(2)10.  
<https://doi.org/10.1037//0022-3514.82.2.157>.
- Nobre, M. T.; Barreira, C. (2008). Controle Social e mediação de conflitos: A delegacia da mulher e a violência doméstica. *Dossiê Violências, Medo e Prevenção. Sociologias*, (20), 138-163. <https://doi.org/10.1590/S1517-45222008000200007>.
- Notícias do Norte (10 de dezembro de 2019). Violência sexual e assédio um fenómeno que necessita ser trabalhado em Cabo Verde [Jornal Notícias do Norte].  
<https://noticiasdonorte.publ.cv/97250/violencia-sexual-e-assedio-um-fenomeno-que-necessita-ser-trabalhado-em-cabo-verde/>.
- Nybergh, L., Taft, C., Enander, V., & Krantz, G., (2013). Self-reported exposure to intimate partner violence among women and men in Sweden: results from a population-based survey. *BMC Public Health* 13, 845. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-845>.
- Oakley, A. (1972/1985). *Sex, gender, and society*. Ashgate Publishing Ltd.
- Ogueji, I. A., Okoloba, M. M., Ceccaldi, B. M. D. (2021). Coping strategies of individuals in the United Kingdom during the COVID-19 pandemic. *Current Psychology*, 1-7.  
<https://doi.org/10.1007/s12144-020-01318-7>.
- Oliveira, A. & Manita, C. (2002). Prostituição, violência e vitimação. In R. A. Gonçalves, e C. Machado (coods). *Violência e vítimas de crimes: (Vol. 1 – Adultos)*. Coimbra. Quarteto Editora.
- Oliveira, A. S. S. (1999). *A vítima e o direito penal: uma abordagem do movimento vitimológico e de seu impacto no direito penal*. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais.

- Oliveira, E. N. (2007). *Pancada de amor dói e adoce: violência física contra mulheres*. Universidade Estadual Vale do Acaraú
- Oliveira, M. & Sani, A. (2009). A intergeracionalidade da violência nas relações de namoro. *Revista da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais*, 162-170.  
<https://bdigital.ufp.pt/handle/10284/1325>.
- Organização Internacional do Trabalho (OIT). Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC). (2012). Estudo sobre a aplicação das Convenções n.º 138 e n.º 182 da OIT e suas recomendações na legislação nacional dos países da CPLP, in International Labour Organization; ILO International Programme on the Elimination of Child Labour. <https://doi.org/10.4324/9780429284311-4>
- Ortega, L. R. (1999). *Mediación en casos de violencia doméstica. Género y Derecho*, Santiago de Chile, American University/CIMA/La Morada/LOM Ediciones.
- Osório, C. (2015). Entre a denúncia e o silêncio. Análise da aplicação da lei contra a violência doméstica. WLSA. Moçambique, Maputo.
- Osório, C., & Temba, E. (2003). “A justiça no feminino”, in Boaventura de Sousa Santos; João Carlos Trindade (orgs.), *Conflito e transformação social: uma paisagem das justiças em Moçambique*, II, cap. XVIII. Porto: Afrontamento, 165-188.
- Osório, V. A. P. (1999). *Vencendo barreiras*. Praia: Instituto da Condição Feminina.
- Oyediran, K. A., & Isiugo-Abanihe, U. C. (2005). Perceptions of Nigerian Women on Domestic Violence: Evidence from 2003 Nigeria Demographic and Health Survey. *African Journal of Reproductive Health / La Revue Africaine de La Santé Reproductive*, 9(2), 38–53. <https://doi.org/10.2307/3583461>.

- Palmer, S. E., Brown, R. A., & Barrera, M. E. (1992). Group treatment program for abusive husbands: Long-term evaluation. *American Journal of Orthopsychiatry*, 62(2), 276–283. <https://doi.org/10.1037/h0079336>.
- Parenzee, P., Artz, L. & Moulton, K. (2001). Monitoring the implementation of the domestic violence act: First Report', *Institute of Criminology*, University of Cape Town.
- Parnas, R. I. (1969). The response of some relevant community resources to intra-family Violence. *Indiana Law Journal* 44 (2): 159 – 181.
- Parnas, R. I. (1970). Judicial response to intra-family violence. *Minnesota Law Review*, 54, 585-645.
- Payne, D., & Wermeling, L. (2009). Domestic violence and the female victim: The real reason women stay! *Journal of Multicultural, Gender and Minority Studies*, 3(1), 1-6.
- Peek-Asa, C., García, L., McArthur, D., & Castro, R. (2002). Severity of intimate partner abuse indicators as perceived by women in Mexico and the United States. *Women & Health*, 35(2-3), 165-180.
- Pence, E., & Paymar, M. (1993). *Education groups for men who batter: The Duluth model*. Springer Publishing Company.
- Perelman, C. (2000). *Lógica jurídica: a nova retórica*. São Paulo: Martins Fontes.
- Petersilia, J., & Deschenes, E. P. (1994). Perceptions of punishment: Inmates and staff rank the severity of prison versus intermediate sanctions. *Prison Journal*, 74(3), 306-328.
- Plano Nacional de Igualdade e Equidade de Género (2005-2011), Instituto Cabo-Verdiano para Igualdade Equidade de Género. II Plano Nacional de Combate à Violência Baseada no Género.

- PNIEG – Plano Nacional de Igualdade e Equidade de Género. (2005-2011). *Instituto Caboverdiano para Igualdade Equidade de Género. II Plano Nacional de Combate à Violência Baseada no Género.*
- Poiars, C. A. & Ramos, S. (2004). Intervenção juspsicológica aplicada à delinquência juvenil. In Themis, ano V, n.º 8. Coimbra: *Livraria Almedina*, 5-21.
- Poiars, C. A. (2001). Da justiça à psicologia: razões & trajetórias. In Sub Júdice – justiça e sociedade (ed). *Psicologia e Justiça: razões e trajetos*, nº22/23, pp.25-35.
- Poiars, C. A. (2003). Droga: Deambulação em torno da investigação científica. In *Revista Toxicodependências*, 9 (3): 75-86.
- Poiars, C. A. (2009). Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização (Criminalização Secundária - ISPP-CS). Linha de Investigação em Severidade Penalizadora e Psicologização (Manuscrito não publicado).
- Poiars, C. A. (2012). (Des) Convivências & Violências. In Manual de Psicologia Forense e da Exclusão Social, vol.1. Lisboa: *Edições Universitárias Lusófonas*.
- Poiars, C. A. (2022). Violência nas relações de conjugalidade: uma questão (também) de educação. In C. A. Poiars & J. A. E. Tijeras (2022). (Coord.). *Violência e justiça no século XXI – Desafios para a Psicologia Forense*. Porto: *Apuro*, 109-142
- Poiars, C. A. & Louro, M. C. (2012). Psicologia do Testemunho e Psicologia das Motivações Ajurídicas do Sentenciar: Da gramática teórica à investigação empírica, in C. A. Poiars (Ed.), *Manual de Psicologia Forense e da Exclusão Social – Rotas de investigação e de intervenção*, vol.1. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 105-129.
- Poiars, C. A., & Branco, F. (2021). Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização (Criminalização Secundária) – Revista – ISPP (CS) – R. Linha de Investigação em

Severidade Penalizadora e Psicologização, *Sombra e Luzes* (5), *Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP)*.

Porto, M., & Bucher-Maluschke, J. S. N. F. (2012). Violência, mulheres e atendimento psicológico na Amazônia e no Distrito Federal. *Psicol. estud.* 17(2), 297-306.

Posner, R. A. (2010). *How judges think*. Harvard University Press.

Radford, L., Hester, M., Humphries, J., & Woodfield, K. S. (1997). For the sake of the children: The law, domestic violence and child contact in England. *Women's Studies International Forum*, 20(4), 471-482.

Rani, M., Bonu, S., & Diop-Sidibe, N. (2004). An empirical investigation of attitudes towards wife-beating among men and women in seven sub-Saharan African countries. *African Journal of Reproductive Health*, 8, 116-136.

Raphael, J. (1996). *Prisoners of abuse: Domestic violence and welfare receipt*: Chicago: Taylor Institute.

Raseam (2014). Relatório anual socioeconômico da mulher. Presidência da República. Secretaria de Políticas para as Mulheres, Brasil. *Curadoria Enap*.  
<https://exposicao.enap.gov.br/items/show/91>.

Regan, L., Kelly, L., Morris, A., & Dibb, R. (2007). If only we'd known': An exploratory study of seven intimate partner homicides in Engleshire. *Child and Woman Abuse Studies Unit*. London Metropolitan University

Reingle, J. M., Staras, S. A. S., Jennings, W. G., Branchini, J., & Maldonado-molina, M. M. (2013). The relationship between marijuana use and intimate partner violence in a nationally representative, longitudinal sample. *Journal of Interpersonal Violence*, 27(8),1-13.

- Reitz, K. (1996). Michael Tonry and the Structure of Sentencing Laws. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 86(4), 1585-1602. <https://doi.org/10.2307/1144069>.
- Ribeiro, S. (11 de março de 2021). *VBG é crime público há mais de dez anos mas os desafios ainda persistem*. [Jornal Expresso das Ilhas].  
<https://expressodasilhas.cv/pais/2021/03/11/vbg-e-crime-publico-ha-dez-anos-mas-os-desafios-ainda-persistem/73805>.
- Richie, B. E. (2014, May). Who benefits and who loses in the criminalization of intimate partner violence: Considering the logic of punishment and impact of legal intervention as a tertiary prevention strategy. In *National Science Foundation/National Institute of Justice Workshop: A workshop on developing effective primary, secondary and tertiary interventions*. University of Illinois at Chicago
- Ricoeur, P. (1996). Entre mémoire et histoire. *Projet*, n. 248.
- Rifiotis, T. (2004). As delegacias especiais de protecção à mulher no Brasil e a "judicialização" dos conflitos conjugais. *Revista Sociedade e Estado*, 19(1), 85-119.
- Rioseco, Luz. (1999). *Mediación en casos de violencia doméstica. Género y Derecho*, Santiago de Chile, American University/CIMA/La Morada/LOM Ediciones.
- Roberts, J. (1997). The role of criminal record in the sentencing process. *Crime and Justice*, 22, 303-362. <https://doi.org/10.1086/449265>.
- Robinson, P. H. (2008). "Empirical desert". *Faculty Scholarship at Penn Law*. 222. [https://scholarship.law.upenn.edu/faculty\\_scholarship/222](https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/222).
- Robinson, P. H., & Darley, J. M. (2007). Intuitions of justice: Implications for criminal law and justice policy. *Faculty Scholarship at Penn Carey Law*. [https://scholarship.law.upenn.edu/faculty\\_scholarship/144](https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/144).

- Rodrigues, E. M. (2012). Estilos parentais e agressividade juvenil – um olhar jus psicológico sobre a realidade dos bairros 6 de Maio, Casal da Mira e Cova da Moura [Tese de Mestrado não publicado, Universidade Lusófona].
- Rosabal, M. (2010) As Faces in (visíveis) da violência de gênero. In: Conferencia Internacional “As Mulheres em cabo Verde”: experiências e perspectivas. Praia: Universidade de Cabo Verde
- Rosenbaum, A., Gearan, P. J., & Ondovic, C. (2002). Completion and recidivism among court- and self-referred batterers in a psychoeducational group treatment program: Implications for intervention and public policy. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 5 (2), 199–220. [https://doi.org/10.1300/J146v05n02\\_12](https://doi.org/10.1300/J146v05n02_12)
- Roxin, C. (1993). *Problemas Fundamentais de Direito Penal*. 2. ed. Lisboa.
- Roxin, C. (1997). *Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La Estructura de la Teoría Del Delito*. Madrid: Editorial Civitas, S.A.
- Sable, M. R., Libbus, M. K., Huneke, D., & Anger, K. (1999). Domestic violence among AFDC (aid to families with dependent children) Recipients: Implications for Welfare-to-Work Programs. *Affilia*, 14(2), 199-216.  
<https://doi.org/10.1177/08861099922093608>.
- Sackett, L. A., & Saunders, D. G. (1999). The impact of different forms of psychological abuse on battered women. *Violence and victims*, 14(1), 105-117.
- Salinas, E. I. (2003). Las juezas en los tribunales, cortes y salas constitucionales. *X Encuentro de Presidentes y Magistrados de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina*. Santiago de Chile: Tribunal Constitucional de Bolívia.
- Salústio, D. (1999). *Violência contra as mulheres*. Praia: Instituto da Condição Feminina.

- Sardinha, L., & Catalán, H. E. N. (2018). Attitudes towards domestic violence in 49 low-and middle-income countries: A gendered analysis of prevalence and country-level correlates. *PloS one*, 13(10), e0206101.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). *Research methods for business students*. Pearson Education.
- Schmidt, J., & Steury, E. H. (1989). Prosecutorial discretion in filing charges in domestic violence cases. *Criminology*, 27(3), 487-510. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1989.tb01043.x>
- Sedziafa, A. P., Tenkorang, E. Y., Owusu, A. Y., & Sano, Y. (2017). Women's Experiences of Intimate Partner Economic Abuse in the Eastern Region of Ghana. *Journal of Family Issues*, 38(18), 2620-2641. <https://doi.org/10.1177/0192513X16686137>.
- Seff, L. R., Beaulaurier, R. L., & Newman, F. L. (2008). Nonphysical abuse: Findings in domestic violence against older women study. *Journal of Emotional Abuse*, 8(3), 355-374. <https://doi.org/10.1080/10926790802278933>.
- Sena, J. (2010). O dogma da neutralidade na prestação jurisdicional: uma abordagem jus filsofíca a partir do pensamento de Luis Alberto Warat. [Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo]. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2139/tde-25082011-092927/en.php>.
- Shankar, C. (2015). *História e parábolas para a família*. Ed: Cancão Nova, São Paulo, SP, Brasil.
- Sherman, L. W. (1992). *Policing domestic violence: Experiments and dilemmas*. New York: Free Press.
- Sherman, L. W. (2000). Domestic violence and restorative justice: Answering key questions. *Virginia Journal of Social Policy and the Law*, 8, 263.

- Sherman, L. W., & Berk, R. A. (1984). The Minneapolis domestic violence experiment. *Police Foundation Reports*. <https://www.policinginstitute.org/publication/the-minneapolis-domestic-violence-experiment/>.
- Sherman, L., Neyroud, P. W., & Neyroud, E. (2016). The Cambridge crime harm index: Measuring total harm from crime based on sentencing guidelines. *Policing: a journal of policy and practice*, 10(3), 171-183. <https://doi.org/10.1093/police/paw003>.
- Sherman, W., Schmidt, J. D., Rogan, D. P., Smith, D. A., Gartin, P. R., Cohn, E. G., Collins, D. J., & Bacich, A. R. (1992). Variable effects of arrest on criminal careers: The milwaukee domestic violence experiment. *Journal of Criminal Law and Criminology* 83 (1): 137-169. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1989.tb01043.x>.
- Silva, C. A. (2009). *Trajetória de Mulheres Vítimas de Violência Conjugal: Análise a partir da percepção das mulheres que vivenciam o drama*. [Dissertação de Mestrado, Universidade de Cabo Verde].
- Silva, C. A. (2011). *Relações de poder e violência contra as mulheres na intimidade: Análise a partir da percepção das vítimas*. Edições UFSB. Salvador.
- Silva, C. A. (2021). Kau ki galu sta, galinha ka ta kanta1? Reflexões sobre narrativas de mulheres e homens em situação de violências conjugais em Cabo Verde. *AbeÁfrica: Revista da Associação Brasileira de Estudos Africanos*, v.6, n.6.
- Silva, C. A. (2022). Da emergência da lei especial contra a violência baseada no gênero em Cabo Verde à sua operacionalização na rede sol. *Dossier, Sociologies*, 24(59), 24-53. <https://doi.org/10.1590/15174522-121421>.
- Silva, L. E. L., & Oliveira, M. L. C. (2013). Violence against women: systematic review of the Brazilian scientific literature within the period from 2009 to 2013. *Ciências Saúde Coletiva*, 20(11), 23-32.

- Silva, L. L., Coelho, E. B. S., & Caponi, S. N. C. (2007). Violência silenciosa: violência psicológica como condição da violência física doméstica. *Interface - Comunic., Saúde, Educ.*, 11(21), 93-103. <https://doi.org/10.1590/S1414-32832007000100009>.
- Silva, T. (2003). “Violência Doméstica: factos e discursos”, in Boaventura de Sousa Santos; João Carlos Trindade (orgs.), *Conflito e transformação Social: uma paisagem das justiças em Moçambique*, II., cap. XVII. Porto: Afrontamento, 143-164.
- Smith, P., Goggin, C., & Gendreau, P. (2002). The effects of prison sentences and intermediate sanctions on recidivism: General effects and individual differences. <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/ffcts-prsn-sntnacs/index-en.aspx>
- Smyth, J. D., & Pearson, J. E. (2018) Internet survey methods: A review of strenghts, weaknesses, and innovations. In Das, M., Ester, P., & Kaczmarek, L. (Eds.). *Social and behavioral research and the internet: Advances in applied methods and research strategies*. Routledge.
- Spector, (1997). *Le pouvoir*. Paris: Corpus/GF Flammarion, 1997. p. 228.
- Spohn, C., & Holleran, D. (2000). The imprisonment penalty paid by young, unemployed black and Hispanic male offenders. *Criminology*, 38(1), 281-306.
- Spohn, C., & Holleran, D. (2001). Prosecuting sexual assault: A comparison of charging decisions in sexual assault cases involving strangers, acquaintances, and intimate partners. *Justice Quarterly*, 18(3), 651-688.
- Stark, E. (2007). *Coercive control: How men entrap women in personal life*. New York. NY: Oxford University Press.
- Stark, E., & Hester, M. (2019). Coercive control: Update and review. *Violence Against Women*, 25(1), 81–104. <https://doi.org/10.1177/1077801218816191>.

- Statista Research Department. (2016). Acceptability of domestic violence against women in the UK. <https://www.statista.com/statistics/666082/uk-public-acceptance-of-domestic-violence-against-women/>
- Steffensmeier, D., Kramer, J. H., & Ulmer, J. (1995). Age differences in sentencing. *Justice Quarterly*, 12(3), 583-602.
- Steffensmeier, D., Ulmer, J., & Kramer, J. (1998). The interaction of race, gender, and age in criminal sentencing: The punishment cost of being young, black, and male. *Criminology*, 36, 763-798. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1998.tb01265.x>
- Stoleru, M., Dávid-Kacsó, Á., & Antal, I. (2012). The Approach of Domestic Violence by the Criminal Justice System in Romania. *Revista de Asistentă Socială*, 4, 135-151.
- Strecht, P. (2003). À Margem do Amor. Notas sobre delinquência juvenil. Lisboa: *Assírio & Alvim*.
- Stroshine, M. S., & Robinson, A. L. (2003). The decision to end an abusive relationship. *Criminal Justice and Behavior*, 30(1), 97-117.
- Stubbs, J. (2002). Domestic violence and women's safety: feminist challenges to restorative justice. In H. Strang e J. Braithwaite (eds) *Restorative Justice and family violence*. Cambridge university press. Melbourne, 42-61.
- Syers, M., & Edleson, J. L. (1992). The combined effects of coordinated criminal justice intervention in woman abuse. *Journal of Interpersonal Violence* 7(4), 490-502
- Taylor, H. (2013). *Evaluating criminal justice interventions in the field of domestic violence—A realist approach* [Doctoral dissertation, University of Birmingham]. <https://1library.net/document/zxo7mwvz-evaluating-criminal-justice-interventions-domestic-violence-realist-approach.html>

- Teles, M. A. A., & Melo, M. (2002) *O que é violência contra a mulher*. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Brasiliense.
- Thiara, R. K. (2010). Continuing control: child contact and post-separation violence in Thiara, R. K. & Gill, A. (eds) *Violence Against Women in South Asian Communities: Issues for Policy and Practice*, London, Jessica Kingsley Publishers.
- Thiara, R. K., & Gill, A. K. (2012). Domestic violence, child contact and post-separation violence. Experiences of South Asian and African-Caribbean Women and Children. *The University of Warwick, NSPCC & University of Roehampton*.
- Thislethwaite, A., Wooldredge, J., & Gibbs, D. (1998). Severity of dispositions and domestic violence recidivism. *Crime and Delinquency*, 44(3), 388–398.  
<https://doi.org/10.1177/0011128798044003003>
- Thomas, D. M. (2018). Breaking their silence on intimate partner violence: Discussions with Cape Verdean women. *Journal of Cape Verdean Studies*, 3(1), 66-91.
- Thornton, L., Batterham, P. J., Fassnacht, D. B., Kay-Lambkin, F., Calear, A.L., Hunt, S. (2016). Recruiting for health, medical or psychosocial research using facebook: Systematic review, 4(1),72-81. <https://doi.org/10.1016/j.invent.2016.02.001>.
- Tijeras, J. A. E. (2022). Perfil diferencial en hombres que ejercem la violencia hacia sus pajaras: nacionales y extranjeros. In C. A. Poiaras & J. A. E. Tijeras (2022). (Coord.). *Violência e justiça no século XXI – Desafios para a Psicologia Forense*. Porto: Apuro, 63-83
- Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso. (2019). *Feminicídio Relatório Estatístico do Poder Judiciário. Coodenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar*.

- Trotha, T. von. (1997). *Soziologie der Gewalt [On the sociology of violence]*. In: Trotha, T. von Trotha (eds) *Soziologie der Gewalt*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 9-56.
- UN Women (n.d.). Facts and figures: Ending violence against women.  
<https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>
- United Nations. (1993). General Assembly Resolution n° 48/104 of 20 December 1993. Declaration on the elimination of violence against women Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
- United Nations. (2006). Office on drugs and crime. Handbook on restorative justice programmes. Criminal justice handbook series. United Nations, New York.
- United Nations. (2015). The world's women. Violence against women. Chapter 6.  
<https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter6/chapter6.html>.
- Uthman, O. A., Lawoko, S., & Moradi, T. (2009). Factors associated with attitudes towards intimate partner violence against women: A comparative analysis of 17 sub-Saharan countries. *BMC International Health and Human Rights*, 9, 14.  
<https://doi.org/10.1186/1472-698X-9-14>.
- Vargha, A., & Delaney, H. D. (2000). A critique and improvement of the CL common language effect size statistics of McGraw and Wong. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 25(2), 101-132.
- Vetten, L. (2005), “‘Show Me the Money’”: A Review of Budgets Allocated towards the Implementation of South Africa’s Domestic Violence Act’, *Politikon: South African, Journal of Political Studies*, 32: 277–295.
- Viehweg, T. (2008). *Tópica e jurisprudência: uma contribuição à investigação dos fundamentos jurídico-científicos*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris.

- Vieira-Pinto, P., Muñoz-Barús, J. I., Taveira-Gomes, T., Vidal-Alves, M. J., & Magalhães, T. (2022). Intimate partner violence against women. Does violence decrease after the entry of the alleged offender into the criminal justice system?, *Forensic Sciences Research*, 7(1), 53-60, <https://doi.org/10.1080/20961790.2021.1960616>.
- VonDeLinde, K. (2002). *How are domestic violence programs meeting the economic needs of battered in Iowa? An assessment and recommendations*, National Resource Center on Domestic Violence. [https://vawnet.org/sites/default/files/materials/files/2016-09/BCS16\\_EN.pdf](https://vawnet.org/sites/default/files/materials/files/2016-09/BCS16_EN.pdf).
- Wacquant, L. (1999). *As Prisões da Miséria*. Paris: Raisons d'Agir.
- Walby, S. & Allen, J. (2004). Domestic violence, sexual assault and stalking: findings from the British Crime Survey. London: Home Office.
- Walker, L. E. (1984). *The battered woman syndrome*. New York: Springer Publishing.
- Walker, L. E. (2016). Battered women: A psychosociological study of domestic violence. *Psychology of Women Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/036168438000400101>.
- Warr, M. (1989). What is the perceived seriousness of crimes?. *Criminology*, 27(4), 795-822.
- Weil, E. (1956 ). *Filosofia política*. Paris: Vrin.
- Weissman, D. M. (2013). Law, social movements, and the political economy of domestic violence. *Duke Journal of Gender Law & Policy*, 20, 221-254.
- Westmarland, N., Johnson, K., & McGlynn, C. (2018). Under the radar: The widespread use of ‘out of court resolutions’ in policing domestic violence and abuse in the United Kingdom. *The British journal of criminology*, 58(1), 1-16.
- Whitcomb, D. (2004). Children and domestic violence: The prosecutors response. *National Institute of Justice, Office of Justice Programs*, U.S. Department of Justice.

Whitney, K. (1997). Rhetoric versus reality in sentencing violent domestic offenders in WA:

H (1995) 81 A Crim R 88. *Sister in Law*, 2, 119-133.

Williams, C., Richardson D. S., Hammock G. S., & Janit, A. S. (2012). Perceptions of physical and psychological aggression in close relationships: A review. *Aggression and Violent Behavior*, 17(6), 489-494. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.06.005>.

Wittgestein, L. (2002). *Tratado Lógico Filosófico – Investigações Filosóficas*. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Wooldredge, J. (2010). Judges' unequal contributions to extra-legal disparities in imprisonment. *Criminology*, 48(2), 539–567. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2010.00195.x>

Wooldredge, J., & Thistlethwaite, A. (2004). Bilevel disparities in court dispositions for intimate assault. *Criminology*, 42, 417–456. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2004.tb00525.x>

Wordes, M. (2000). *Creating a structured decision-making model for police intervention in intimate partner violence* (Report no. 96-IJ-CX-0098). National Council on Crime and Delinquency.

World Bank. (2016). *Women, Business, and the Law. Getting to Equal*. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433.

World Health Organization - WHO. (2003). *World report on violence and health: summary*. Geneva. *women in Iowa? An assessment and recommendations*. Harrisburg, PA: National Resource Center on Domestic Violence.

Wortley, R. (2011). *Psychological criminology: An integrative approach*. Oxon, UK: Routledge.

Wynter, A. E. (2001). La violencia desde una perspectiva de Género. *Rev Enfermeras*; 37(12), 23-6.

Zapata, B. G., (2021). Los discursos de Tito Livio: Estudio retorico. [Tesis doctoral, Universidad de Madrid]. [https://www.amazon.co.uk/los-discursos-Tito-Livio-doctoralebook/dp/B09LRKTRWW/ref=sr\\_1\\_1?crid=283JXHYAGHGRO&keywords=zapata+tito+livio&qid=1660370618&s=books&srefix=zapata+tito+livio%2Cstripbooks%2C63&sr=1-1](https://www.amazon.co.uk/los-discursos-Tito-Livio-doctoralebook/dp/B09LRKTRWW/ref=sr_1_1?crid=283JXHYAGHGRO&keywords=zapata+tito+livio&qid=1660370618&s=books&srefix=zapata+tito+livio%2Cstripbooks%2C63&sr=1-1).

Zimerman, D. E. (2001). *Vocabulário Contemporâneo de Psicanálise*. Porto Alegre: Artmed.

## Apêndices

### Apêndice I

#### *Dados Sociodemográficos*

#### *Decisões Jurídicas Consultadas em Diferentes Tribunais Judiciais do País*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tribunal Judicial da Comarca de Tarrafal	10	13.9	13.9	13.9
Tribunal Judicial de 2ª classe de Santa Catarina	17	23.6	23.6	37.5
Tribunal Judicial da Comarca de Santa Cruz	16	22.2	22.2	59.7
Tribunal Judicial da Comarca da Praia	8	11.1	11.1	70.8
Tribunal de São Filipe, Fogo	8	11.1	11.1	81.9
Tribunal dos Mosteiros, Fogo	1	1.4	1.4	83.3
Tribunal da Comarca do Sal	5	6.9	6.9	90.3
Tribunal da Comarca de Boa Vista	3	4.2	4.2	94.4
Tribunal da Comarca de São Vicente	2	2.8	2.8	97.2
Tribunal da Comarca de Ribeira Grande, Santo Antão	1	1.4	1.4	98.6
Tribunal Judicial de Porto Novo Santo Antão	1	1.4	1.4	100.0
Total	72	100.0	100.0	

#### *Tipo de Tribunal*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tribunal de 1ª instância	44	61.1	61.1	61.1
Supremo Tribunal de Justiça	25	34.7	34.7	95.8
Tribunal da Relação de Sotavento	3	4.2	4.2	100.0
Total	72	100.0	100.0	

*Género do Magistrado do Julgamento*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Masculino	28	38.9	62.2	62.2
	Feminino	17	23.6	37.8	100.0
	Total	45	62.5	100.0	
Missing	System	27	37.5		
Total		72	100.0		

*Idade dos Arguidos*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Idade	54	20	63	38.07	10.348
Valid N (listwise)	54				

*Níveis de Escolaridade*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Analfabeto	3	4.2	5.7	5.7
	Ensino Primário	34	47.2	64.2	69.8
	Ensino Secundário	12	16.7	22.6	92.5
	Licenciatura	2	2.8	3.8	96.2
	Mestrado	2	2.8	3.8	100.0
	Total	53	73.6	100.0	
	Missing	System	19	26.4	
Total		72	100.0		

*Estado Civil*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Casado	8	11.1	14.3	14.3
	Solteiro	48	66.7	85.7	100.0
	Total	56	77.8	100.0	
Missing	System	16	22.2		
Total		72	100.0		

*Profissão*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Agricultor	4	5.6	7.4	7.4
	Ajudante camião	1	1.4	1.9	9.3
	Armazém	1	1.4	1.9	11.1

Barbeiro	1	1.4	1.9	13.0
Câmara	1	1.4	1.9	14.8
Carpinteiro	1	1.4	1.9	16.7
Condutor	4	5.6	7.4	24.1
Desempregado	1	1.4	1.9	25.9
Eletricista	1	1.4	1.9	27.8
Guarda	1	1.4	1.9	29.6
Ladrilhador	1	1.4	1.9	31.5
Lavrador	1	1.4	1.9	33.3
Manobrador	1	1.4	1.9	35.2
Matador	1	1.4	1.9	37.0
Mecânico	1	1.4	1.9	38.9
Mergulhador	1	1.4	1.9	40.7
Motorista	4	5.6	7.4	48.1
Pastor	1	1.4	1.9	50.0
Pedreiro	8	11.1	14.8	64.8
Pescador	2	2.8	3.7	68.5
Pintor	1	1.4	1.9	70.4
Polícia	1	1.4	1.9	72.2
Professor	3	4.2	5.6	77.8
Professor	1	1.4	1.9	79.6
Universitário				
Segurança	1	1.4	1.9	81.5
Serralheiro	1	1.4	1.9	83.3
Trabalhador	9	12.5	16.7	100.0
Total	54	75.0	100.0	
Missing s/inf	18	25.0		
Total	72	100.0		

*Concelho/Naturalidade*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Guiné-Bissau	1	1.4	2.2	2.2
Ilha do Fogo	1	1.4	2.2	4.4
Mosteiros	1	1.4	2.2	6.7
Nossa Senhora da Conceição	1	1.4	2.2	8.9
Nossa Senhora da Graça	3	4.2	6.7	15.6
Nossa Senhora da Luz	1	1.4	2.2	17.8
Nossa Senhora das Dores	2	2.8	4.4	22.2
S. António das Bombas	1	1.4	2.2	24.4
S. S. Mundo	2	2.8	4.4	28.9
Santa Catarina	12	16.7	26.7	55.6
Santa Catarina Fogo	1	1.4	2.2	57.8

	Santo Amaro Abade	6	8.3	13.3	71.1
	São Lourenço	3	4.2	6.7	77.8
	São Miguel	3	4.2	6.7	84.4
	São Tiago Maior	6	8.3	13.3	97.8
	São Tomé	1	1.4	2.2	100.0
	Total	45	62.5	100.0	
Missing	s/inf	27	37.5		
Total		72	100.0		

#### *Consumo de Substâncias – Álcool*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Não	42	58.3	58.3	58.3
	Sim	30	41.7	41.7	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

#### *Consumo de Substâncias – Outras Drogas*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Não	69	95.8	95.8	95.8
	Sim	3	4.2	4.2	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

#### *Posse de Armas*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Não	53	73.6	73.6	73.6
	Sim	19	26.4	26.4	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

#### *Tipo de Armas Usadas*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		53	73.6	73.6	73.6
	Catana	3	4.2	4.2	77.8
	Chave de fenda	1	1.4	1.4	79.2
	Chicote	1	1.4	1.4	80.6
	Faca	6	8.3	8.3	88.9
	Garrafa	1	1.4	1.4	90.3
	Maxim	3	4.2	4.2	94.4
	Pau	3	4.2	4.2	98.6
	Pedra	1	1.4	1.4	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

#### *Antecedentes Criminais*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Não	45	62.5	62.5	62.5
	Sim	27	37.5	37.5	100.0
Total		72	100.0	100.0	

*Crimes Anteriores*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		45	62.5	64.3	64.3
	Abuso sexual de criança na forma tentada	1	1.4	1.4	65.7
	Crime de injúria a funcionário público	1	1.4	1.4	67.1
	Danos	2	2.8	2.9	70.0
	VBG	20	27.8	28.6	98.6
	VBG e Crime de Ofensa	1	1.4	1.4	100.0
	Total	70	97.2	100.0	
Missing	s/inf	2	2.8		
Total		72	100.0		

*Penas Aplicadas Relativamente ao Crime Anterior*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		45	62.5	62.5	62.5
	Absolvido	1	1.4	1.4	63.9
	Multa	2	2.8	2.8	66.7
	Suspensão da execução da pena simples	21	29.2	29.2	95.9
	Prisão com pena suspensa, serviços comunitários	1	1.4	1.4	97.3
	Suspensão da pena com multa	1	1.4	1.4	98.7
	Termo de Identidade e Residência	1	1.4	1.4	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

*Tipos De Violências Praticadas*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Física	14	19.4	19.4	19.4
	Física e Psicológica	44	61.1	61.1	80.6
	Física e Psicológica e Sexual	3	4.2	4.2	84.7
	Física e Psicológica e Económica	4	5.6	5.6	90.3
	Física e Sexual	3	4.2	4.2	94.4
	Psicológica	4	5.6	5.6	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

*Consequência do Abuso/ Vítima Observada no Hospital*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Não	44	61.1	61.1	61.1
	Sim	28	38.9	38.9	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

*Tempo que Decorreu Entre a Queixa e a Sentença*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Idade	54	20	63	38.07	10.348
Tempo_queixa_processo	45	4	54	19.49	11.651
Valid N (listwise)	45				

*Presença dos Filhos na Altura da Violência*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Não	29	40.3	50.0	50.0
	Sim	29	40.3	50.0	100.0
	Total	58	80.6	100.0	
Missing	System	14	19.4		
Total		72	100.0		

**Apêndice II***Média do Índice da Severidade Penalizadora*

---

ISP_N_0_100		
N	Valid	72
	Missing	0
Mean		33,93
Median		31,00
Std. Deviation		19,981
Minimum		0
Maximum		91

---

### Apêndice III

#### *Correlação entre ISP e Variáveis que Influencia a Severidade Punitiva*

		ISP N 0 100
Idade	Pearson Correlation	-,078
	Sig. (2-tailed)	,574
	N	54
Anos de escolaridade	Pearson Correlation	-,372
	Sig. (2-tailed)	,006
	N	53
Posse_de_arma_na_agressão	Pearson Correlation	-,107
	Sig. (2-tailed)	,369
	N	72
Antecedentes_crim	Pearson Correlation	,584
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	72
Vítima_obs_hospital	Pearson Correlation	,014
	Sig. (2-tailed)	,905
	N	72
Presença_filhos	Pearson Correlation	-,066
	Sig. (2-tailed)	,620
	N	58
Consumo_álcool	Pearson Correlation	,073
	Sig. (2-tailed)	,545
	N	72
Consumo_drogas	Pearson Correlation	,046
	Sig. (2-tailed)	,700
	N	72

### Apêndice IV

*Análise de Regressão Múltipla Predizer ISP de Anos de Escolaridade e Antecedentes Criminais*

Variables Entered/Removed <sup>a</sup>						
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method			
1	Antecedentes_crim, Anos de escolaridade <sup>b</sup>		. Enter			
a. Dependent Variable: ISP_N_0_100						
b. All requested variables entered.						
Model Summary						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	,665 <sup>a</sup>	,442	,420	15,716		
a. Predictors: (Constant), Antecedentes_crim, Anos de escolaridade						
ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9785,950	2	4892,975	19,811	,000 <sup>b</sup>
	Residual	12349,220	50	246,984		
	Total	22135,170	52			
a. Dependent Variable: ISP_N_0_100						
b. Predictors: (Constant), Antecedentes_crim, Anos de escolaridade						
Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	35,078	5,422		6,470	,000
	Anos de escolaridade	-1,316	,552	-,257	-2,386	,021
	Antecedentes_crim	23,723	4,549	,563	5,214	,000
a. Dependent Variable: ISP_N_0_100						

## Apêndice V

### *Análise Descritiva entre o ISP e Fatores que Influenciam as Mediadas Penais*

ISP_0_100			
Posse_de_arma_na_agressão	Mean	N	Std. Deviation
Não	37.09	53	17.783
Sim	30.95	19	20.557
Total	35.47	72	18.606

ISP_0_100			
Vítima_obs_hospital	Mean	N	Std. Deviation
Não	35.36	44	18.491
Sim	35.64	28	19.126
Total	35.47	72	18.606

ISP_0_100			
Consumo_drogas	Mean	N	Std. Deviation
Não	35.25	69	18.631
Sim	40.67	3	21.127
Total	35.47	72	18.606

ISP_0_100			
Consumo_álcool	Mean	N	Std. Deviation
Não	34.38	42	19.176
Sim	37.00	30	17.989
Total	35.47	72	18.606

ISP_0_100			
Habil_Lit	Mean	N	Std. Deviation
Analfabeto	55.67	3	38.682
Ensino Primário	37.12	34	18.967
Ensino Secundário	31.08	12	11.681
Licenciatura	27.00	2	8.485
Mestrado	16.00	2	7.071
Total	35.62	53	19.082

ISP_0_100			
Antecedentes_crim	Mean	N	Std. Deviation
Não	27.42	45	13.373
Sim	48.89	27	18.538
Total	35.47	72	18.606

## Apêndice VI

### *Medidas Aplicadas*

	PNR	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	21	29.2	29.2	29.2
	Dispensa da Pena	2	2.8	2.8	31.9
	Multa	2	2.8	2.8	34.7
	Suspensão da execução da pena (simples)	13	18.1	18.1	52.8
	Suspensão da execução da pena (com multa)	6	8.3	8.3	61.1
	Suspensão da execução da pena (com obrigações)	22	30.6	30.6	91.7
	Suspensão da execução da pena (com multa e obrigações)	6	8.3	8.3	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

	PNR: Obrigações	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		45	62.5	62.5	62.5
	Grupo de reflexão sobre VBG	1	1.4	1.4	63.9
	Jardinagem e Saneamento a favor da Câmara	4	5.6	5.6	69.4
	Programa de Acompanhamento e R. Social e trabalho a favor da comunidade	5	6.9	6.9	76.4
	Programa de Acompanhamento e Reinserção Social	8	11.1	11.1	87.5
	Programa de reabilitações do alcoolismo Delegacia de Saúde	1	1.4	1.4	88.9
	Receber informações sobre VBG	1	1.4	1.4	90.3
	Saneamento a favor da Câmara	1	1.4	1.4	91.7

Serviços a favor da comunidade	5	6.9	6.9	98.6
Trabalho a favor da Direção de Saneamento da Câmara	1	1.4	1.4	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Acompanhamento SRS		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Não	57	79.2	79.2	79.2
	Sim	15	20.8	20.8	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

## Estudo complementar

### Apêndice VII

#### *Caracterização sociodemográfica dos participantes*

##### *Ilhas*

Ilhas	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Boavista	1	,4	,4	,4
Brava	1	,4	,4	,8
Fogo	4	1,6	1,6	2,3
Maio	10	3,9	3,9	6,3
Sal	6	2,3	2,3	8,6
Santiago	230	89,8	89,8	98,4
São Nicolau	1	,4	,4	98,8
São Vicente	3	1,2	1,2	100,0
Total	256	100,0	100,0	

##### *Tabela de Frequência por Género*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Feminino	136	53,1	53,1	53,1
Masculino	120	46,9	46,9	100,0
Total	256	100,0	100,0	

##### *Género e Idade dos Participantes*

<i>Idade</i>				
Género	Mean	N	Std. Deviation	
Feminino	26,02	136	7,775	
Masculino	28,46	120	7,170	

Total	27,16	256	7,581		
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Idade	256	17	74	27,16	7,581

*Frequência das Idades*

Idades	Frequency	Valid Percent
17	1	0.4
18	12	4.7
19	8	3.1
20	7	2.7
21	30	11.7
22	27	10.5
23	20	7.8
24	12	4.7
25	18	7.0
26	16	6.3
27	9	3.5
28	6	2.3
29	13	5.1
30	8	3.1
31	8	3.1
32	5	2.0
33	6	2.3
34	7	2.7
35	10	3.9
36	6	2.3
37	6	2.3
38	4	1.6
39	2	0.8
40	4	1.6
41	2	0.8
42	1	0.4
44	1	0.4
45	2	0.8
48	1	0.4
51	1	0.4
54	1	0.4
56	1	0.4
74	1	0.4
Total	256	100.0

*Frequência de Níveis de Escolaridade*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Secundário	128	50,0	50,0	50,0
Licenciatura ou +	128	50,0	50,0	100,0
Total	256	100,0	100,0	

*Profissão dos Participantes*

Profissão	Frequency	Valid Percent
Advogada	1	0.4
Agente da Polícia Nacional	6	2.4
Estudante	83	32.5
Assistente de contabilidade	1	0.4
Contabilista	3	1.2
Assistente Social	2	0.8
Maquinista	3	1.2
Bancária	4	1.6
Marketer	2	0.8
Fotógrafo	1	0.4
Ciências biomédicas	3	1.2
Biologista	1	0.4
Cabeleireira	1	0.4
Barbeiro	1	0.4
Desempregados	17	6.8
Professores	25	9.8
Designer	2	0.8
Doméstica	8	3.2
Educadora social	2	0.8
Eletricistas	3	1.2
Construção civil	13	5.2
Enfermeira	2	0.8
Ajudante de cozinha	1	0.4
Engenheira	2	0.8
Engenheira Química	1	0.4
Auxiliar Administrativo	1	0.4
Engenheiro civil	1	0.4
Gestor	6	2.4
Informáticos	2	0.8
Funcionários públicos	2	0.8
Motorista	3	1.2

Médico	1	0.4
Operadora de loja	7	2.8
Segurança	5	2.0
Psicólogos	2	0.8
Militar	4	1.6
Jornalista	1	0.4
Jurista	1	0.4
Padeiro	1	0.4
Pasteleira	1	0.4
Pintor	1	0.4
Secretária	4	1.6
Radioterapeuta	1	0.4
Sociólogo	1	0.4
Cozinheira	1	0.4
Auxiliar de saúde	1	0.4
Técnico superior	3	1.2
Técnico Informático	2	0.8
Agronomia socio ambiental	1	0.4
Apoio operacional	2	0.8
Artesão	1	0.4
Doqueiro	2	0.8
Futebolista	1	0.4
Inquérito	1	0.4
Pulverizador	1	0.4
Reformada	1	0.4
Repórter de Imagem	1	0.4
Responsável	1	0.4
Técnica de comunicação	1	0.4
Técnico Administrativo	1	0.4
Técnico de projetos	1	0.4
Técnico de som	1	0.4
Total	256	100.0

### Apêndice VIII

#### Análise descritivas dos itens

	Mean	SD
F - Ameaçar ou atacar a mulher com uma faca, uma pistola ou outra arma	3,95	,220
F - Tentar sufocar ou queimar de propósito a mulher	3,92	,269
S - Forçar a mulher a ter relações sexuais quando esta não quer	3,87	,386
F - Dar pontapés, arrastar, dar uma sova à mulher	3,79	,496
F - Torcer um braço ou puxar a mulher pelo cabelo	3,77	,483
E - Obrigar a mulher a dar-lhe todo o dinheiro que ganha	3,76	,503
E - Guardar o dinheiro, dizer que não tem, mesmo sabendo que a mulher precisa para os cuidados médicos	3,76	,462
S - Forçar a mulher a ter outras praticas sexuais (anal/oral) mesmo sabendo que ela não quer	3,71	,509
F - Dar umas bofetadas na mulher	3,69	,503
P E - Insultar a mulher, chamando-lhe nojenta, burra, estúpida, leviana	3,68	,517
E - Recusar cuidar das crianças para impedir que a mulher trabalhe	3,64	,482
P C - Ameaçar que vai suicidar-se, caso a mulher decida acabar com o relacionamento	3,62	,627
E - Impedir a mulher de ter dinheiro para seu próprio uso	3,59	,587
S - Obrigar a mulher, contra a vontade desta, a ser fotografada, filmada ou espiada durante o ato sexual	3,59	,681
E - Não contribuir com dinheiro para os gastos da casa	3,56	,591
P C - Tomar decisões pela mulher, impondo as roupas que deve vestir, as coisas que deve comer ou os amigos que pode ter	3,55	,522
S - Fazer comentários ou piadas de carácter sexual que causam desconforto ou receio na mulher	3,54	,674
F - Empurrar, sacudir ou atirar alguma coisa contra a mulher	3,50	,751
S - Engravidar a mulher por se ter negado a usar contraceptivos	3,48	,686
P E - Dizer à mulher que ela não presta para nada, que é um fracasso	3,48	,680
P E - Humilhar/insultar e fazer troça da mulher à frente de outras pessoas	3,48	,756
P C - Proibir a mulher de ver ou conversar com a família dela ou com amigos	3,44	,706
P C - Ameaçar magoar alguém de que a mulher gosta	3,39	,665
P E - Dizer à mulher que mais nenhum homem a vai querer	3,38	,682
P E - Fazer comentários desagradáveis sobre a aparência física da mulher	3,38	,704

P C - Ver as mensagens da mulher, e-mails ou redes sociais sem autorização	3,33	,726
S - Ameaçar que vai arranjar outra pessoa, se a mulher recusar fazer sexo	3,25	,762
E - Obrigar a mulher a dar-lhe satisfação do dinheiro que gastou com as compras de casa	3,23	,769
P E - Apresentar mudanças brusca de humor, não falar com a mulher durante dias, sem motivo aparente	3,18	,710
P C - Controlar os passos da mulher, querendo saber sempre onde está e com quem está	3,11	,801

---

## Apêndice IX

### *Gravidade de tipos de violência de gênero contra a mulher*

#### *Comparação por Tipos de Violência*

	Median	Range	Minimum	Maximum
V_Física	3,8333	1,50	2,50	4,00
V_Psicologica	3,5000	1,92	2,08	4,00
V_Sexual	3,6667	1,67	2,33	4,00
V_Economica	3,6667	1,67	2,33	4,00

#### Non Parametric Tests

##### Friedman Test

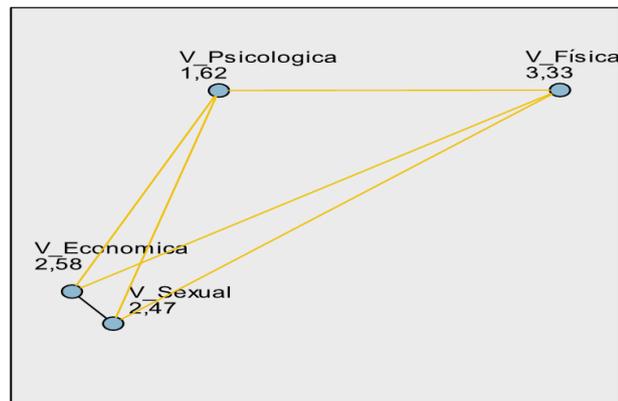
	Mean Rank
V_Física	3,33
V_Psicologica	1,62
V_Sexual	2,47
V_Economica	2,58

Test Statistics <sup>a</sup>	
N	256
Chi-Square	271,955
Df	3
Asymp. Sig.	,000

a. Friedman Test

#### *Comparação de Tipos de Violência dois a dois*

### Pairwise Comparisons



Each node shows the sample average rank.

Sample1-Sample2	Test Statistic	Std. Error	Std. Test Statistic	Sig.	Adj.Sig.
V_Psicologica-V_Sexual	-,850	,114	-7,446	,000	,000
V_Psicologica-V_Economica	-,953	,114	-8,353	,000	,000
V_Psicologica-V_Física	1,705	,114	14,943	,000	,000
V_Sexual-V_Economica	-,104	,114	-,907	,364	1,000
V_Sexual-V_Física	,855	,114	7,497	,000	,000
V_Economica-V_Física	,752	,114	6,590	,000	,000

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05.

### Comparação por Género

### Gravidade dos Tipos de Violência por Género

### Non-Parametric Tests - Mann-Whitney Test

	Género	N	Mean Rank	Sum of Ranks
V_Física	Feminino	136	138,15	18788,50
	Masculino	120	117,56	14107,50
V_Psicologica	Feminino	136	146,31	19898,00
	Masculino	120	108,32	12998,00
V_Sexual	Feminino	136	145,44	19780,50
	Masculino	120	109,30	13115,50
V_Economica	Feminino	136	140,24	19072,00

	Masculino	120	115,20	13824,00
Test Statistics <sup>a</sup>				
	V_Física	V_Psicologica	V_Sexual	V_Economica
Mann-Whitney U	6847,500	5738,000	5855,500	6564,000
Wilcoxon W	14107,500	12998,000	13115,500	13824,000
Z	-2,353	-4,107	-3,949	-2,740
Asymp. Sig. (2-tailed)	,019	,000	,000	,006
a. Grouping Variable: Género				

### *Comparação por Habilitações*

#### *Gravidade dos Tipos de Violência por Níveis de Escolaridade*

#### Non-Parametric Tests - Mann-Whitney Test

	Nível Escol_cod	N	Mean Rank	Sum of Ranks
V_Física	Secundário	128	120,50	15424,00
	Licenciatura ou +	128	136,50	17472,00
V_Psicologica	Secundário	128	115,85	14829,00
	Licenciatura ou +	128	141,15	18067,00
V_Sexual	Secundário	128	121,67	15573,50
	Licenciatura ou +	128	135,33	17322,50
V_Economica	Secundário	128	121,58	15562,00
	Licenciatura ou +	128	135,42	17334,00
Test Statistics <sup>a</sup>				
	V_Física	V_Psicologica	V_Sexual	V_Economica
Mann-Whitney U	7168,000	6573,000	7317,500	7306,000
Wilcoxon W	15424,000	14829,000	15573,500	15562,000
Z	-1,832	-2,740	-1,495	-1,518
Asymp. Sig. (2-tailed)	,067	,006	,135	,129

---

a. Grouping Variable: Nível\_Escol\_cod

---

*Gravidade de Tipos de Violência e Relação Com a Idade*

Non-parametric Correlations

			V_Física	V_Psicologica	V_Sex ual	V_Economi ca
Spearman' s rho	Idade	Correlation Coefficient	,072	,088	,011	,083
		Sig. (2- tailed)	,253	,160	,863	,187
		N	256	256	256	256

## Apêndice X

### *Percepção da Frequência de Comportamentos de VBG*

Frequência de VBG				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Nunca	5	2,0	2,0	2,0
Às vezes	26	10,2	10,2	12,1
Frequentemente	140	54,7	54,7	66,8
Muito frequentemente	85	33,2	33,2	100,0
Total	256	100,0	100,0	

### *Percepção da Aceitabilidade de Comportamentos de VBG*

Aceitabilidade de VBG				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Aceitável em todas as circunstâncias	2	,8	,8	,8
Aceitável em algumas circunstâncias	4	1,6	1,6	2,3
Inaceitável, mas não deveria ser sempre punida pela lei	16	6,3	6,3	8,6
Inaceitável e deveria ser sempre punida pela lei	234	91,4	91,4	100,0
Total	256	100,0	100,0	

### *Comparação por gênero*

#### *Percepção de Frequência e Aceitabilidade de VBG por Gênero*

#### Non-Parametric Tests Mann-Whitney Test

	Gênero	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Frequência de VBG	Feminino	136	140,23	19071,50
	Masculino	120	115,20	13824,50

	Total	256		
Aceitabilidade de VBG	Feminino	136	135,65	18449,00
	Masculino	120	120,39	14447,00
	Total	256		

Test Statistics <sup>a</sup>			
	Frequência de VBG	Aceitabilidade de VBG	
Mann-Whitney U	6564,500	7187,000	
Wilcoxon W	13824,500	14447,000	
Z	-3,020	-3,387	
Asymp. Sig. (2-tailed)	,003	,001	

a. Grouping Variable: Gênero

### *Comparação por Habilitações*

#### *Percepção de Frequência e Aceitabilidade de VBG por Níveis de Escolaridade*

#### Mann-Whitney Test

	Nível_Escol_cod	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Frequência de VBG	Secundário	128	128,37	16431,00
	Licenciatura ou +	128	128,63	16465,00
	Total	256		
Aceitabilidade de VBG	Secundário	128	128,42	16438,00
	Licenciatura ou +	128	128,58	16458,00
	Total	256		

Test Statistics <sup>a</sup>			
	Frequência de VBG	Aceitabilidade de VBG	
Mann-Whitney U	8175,000	8182,000	
Wilcoxon W	16431,000	16438,000	

Z	-,032	-,035
Asymp. Sig. (2-tailed)	,974	,972

a. Grouping Variable: Nível\_Escol\_cod

*Percepção de Frequência e Aceitabilidade de VBG e Relação Com a Idade*

Non-parametric Correlations

			Frequência de VBG	Aceitabilidade de VBG
Spearman's rho	Idade	Correlation Coefficient	,032	-,034
		Sig. (2-tailed)	,616	,586
		N	256	256

**Anexos****Anexo I***Índice da Severidade Penalizadora e Psicologização Criminalização Secundária – Revista***ÍNDICE DE SEVERIDADE****PENALIZADORA E PSICOLOGIZAÇÃO  
(CRIMINALIZAÇÃO SECUNDÁRIA – REVISTA - ISPP-  
CS-R) Poiares, 2009. Poiares e Branco, 2021**

## ISPP-(CS)

Tribunal de \_\_\_\_\_  
Singular  Colectivo 

Nº convencional \_\_\_\_\_

Número de arguidos \_\_\_\_\_

Decisão

Absolutória  \_\_\_\_\_Condenatória  \_\_\_\_\_

Pena(s) Aplicada(s)

Arguido 1 \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_**A(O) Assistente de Investigação,**  
\_\_\_\_\_**ARGUIDO 1****DIMENSÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA**

Naturalidade: Urbana   
 Rural   
 Freguesia \_\_\_\_\_  
 Concelho \_\_\_\_\_  
 Idade \_\_\_\_\_

Género: Masculino  Feminino

Profissão \_\_\_\_\_

Empregado (a)

Desempregado(a)  Há quanto tempo? \_\_\_\_\_

Reformado(a)

Estado civil: Solteiro(a)

Casado(a)

União de facto

Divorciado(a)

Separado(a) de facto

Em processo de separação

Viúvo(a)

## DIMENSÃO CULTURAL

Etnia \_\_\_\_\_

Habilitações literárias. Iltrado

Ensino primário  completo  incompleto

Preparatório  completo  incompleto

Secundário  Último ano concluído \_\_\_\_\_

Licenciatura

Outro  Qual? \_\_\_\_\_

Residência: Urbana  Rural

Freguesia \_\_\_\_\_

Concelho \_\_\_\_\_

Tipo de alojamento: \_\_\_\_\_

Relação afectiva ou de parentesco com os co-arguidos: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ANAMNESE JUDICIAL

### DIMENSÃO CLÍNICA

Saúde mental: referência de diagnóstico \_\_\_\_\_

Acompanhamento Sim  Não

Adicções Substância(s) \_\_\_\_\_

Toxicod dependente  Consumidor

Patologias físicas

Saúde física: referência de diagnóstico \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Deficiência Sim  Não

Qual? \_\_\_\_\_

### DIMENSÃO FORENSE

Realizada avaliação psicológica forense Sim  Não

Instituição pública

Instituição privada 

Conclusões \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Realizada perícia de personalidade Sim  Não Instituição pública Instituição privada 

Conclusões \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Decisão sobre inimputabilidade Sim  Não 

Conclusões \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ A

decisão foi fundamentada em:

a) perícia de personalidade b) avaliação psicológica forense Antecedentes criminais Sim  Não 

Crimes anteriormente cometidos \_\_\_\_\_ Medidas  
 de coacção sofridas \_\_\_\_\_

Prisão preventiva Sim  Não  Tempo \_\_\_\_\_

Medidas aplicadas:

Suspensão do processo  \_\_\_\_\_Multa  \_\_\_\_\_Prisão  \_\_\_\_\_Multa com pena suspensa  \_\_\_\_\_Prisão com pena suspensa  \_\_\_\_\_P T F C  \_\_\_\_\_Outras  \_\_\_\_\_

Medidas de coacção neste processo \_\_\_\_\_

Prisão preventiva Sim  Não  Tempo \_\_\_\_\_

Acompanhamento terapêutico durante o(s) processo(s) Sim  Não

Qual? \_\_\_\_\_

Cumpriu? Sim  Não  \_\_\_\_\_

Revogação da suspensão da pena Sim  Não

Razão \_\_\_\_\_

Cumpriu a pena Sim  Não  \_\_\_\_\_

Tempo de reclusão cumprido \_\_\_\_\_

Liberdade condicional Sim  Não

Revogação da liberdade condicional Sim  Não

Razão \_\_\_\_\_

### PROCESSO ACTUAL

Acompanhamento terapêutico durante o(s) processo(s) Sim  Não

Qual? \_\_\_\_\_

### ARGUIDO 1

Crime(s) por que está pronunciado(a) (indicar um por cada linha):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

Medida de coação

Prisão preventiva Sim  Não  Outro  Qual? \_\_\_\_\_

Se o arguido está preso preventivamente, registre a seguinte informação: a) preso desde o início do processo Sim  Não ;

b) preso a partir de \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ até \_\_\_\_\_ /

### CRIMES IMPUTADOS

1. Tipo: \_\_\_\_\_

2. Preceito incriminador: \_\_\_\_\_

3. Dosimetria penal: de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ,

Com multa  até \_\_\_\_\_ Sem multa

### MEDIDA PENAL ADOPTADA ARGUIDO 1

Pena aplicada a cada crime:

---

---

---

---

---

---

Cúmulo jurídico Sim  Não

Pena em cúmulo jurídico

---

---

Prisão efectiva Sim  Não

Qual a medida penal efectivamente decretada? \_\_\_\_\_

---

---

A decisão referenciou a realização de avaliação psicológica? Sim  Não

A decisão referenciou a realização de perícia de personalidade? Sim  Não

A avaliação psicológica foi utilizada para suportar a atenuação da pena? Sim  Não

A perícia de personalidade serviu de fundamento à atenuação da pena? Sim  Não

A avaliação psicológica determinou o agravamento da pena? Sim  Não  A  
perícia determinou o agravamento da pena? Sim  Não

Na decisão foram invocadas razões para atenuação da pena? \_\_\_\_\_

---

Quais? \_\_\_\_\_

---

---

---

**SINOPSE GERAL (para aplicar face a todos os crimes por que o arguido foi condenado)**

Dosimetria: 1º crime - de \_\_\_\_\_ a

2º crime - de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

3º crime - de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

4º crime - de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

5º crime - de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

6º crime - de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

7º crime - de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

8º crime - de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

9º crime - de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Aplicada a lei dos jovens imputáveis: Sim  Não

Pena aplicada:

Pena aplicada em cúmulo: \_\_\_\_\_

Cotação Total  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Anexo II**

*Carta de Autorização Dirigida ao Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial*

*Excelentíssimo Senhor  
Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial*

Manchester, 30 de Outubro de 2019

**Assunto:** Autorização para consultar processos-crime sobre VBG

---

Eu, ***Edília Mendes Rodrigues***, Cabo-verdiana, natural da freguesia de Santo Amaro Abade, Concelho do Tarrafal, residente em Manchester, venho por esta via expos e ao final solicitar o seguinte:

Sou licenciada em Psicologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e mestre em Psicologia Forense e Exclusão Social pela mesma Universidade.

A partir do ano de 2018, iniciei o curso de Doutoramento em Ciências Forenses, na Universidade de Murcia, Espanha.

No âmbito deste curso, o projeto da minha pesquisa versa sobre o seguinte tema:

***“Severidade punitiva na violência doméstica: um olhar juspsicologico sobre a resposta da justiça criminal em Cabo Verde”.***

O objetivo desta pesquisa é, a partir de estudo de casos, analisar a severidade punitiva das decisões judiciais cabo-verdianas nos crimes de Violência Baseada no Género.

Para este efeito, venho por esta via, mui respeitosamente, à presença de V. Ex.<sup>a</sup> solicitar autorização poder consultar processos sobre VBG que em relação aos quais tenham tido decisão penal condenatória transitada em julgado.

Nessa perspetiva, gostaria de pedir a autorização para os seguintes tribunais: *Presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Tarrafal Santiago e São domingos. Juiz de Direito do 1.º e do 2.º Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca de Santa Catarina. Juiz de Direito do 1.º e do 2.º Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca de Santa Cruz. Juiz de Direito do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca Praia. Juiz de Direito do 1.º e*

*do 2.º Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente. Juiz de Direito do 1.º e do 2.º Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca de São Filipe.*

Aproveito para assegurar a V. Ex.<sup>a</sup> que me comprometo a guardar o anonimato e a confidencialidade sobre tudo quanto tomar conhecimento nesses processos e que as informações recolhidas serão utilizadas exclusivamente para fins académicos.

Na expectativa de acolhimento favorável ao presente pedido, aproveito o ensejo para reiterar os meus antecipados agradecimentos e formular votos de um ótimo trabalho.

Atenciosamente,

A requerente,

Edília Mendes Rodrigues

(Doutoranda em Ciências Forense)

**Anexo III***Inquérito Sobre Perceção de Comportamentos de Violência de Género contra a Mulher*

No âmbito do Doutoramento em Ciências Forenses na Universidade de Múrcia, venho solicitar a tua colaboração para um estudo que estou a realizar sobre a perceção de comportamentos na VBG contra a mulher.

Este questionário é anónimo e a tua participação é voluntária. Pedimos que respondas o mais honestamente possível. Lembra-te que não existem respostas certas ou erradas, só queremos saber a tua opinião. As respostas são confidenciais e apenas para fins académicos.

Obrigada pela tua participação e disponibilidade!

**Dados sociodemográficos**

1. Género: Masculino      Feminino
  
2. Idade:      anos
  
3. És de que ilha?
  
4. Nível de escolaridade:
  - Primário
  - Secundário
  - Licenciatura
  - Mestrado
  - Doutoramento
  
5. Profissão?

Agora lê cada uma das frases que se seguem, e **assinala com uma cruz (X)** a coluna para indicar a tua perceção em relação a esses comportamentos.

		<b>Nada grave</b>	<b>Pouco grave</b>	<b>Grave</b>	<b>Muito grave</b>
1	Fazer comentários ou piadas de carácter sexual que causam desconforto ou receio na mulher				
2	Forçar a mulher a ter relações sexuais quando esta não quer				
3	Guardar o dinheiro, dizer que não tem, mesmo sabendo que a mulher precisa para os cuidados médicos				
4	Ameaçar ou atacar a mulher com uma faca, uma pistola ou outra arma				
5	Engravidar a mulher por se ter negado a usar contraceptivos				
6	Controlar os passos da mulher, querendo saber sempre onde está e com quem está				
7	Ameaçar magoar alguém de que a mulher gosta				
8	Tentar sufocar ou queimar de propósito a mulher				
9	Dizer à mulher que mais nenhum homem a vai querer				
10	Torcer um braço ou puxar a mulher pelo cabelo				
11	Dizer à mulher que ela não presta para nada, que é um fracasso				
12	Empurrar, sacudir ou atirar alguma coisa contra a mulher				
13	Apresentar mudanças brusca de humor, não falar com a mulher durante dias sem motivo aparente				
14	Insultar a mulher, chamando-lhe nojenta, burra, estúpida, leviana				
15	Ameaçar que vai suicidar-se, caso a mulher decida acabar com o relacionamento				
16	Ver as mensagens da mulher, e-mails ou redes sociais sem autorização				
17	Dar umas bofetadas na mulher				
18	Impedir a mulher de ter dinheiro para seu próprio uso				
19	Obrigar a mulher a dar-lhe satisfação do dinheiro que gastou com as compras de casa				
20	Ameaçar que vai arranjar outra pessoa se a mulher recusar fazer sexo				
21	Recusar cuidar das crianças para impedir que a mulher trabalhe				
22	Tomar decisões pela mulher, impondo as roupas que deve vestir, as coisas que deve comer ou os amigos que pode ter				

23	Fazer comentários desagradáveis sobre a aparência física da mulher				
24	Obrigar a mulher, contra a vontade desta, a ser fotografada, filmada ou espiada durante o ato sexual				
25	Proibir a mulher de ver ou conversar com a família dela ou com amigos				
26	Não contribuir com dinheiro para os gastos da casa				
27	Humilhar/insultar e fazer troça da mulher à frente de outras pessoas				
28	Dar pontapés, arrastar, dar uma sova à mulher				
29	Obrigar a mulher a dar-lhe todo o dinheiro que ganha				
30	Forçar a mulher a ter outras praticas sexuais (anal/oral) mesmo sabendo que ela não quer				

### **Frequência de comportamentos de VBG contra a mulher**

Em sua opinião, qual a frequência de comportamentos de VBG contra a mulher em Cabo Verde?

- 1 – Nunca
- 2 – As vezes
- 3 – Frequentemente
- 4 – Muito Frequente

### **Aceitabilidade da VBG contra a mulher**

**Na tua opinião, a VBG do marido contra a mulher é:**

- a) Aceitável em todas as circunstâncias
- b) Aceitável em algumas circunstâncias
- c) Inaceitável, mas, não deveria sempre ser punida pela lei
- d) Inaceitável e deveria sempre ser punida pela lei